

Quinta sesión de trabajo:

**SECTOR AGRARIO Y ACTIVIDADES ECONOMICAS
URBANAS, SIGLOS XVI-XVIII**

Moderador: F. RUIZ MARTÍN

EL CERCAMIENTO DE TIERRAS EN CATALUÑA (1770-1820)

ELISA BADOSA COLL
Universidad de Barcelona

El cercamiento de tierras forma parte de un proceso de transformación de la economía rural en el que figuran otros aspectos como el de la apropiación o el control de los bienes comunales. La conexión de estos elementos permite ver cómo se produjo la destrucción del antiguo sistema agrícola comunitario; es decir, el origen de la explotación individualizada de la tierra.

El caso de Cataluña puede mostrar cómo esta destrucción empezó mucho antes de que una burguesía liberal presidiera, de manera más o menos compartida, la actividad económica y política del país. En efecto, desde 1770 una oligarquía rural consiguió erosionar en beneficio propio las leyes que regían la actividad económica de la comunidad campesina en Cataluña. Los procedimientos utilizados para ello fueron variados; en unos casos se recurrió a mecanismos avalados por una larga tradición, en otros se apeló al celo de un funcionariado que, en muchas ocasiones, fue un buen representante del reformismo ilustrado.

Uno de los grandes factores que impulsó el acercamiento fue la presencia de cultivos comercializables como la viña, el olivar o la huerta. En las áridas comarcas del litoral y del centro-sur de Cataluña, la viña fue la causa de un gran progreso agrícola y propició la aparición de un numeroso grupo de pequeños y medianos propietarios con una decisiva influencia en los ayuntamientos locales. En estos lugares el paso al cercamiento se realizó sin grandes problemas.

En los pueblos donde el cultivo de los cereales tenía cierta importancia y, sobre todo, en los que predominaba la ganadería, el proceso fue más tortuoso y lento. Las tentativas de los pequeños y medianos propietarios fueron obstruidas por los grandes hacendados y ganaderos. En caso de tramitarse alguna solicitud de cercamiento, los informes de la Audiencia de Barcelona y la decisión del Consejo de Castilla adolecían de una gran lentitud. Puede decirse, no obstante, que la Audiencia y el Consejo no veían con malos ojos las peticiones para vallar tierras, tan unidas al cultivo de la viña; las rotura-

ciones, en general, y las viñas, en particular, tenían la virtud de convertir a los jornaleros y campesinos pobres en «vassallos contribuyentes»¹. Creo interesante hacer alusión a la influencia que pudo tener la racionalidad de la imposición catastral en lo que quizá fuese una relativa difusión del cercamiento en Cataluña. El Catastro, al gravar las fincas según su rentabilidad, atribuía al viñedo una de las mayores bases impositivas, y la Audiencia no era insensible a esto. Ante un registro catastral era evidente que el erario se beneficiaba de los cultivos y plantaciones y no de los pastos.

Quizá la Cataluña del setecientos fuese buen campo para la actuación de los ilustrados. No es raro hallar algún corregidor defendiendo los intereses de los pequeños propietarios, y en estas páginas pueden verse dos ejemplos de diputados del Común que representaron solicitudes de cercamiento en representación de los campesinos. Su papel pudo ser importante en los pueblos donde una agricultura escasamente comercializable o el predominio de la ganadería no habían permitido el ascenso económico de un grupo numeroso de pequeños y medianos agricultores; en estos lugares el poder de los grandes podía ser frenado por algún funcionario libre de intereses particulares.

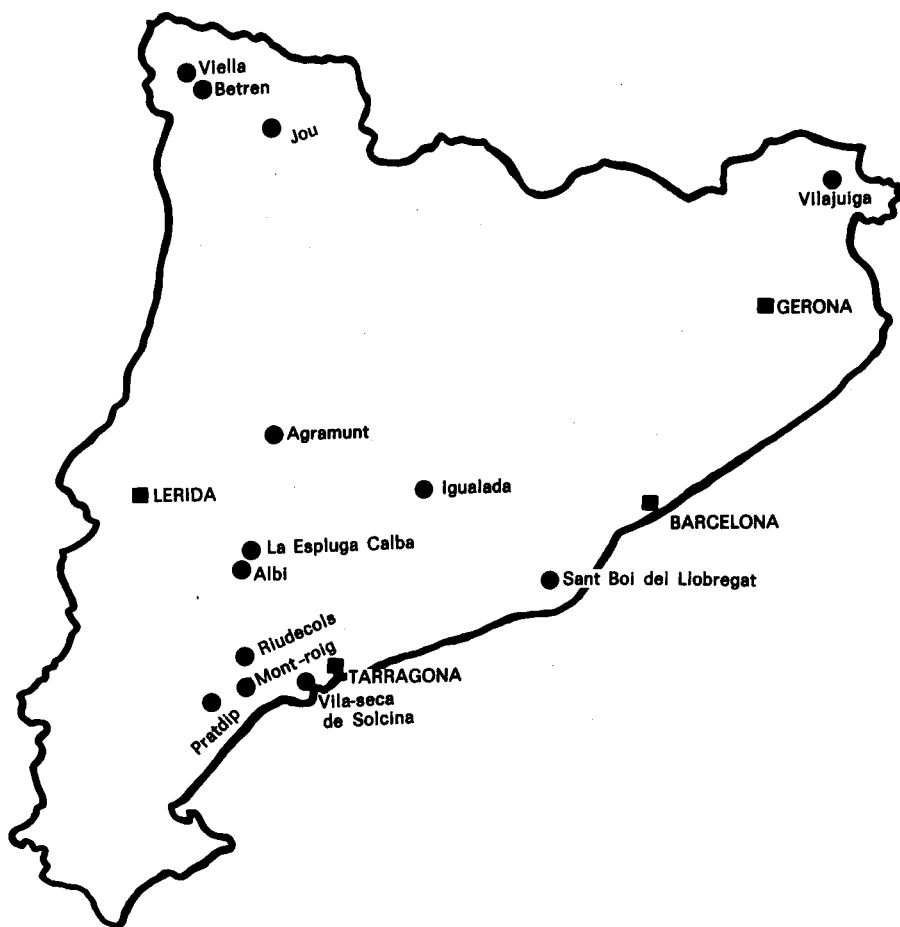
Las grandes diferencias climáticas y económicas del país dan una cierta complejidad a la cuestión de los cercamientos de tierras en Cataluña. Es evidente que el proceso enmarcado en una zona ganadera, como la de los valles pirenaicos, exige un tratamiento muy distinto al de las comarcas vitícolas del litoral. El análisis de la documentación no puede abordarse sin tener en cuenta esta diversidad.

Comarcas vitícolas: las ordenanzas municipales

La viña había sido la causa de que un buen número de campesinos pobres accedieran a la posesión de la tierra. Los beneficios procedentes de la viticultura habían erigido un grupo de agricultores con un creciente poder económico y una decisiva influencia en el seno de las comunidades rurales². Fueron estos propietarios, los dedicados al monocultivo de la viña, los que

¹ Jaime CARRERA PUJAL, *Historia política y económica de Cataluña*, 4 vols. (Barcelona, 1947), vol. IV (1947), pp. 15, 19 y 22; Archivo de la Corona de Aragón, Real Audiencia, Registro 810, pp. 73 y 168 (10-III y 9-VI-1770).

² Si se lo compara con el que reportaban los cereales, la viña daba al cultivador un alto beneficio. Al disponer de un excedente negociable, el agricultor podía aprovechar los efectos del alza de precios; para Labrousse, el beneficio vinícola representaba la gran categoría del beneficio rural popular. Ernest LABROUSSE, *Fluctuaciones económicas e historia social* (Madrid, 1962), pp. 35, 37 y ss., y 351 y ss.



tuvieron un mayor interés en vallar sus campos y preservar sus plantaciones de los peligros derivados del sistema del libre pastoreo.

Los ganados, al alimentarse de las hojas y de los vástagos de las cepas, eran un evidente peligro para la futura cosecha; pero mayor que éste era el daño que causaban a los campos. La viña era un cultivo que, frecuentemente, se hallaba en terrenos pedregosos o en laderas de montañas, y estos terrenos

se nivelaban por medio de terrazas y muros. Estos campos solían tener en sus límites grandes zanjas para detener el paso del agua de las lluvias y de las avenidas torrenciales que erosionaban el terreno. Los viticultores de un pueblo cercano a Barcelona se quejaban de la entrada de rebaños en sus campos

«... porque echando por tierra las paredes que detienen la misma tierra en los lugares pendientes y llenando las rasas [zanjas], quedaban expuestas las viñas a una entera destrucción para el caso de sobrevenir las lluvias abundantes, ya finalmente porque entrando impetuosamente dentro de las mismas viñas los numerosos rebaños, allanaban los cercos de las mismas, dexándoles en consecuencia indefensas».

Los campesinos estaban dispuestos a impedirlo, pues «no debe tolerarse pagando y contribuyendo éstos como pagan al Rl. catastro»³.

La oposición entre ganadería y cultivos arbóreos era total. Hacia 1770 los municipios afectados empezaron a adoptar medidas para limitar el paso de los animales y cercar los campos; para ello se valieron de un procedimiento tradicional, la redacción de ordenanzas municipales. Estas reglamentaciones eran uno de los más antiguos instrumentos de gobierno de que se dotaban los propios municipios ya en la Edad Media. Parece que en la segunda mitad del siglo XVIII proliferó la redacción de nuevas ordenanzas en los pueblos con cultivos de viña, olivar y huerta para proteger sus productos de las entradas del ganado.

Una de las reglamentaciones más interesantes que he hallado es la del pueblo de Sant Boi, cerca de Barcelona. Las disposiciones de 1769 fijaban el número de animales que podía tener cada propietario y que dependía del impuesto catastral, es decir, de la cantidad y calidad de tierra que cada uno tenía. Según la categoría del contribuyente, el número de corderos oscilaba entre los 100 y los 15. En ningún caso podían reunirse dos propietarios para formar un rebaño mayor del que les correspondiese individualmente, «por cuanto más numeroso es un rebaño, mayor es el daño que ocasiona». Por otra parte, ningún propietario podía tener más de dos vacas para la labranza; los bueyes y vacas, muy temidos por el gran deterioro que ocasionaban a los campos, no podían alimentarse fuera de las tierras de su dueño, reservándoseles también zonas muy concretas de los pastos comunales⁴.

Era frecuente, en los pueblos con cultivos arbóreos o de huerta, fijar un número máximo de animales según la categoría de cada propietario y cuya

³ Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, Notarial, Procesos 1770-1789 (c. XX.78).

⁴ ACA, RA, Reg. 870, p. 340 (28-VII-1769).

cantidad no superaba los 150 ó 200 corderos. El alcalde mayor de Agramunt (Lérida) lo explica así:

«En estos pueblos, por constitución, está determinado el número de ganado que cada uno de sus individuos puede tener, y se determinaría también en esta villa, y así por más que se hallasen poderosos algunos de sus vecinos, no podría pasar su rebaño del número de cabezas de ganado lanar que se hubiese establecido en la constitución y ordenanzas, siendo igual la suerte del pobre que la del poderoso.» Porque el rico, «con su opulencia pondría un tropel de ganado que se comería todos los pastos, pereciendo los de los demás»⁵.

Esto era lo que sucedía en los pueblos donde dominaban los ganaderos.

Ciertamente, las ordenanzas municipales eran producto de una mesocracia local. Por una parte, ponían coto a los abusos de los grandes hacendados y, por otra, prohibían al campesino pobre o con poca tierra el tener su rebaño; es decir, nos encontramos en Cataluña con la presencia del lema picardiano: «Pas de labourage pas de pâturage»⁶.

Las reglamentaciones municipales referentes a otros pueblos no suelen ser tan extensas y completas como las de Sant Boi, pero en sus disposiciones fundamentales hay una gran coincidencia: prohibición de que ningún animal entrase en las viñas, en campos con árboles frutales o en tierras de pan llevar donde no estuviesen hechas las gavillas, prohibición de cortar ramas de árboles para alimento de los animales, ni tampoco juncos ni cañas; prohibición de que, en ningún caso, los animales entrasen en campos húmedos por la lluvia hasta haber transcurrido de cuatro a seis días después de ésta, y especificación de los caminos por donde tenían que pasar los animales y rebaños⁷.

Estas normas muestran que su objetivo fundamental era la protección de las cosechas, de los árboles y de la infraestructura física de los campos (terrazas, muros, zanjas, etc.). Como se ha dicho antes, la defensa del campo era tan importante como la de la cosecha, por esto las ordenanzas municipales solían impedir la entrada de los animales en los plantíos en cualquier época del año. Solamente en el caso de algún término municipal situado en un llano

⁵ ACA, RA, Reg. 1017, p. 844 (20-IX-1790).

⁶ Florence GAUTIER, *La vote paysanne dans la Revolution Française. L'exemple picard* (París, 1977), pp. 119 y 120.

⁷ Ordenanzas municipales consultadas: ACA, RA, Regs. 870, p. 340 (28-VII-1769), Sant Boi del Llobregat; 810, p. 115 (29-III-1770), Vilajuiga; 891, p. 204 (10-VI-1775), Mont-roig; 892, p. 2350 (6-VII-1775), Riudecols; 874, p. 174 (12-I-1784), Agramunt; 1015, p. 512 (3-VIII-1795), Albí; 1018, p. 524 (15-IX-1801), Vila-seca de Solcina; 1021, p. 889 (3-IX-1804), Pratdip; 1172, p. 59 (30-IV-1807), La Espluga Calba.

la prohibición regía únicamente para la época en que el fruto maduraba; en estos pueblos la conservación del campo no requería un gran esfuerzo ⁸.

Las ordenanzas municipales muestran otra faceta importante. Se trata del conjunto de disposiciones dedicadas a los pobres, los mendigos y los ladronzuelos. Aparecen a menudo prohibiciones de coger leña, la uva de los campos después de la vendimia o las espigas que quedaban una vez sacadas las gavillas; coger las hojas de las cañas, las hierbas, los juncos o el estiércol de los caminos. Se podía impedir también pescar en los torrentes, tener abejas entre los meses de agosto y septiembre, coger caracoles, etc. Es decir, se vetaban una serie de recursos gracias a los cuales la población más pobre había aliviado su existencia. Las ordenanzas municipales eliminaban un cúmulo de posibilidades que ayudaba al jornalero a subsistir. Incluso las instituciones de gobierno podían serle más benévolas que sus propios paisanos. La respuesta de la Audiencia al pueblo de la Espluga Calba (Lérida), que en 1806 había solicitado la aprobación de sus ordenanzas municipales, hablaba de la necesidad de modificar algún apartado como el que impedía coger racimos de uva: «En este capítulo me impone multas al que coge una uva parece que debería extenderse de dos en arriba, pues no considera punible el coger una uva cuando seguramente se hace instigado de la sed» ⁹. La aparente extravagancia de esta observación la hace sumamente reveladora.

Las reglamentaciones de Espluga Calba podrían ser un ejemplo de la intransigencia de los ayuntamientos y los propietarios contra los autores de pequeños hurtos, a lo que parece, muy abundantes en los pueblos con cultivos de huerta y frutales, como eran los de Sant Boi (Barcelona) y Albí (Lérida). Los lugareños de Sant Boi perdían los estribos ante un ladronzuelo y todo aquel que fuese hallado en la carretera de Barcelona con frutas y verduras para vender y no tuviese campos con estos productos o no fuese criado de algún propietario era multado con 25 libras (unos 250 reales). Mucho peor podía resultar robar gavillas de trigo o cebada y, en caso de reincidencia, los regidores proponían a la Audiencia de Barcelona que el culpable fuese azotado y marcado con hierro al rojo, para lo cual la villa ofrecía una marca con su escudo ¹⁰. No he hallado ningún otro ejemplo que dispusiese castigos corporales contra los ladrones.

El grupo de campesinos que había protagonizado una expansión agrícola, más o menos reciente, tenía en sus manos la administración municipal. Muchos de ellos habrían accedido a la posesión de la tierra por medio de la enfiteusis

⁸ ACA, RA, Reg. 1018, p. 524 (15-IX-1801).

⁹ ACA, RA, Reg. 1172, p. 59 (30-IV-1807); Florence GAUTIER, *ob. cit.*, p. 59; Marc BOILES AU, «Communautés rurales et droits collectifs avant et pendant la Révolution», en *L'abolition de la féodalité dans le monde occidental* (París, 1971), vol. I, pp. 129 a 146 y 134-35.

¹⁰ ACA, RA, Reg. 870, p. 340 (28-VII-1769).

o de los contratos de plantación de *rabassa morta*, pero las ordenanzas nos indican que el estrato superior de estos agricultores habían consolidado su posición en el seno de la sociedad rural, en el decenio de 1770, y que preservaban la continuidad de su ascenso atacando, por una parte, los intereses de un escaso número de grandes hacendados y, por otra, la subsistencia de los pobres.

El retórico encabezamiento de las de Vila-seca (Salou, Tarragona) es una buena muestra de cuáles eran los objetivos de los viticultores:

«Que deseosos los capitulares que componen su magnífico ayuntamiento de facilitar el bien y el aumento de los heredamientos de aquel pueblo... y que cada uno tenga seguros y custodiados sus legítimos derechos, advirtiendo el mucho desorden que ha habido y hay por no guardar cada uno de sus cotos y límites, mezclándose unos con otros de los vecinos, y sus ganados aprovecharse de los frutos de los otros, acordaron que de ningún modo podían evitar tales consecuencias, daños y perjuicios que formando unas ordenanzas por las que se gobernase el pueblo»¹¹.

El documento emana la mentalidad propia de una burguesía rural.

Los problemas de los pueblos con cultivos mixtos

En 1780 el diputado del Común de Igualada, en representación de los campesinos de esta villa y de los de los pueblos vecinos de Odena, Montbui y Vilanova del Camí, enviaba al Consejo de Castilla un escrito donde denunciaba los perjuicios que causaban los rebaños en los campos y pedía que, para aquellos pueblos, volviese a ser puesta en vigor la Real Cédula de 13 de abril de 1779.

La Cédula a la que hacía referencia el procurador prohibía la entrada de ganado en las tierras plantadas de viña y olivar durante todo el año¹². En 9 de mayo de 1780 la ley fue revocada, volviéndose a la situación anterior por la cual cada pueblo se regiría según su costumbre¹³.

El interés del oficio enviado por el diputado del Común de Igualada se halla, principalmente, en la descripción detallada de cómo se cultivaba la tierra en aquella comarca:

¹¹ ACA, RA, Reg. 1018, p. 524 (15-IX-1801).

¹² *Colección de pragmáticas y reales cédulas de Su Magestad y autos acordados por los señores del Consejo* (Gerona, s. d., 1795 ap.).

¹³ Suspensión de la R. C. en 23-XI-1779 y prolongación de dicha suspensión en 13-IV-1780. ACA, RA, Reg. 577, p. 211.

«Uno de estos terrenos de cabida V. g. quatro fanegas de sembradura tiene entreveradas y plantadas a cordel de cinco a seis hileras de viña mediando entre una y otra línea cuadros para la siembra, y que por lo regular son de 24 palmos en ancho y todo el largo que se extienden las hileras de las cepas... En estas heredades mistas se crían y producen los olivos, pero no plantados a estaca como en otros países que abraza bien su calidad aquel modo de plantío; en Igualada y sus circunferencias el que se hace es en tallo o de los renuevos más tiernos, circunstancia [por la] que se precisa más a expeler de ellos toda especie de ganados que con facilidad hallándolos tan nuevos los roe e inutiliza.»

La dificultad de los agricultores de Igualada para poder cercar sus campos consistía en el hecho de que las tierras no se hallaban dedicadas íntegramente a viña y olivar, con lo que el paso a los ganados habría quedado proscrito, sino que también se sembraban de granos. El único medio que hallaban los campesinos para evitar que, en los años de barbecho, los rebaños entrasen en los campos era suprimirlo totalmente, sembrando una misma tierra cada año:

«... que por ser de secano y de improporcionada calidad deberían descansar y todo lo más sembrarse un año sí y otro no; resultando de este método que aunque consiguen con él prohibir la entrada del ganado en sus tierras y que no destrocen las viñas nuevas, los olivos y otros árboles fructíferos, experimentan con el mismo arbitrio una notable disminución en las cosechas por la clase de aquella tierra que por más que se la abone no es [de] aptitud para tan continuadas producciones y no son regulares en ningunos secanos [por] ventajosos que sean.»

La petición del síndico era que se autorizase a los campesinos a impedir la entrada de ganado en los campos con producción mixta, incluso durante los años en que los espacios dedicados a granos se hallasen en barbecho.

La solicitud fue aprobada dos años más tarde, en 1783¹⁴.

¹⁴ Jaime CARRERA PUJAL, *ob. cit.*, vol. IV (Barcelona, 1947), pp. 45 y 46; ACA, RA, Regs. 577, pp. 410 (2-VIII-1780), y 581, p. 52 (12-II-1783).

Las comarcas ganaderas del Norte

Los mayores ganaderos de los valles pirenaicos impedían los repartos y roturaciones de los comunales en sus municipios, e incluso intentaban lo mismo en los de las zonas vecinas¹⁵. Su interés por conservar la abundancia de unos pastos que ellos acaparaban les llevaba, también, a defender la conservación del libre pastoreo. Estos dos objetivos eran tanto más difíciles de lograr cuanto menor fuese su influencia local. Pero incluso en pueblos donde tenían un claro predominio existió, a fines del siglo XVIII, la oposición de los agricultores y ganaderos de tipo medio, formándose dos grupos con intereses contrapuestos. Por una parte, los medianos propietarios; por otra, los ganaderos más poderosos, cierto número de regidores salidos de su propio círculo y, también, los propietarios con pocas tierras. Por diferentes motivos, los grandes hacendados y los humildes se beneficiaban de la conservación del sistema comunitario¹⁶.

En 1781, Esteban de Cal, hacendado de Betrén, junto con otros 123 propietarios del valle de Arán, escribían al Consejo de Castilla diciendo que, debido a ciertos privilegios reales que se remontaban al siglo XIV, los propietarios del valle gozaban del total aprovechamiento de sus prados y campos, sin que hubiese ninguna clase de sujeción ni limitación. A pesar de ello, y desde hacía algunos años, se había introducido la costumbre de que una vez sacadas por sus propietarios las primeras hierbas que crecían en los prados, después del invierno, éstos tenían que renunciar a las segundas porque se había establecido la comunidad de pastos entre todos los vecinos.

Los solicitantes argumentaban que la nueva costumbre les era un gran perjuicio, puesto que no podían coger y almacenar las suficientes hierbas para el alimento invernal de sus animales, por lo que muchos morían de hambre. Denunciaban también que en el aprovechamiento de la comunidad de pastos intervenían algunos regidores, junto con «individuos de justicia», que durante determinadas épocas, y como si fuesen suyos, los arrendaban a «parientes y paniaguados»¹⁷.

Más allá del intento de acabar con una situación abusiva, ¿podría verse, en las quejas y razonamientos de los araneses firmantes de la petición, una voluntad de adoptar las nuevas técnicas agrícolas? Si así fuese, la negativa del Consejo pudo haber sido un importante freno al desarrollo económico de esta zona. En efecto, según decían los solicitantes, con la posibilidad de vallar, cada

¹⁵ Véase nota 1.

¹⁶ Emilio SERENI, *Storia del paesaggio agrario italiano* (Bari, 1972), pp. 301 y 302.

¹⁷ ACA, RA, Regs. 580, p. 234 (14-III-1782); 824, p. 38 (30-IV-1787), y 1008, p. 513 (29-VI-1791). Los 123 solicitantes representaban el 21 por 100 de todos los propietarios del valle. Ernest LLUCH, «El cens del compte de Floridablanca de 1787 (part de la Vall d'Arán)», en *Recerques*, 11 (Barcelona, 1981), pp. 161 a 177 y 124 y 125.

propietario regaría sus prados y sacaría hasta tres cosechas de hierbas, con lo que quedaría asegurada la alimentación del ganado durante el invierno. A pesar de la importancia de los argumentos, el permiso del Consejo tardó unos ocho años en llegar, hasta febrero de 1789¹⁸. Pero el asunto no quedó zanjado, puesto que en 1790 un ganadero protestó contra dicha autorización.

La oposición al cercamiento se hallaba dirigida por uno de los mayores ganaderos y hacendados del valle, el cual, como primera medida, se había dirigido al teniente corregidor de Viella advirtiéndole acerca de la inminente ruina de aquellos pueblos y del grave perjuicio que se causaba a la economía de todo el reino con la llegada de la provisión que permitía el cercamiento. Sus predicciones no hicieron demasiado efecto, pues por aquellos mismos días se fijaban en los lugares más visibles de cada pueblo los correspondientes bandos y los propietarios empezaban a vallar. Ante la insistencia del referido ganadero, el teniente corregidor le aconsejó que se dirigiese a la Audiencia de Barcelona.

En su escrito a la Audiencia, el ganadero supeditaba el desarrollo de la cría de rebaños al régimen de campos abiertos. También acusaba a De Cal de malas artes para inducir a los 123 propietarios a que firmasen la solicitud al Consejo: «Como seducidos que habían sido para impetración por D. Esteban de Cal, sus parientes, amigos y coaligados, usando de medios menos bien regulares hasta el extremo de convidarles a comer y beber en sus casas para más bien alucinarlos.» Venía a indicar que los 123 propietarios, entre ellos el barón de Les o la familia de los Portolá, se «alucinaban» ante una buena comida, y en aquellos momentos, en que ya habían reaccionado, se hallaban arrepentidos de haber firmado. Pedía, finalmente, la suspensión de la provisión de cercar y la persistencia del sistema de campos abiertos¹⁹.

La apelación del ganadero —no aparece su nombre ni si había firmas que lo secundasen— impidió el cercamiento en el valle y lo que, quizá, pudo haber constituido una temprana implantación de los prados artificiales y de un moderno sistema de producción ganadera. Si cuando, en 1781, una buena parte de los propietarios mostraban su acuerdo, el permiso tardó unos ocho años, no es arriesgado creer que con la aparición de una voz discordante el trámite se prolongaría, en el mejor de los casos, muchísimo más tiempo. La concesión de permisos para cercar tierras dependía del acuerdo entre todos los propietarios y de una clara mejora a corto plazo; en este sentido, las apocalípticas pre-

¹⁸ ACA, RA, Reg. 1187, p. 109 (16-II-1789). Marc Bloch habla de la incompatibilidad entre los campos abiertos y el riego y los prados artificiales, y del perjuicio que para la ganadería representaban aquéllos. Marc BLOCH, «La lutte pour l'individualisme agraire dans la France du XVIII^e siècle», en *Annales d'Histoire Economique et Social*, 2 vols. (Londres-Nueva York, 1972, reedición), vol. I, pp. 334 y ss. y 339.

¹⁹ ACA, RA, Reg. 1007, p. 513 (29-VI-1791).

dicciones del hacendado aranés debieron causar su efecto en la Audiencia y el Consejo.

Aunque desde 1770 el campesinado pudiera conseguir de la Administración el beneplácito para vallar su propiedad, son evidentes las dificultades y cortapisas que, en muchos casos, obstruyeron la consecución de este objetivo. Posiblemente, el proceso viese un mayor impulso después de la guerra de 1808-1814, cuando los beneficios derivados de cerrar las fincas resultasen ya fuera de toda duda.

El 3 de febrero de 1820, pocos días antes de la instauración del régimen constitucional, la Audiencia de Barcelona informaba favorablemente sobre una petición hecha por un propietario de Jou y Escalarre (Pirineo leridano), el cual quería vallar sus tierras a pesar de la oposición de los vecinos de estos pueblos. Después de recibir información de los ayuntamientos, del corregidor y del fiscal de la Audiencia, ésta resolvía dar su beneplácito al hacendado. La Audiencia tenía pocas dudas en decidir, «después de lo que demostró con tanta evidencia Dn. Gaspar de Jovellanos en un erudito tratado de la ley agraria». Proseguía argumentando:

«De este modo el propietario tendría más esmero en el cultivo de sus tierras si exclusivamente puede utilizarse de sus rendimientos sin el inconveniente de que luego se separen los frutos de ellas entren los ganados forasteros, cuyos dueños quieren mantenerlos a expensas ajenas y descuidan de cultivar sus haciendas propias como corresponde»²⁰.

Hay un gran contraste entre la rotundidad y el entusiasmo con que se expresaba la Audiencia en febrero de 1820 y el laconismo y la impersonalidad utilizada treinta o cuarenta años antes. Por otra parte, si en 1790 un solo ganadero podía hacer revocar la autorización de cercar en perjuicio de otros 123 propietarios, en 1820 la situación era totalmente opuesta y un solo vecino la conseguía frente a la oposición de sus paisanos. El Informe de la Ley Agraria fue —tal como el mismo Jovellanos parece que había imaginado al redactarlo— fue la referencia por la que los conservadores pudieron aceptar la necesidad de reformas en la agricultura española²¹.

Los cercamientos reflejan la ausencia de una política por parte de la Administración. Cada solicitud se resolvía aisladamente, tomando en consideración los efectos que podían tener a corto plazo. El acuerdo de la mayor parte de los propietarios de un pueblo, el uso de instrumentos avalados por una

²⁰ ACA, RA, Reg. 1381, p. 62 (3-II-1820).

²¹ Gonzalo ANES, *Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII* (Barcelona, 1969), pp. 124 y ss.

larga tradición y los beneficios fiscales que reportaba el cultivo de la viña en comarcas de terrenos pobres, eran tres circunstancias que contribuían a agilizar el trámite. Pero el cercamiento no era considerado como una premisa necesaria para la mejora de la agricultura, sino como un remedio inexcusable para preservar determinados cultivos, mientras que las tierras de pan llevar quedaban sujetas al régimen de libre pastoreo ²².

Cuando las ventajas de vallar los campos no resultaban obvias, el mecanismo se hacía muy lento o incluso se paralizaba totalmente, en caso de vislumbrarse algún interés particular lesionado. Quizá la respuesta afirmativa que en 1789 dio el Consejo a los 123 propietarios del valle de Arán podría haber constituido un precedente que sirviese de pauta para las conflictivas zonas ganaderas. En cualquier caso, la morosidad en la respuesta y su posterior anulación indican la prevención con que había sido otorgada la medida. Treinta años después, el «Informe en el expediente de la ley agraria» confería, en este terreno, una gran seguridad a los dictámenes de la Audiencia.

Al contrario de lo que sucedía con los intereses privados, el Consejo de Castilla era poco escrupuloso en lesionar los locales. La Real Cédula de 13 de abril de 1779 autorizaba a los campesinos a cerrar las tierras plantadas de viña y árboles; la ley era importante, puesto que representaba extender a toda España una medida progresiva que necesitaba una autorización específica para cada municipio. Pero en 1780, debido a la falta de pastos y a los problemas para el abastecimiento de carne de la ciudad de Madrid, el decreto fue anulado y se volvió a la situación anterior. La protesta de Igualada, enviada en 1780 y atendida en 1783, muestra cómo el celo de un grupo de funcionarios no podía suplir la falta de una política definida por parte del Consejo.

El ataque a los usos comunitarios y la liquidación de los bienes comunales, en el siglo XVIII, describen trayectorias diferentes según la composición de las clases dirigentes locales. Los ayuntamientos, en su actividad o en su mutismo, tuvieron un importante papel. Asimismo, hay que mencionar —a pesar de la falta de referencias en la documentación consultada— la influencia del elemento señorial y su posible acción obstruccionista. En muchos pueblos, la presencia del señor jurisdiccional debió impedir que la reivindicación del cercamiento llegase a plantearse; esto pudo ser uno de tantos aspectos que incidiese en la resistencia antiseñorial a finales del siglo XVIII. Cuando el barón de Maldá describía el pueblo de su jurisdicción y decía que las tierras que no eran de olivar o de sembradura se utilizaban para los rebaños destinados al consumo del pueblo y para los suyos propios, se lamentaba de que «en assumpto de herbas aquells salvatges han donat al senyor bastant que sofrir» ²³. No

²² En muchos lugares, el cercamiento tenía este carácter restrictivo. Florence GAUTIER, *ob. cit.*, p. 118.

²³ Biblioteca de Catalunya, Manuscrito 402 (Rafael de Amat, barón de Maldá; descripción del pueblo de Maldá hacia 1795), pp. 124 y 125.

obstante, no es posible generalizar. Otros nobles, como el barón de Albí, encabezaban la solicitud de los propietarios ²⁴. En cualquier caso, muchos indicios permiten creer que los cercamientos o la disolución de los bienes comunales no se hizo sin su provecho; el problema estriba en las condiciones bajo las cuales se realizó el «reparto» entre la nobleza y la oligarquía rural.

²⁴ ACA, RA, Reg. 1015, p. 512 (3-VIII-1795).

FUNCIONALIDAD ECONOMICA DE LOS BALDIOS. EL PROBLEMA DE SU VENTA EN LA ANDALUCIA DEL SIGLO XVII

RODRIGO FERNANDEZ CARRION
Universidad de Sevilla

En unos casos, consideraciones de carácter económico y, en otros, comportamientos sociales van a determinar lo que constituye una constante en la historiografía económica española, el incremento de la demanda de tierra, que se detecta a partir de la segunda mitad del siglo xvi.

La conjunción de esta tendencia con la crítica situación de la hacienda real implicó que fueran las tierras, directa o indirectamente, controladas por la Corona las que cubrieran esta demanda. Apareciendo los baldíos, bienes sin una adscripción fija, como la base inicial de este proceso. Pero su misma indeterminación conceptual posibilitaría la extensión de las enajenaciones a otro gran número de fanegas de tierra no estrictamente baldía. Tierras realengas y concejiles serán alienadas en un proceso continuado de venta, auténtica desamortización civil.

La definición más elemental de baldío será la presentada por Nebrija: «tierra que no se labra»¹. A esta idea responde el planteamiento de Jovellanos, al señalar que

«Tales [leyes] son las que, por una especie de desidia política, han dejado sin dueños ni colonos una preciosa porción de tierras cultivables de España y alejando de ellas el trabajo de sus individuos, han defraudado al Estado de todo el producto que el interés individual pudiera sacar de ellas: *tales son los baldíos*»².

Y ésta era la connotación que el Consejo concedía al concepto de baldíos, al menos en los primeros momentos del proceso, a pesar de ser obvio el aprovechamiento agrario —más ganadero que agrícola— de tales tierras. Sin embargo, y con ser este supuesto carácter improductivo elemento reiterado en las alegaciones, no constituye el tema central de los sucesivos pleitos; el problema

¹ Recogido por J. GÓMEZ MENDOZA, «Las ventas de baldíos y comunales en el siglo xvi», en *Estudios Geográficos*, Madrid, 1968, p. 519.

² G. M. JOVELLANOS, *Informe sobre la ley agraria*, Barcelona, 1968, p. 38.

de la propiedad jurídica, es decir, el derecho de la Corona a enajenar sus propiedades, o la inalienabilidad de los bienes concejiles, constituye la razón de ser de estos pleitos.

Colmeiro establece su carácter realengo³; Olavide los diferencia de los comunales⁴; Caxa de Leruela —y Le Flem, en la introducción crítica— los integran en los bienes comunales⁵. Tal inclusión es corroborada por Alejandro Nieto⁶ y recogida por Gómez Mendoza, quien fija el problema en sus justos límites cuando, acertadamente, afirma:

«... terminando por ser superfluo su concepto y planteándose la cuestión de su inalienabilidad exclusivamente en términos de fuerza, desde el momento en que lo importante era que el monarca, el señor que afirmara sus derechos sobre ellos, o el concejo se mostraran los más hábiles o los más fuertes para defender sus intereses»⁷.

Evidentemente, las discusiones respecto al tipo de bienes y al carácter de los baldíos son meras disquisiciones semántico-jurídicas, que fueron absolutamente superadas por el Consejo cuando, en 1640, en respuesta al Cabildo de Antequera referente al carácter concejil, que no realengo, de los baldíos, afirma que la «diferencia era verbal respecto que todos los términos del reino eran de una calidad»⁸.

Y en esta indeterminación conceptual se insertan las disposiciones contradictorias recogidas en la *Novísima*, al tiempo que obliga a recurrir no tan sólo al título XXIII —De los terrenos baldíos, solares y edificios yermos—, sino que también a los títulos XXIV, XXV y XVI⁹. Por cuanto en este período histórico, limitado por los reinados de Felipe II y Felipe IV, se pretendió enajenar toda la propiedad pública.

Este proceso tuvo una especial incidencia en Andalucía¹⁰, donde va a coincidir con la venta de cargos públicos y la multiplicación de arbitrios¹¹ y el

³ M. COLMEIRO, *Historia de la economía política en España* (edición de G. Anes), Madrid, 1965, t. II, pp. 712-715.

⁴ P. DE OLAVIDE, *Informe sobre la ley agraria* (edición de R. Carandé), Madrid, 1956, pp. 436 y ss.

⁵ M. CAXA DE LERUELA, *Restauración de la abundancia de España* (edición de J. P. le Flem), Madrid, 1975, pp. XXX y 81.

⁶ A. NIETO, *Bienes comunales*, Madrid, 1964, p. 149.

⁷ J. GÓMEZ MENDOZA, *op. cit.*, p. 520.

⁸ Archivo Histórico Municipal de Antequera (AHMA), Secc. Arbitrios, leg. 6, doc. 7.

⁹ *Novísima Recopilación*, Madrid, 1829, t. 3, pp. 506, 510, 556 y 382.

¹⁰ Cuyas consecuencias han sido analizadas por A. M. BERNAL en *Historia de Andalucía*, Barcelona, 1981, t. VI, pp. 191 y ss.

¹¹ Una visión más amplia de la incidencia en las haciendas municipales andaluzas de este proceso se recoge en A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *Historia de Andalucía*, Barcelona, 1981, t. VI, p. 92.

desarrollo de una burguesía agraria y urbana enriquecida. Voy a analizarlo tomando como modelo Antequera, ciudad agrícola de acusada actividad artesanal, cuya localización geográfica la sitúa como bisagra de la Andalucía occidental y oriental, alta y baja, y que presenta en esta época un considerable volumen poblacional.

Justifica la elección del modelo no tanto el desarrollo del proceso, que coincide plenamente con lo señalado para el caso andaluz, sino que su especial significación viene determinada por la culminación del mismo: la restitución de los bienes enajenados, que ni Sevilla —la cual presenta el caso de Antequera como precedente y modelo a seguir en su recurso— ni Jerez alcanzan, y Córdoba sólo parcialmente.

La venta de tierras baldías, iniciada en el siglo xvi, cobra una especial intensidad en el reinado de Felipe IV, y quiero centrarme en este período tanto por la considerable cantidad de tierra enajenada como por la clara oposición de los cabildos —cuyos cargos han sido ya acaparados por una oligarquía ya asentada— a estas ventas de sus bienes propios y comunales, ventas ampliamente defendidas por esa burguesía agraria y urbana enriquecida.

Para una total comprensión de lo que realmente significó la venta de baldíos hay que situarse en el plano local. En él, analizar la función económica de los baldíos en la hacienda municipal y las consecuencias socioeconómicas que determinaron su enajenación.

La venta de cargos públicos y los ruinosos pleitos de alcabalas determinaron el endeudamiento irreversible de las haciendas locales ¹². Ante estas deudas —345.000 ducados en Osuna y casi 200.000 en Antequera—, los ingresos obtenidos del aprovechamiento de baldíos y otras propiedades concejiles difícilmente pueden enjugar el déficit; la función económica de los baldíos de estas ciudades arruinadas será, fundamentalmente, la de constituir garantía patrimonial de los sucesivos empréstitos.

Igualmente, la venta de baldíos tuvo unas claras repercusiones socioeconómicas. Por una parte, incrementó la superficie cultivada —de alguna manera respondía a la necesidad señalada por Sancho de Moncada de «labrar todo lo inculto» ¹³—, aunque no necesariamente la oferta agrícola ¹⁴. Asimismo, los baldíos enajenados contribuyeron al proceso de concentración de la propiedad, iniciado en el siglo anterior, y, por otra parte, permitieron satisfacer la demanda de tierra de esa burguesía rural y urbana enriquecida, a la que anteriormente nos refiriéramos.

¹² *Supra*, p. 94; A. M. BERNAL, *Haciendas locales y tierras de Propios*, Madrid, 1979, pp. 288-289.

¹³ S. DE MONCADA, *Restauración política de España* (edición de J. Vilar), Madrid, 1974, p. 193.

¹⁴ Coincidiendo, en parte, con las conclusiones que para el siglo xvii español presenta Gonzalo ANES en *Las crisis agrarias en la España moderna*, Madrid, 1974, pp. 87 y ss.

Si consideramos que los índices sociales de riqueza vienen determinados por la proporción de propiedad rústica detentada y las concomitancias manifiestas entre poder económico y poder político ¹⁵, es fácil deducir cómo no sólo factores económicos inciden en la compra de baldíos, potenciando las connotaciones sociales del fenómeno. Esta doble función socioeconómica podría servir de explicación del diferenciado comportamiento económico-agrario de los compradores.

1. *Cuantificación del fenómeno*

Una de las razones que determinan la auténtica importancia de la venta de los baldíos andaluces en el siglo XVII será el elevado número de fanegas que se componen y venden.

Esa misma indeterminación conceptual a la que anteriormente me refiriera, y que caracteriza a los baldíos, va a plantear una dificultad adicional al cuantificarlos. Centrándonos en la población elegida como modelo, se constata cómo en el Repartimiento de 1493 se considera como tales baldíos 23,5 yugadas 6 aranzadas, aparte de las cuales habría que especificar la existencia de 47 yugadas 2 as. para dehesas, 2,5 yugadas de dehesa-baldío y 6 yugadas 26 as. de prados ¹⁶.

Tales cantidades son considerablemente incrementadas por el licenciado Junco de Posada, a quien se encomienda, en 1576, la revisión del anterior repartimiento y la composición de las tierras realengas-baldías existentes ¹⁷. Manteniendo tal tendencia en el Catastro de Ensenada, donde de las 45.583 fs. que se consideran de propiedad pública, más del 50 por 100 podría corresponder a lo que consideramos baldíos ¹⁸.

Una valoración global, algo exagerada, sin embargo, es la presentada por el fiscal y la representación de los compradores en el pleito que se siguió para la restitución a la ciudad de las propiedades vendidas, señalando que

«... demás de lo vendido y compuesto le quedaba a la C^{dad} dos dehesas y muchos egidos, cañadas, veredas y abrevaderos que le había repartido el B^{er} Serrano y también quedaba el baldío de la

¹⁵ No olvido el período cronológico que nos delimita, pero la inserción en una sociedad estamental queda matizada por la afirmación del profesor DOMÍNGUEZ ORTIZ: «... tras pasar la barrera estamental era muy fácil para quienes tenían dinero y amistades», recogida en *Aproximación a la Historia de Andalucía*, Barcelona, 1979, p. 138.

¹⁶ AHMA, Repartimiento del Licenciado Alonso Serrano, fols. 149 v. a 150 v.

¹⁷ AHN, Secc. Diversos, Concejos y ciudades, leg. 27; AHMA, Repartimiento de Junco de Posada, t. II.

¹⁸ AHMA, Catastro de Ensenada, lib. 2.º de Seculares.

Sierra del Codo y el baldío de Torre del Cuchillo y el baldío de Torre de Arboles y más de otros 40 sitios en que había más de 6.000 fs. de tierras y demás de lo dicho más de 60.000 fs. de lo realengo y p^a pasto común...»¹⁹.

Cabría admitir tales cifras si consideramos incluida en ellas la restante propiedad concejil. Pues en 1856, al plantearse la realización de la desamortización de Madoz, la valoración que el Ayuntamiento hace de su propiedad territorial alcanza las 14.000 fs., a las cuales cabría añadir los varios miles enajenadas a lo largo del siglo XVIII, para alcanzar la cifra recogida en este proceso. Igualmente, es preciso incluir en estas casi 70.000 fs. las poco más de 30.000 fs. que fueron compuestas y vendidas por don Luis Gudiel de Peralta.

Junto a la cuantificación de las tierras vendidas es preciso referirse a la valoración económica de las mismas. Si la intención de la hacienda real era recuperar el 1.938.000 ducados en que valoró sus pérdidas por usurpación de las tierras de moriscos en siete ciudades del reino de Granada, muy alta debiera ser la tasación de las tierras compuestas.

En lo que concierne a la ciudad modelo, esta tasación sería:

Fanega de tierra de buena calidad	8 a 10 ducados
Fanega de tierra de razonable calidad	4 a 5 ducados
Fanega de tierra inútil	3 a 5 reales

Evidentemente se va a plantear una discordancia absoluta entre la valoración del juez encargado de las ventas de los baldíos y los peritos municipales. Tomando como modelo la composición y venta de la Dehesa del Alcornocal, quiero explicitar tal discordancia, pues en tanto que si para los peritos la tasación de estas tierras fue:

Tierra:

700 fs. de la mejor calidad ...	a 30 rs/fs. =	21.000 rs.
1.800 fs. de mala tierra	a 4 rs/fs. =	7.200 rs.

Arboles:

42.500 alcornocales mayores ...	a 6 rs.	= 255.000 rs.
42.500 alcornocales menores ...	a 3 rs.	= 127.500 rs.
TOTAL		410.700 rs.

¹⁹ AHMA, Secc. Arbitrios, leg. 6, doc. 7.

el fiscal considera que estas 2.500 fs. producían en arrendamiento 4.000 ducados y su valor en venta alcanzaría los 200.000 ducados²⁰.

Pero la composición y venta de la Dehesa del Alcornocal, en pública subasta, facilitaría unos resultados económicos muy diferentes. La composición de estas tierras se realizó a favor de Francisco Romero, Francisco Martín Pedraza y don Francisco de Arses y Narváez, quienes adquieren, respectivamente, 164, 1.000 y 1.353 fanegas, y parte proporcional de alcornocales, por un precio de 5.080, 72.000 y 111.206 reales, en cada caso. Y el total de lo obtenido, 188.586 reales, está muy lejos de los 2.200.000 rs. en los que el fiscal la valoró.

Y ésta será la tendencia constatada en todo el proceso, cuya significación es determinante a la hora de analizar las causas que determinaron la carta ejecutoria de restitución a la ciudad de sus predios enajenados.

2. Los compradores

En el análisis social de los compradores cabría establecer tres grupos fundamentales y con los siguientes porcentajes:

Hidalgos	Nobles titulados	1,15
	Sin título	42,53
Burgueses	Urbanos	6,90
	Agrarios	44,83
Eclesiásticos	Instituciones	2,30
	Particulares	2,30
TOTAL (87 casos)		100 %

La escasa presencia de nobles titulados, a diferencia de lo que es factible constatar en otras ciudades andaluzas, responde a la realidad, toda vez que será a partir de finales de este siglo XVII y principios del XVIII cuando se produzca la inflación de títulos, afectando a algunos de los compradores de baldíos o a sus descendientes: Rojas, Sanvicente, Santisteban, Pareja, Arses, etc., que en 1637 aparecen entre los hidalgos detentadores de cargos públicos y compradores de tierras baldías.

Las fuentes de información utilizadas indican con toda exactitud la condición de caballeros e hidalgos, pero no siempre que se omite ha de responder

²⁰ AHMA, Secc. Reales Cédulas, leg. 6, doc. 13.

a representantes de la burguesía; por ello, y a pesar de la crítica realizada, no excluyo la posibilidad de que la proporción de burgueses esté un poco elevada, todo lo cual no obsta para que mantenga estos porcentajes como absolutamente significativos. Especialmente al referirme a la burguesía agraria y, dentro de ella, al conjunto de labradores —65 por 100 del total de propietarios y labradores²¹—, con manifiesta avidez de tierras propias y localizados, social y económicamente, entre los grandes propietarios y los campesinos y pegu-
jaleros.

Afirmar que los eclesiásticos mantendrán unas pautas de comportamiento coincidentes con las de su grupo social de origen no presenta mayor originalidad; por ello, los eclesiásticos que adquieren tierras lo hacen, bien para su disfrute y posterior creación de una capellanía, bien con proyección familiar. Entre los eclesiásticos se incluye uno de los compradores cuyo comportamiento refleja unas connotaciones estrictamente económicas; me refiero a la Compañía de Jesús.

Escasa incidencia presenta el problema de los compradores forasteros. No alcanzando el 5 por 100 sobre el total de compradores y presentando, en la mitad de los casos, relación económica con Antequera, obvia su análisis.

Uno de los aspectos fundamentales del estudio será el análisis de la concentración agraria, en el cual quiero diferenciar entre la cantidad de tierra adquirida por los compradores y la controlada con anterioridad. Respecto a esta última, obviamos aquellos casos en los cuales si bien el comprador no disfruta de propiedad rústica alguna, sí la posee algún miembro de su familia nuclear o extensa. Aunque en este estudio no tiene cabida, he de destacar la uniformidad de comportamientos económicos familiares.

Distribución de compradores por grupo social y propiedad rústica controlada

	Un cortijo	Dos cortijos	Cortijo huerta	Huerta	Casería	Total parcial	% sobre n.º com- pradores
Hidalgos	62,50	18,75	6,25	—	12,50	100 %	42,11
Burgueses	57,14	—	28,57	14,29	—	100 %	15,56
Eclesiásticos	100	—	—	—	—	100 %	50

En una aproximación a la estructura agraria de Antequera, pocos años después de la restitución de la propiedad enajenada a la ciudad, cabe señalar la existencia de 257 cortijos, 178 huertas y 152 caserías²², que no necesariamen-

²¹ AHN, Secc. Diversos, Concejos y ciudades, leg. 33.

²² F. CABRERA, *Historia de Antequera*, 1670, BN, mss. 3674.

te ha de coincidir con el número de propietarios, dada la concentración agraria. Por otra parte, en 1605 son 263 los labradores que declaran disponer de fanegas de barbecho y 391 los que registran arados en el reparto de trigo del Pósito para la sementera de 1606 ²³.

Las condiciones en que se subastaron las tierras realengas y/o baldías facilitaron la concentración agraria. En los pleitos planteados por la ciudad, en su intento de recuperar las tierras vendidas, se citan, preferentemente, las fanegas adquiridas por los grandes compradores; casi todos ellos componen más de 250 fanegas, y entre los 24 compradores que se incluyen superaron ampliamente las 20.000 fanegas. Es decir, la práctica totalidad de lo ajustado.

El 62,5 por 100 de estos grandes compradores adquieren más de 500 fs., pero lo que realmente indica la concentración agraria posibilitada en este proceso será ese porcentaje del 41,67 que, al adquirir más de 1.000 fs., acaparan el 67 por 100 de la tierra controlada por los grandes compradores. Clarifica aún más este análisis el considerar que quienes adquieren más de 1.000 fanegas lo hacen en la siguiente proporción:

Don Francisco de Arreses Narváez (señor de la villa de Cauche): 3.153 fs.

- 800 en Puertos de Puertos de Cauche;
- 1.000 en Dehesa del Alcornocal con 24.000 alcornocales;
- 1.353 en Dehesa del Alcornocal con 24.000 alcornocales.

Colegio de la Compañía de Jesús: 2.211 fs.

- 150 en Ojos de Huéscar, con 415 pies de encina;
- 1.351 en Lagunillas Altas;
- 710 en Dehesa de Antequera la Vieja.

Francisco de Lagasca: 2.000 fs.

- 1.000 en Lagunillas Bajas;
- 2.000 en Lagunillas Bajas (a medias con Miguel Pineda).

Lucas de Carvajal: 1.676 fs.

- 670 en Los Molares y Cerro la Cueva;
- 355 en Los Molares y Cerro la Cueva;
- 651 en Torre del Cuchillo.

Don Francisco de Santisteban (regidor): 1.500 fs.

- 500 en Los Arcos;
- 1.000 en el Cortijo Deleitosa;
- más otra cantidad indeterminada de tierra en islas del río de la Villa.

Don Pedro de Sanvicente: 1.250 fs.

- 327 en P.º de Alimanes;
- 923 repartidas en tres partidos, colindantes al anterior.

²³ AHN, Secc. Diversos, Concejos y ciudades, leg. 33.

Francisco Martín Pedraza: 1.000 fs. en Dehesa del Alcornocal (las vendió a don Francisco de Arreses).

Don Diego de Vargas: 1.000 fs. en Dehesa Antequera la Vieja.

Miguel de Pineda: 1.000 fs. en Lagunillas Bajas (mitad de las 2.000 fs. que comprara junto con Francisco de Lagasca).

Don Rodrigo de Godoy (regidor): 1.000 fs. en Torre de Arboles.

Evidentemente, constatamos un comportamiento diferenciado de acuerdo con el grupo social en el que se inscriben los compradores. Si del total de éstos el 50 por 100 lo incluía entre la burguesía, al considerar el grupo de grandes compradores su participación se reduce al 20. Y dentro del grupo de los hidalgos, el *status* social, propio o familiar, se corresponde con la cantidad de tierra adquirida. Si bien es preciso hacer una salvedad respondiendo a la consideración antes señalada: «la oligarquía acapara y sabe utilizar los órganos de poder local».

En la sesión del Cabildo de 9 de mayo de 1645 se acuerda presentar demanda ante la Chancillería de Granada contra un regidor, quien cambia tierras de su propiedad por otras del Concejo; idéntico número de fanegas, pero con una pequeña diferencia, como se indica en las Actas Capitulares:

«... y es assi que las t^{as} de Garrejo no valen ni valieron nunca a ducado cada fanega ni a don Rodrigo no le eran de útil alguno y las que tomó o se la dimos en Torreárboles valen a 100 ducados cada fanega por ser de riego y le han valido mucha suma de ducados y ha tenido en ellas grandes cosechas, lo qual hizo con la mano de regidor y diligencias pues hizo con deudos suyos que eran regidores de que se ha seguido y sigue grave perjuicio a esta ciudad»²⁴.

Este proceso de apropiación, el más utilizado por la oligarquía, nos lo encontramos en el Repartimiento de 1496; en 1530, al formalizar las Ordenanzas de Antequera, etc. Siendo la referencia más directa la recogida en la visión real de 24-II-1592, en la cual se indica cómo «los regidores y hombres poderosos de la ciudad se habían entrado, rompido y desmontado muchos pedaços de tierra que alindaban con sus haciendas»²⁵. Y es por ello la casi total ausencia de regidores y jurados entre los compradores de tierras realengas/baldías; no les era necesario esta composición y venta por jueces reales para adquirir, con un coste ínfimo, tierras de propiedad concejil y/o comunal.

²⁴ AHMA, Secc. Actas Capitulares, lib. 28, fol. 75 v.

²⁵ AHMA, Secc. Reales Cédulas, leg. 6.

Cabría destacar, por último, cómo, y de igual manera que alguno de los compradores coincide con los arrendatarios de los predios vendidos, cuando se produce la restitución de los baldíos a la ciudad, gran número de estos compradores seguirán en el usufructo de estos predios, si bien como arrendatarios.

3. *Transformaciones agrarias*

Con demasiada frecuencia se ha considerado sinónimos tierras baldías y tierras estériles; es cierto que de las 9.424 fanegas o de las 5.276 aranzadas que en el Catastro de Ensenada se señalan como tierras inútiles por naturaleza o estériles, en Antequera y Jerez de la Frontera, respectivamente, una gran parte pueden serlo efectivamente. Al igual que de las 20.750 fs. de pastos o arbolado de Antequera, o las 98.378 aranzadas para el caso de Jerez, es factible considerar cómo no todas admiten una utilización agrícola más rentable²⁶. Pero, como intento demostrar en próximo estudio, una parte realmente considerable de estas tierras calificadas de baldíos, estériles, inútiles y/o improductivas, tras su rompimiento y siembra, ofrecen una producción, cuando menos, equiparable a la media.

Con esta premisa nos es más fácil definir la funcionalidad económica real de estas compras de tierra, que se inserta en un contexto histórico-económico caracterizado por la potenciación de la demanda efectiva de tierras y la necesidad de incrementar la oferta agrícola, en una economía marcada por las crisis de subsistencia. En tal sentido se refleja una constante en todas las Actas Capitulares de la época y una referencia continua en las alegaciones del Cabildo: «los compradores que se han entrado, rompido, talado y quemado... que aún hasta el agua del dicho arroyo llega lo arado y sembrado»²⁷. Pero este problema, este comportamiento agrícola, no afecta tan sólo a los compradores de tierras baldías; a mediados del siglo XVI se reiteran las disposiciones del Consejo a fin de impedir el rompimiento de tierras, dentro de una política eminentemente ganadera. Posteriormente, una vez conseguida en 1649 la restitución de los predios enajenados, la ciudad presenta idénticas protestas, ante el hecho de «que muchas personas vecinos de ésta, que tienen Cortijos, Heredades y Haciendas en el campo que linda con realengos, baldíos y abrevaderos se han metido en ellos arándolos y sembrándolos»²⁸.

Este y el problema concomitante de los cerramientos, de amplia incidencia

²⁶ AHMA, Catastro de Ensenada, lib. 3.º de Seculares; Archivo Histórico Municipal de Jerez, Estadística de 1752.

²⁷ AHMA, Secc. Actas Capitulares, lib. 28.

²⁸ *Supra*, lib. 29.

en esos momentos ²⁹, determinan unas transformaciones agrarias que coinciden con las señaladas para amplias zonas andaluzas, y que sirven de marco a las que conllevan las compras de tierras baldías de la primera mitad del siglo XVII. Pues hay un hecho cierto: la casi totalidad de las tierras adquiridas se ponen en cultivo. No importando el sistema de explotación, ya sea directo, ya sirva de precedente del absentismo considerado definitorio de la estructura agraria andaluza de siglos posteriores.

Los compradores forasteros y parte de los hidalgos practican el absentismo, dejando sus tierras en manos de grandes arrendatarios, los cuales, a su vez, recurren a la aparcería. Los eclesiásticos vecinos, burgueses y parte de los hidalgos se encargan directamente del cultivo de sus propiedades, lo cual no obsta para que sea factible constatar la presencia, en estos casos, del aparcerero.

Otra figura —claro precedente de lo que con mayor asiduidad se diera en el proceso desamortizador decimonónico— vendrá representada por aquellos compradores que, tras adquirir tierras con arboleda, talan y venden la madera, negándose a hacer efectivo cualquiera de los plazos estipulados; tras ello, y sin ninguna indemnización, el juez comisionado recupera el predio y procede a una nueva subasta.

Las repercusiones agrarias en particular, y económicas en general, que conllevó la venta de baldíos pueden analizarse, a título de modelo significativo, en base a los datos recogidos de algunos compradores de tierra en los partidos de Cuevas Altas y Cuevas Bajas, en los cuales, considerando la superficie y valoración agraria en anterior punto indicadas, el régimen de explotación y la producción —según datos de 1644-45— sería ³⁰:

<i>Compradores</i>	R. EXPLOTACION			PRODUCCION (EN FANEGAS)						
	<i>Lab.</i>	<i>Peg.</i>	<i>Apa.</i>	<i>Trigo</i>	<i>Escana</i>	<i>Cebada</i>	<i>Garb.</i>	<i>Arb.</i>	<i>Hab.</i>	<i>Cen.</i>
Cristóbal Roldán	39	1	—	2.103,5	92,5	1.025	10,5	—	27	7
Francisco Sánchez	1	—	—	214,5	—	187	—	—	—	—
Convento Victoria	—	—	—	401	—	177	—	—	—	14
Juan Izquierdo	2	13	2	1.354	40	1.337,5	10	7	8	30
Bartolomé Ruiz	—	—	—	37	—	27	9	—	—	—
Juan Gómez	1	—	—	105	—	65	—	—	—	—
Alonso Nieto	—	—	—	293,5	27	461,5	—	18	—	—
TOTAL	43	14	2	4.508,5	159,5	3.280	29,5	25	35	51

²⁹ Desde mediados del siglo XVI es continua la referencia al problema, que, desde unos planteamientos ganaderos, se recoge tanto en las Secciones de Actas Capitulares como de Reales Cédulas.

³⁰ Elaboración del autor en base a datos recogidos en legs. 6 y 19, docs. 7 y 16, de la Secc. Arbitrios; legs. 5 y 6, docs. 99 y 14, de la Secc. Reales Cédulas, y leg. 12 de la Secc. Propios, AHMA.

Considerando lo anteriormente expuesto, es factible deducir que las transformaciones agrarias de carácter estructural que pudo determinar la venta de baldíos afectan al sistema de propiedad, en tanto que no inciden en demasía sobre el régimen de explotación y sistema de cultivo. Se mantienen las pautas de comportamiento económico vigentes.

Se constata, sin embargo, un incremento de la superficie cultivada; en concatenación con lo cual se manifiesta una potenciación de la oferta agrícola, que vendrá determinada por la demanda de un mercado interior excesivamente condicionado por las crisis de subsistencia. Lo que explica la preeminencia de los cereales en la producción.

Dispongo de una exhaustiva información cualitativa y cuantitativa, no seriada, para el análisis de las técnicas de cultivo de los compradores de baldíos, que coincide plenamente con las conclusiones deducidas al considerar el total de propietarios-labradores; por ello he creído oportuno centrarme en una muestra que refleja perfectamente el desarrollo técnico y la valoración socioeconómica de la propiedad agraria en Antequera durante el siglo XVII. Corresponde la muestra a uno de los compradores de baldíos más significativos, don Pedro de Sanvicente —quien adquiriera 1.250 fanegas y se apropiara de otras 1.000 en 1640—, cronológicamente situada en 1680. Las características del predio serían:

Superficie: 18 aranzadas de viña, 19 as. olivar, 15 as. viña-olivar (junto con un pedazo de huerta), 43 fanegas de tierra calma (un pedazo de riego) y 140 fs. barbecho.

Ganado: 16 bueyes de arado, 20 cabezas ganado caballar y 13 asnos.

Uillaje: 16 arados, 7 ubias de arado, 1 artesa, 2 azadones y 4 escardillas ³¹.

En cuanto a la productividad (datos en fanegas):

<i>Superficie (barbecho)</i>	SEMENTERA		PRODUCCION	
	<i>Trigo</i>	<i>Cebada</i>	<i>Trigo</i>	<i>Cebada</i>
114	95,25	45	375,5	81
26	32	—	49	—

³¹ Elaboración a partir de los datos recogidos en el leg. 23, Secc. Propios, AHMA. Conviene recordar que el término de Antequera, superando ampliamente las 100.000 fanegas, se dividía, en 1670, en 257 cortijos, 152 caserías y 178 huertas; que éstas ocupaban 838 aranzadas, las de viña eran 3.947, y 5.461 as. ocupadas por olivar. F. CABRERA, *op. cit.*

Evidentemente será la contabilidad agraria la que ponga de manifiesto las consideraciones más interesantes. Siendo la relación simplificada de ingresos y gastos la siguiente:

Ingresos

Cosecha de trigo:	406,5 fs. (más 196 de la cosecha anterior); se venden 262 a 18 rs/fs. = 4.720 rs.
Cosecha cebada:	365 fs. (junto con las que quedaron de la cosecha anterior); se venden 325 a 9 rs/fs. = 2.925 rs.
Cosecha aceite:	314 fs. aceituna = 145 arrobas aceite; se venden 126 arrobas a 18-19 rs/as. = 2.314 rs.
Mosto:	100 arrobas; no se venden, quedan para consumo interno.
Uvas verdeadas:	a 8 ms. la libra = 3.253 rs.
Renta de las huertas arrendadas:	600 rs.
Bueyes vendidos:	800 rs.

TOTAL DE REALES INGRESADOS: 14.612.

Gastos

LABORES AGRICOLAS

	Cereal	Olivar	Viña	Otras	Total	%
Salarios	5.020	1.464	6.911	1.946	15.345	66,92
Sementera	3.285	—	—	—	3.285	14,33
Utillaje	339	—	235	—	574	2,50
Ganado	308	270	198	—	776	3,38
Otros	922,5	—	210	1.818	2.950,5	12,87
TOTAL	9.878,5 43,08	1.734 7,56	7.554 32,94	3.764 16,41	22.930,5	100 %

Los datos recogidos en estos cuadros y las conclusiones que de los mismos se deducen responden a un régimen de explotación directo, que no todos los compradores de baldíos mantienen. Por ello deviene pertinente el análisis, cuando menos la referencia, a la rentabilidad de un régimen de explotación indirecto. Las 397 fanegas que compusiera, en el partido de Guadalmedina, Cristóbal García Palomo fueron arrendadas por su viuda en 500 ducados de renta anual; considerando que las compuso a 10 ducados la fanega, con ocho años de plazo —si bien por auto de 9-V-1636 se reducen los plazos a cuatro años, con entrega inicial del 5 por 100 del valor total—, y que cesó en el pago de los plazos estipulados al iniciar la ciudad el pleito de restitución, durante es-

tos catorce años que dura tal pleito tiene un provecho de más de 5.000 ducados, habiendo hecho efectivo únicamente el 5 por 100 del valor total, 150 ducados.

La coincidencia de las técnicas de cultivo de los compradores de baldíos con el resto de propietarios-labradores no implica la total ausencia de transformaciones agrarias, y cuando éstas se producen van a responder a las planteadas por la Compañía de Jesús en las 2.211 fanegas que compusiera con dos Luis Gudiel:

- 1.^a Eliminación total de la utilización ganadera (se llega, incluso, a la quema de rastrojos).
- 2.^a Eliminación del arbolado de aprovechamiento ganadero y maderil, dándose una renovación del arbolado frutal.
- 3.^a Auge del policultivo; se potencia la vid y ol olivo, entre otros, junto a los tradicionales y preeminentes cereales y leguminosas.
- 4.^a Incipientes ejemplos de un cultivo intensivo, en base al regadío.

Estos comportamientos económicos, que no se reducen exclusivamente a este caso, no hacen más que corroborar la opinión de distintos autores sobre ese «moderno espíritu empresarial» que empezaba a manifestarse en la agricultura andaluza, y para cuyo desarrollo resultó una ocasión óptima la venta de baldíos.

4. *Pleitos de restitución y funcionalidad de los baldíos en las haciendas municipales*

Coincidiendo el desarrollo de la venta de baldíos en los reinos de Granada y Sevilla y en la ciudad tomada como modelo, se manifiesta como elemento diferenciador la resolución del pleito que los cabildos plantean a fin de obtener la restitución de estas propiedades.

Sevilla ni Jerez consiguen tal devolución; Córdoba sólo parcialmente; en tanto que a Antequera se le restituye absolutamente. ¿Por qué? Unos factores intrínsecos explican, que no justifican, tal resolución; las razones alegadas por la ciudad son absolutamente irrefutables. Pero serán elementos extrínsecos al desarrollo estrictamente jurídico del pleito los que nos faciliten una explicación más próxima a la realidad. Pues existe un contexto económico, crítico, por cierto, que afecta tanto a la hacienda real como a la local, y un contexto socio-político —la lucha por el control de los órganos de poder local—, donde localizar las razones últimas de tal resolución.

Las alegaciones presentadas por la ciudad fueron:

1.^a Ante el carácter inicial de la comisión encargada a don Luis Gudiel y Peralta, en la que se indicaba:

«... saved que de mucho tiempo a esta parte se me a dado noti-
cia que todo el Reyno de Granada y en particular en las çiudades
de Antequera, Velez, Loxa, Vaça y Almullecar y villas de Motril,
Salobreña (...) y algunas otras ciudades, villas y lugares del dicho
Reyno, se an entrado muchas personas particulares y algunos con-
cejos y comunidades en muy grandes cantidades de tierras, dehe-
sas y montes, tierras de pan llevar, viñas, morales, haçiendas y
posesiones que fueron de los moriscos espelidos del dho. Rey-
no...»³²;

la ciudad recuerda al Consejo la no existencia de propiedades moriscas, amén de la escasa presencia y menor incidencia de éstos en Antequera. Evidentemente, el análisis de los legajos de documentación morisca existente en el Archivo así lo corrobora y, en base a tal documentación, considero que no es entre los propietarios donde se localizan los escasos moriscos antequeranos, sino entre los criados y siervos. Por otra parte, esta documentación se refiere, fundamentalmente, a los moriscos procedentes, en especial, de la serranía de Ronda, en tránsito hacia los puertos de embarque.

2.^a Ante la afirmación de Felipe IV sobre la propiedad de estas tierras, de las que indica pertenecerle

«... por justos y derechos títulos y en particular por el de la con-
quista que los señores Reyes Católicos, mis antecesores hicieron
cuando ganaron de los moros aquel reyno de Granada...»³³;

alega don Fernando Mansilla —caballero de Santiago, regidor perpetuo de la ciudad y su comisionado en la Corte— que la conquista de Antequera se realizara en 1410, y no por los Reyes Católicos.

3.^a Antequera, por la fecha de su conquista y su localización geográfica, nunca perteneció al reino de Granada. Para confirmarlo se remiten documentos que demuestran la inclusión de la ciudad en el reparto de Millones del reino de Sevilla.

Tal alegación es aceptada por el Consejo, si bien aclaran que, dada la am-

³² AHMA, Secc. Arbitrios, leg. 6, doc. 6.

³³ *Ibidem*.

plia proyección geográfica del proceso, es indiferente que componga las tierras el juez comisionado del reino de Granada o de cualquier otro ³⁴.

Confirmación histórica de la teoría del profesor Domínguez Ortiz sobre la función «bisagra» que Antequera desempeñó en Andalucía será, por una parte, lo anteriormente expuesto y, por otra, las protestas del corregidor de la ciudad ante don Juan Padilla, de la Audiencia de Sevilla, sobre la no viabilidad de la comisión encargada por ésta al corregidor de Cañete la Real para la formación de las cuentas de Arbitrios de Antequera en 1654, «dada su pertenencia al Reino de Granada» (*sic*).

4.^a Ante la confirmación de no existir bienes de moriscos, el Consejo afirma que éstos no son sino una parte del objeto de las ventas: las tierras realengas. Pero, como se deduce del Repartimiento de Alonso Serrano de 1489-96 y, fundamentalmente, de la rectificación que del mismo hiciera el licenciado Junco de Posada —juez de la comisión de composición de tierras realengas en la gran venta de baldíos de la segunda mitad del siglo XVI—, no existe tierra realenga alguna, como se hace constar en real cédula de 9-III-1586 y como el mismo Junco de Posada certifica durante el citado pleito ³⁵.

5.^a Protesta la ciudad de que, siendo el mandato de composición para tierras realengas, se vendieren baldíos. Respondiendo el Consejo que la «diferencia era verbal respecto que todos los términos del reino eran de una calidad» ³⁶. En realidad, todas las tierras vendidas son de propiedad concejil, constando como tales en las cuentas de Propios y Arbitrios de estos años.

Este pleito, que se inicia en 1636, culmina en la sesión del Cabildo de 23 de junio de 1647, al recibir la carta ejecutoria del Consejo restituyendo todos los predios enajenados ³⁷.

¿Cuáles son las razones últimas de tal resolución? Señalaba anteriormente cómo existe una oligarquía que acapara los órganos municipales de poder y que —y ello es clave— saben utilizarlo. Y en esta utilización óptima juegan un papel importante baldíos, en particular, y la propiedad concejil en general. El proceso de concentración agraria que a lo largo de este período se desarrolla posibilita la conformación de una base económica sobre la que fundamentar los títulos nobiliarios que, desde finales del siglo XVII, van obteniendo/comprando representantes de esta oligarquía. Tiene mucho que ver con un problema que ya en 1530 mereciera la atención de Carlos V —al aprobar las Orde-

³⁴ Amén de que, y como señala Pablo DE OLAVIDE (*op. cit.*, p. 436), el citado don Luis Gudiel compuso también tierras del reino de Sevilla.

³⁵ AHN, Secc. Diversos, Concejos y ciudades, leg. 37; AHMA, Secc. Reales Cédulas, leg. 8.

³⁶ AHMA, Secc. Arbitrios, leg. 6, doc. 7.

³⁷ AHMA, Secc. Actas Capitulares, leg. 29.

nanzas de la ciudad—, y que en 1592 fuera tema de una real provisión en la que se indicaba cómo «regidores y hombres poderosos de la ciudad se habían entrado, rompido y desmontado muchos pedaços de tierra que alindaban con sus haciendas»³⁸. En una palabra, para esta oligarquía no era necesario el proceso de ventas de baldíos, pues no existen demasiados impedimentos para su usurpación. Y, sin llegar a tal extremo, tenemos la confirmación de Carlos V, en 1546, del privilegio de los hijosdalgo de Antequera referente al aprovechamiento mancomunado de las dehesas de la ciudad para sus ganados³⁹.

Las luchas políticas que marcan la vida municipal de este período tendrán una manifiesta raíz económica. A tenor de lo indicado por diferentes autores, cabe diferenciar, en la época estudiada, dos actitudes económicas fundamentales. La primera de ellas coincide con las pautas de comportamiento económico tradicionales, caracterizadas por un cultivo extensivo y un aprovechamiento preferente de tipo ganadero. Sus defensores acérrimos ocupan los órganos de poder local.

La segunda actitud se caracteriza, si no por un cultivo intensivo, sí por una potenciación de la superficie cultivada y, en concatenación con la cual, un incremento de la producción, e incluso de la productividad; el cercamiento de los predios y la disminución de la superficie destinada a la ganadería. Entre los partidarios de tal actitud económica cabe destacar pequeños hidalgos —un escaso número de ellos detentando pequeñas parcelas del poder local—, algunos representantes eclesiásticos y los burgueses.

La adecuada utilización del poder local por la oligarquía conllevó el triunfo político de su opción económica.

Pero la imperiosa necesidad de numerario por parte de la hacienda real hacía que, en última instancia, ante el Consejo prevalecieran las razones estrictamente económicas⁴⁰. Por ello, si bien los 11.500 ducados que la ciudad ofrece a cambio de la restitución de sus propiedades no compensa lo obtenido por la hacienda real en la venta de éstas, tal cantidad es ampliamente superada por la suma de estos ducados a los 186.000 entregados en pago del privilegio de libertad de alcabalas, en 1616, y los 40.000 ducados de 1629 de concesión graciosa. Todo lo cual asciende a 88.825.000 maravedíes, cantidad muy superior a la ingresada por las ventas de baldíos y que debiera obtenerse a través de censos impuestos sobre sus tierras arbitradas. Todas ellas vendidas en la composición de don Luis Gudiel.

De tal manera, la restitución de los baldíos, considerando su importancia en las economías municipales, se manifiesta como condición *sine qua non* para el mantenimiento del pago de los censos y, en última instancia, de los ingresos

³⁸ AHMA, Secc. Reales Cédulas, leg. 6, doc. 13.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ J. GÓMEZ MENDOZA, *op. cit.*, p. 507.

de la real hacienda. Inmediatamente después de la restitución de sus baldíos, el Consejo obtiene de la ciudad un nuevo servicio por un total de 20.000 ducados.

La base de todo análisis de la funcionalidad económica de los baldíos en las haciendas locales radica en esos presupuestos municipales, que en el Antiguo Régimen vendrán representados por las cuentas de Propios y Arbitrios. De mayor significación al considerar la escasa relevancia del repartimiento vecinal en la población tomada como modelo.

Por ello, un análisis comparativo de las cuentas de Propios a lo largo del siglo XVII cobra especial importancia para valorar lo que implicó, en la hacienda local, esa indiscriminada venta de baldíos, que pudo llegar a constituir, de confirmarse, una auténtica desamortización civil.

Cuentas de Propios, 1630-1690

(Base 100 = datos 1630: ingresos, 3.247.561 ms.; gastos, 3.246.790 ms.)

	1630	1636	1640	1644	1650	1654	1660	1664	1670	1675	1680	1691
Ingresos	100	89	54	63	135	136	147	156	190	236	204	304
Gastos	100	91	54	63	135	142	137	156	189	241	182	293

Evidentemente es de 1639 a 1642 cuando se alcanza el *culmen* de la incidencia negativa de la venta de los baldíos. Se mantiene el proceso de venta y aún no se ha conseguido carta ejecutoria concediendo restitución de los predios vendidos. Es el momento en que, en el presupuesto municipal, los ingresos por estancos y rentas han de paliar la pérdida de los maravedíes obtenidos por arrendamiento de las tierras. Cuando, normalmente, los ingresos de Propios de carácter agrícola representan porcentajes superiores al 60 por 100 —llegando incluso al 78,99 en las cuentas correspondientes al 1765, a las que concedo la mayor fiabilidad de todas las recogidas en el Antiguo Régimen—, en 1641, contando el producto anual del arrendamiento de las tierras junto con el pago de las deudas antiguas, por el mismo concepto no se alcanza el 30 por 100.

En tanto que en los Arbitrios se mantiene el porcentaje de 1641 en las cuentas correspondientes a 1765, aunque no el valor cuantitativo de la propiedad rústica arbitrada, triplicada en ese siglo de diferencia. Igualmente, la proporción de Propios y Arbitrios sobre el total de ingresos está sujeta a la incidencia de la pérdida de los baldíos. De tal manera que si en 1765 el 52,90 por 100 de los ingresos corresponden a Propios, en 1641 los Arbitrios repre-

sentan el 70,29. Y es que esa indeterminación conceptual a que hacía referencia anteriormente coadyuvó a la almoneda de toda la propiedad rústica de carácter público.

*Cuentas comparadas de Arbitrios, 1639-54, y Propios y Arbitrios de 1641*⁴¹

Cargo	Arbitrios 1639-1654	Propios 1641	Arbitrios 1641
Arrendamiento tierras	28,41	23,65	19,39
Deudas arrendamiento tierras	24,92	—	9,55
Estancos y rentas	45,28	71,33	53,94
Deudas estancos y rentas	—	—	16,90
Censos y otros	1,39	5,02	3,96
TOTAL	100 % 91.934.232 ms.	100 % 4.295.254 ms.	100 % 1.815.566 ms.

Data	Arbitrios 1639-1654	Propios 1641	Arbitrios 1641
Censos	68,57	77,17	7,33
Salarios	6,30	15,87	16,41
Pleitos (baldíos)	2,55	1,05	12,46
Deudas no cobradas	16,76	—	22,76
Obras públicas y otros	5,82	5,91	41,04
TOTAL	100 % 93.033.418 ms.	100 % 5.278.194 ms.	100 % 1.783.096 ms.

Sin negar la trascendencia de la venta de baldíos de mediados del siglo XVII, deviene pertinente su inserción en un contexto determinado por las crecientes dificultades de las haciendas locales andaluzas, cuyos más claros precedentes se remontan al siglo XVI, con las rectificaciones de los repartimientos y la composición y venta de grandes cantidades de tierras supuestamente realengas, ante la imperiosa necesidad de potenciar los ingresos de la hacienda real. Utilizando a tal fin los donativos que las haciendas municipales hacen a cambio de cualquier privilegio. Y será exactamente este problema el que determine la crisis que durante todo el Antiguo Régimen afecta a las haciendas locales. Puede servir como corroboración de tal hipótesis el donativo de 186.000 ducados que realizó Antequera en 1616 a cambio de la franquicia de alcabalas —al igual que ocurre, en la misma época, en Morón, y con idénticas conse-

⁴¹ Elaboración en base a los datos recogidos en leg. 4 de la Secc. Propios y legs. 3 y 4 de la Secc. Arbitrios, AHMA.

cuencias⁴²; desde este momento, y considerando el nuevo donativo de 40.000 ducados en 1629 y de 11.500 en 1642 —a cambio de la restitución de los baldíos vendidos—, no existe posibilidad alguna de recuperación para las haciendas locales. A mediados del siglo XVIII sufre secuestro de bienes para el pago de los réditos y, en 1826, se redimen estos censos a cambio, precisamente, de baldíos⁴³; pero de poco va a servir tal liberación, por cuanto la almoneda definitiva de la propiedad concejil tiene una fecha inmediata.

Quisiera concluir sintetizando las diferentes connotaciones que presentan los baldíos en las economías municipales del Antiguo Régimen:

1.^a Hacendística:

- Directa: como fuente de ingresos.
- Indirecta: como bienes patrimoniales, sirven de garantía para sucesivos empréstitos.

2.^a Agraria:

- Para los grandes propietarios son las tierras idóneas para un arrendamiento de renta reducida, una adquisición cuasi gratuita o, sencillamente, para usurparlas. Constituye uno de los pilares del proceso de concentración agraria que marca este período.
- Para los campesinos es, si cabe, la única posibilidad de obtener un pequeño trozo de tierra propia. En tal sentido, los repartimientos del siglo XVIII, en línea con lo indicado por Jovellanos⁴⁴, y el de 1822, por ejemplo.

3.^a Político-social:

- Constituyendo atracción prioritaria de los poderosos, eran al tiempo elemento compensatorio que solventaba las luchas oligárquicas.
- A través de sus repartimientos, se utilizan para eliminar la conflictividad social de jornaleros y campesinos.

En resumen, siendo importante la trascendencia económica de los baldíos en las haciendas locales, las connotaciones sociopolíticas que presentan los convierten en elemento básico para el análisis de los comportamientos, y no tan sólo económico-agrarios, del Antiguo Régimen.

⁴² A. M. BERNAL, *op. cit.*, Madrid, 1979, p. 289.

⁴³ AHMA, Secc. Censos, leg. 10.

⁴⁴ G. M. JOVELLANOS, *op. cit.*, p. 41.

LA PESCA EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII. UNA APROXIMACION CUANTITATIVA (1758-1765)

ROBERTO FERNANDEZ DIAZ
y CARLOS MARTINEZ SHAW
Universidad de Barcelona

La pesca es, sin duda, un sector olvidado por las investigaciones sobre la historia económica de la España moderna. Sin embargo, su importancia era relevante tanto desde el punto de vista de la movilización de capitales (barcos y equipos) como en los aspectos de ocupación de la población activa (con porcentajes nada desdeñables en la periferia peninsular), de vertebración de las economías del litoral español o de producción de alimentos imprescindibles para el consumo del conjunto de la población de un país católico. En el siglo XVIII, la incapacidad para una comercialización adecuada de los excedentes locales implicaba una dependencia para el abastecimiento de buena parte del país respecto de los mercantes extranjeros del Atlántico (singularmente de los barcos ingleses); situación que se quebraría en parte gracias a un proceso de reconversión del sector, mediante la introducción de la pesca de arrastre en gran escala, la inyección de capitales para la construcción de barcos y de otras instalaciones, así como para el establecimiento de ambiciosas compañías lejos de los puertos de atraque, la organización de redes de distribución de las capturas por todo el litoral y la implantación de una industria salazonera que permitía la conservación de la pesca.

Interesados por este tema de la situación del sector en el siglo XVIII y su ulterior transformación durante dicha centuria (junto a otros problemas implicados, como son la organización del trabajo dentro y fuera de los gremios de mar, la controversia conservacionista sobre los efectos de la expansión de la pesca de arrastre, las luchas antiseñoriales mantenidas contra las exigencias de la imposición feudal, la confrontación entre los diversos sistemas de pesca o el proceso de proletarización de los marineros ante el avance de los «fomentadores» capitalistas), el presente trabajo pretende esencialmente la configuración de un mapa pesquero de la España de la segunda mitad del siglo XVIII, con la expresión numérica de las embarcaciones y tripulaciones comprometidas en este ramo esencial de la economía marítima española.

1. Las fuentes y la metodología

A menos que se produzcan sorpresas, la principal fuente de información cuantitativa sobre las actividades relacionadas con el mar en el siglo XVIII la constituye una documentación establecida con fines que nada tienen que ver con la economía. Se trata de los recuentos de la gente de mar y las embarcaciones que fueron realizados por la administración borbónica en atención a las necesidades de la Armada, es decir, con un interés de índole militar.

En efecto, la necesidad de aumentar los efectivos materiales y humanos y de llevar a cabo una modernización de la flota de guerra española fue el motivo impulsor de la creación de la Matrícula de Mar, a través de una ordenanza publicada el 1 de enero de 1751.

Sin que sea nuestro ánimo esbozar aquí un estudio de la institución, de la que ya se han ocupado otros autores¹, nos limitaremos a adelantar algunas precisiones en relación a su utilización como fuente para la historia económica de la pesca española. La Matrícula de Marina es el registro del conjunto de la población dedicada a actividades relacionadas con el mar (navegantes: marinos y pescadores; constructores: carpinteros de ribera y calafates), con el fin de tener disponibles tripulaciones y equipos técnicos al ritmo de las necesidades de la Armada. La Matrícula dependía, en última instancia, de la Secretaría de Marina y, en cada localidad, de un ministro de Marina, un funcionario civil durante casi todo el siglo XVIII, que sería sustituido por un militar al cierre de la centuria. Dicha Matrícula, levantada por primera vez entre 1752 y 1756, fue revisada periódicamente mediante inspecciones o revistas efectuadas por un alto funcionario nombrado para la ocasión, quien elevaba a la Secretaría de Marina un Estado General de la marinería, gente de maestranza y embarcaciones existentes en cada Departamento marítimo, amén de algunos otros documentos (resúmenes generales, informes, estados parciales y reglamentos) que constituyen un importante material para la reconstrucción de la vida marítima española de la época. Tales revistas se realizaron en cada uno de los tres departamentos (Cartagena, Cádiz y El Ferrol), que se dividían, a su vez, en nueve provincias cada uno: la suma de los tres Estados Generales representaba, por tanto, un recuento global de los barcos y la gente de mar existentes en el momento de cada inspección².

Los recuentos de la segunda mitad del siglo XVIII fueron seis: el de 1752-

¹ F. J. DE SALAS, *Historia de la matrícula de mar y examen de varios sistemas de reclutamiento marítimo*, Madrid, 1879; G. DESDEVIZES DU DEZERT, *L'Espagne de L'Ancien Régime. Les institutions*, París, 1899; A. O'DOGHERTY, «La Matrícula de Mar en el reinado de Carlos III», *Anuario de Estudios Americanos*, t. IX (1952), pp. 347-370.

² Al gozar las dos provincias vascas de Vizcaya y Guipúzcoa de un régimen especial, son insuficientes las referencias a las mismas en nuestra documentación, siendo ésta la causa de su obligada ausencia de los cuadros y mapas incluidos en nuestro trabajo.

1756, 1758-1765, 1772-1773, 1786, 1796 y 1799. Ahora bien, no existe uniformidad absoluta en los datos que ofrecen cada una de las revistas, hecho que dificulta la comparación de los distintos Estados y, por tanto, el análisis de la evolución temporal. En cualquier caso, como nuestro primer propósito ha sido el de ofrecer una muestra cuantitativa bien establecida, fiable y sólida, que sirva de punto de partida y referencia para ulteriores análisis y confrontaciones, hemos elegido el grupo de revistas que presenta más seguridad y mayor número de datos. Así, hemos descartado las revistas de 1772-1773 y 1786, que ofrecen sólo un resumen de los totales provinciales, y las revistas de 1796 y 1799, que efectúan agrupaciones de pueblos para presentar los datos y, además, son muy tardías. Entre las dos únicas que resultan completas (con expresión de marinos y barcos pueblo a pueblo y provincia a provincia), la de 1752-1756 (El Ferrol, 1752-1753; Cartagena, 1753-1755, y Cádiz, 1754-1756) presenta mayores vacilaciones y, por tanto, mayor confusión en la exposición de sus resultados. Por el contrario, la revista de 1758-1765 sólo presenta como inconveniente su escalonamiento a lo largo de siete años (El Ferrol, 1758-1759; Cádiz, 1763-1765; Cartagena, 1764-1765), pero sus resultados son seguros, rotundos y de fácil utilización. Por ello, salvando el obstáculo de comparar datos con un desfase cronológico de varios años (defecto que se obvia por el carácter aproximado que habrán de presentar nuestros análisis en razón de las carencias de nuestra documentación, que señalaremos seguidamente), hemos creído preferible elegir la segunda de las revistas, efectuada dentro de la primera década del reinado de Carlos III.

Ciñéndonos, pues, a nuestros datos de 1758-1765, hemos de señalar algunas características e insuficiencias de los documentos manejados, a fin de delimitar el alcance de nuestros cuadros y de nuestras afirmaciones³.

Primero, en el momento de establecer las cifras esenciales de la pesca española, los datos que más nos interesan son la evaluación de la gente de mar dedicada a esta actividad y el tonelaje de la flota pesquera. Por ello, podría resultar algo desmoralizador decir que no tenemos relación directa de ninguno de estos extremos. En el caso de la flota, conocemos con exactitud (a excepción de las provincias de El Ferrol y Pontevedra, en las que sólo podemos acercarnos aproximativamente al total) el número de unidades que se dedican a la pesca: a partir de este punto, sólo las fuentes indirectas nos permitirán adelantar hipótesis plausibles sobre el tonelaje global. Por su parte, los pescadores se registran indiferenciadamente junto con el conjunto de los marineros, por lo que únicamente un procedimiento indirecto nos permite evaluar su número: expresado brevemente, hemos multiplicado la cifra de barcos por la proporción

³ La documentación que sirve de base a nuestro estudio se halla esencialmente en el Archivo General de Simancas, Secretaría de Marina, leg. 300.

media de pescadores por nave obtenida en aquellas localidades donde la flota no ejerce actividades mercantes ⁴.

Segundo, hemos tropezado con algunas dificultades a la hora de confrontar las revistas de los tres departamentos. Efectivamente, los criterios para agrupar a la gente de mar y las embarcaciones son ligeramente discordantes. En el primer caso hemos adoptado por identificar a los «marineros de servicio» asentados en las revistas de Cádiz y El Ferrol con los «marineros útiles» del departamento de Cartagena: en una primera aproximación, como la que aquí presentamos, el problema es, por otra parte, irrelevante ⁵. Aunque también de alcance limitado, hemos de señalar, asimismo, la excepción de las provincias de El Ferrol y Pontevedra, que presentan una rúbrica de «pesca y pasaje» que deja un margen, muy pequeño por otro lado, de inexactitud. Por último, recordar la inexistencia de datos para el País Vasco.

Tercero, y último, no podemos sostener la idea de que nuestro tratamiento de los datos de la Matrícula, una vez salvadas las extrapolaciones y las dificultades ya señaladas, esté ya libre de cualquier debilidad o insuficiencia. Además de lo afirmado, debemos tener en cuenta algunas circunstancias. Así, la Matrícula resultaba un sistema de control hartamente impopular en las poblaciones costeras, que procuraban burlar sus imposiciones, tratando de dedicarse al ejercicio de actividades marítimas sin tener que pasar por el trámite de la revista, para así liberarse de las obligaciones militares decretadas por el gobierno y que resultaban la propia razón de ser de la Matrícula: tenemos numerosos testimonios de esta actitud, cuya simple enumeración nos llevaría bastante espacio ⁶. Por otra parte, la propia legislación (como toda norma del Antiguo Régimen) contemplaba diversas situaciones excepcionales: el embar-

⁴ El proceso seguido es algo más complicado. Hemos obtenido de estos pueblos exclusivamente pesqueros las siguientes medias por departamento: Cartagena, 4,53 pescadores/barco; Cádiz, 4,03; El Ferrol, 3,35. Las cifras parecen justificarse por el superior tonelaje medio de la flota pesquera del Mediterráneo, donde ya actúan las grandes jávegas y barcas de bous mallorquinas, catalanas y valencianas. Estas cifras coinciden, en general, con los textos de los contemporáneos, que señalaban un mínimo de tres o cuatro personas en las embarcaciones más pequeñas. Tratando de obtener una mayor ponderación de nuestro multiplicador, hemos hecho el cálculo por regiones, pero en este sentido las discordancias eran excesivas (no parece lógico aceptar una media de 6,71 pescadores/barco en Murcia y sólo 2,97 en Cataluña). Así, pues, hemos optado por la solución de aplicar a cada región un multiplicador que resulta de la media entre el de la región y el del departamento: los resultados obtenidos nos parecen satisfactorios. Con todo, hay que tener en cuenta que este multiplicador depende en cada región de los sistemas de pesca que en ella resulten predominantes, pues cada uno de ellos emplea un determinado número de pescadores.

⁵ Mayores dificultades se presentarían en el momento de valorar el total de los marinos de cada categoría: paradero conocido o desconocido, desertores, patronos, embarcados en la Carrera de Indias, etc.

⁶ Cfr., por ejemplo, la *Relación de los individuos que de la lista de hábiles de esta matrícula de Arenys se ausentaron de su domicilio*, confeccionada por Manuel Zalvide, comisario de Marina, con ocasión de la revista de 1773 (AGS, Secretaría de Marina, 300).

que de individuos no matriculados en caso de necesidad; la aceptación de tripulaciones no inscritas en las naves destinadas al comercio colonial; el régimen especial de algunas regiones (Vizcaya y Guipúzcoa, en el Cantábrico; el vizcondado de Cabrera y Bas extendido de Arenys a Blanes, en Cataluña). Y, finalmente, el capítulo de las violaciones sistemáticas de la normativa, favorecidas por la connivencia entre funcionarios y marineros o la falta de registros solventes a causa de la desidia o la voluntad deliberada de ministros y administrados, que hacía exclamar a don Pascual de Bonanza, en 1796: «la mayor parte de estas matrículas es figurada»⁷. En definitiva, toda esta casuística nos determinar, a considerarlas como el mínimo estimado de la población pesquera española⁸.

2. La flota pesquera española: distribución geográfica

Descartando en esta primera aproximación un cálculo más ajustado que pudiera dar cuenta del tonelaje, la distribución de las unidades de la flota pesquera española en los años sesenta del siglo XVIII se operaba de la manera que aparece indicada en los cuadros 1, 2 y 3 (Departamentos, Regiones y Provincias) y en el apéndice final (pueblo a pueblo)⁹.

CUADRO 1
Barcos de pesca (1758-1765)
(Departamentos)

	Número	% total
Cartagena	2.147	44,41
Cádiz	516	10,67
El Ferrol	2.171	44,91
	4.834	99,99

⁷ Apud. J. LLOVET, *La Matricula de Mar i la provincia de Marina de Mataró al segle XVIII*, Mataró, 1980, p. 103.

⁸ A esta valoración concurre el dato ya comentado de las bajas proporciones entre pescadores y barcas en todos los departamentos. Una media global en torno a los cuatro tripulantes corresponde a una flota pesquera de unidades sumamente reducidas, en las que apenas pudieran hallarse representadas las barcas de jávega o los bous, cuya dotación puede llegar a multiplicar varias veces aquella cifra.

⁹ Hemos tomado como base para el cálculo de la población activa, así como para las agrupaciones y comparaciones de datos globales, la división del litoral según las regiones históricas (que se corresponden con las actuales comunidades autónomas). El departamento constituía una unidad excesivamente dilatada (que hubiera ofrecido unos resultados operativos), mientras la provincia parecía una demarcación demasiado reducida (que hubiera roto

CUADRO 2

Barcos de pesca (1758-1765)
(Regiones)

	Número	% total
Galicia	1.798	37,19
Cataluña	1.293	26,74
Andalucía	559	11,56
País Valenciano	438	9,06
Asturias	208	4,30
Mallorca-Ibiza	249	5,15
Santander	165	3,41
Murcia	124	2,56
	4.834	99,97

FUENTE: AGS, Marina, leg. 300.

CUADRO 3

Barcos de pesca (1758-1765)
(Provincias marítimas)

Sant Feliu	407	Tarifa	50
Mataró	486	Cádiz	8
Barcelona	245	Sanlúcar	41
Tarragona	155	Ayamonte	186
Palma	249	Santander	165
Valencia	287	Ribadesella	45
Alicante	195	Avilés	163
Cartagena	124	Vivero	76
Vera	43	El Ferrol	228
Almería	79	La Coruña	264
Motril	44	Pontevedra	1.230
Málaga	108		

El primer dato a reseñar es el relativo equilibrio entre el Atlántico y el Mediterráneo, que a primera vista pudiera resultar sorprendente. Dada la superior oferta pesquera atlántica, las cifras expresan el continuo desplazamiento durante el siglo XVIII de los barcos catalanes, valencianos y mallorquines hacia

la unidad de las economías regionales). La actual división pesquera de España no responde a la realidad del siglo XVIII (faltarían datos para Canarias y el País Vasco), aunque algunos de sus conceptos nos parezcan operativos a la hora de valorar la pesca en el pasado (como la divisoria entre tres Andalucías: sudatlántica, surmediterránea y «levantina»).

las más ricas áreas de las costas andaluzas, gallegas y cantábricas¹⁰. El análisis comparativo de las distintas regiones con fachada litoral nos coloca ante la evidencia del predominio gallego como gran potencia pesquera del Setecientos, de acuerdo con un medio natural privilegiado y una tradición secular. Es de destacar, asimismo, la extraordinaria densidad de la flota catalana, que está en relación con la magnitud de su crecimiento económico a lo largo del siglo, como demuestra su superioridad sobre el conjunto valenciano y mallorquín: la pesca catalana está iniciando en estos años una expansión que habrá de alterar sustancialmente la composición del sector en etapas sucesivas. Por último, hay que resaltar las dimensiones relativamente modestas de la flota andaluza, el equilibrio asturiano y la escasa representación santanderina.

Un análisis interno de las regiones nos permite profundizar más en esta distribución geográfica, iniciando el recuento en el sector mediterráneo y en sentido Norte-Sur. El mapa pesquero de Cataluña presenta una clara divisoria entre el continuo rosario de poblaciones dedicadas a la pesca de la mitad norte y el vacío, donde resaltan un par de poblaciones con unas flotas dignas de mención, al sur de Barcelona: corresponde esta cesura a la actual división entre la región denominada de la Tramontana y el litoral catalán correspondiente al área de Levante. En la mitad norte se suceden sin solución de continuidad las densas zonas de la Costa Brava (Cadaqués, Rosas, La Escala, Bagur, Palafrugell, Sant Feliu, Blanes) y del Maresme (Calella, Sant Pol, Mataró, Vilassar, Masnou), hasta terminar en la enorme concentración barcelonesa, puerto de ataque de la sexta parte de la totalidad de la flota catalana. Por el contrario, las costas de Poniente parecen desiertas, salvo en la modesta aglomeración de Vilanova-Sitges y en la más importante de Torredembarra-Altafulla-Tarragona, con más de cien barcos.

La costa valenciana ofrece un perfil muy distinto, más fluido y discontinuo. Al norte de Valencia, la actividad pesquera carece de relieve, con dos modestos centros en Vinaroz-Benicarló y Castellón. La capital concentra cerca de la tercera parte de la flota de la región, lo que puede hallarse en relación (al igual que en el caso barcelonés) con la presencia de las barcas de arrastre, que faenan tanto en el Mediterráneo como en las costas atlánticas. El mismo perfil

¹⁰ Este desplazamiento fue señalado por todos los autores coetáneos interesados en el tema. Cfr., por ejemplo, la afirmación de E. DE LARRUGA, *Memorias...*, vol. 42, p. 314: «A mediados de este siglo [XVIII], enxambres de marineros catalanes que no cabían en su país, atraídos por la fama de las marítimas riquezas de Galicia se derramaron sobre sus costas.» Por otra parte, esta irrupción catalana en las costas andaluzas o gallegas es uno de los pocos temas de la historia pesquera española que han recibido un tratamiento detenido. Cfr., por ejemplo, para el caso gallego, el mejor conocido, A. MEIJIDE PARDO, *Contribución de los catalanes a la industria pesquera de Vigo (1750-1815)*, Madrid, 1969; L. ALONSO ALVAREZ, *Industrialización y conflictos sociales en la Galicia del Antiguo Régimen, 1750-1830*, Madrid, 1976; J. SANTOS CASTROVIEJO, «Transformaciones e conflictos na sociedade galega da Beiramar no século XVIII», *Grial*, núm. 67 (1980), pp. 22-36.

discontinuo y despejado ofrece la zona más meridional, con una gran concentración en Alicante, segunda capital pesquera, quizá por parecidos motivos a los citados en el caso de Valencia, con más de la quinta parte del total de las embarcaciones, y con dos aglomeraciones más modestas, en Denia y Villajoyosa, a uno y otro lado del cabo de la Nao.

En las Baleares, el conjunto de la actividad pesquera aparece dominado por la extraordinaria concentración de la bahía de Palma, que agrupa casi las dos terceras partes de la flota, y se prolonga por la recortada costa del norte de la isla, con una nueva, aunque mucho más reducida, aglomeración en Andraitx. La costa oriental ofrece, en acusado contraste, unas cifras muy modestas que denotan una limitada dedicación al sector. En el resto del archipiélago, salvando a Menorca, en poder de los ingleses y, por tanto, sin datos, la actividad se ciñe al puerto de Ibiza, con unos efectivos muy a la zaga de los de la capital del reino.

En la breve costa murciana, los efectivos se localizan en el Mar Menor, Mazarrón y, sobre todo, Cartagena, el gran puerto de la zona, capital del departamento marítimo y gran centro pesquero, con una flota muy considerable.

El extenso litoral andaluz presenta contrastes muy notables. En primer lugar, destaca el perfil muy diferenciado entre el área mediterránea (de mayor dedicación y mayor dispersión de los centros pesqueros) y el sector atlántico (más despejado y con fuerte concentración entre Huelva y la raya de Portugal). Así, en el Mediterráneo destaca la concentración de Vera (en la Andalucía «levantina», según la actual división del territorio pesquero y según también el criterio del XVIII, que la incluyó como provincia independiente dentro del departamento de Cartagena) y el rosario de puertos que atrajeron a sus aguas a buena parte de la flota pesquera mallorquina, catalana y valenciana: Almería, Roquetas, Dalías, Adra, Albuñol, Almuñécar, Nerja, Vélez-Málaga. En el sector malagueño, la capital, gran centro mercantil y pesquero, agrupa a la mayor parte de los barcos matriculados, dentro de una tendencia que ya hemos observado en otras regiones. Frente al área mediterránea, el Atlántico andaluz parece dominado por el comercio, con un predominio evidente de la flota mercante frente a la pesquera, que se concentra en pocos puertos: Conil, que quizá sume las embarcaciones de Zahara y Barbate, dedicadas a la pesca del atún; El Puerto de Santa María, con unos contingentes en realidad modestos, y, sobre todo, Ayamonte. En efecto, la zona comprendida entre Huelva y Ayamonte constituye el centro de gravedad de la pesca en la Andalucía atlántica: los barcos de la propia matrícula más aquellos otros que provienen de Cataluña o Valencia explotarán intensamente un área privilegiada de la sardina, sobre todo en torno a la raya portuguesa, entre Monte Gordo (en el vecino país) e Isla Cristina (la fundación de los catalanes tras el terremoto de 1755).

En el Cantábrico, la actividad pesquera se desparrama por un rosario de

pequeños pueblos a lo largo del litoral gallego, asturiano, cántabro y vasco, aunque la peculiar situación administrativa de esta zona nos impida conocer la distribución de los efectivos en las provincias marítimas de Vizcaya y Guipúzcoa, de dilatada tradición pesquera. En el resto, la flota se escalona sin solución de continuidad entre la frontera del País Vasco y la ría de Santa Marta, ya en la costa de Galicia. Las aglomeraciones más importantes se producen en Santander y Laredo, en Cantabria, y Ribadesella, Candás o Cudillero, en la zona de Asturias.

La costa gallega es la región privilegiada de la pesca española en el siglo XVIII. La mera contemplación del mapa nos ofrece la impresión de un hormiguero de embarcaciones que se afanan en la pesca desde Ribadeo a Laguardia: los puertos pesqueros se apiñan en las orillas de las rías, formando una continua aglomeración que se densifica a medida que avanzamos hacia el Sur. Efectivamente, una divisoria bien acentuada puede establecerse entre las rías altas, de menor actividad y concentración, y las rías bajas, que constituyen el verdadero paraíso de la pesca. En la primera de las áreas, la zona cantábrica, de contingentes modestos, deja paso a las dos aglomeraciones de la ría de El Ferrol (El Ferrol, La Graña, Mugardos) y la ría de Ares y Betanzos (Ares y Puente deume). Sus efectivos no resisten, sin embargo, la comparación con las flotas matriculadas en las rías bajas: Muros, Noya, Arosa (Palmeira, Requeixo, Isla de Arosa, El Grove), Pontevedra (Lourizan, Canto de la Arena, Marín, Pontevedra) y Vigo (Cangas y Redondela).

3. *La población pesquera: una estimación de sus efectivos*

Como ya hemos señalado, la Matrícula no especifica las actividades de la población marinera española, por lo que no tenemos unas cifras oficiales de los pescadores matriculados. Por otra parte, la gente de mar podía embarcarse alternativamente en la flota mercante y en la flota pesquera, según particulares circunstancias, como testimonian los pleitos entablados entre las cofradías de San Telmo y San Pedro para evitar tales trasvases. Por todo ello, las cifras que aparecen reflejadas en el cuadro 4 no constituyen más que una aproximación al número de pescadores que debían registrar cada una de las regiones españolas con fachada marítima. Sobre las mismas, en todo caso, podemos plantear algunas consideraciones.

En primer lugar, estamos seguros de que esta primera estimación supone un mínimo absoluto. Habría que añadir un porcentaje de ocultaciones que todavía no estamos en condiciones de medir, aunque podamos pensar que nunca sería inferior al 20 por 100 del total¹¹. Por otro lado, esta cifra hace referencia a

¹¹ Aunque el porcentaje es alcatorio, las repetidas quejas de los funcionarios encarga-

CUADRO 4
Número de pescadores (1758-1765)
 (Regiones)

	<i>Multiplicador</i>	<i>Pescadores</i>	<i>%</i>
Galicia	3,57	6.418	34,28
Cataluña	3,60	4.654	24,86
Andalucía	5,38	3.007	16,06
País Valenciano	4,48	1.962	10,48
Mallorca-Ibiza	2,83	588	5,57
Asturias	4,19	1.043	3,14
Murcia	2,80	462	3,12
Santander	4,72	585	2,46
	3,87	18.719	99,97

FUENTE: AGS, Marina, leg. 300.

los pescadores adultos, pero es bien sabido que cada barco había de completar obligatoriamente su dotación con uno o dos muchachos, según su tonelaje; aproximadamente con un aprendiz de pescador por cada tres tripulantes, aunque en la práctica la norma no debía cumplirse con rigor¹². En tercer lugar, creemos que las magnitudes relativas a cada región son válidas en general (ese tercio del total para Galicia o esa cuarta parte para Cataluña nos parecen incontestables), pero también pensamos que deben presentar en cada caso diferentes órdenes de desviación respecto a la realidad, que con la documentación hasta ahora disponible no nos encontramos en condiciones de calcular. Por todo ello, en torno a 1760, la población pesquera española debía contar con unos efectivos no inferiores a los 23.000 hombres, y quizá a los 25.000 si se incorporan los menores de edad dedicados al sector y efectivamente embarcados en la flota. Cifra modesta si la comparamos con el total de la población activa, pero que adquiere mucho mayor significado si la ponemos en relación con la población de las comarcas marítimas o con el conjunto de la población no campesina.

* * *

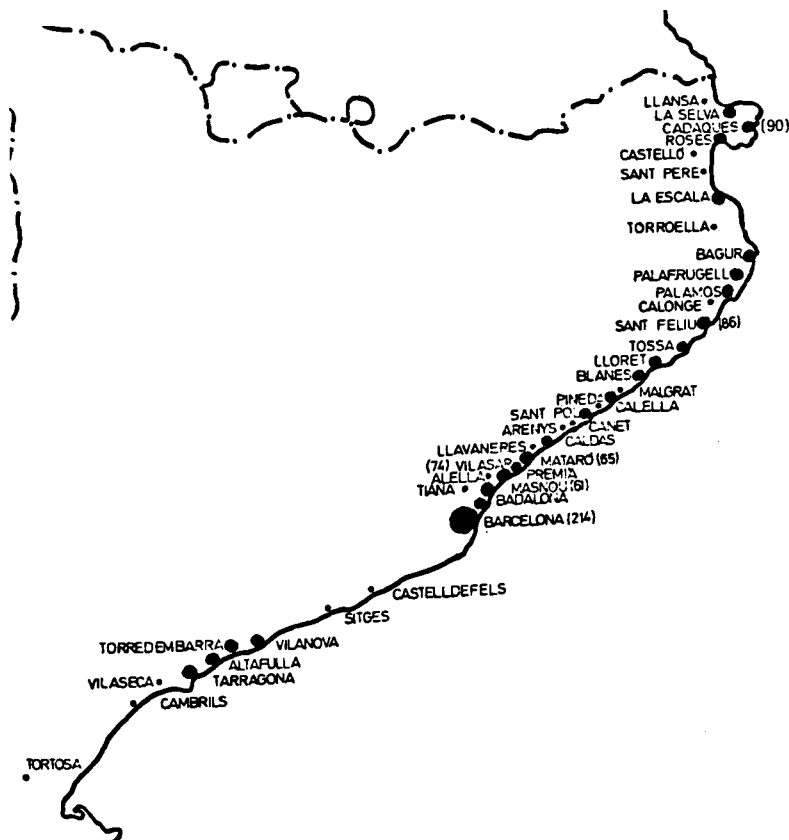
Y éstas serían las conclusiones de un trabajo que solamente ha pretendido establecer el número de unidades de la flota pesquera española, así como la estimación aproximada de la población activa inserta en el ramo a fines del segundo tercio del siglo XVIII y, en definitiva, edificar de este modo unas bases cuantitativas sólidas que puedan servir como asiento a un estudio global y profundo del sector pesquero en la España del Antiguo Régimen.

dos de la revista sobre la ocultación de la gente de mar abonan la hipótesis de que este 20 por 100 debía constituir un mínimo de los marinos que conseguían eludir la Matrícula. Cfr. J. LLOVET, *La Matrícula...*, pp. 59-108.

¹² Esta norma se recordó taxativamente en la revista de 1765, aunque, de hecho, en ninguna provincia el porcentaje de muchachos rebasase el 20 por 100 de los marinos.

APENDICE

Cataluña (Flota pesquera, 1765)



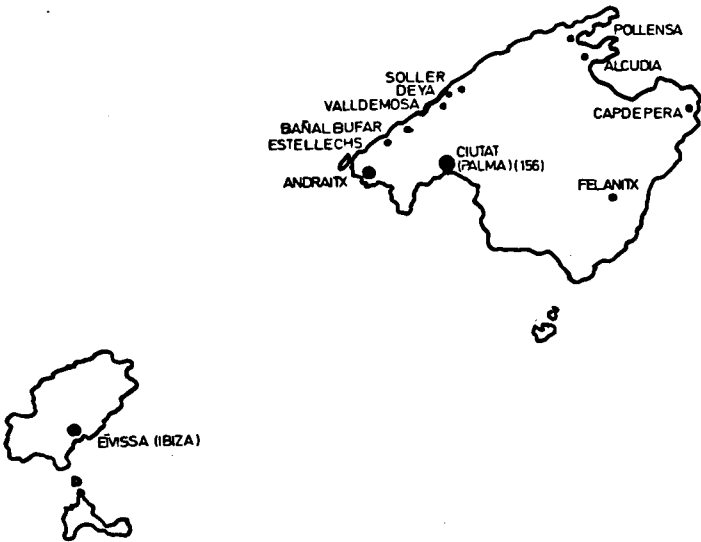
Llansá	9	Lloret	25
La Selva	25	Blanes	46
Cadaqués	36	Malgrat	10
Rosas	41	Pineda	9
Castelló	2	Calella	46
Sant Pere	2	Sant Pol	32
La Escala	49	Canet	15
Torroella	12	Arenys	7
Bagur	90	Caldas	20
Palafrugell	30	Llavaneras	6
Palamós	24	Mataró	65
Calonge	1	Vilassar	74
Sant Feliu	86	Premiá	27
Tossa	22	Masnou	61

APENDICE (Continuación)

Cataluña (Continuación)
(Flota pesquera, 1765)

Alella	7	Torredembarra	27
Tiana	14	Altatulla	48
Badalona	24	Tarragona	38
Barcelona	214	Vilaseca	1
Castelldefels	7	Cambrils	5
Sitges	7	Tortosa	0
Vilanova	29		
		TOTAL	1.293

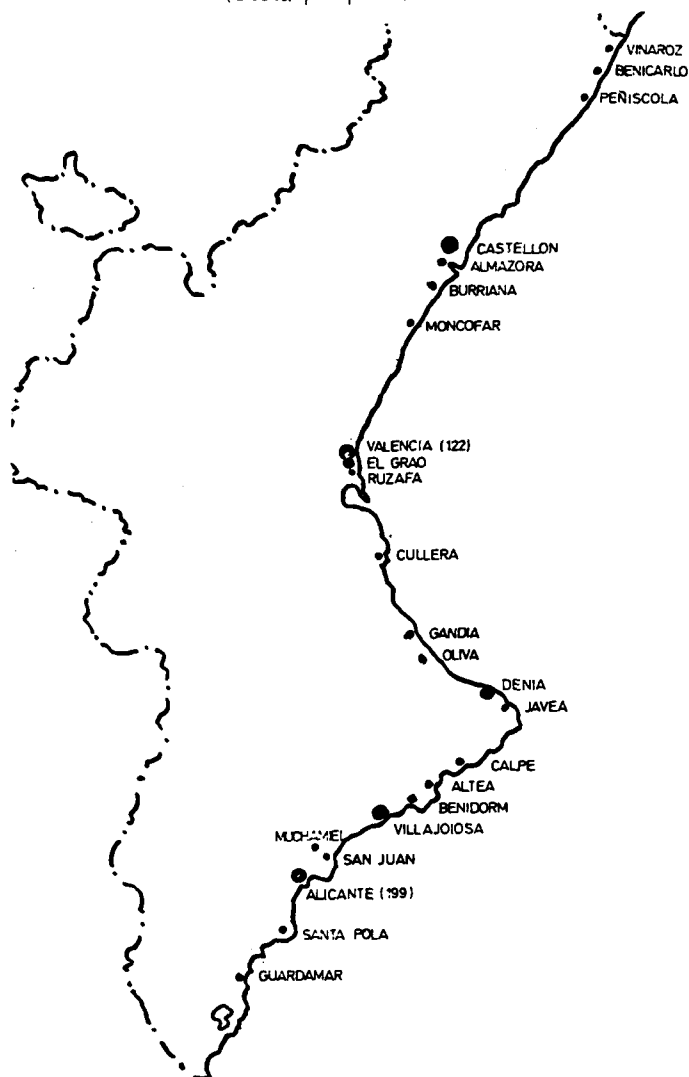
Mallorca e Ibiza
(Flota pesquera, 1765)



Palma	156	Pollensa	5
Andraitx	28	Alcudia	12
Estel·lenchs	1	Capdepera	2
Bañalbufar	8	Felanitx	3
Valldemosa	4	Ibiza	22
Deyá	3		
Sóller	5	TOTAL	249

APENDICE (Continuación)

País Valenciano
(Flota pesquera, 1765)



Vinaroz	19	Almazora	3
Benicarló	6	Burriana	3
Peñíscola	5	Moncófar	3
Castellón	23	Valencia	122

APENDICE (Continuación)

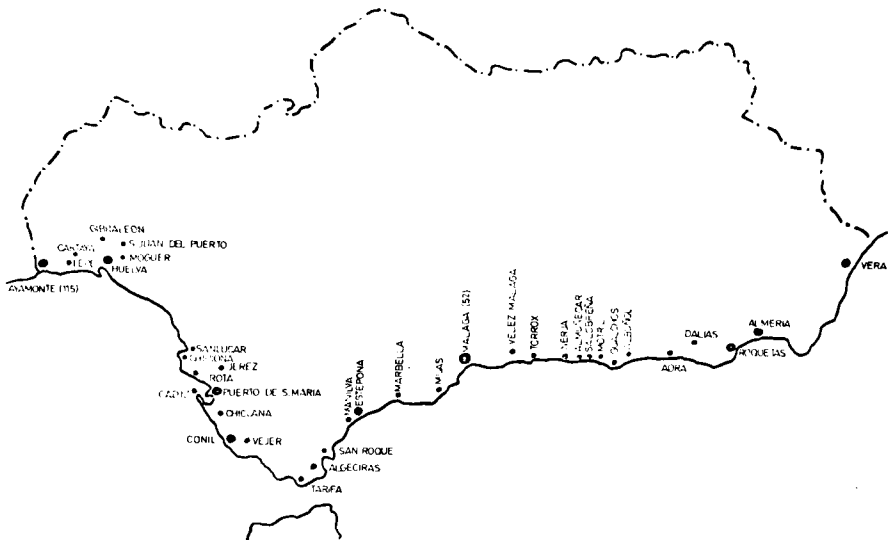
País Valenciano (Continuación)

(Flota pesquera, 1765)

El Grao	31	Altea	7
Ruzafa	4	Benidorm	3
Cullera	13	Villajoyosa	24
Gandia	8	Muchamiel	5
Miramar	3	San Juan	5
Oliva	6	Alicante	109
Denia	25	Santa Pola	2
Jávea	3	Guardamar	2
Calpe	4		
		TOTAL	438

Andalucía

(Flota pesquera, 1765)



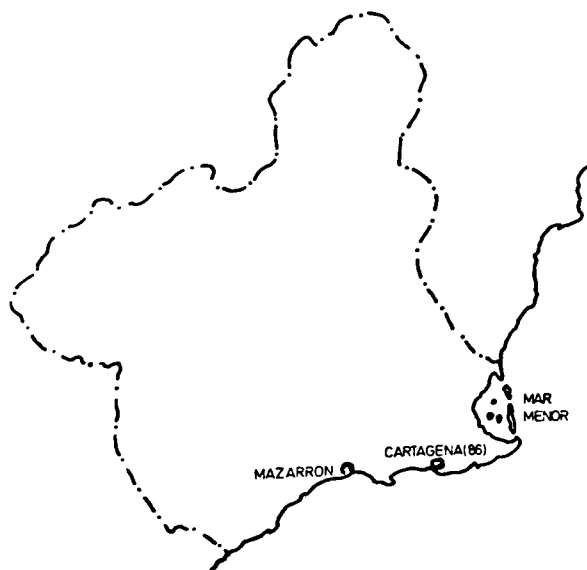
Vera	43	Almuñécar	10
Almería	24	Nerja	9
Roquetas	33	Torrox	2
Dalías	10	Vélez-Málaga	15
Adra	22	Málaga	52
Albuñol	11	Mijas	8
Gualchos	5	Marbella	7
Motril	5	Estepona	23
Salobreña	2	Manilva	3

APENDICE (Continuación)

Andalucía (Continuación) (Flota pesquera, 1765)

San Roque	2	Chipiona	3
Algeciras	6	Sanlúcar	11
Tarifa	7	Moguer	15
Véjer	7	San Juan del Puerto	1
Conil	28	Huelva	40
Cádiz	6	Gibraleón	1
Chiclana	2	Cartaya	5
Puerto de Santa María	23	Lepe	3
Jerez	2	Ayamonte	115
Rota	2		
		TOTAL	559

Murcia (Flota pesquera, 1765)

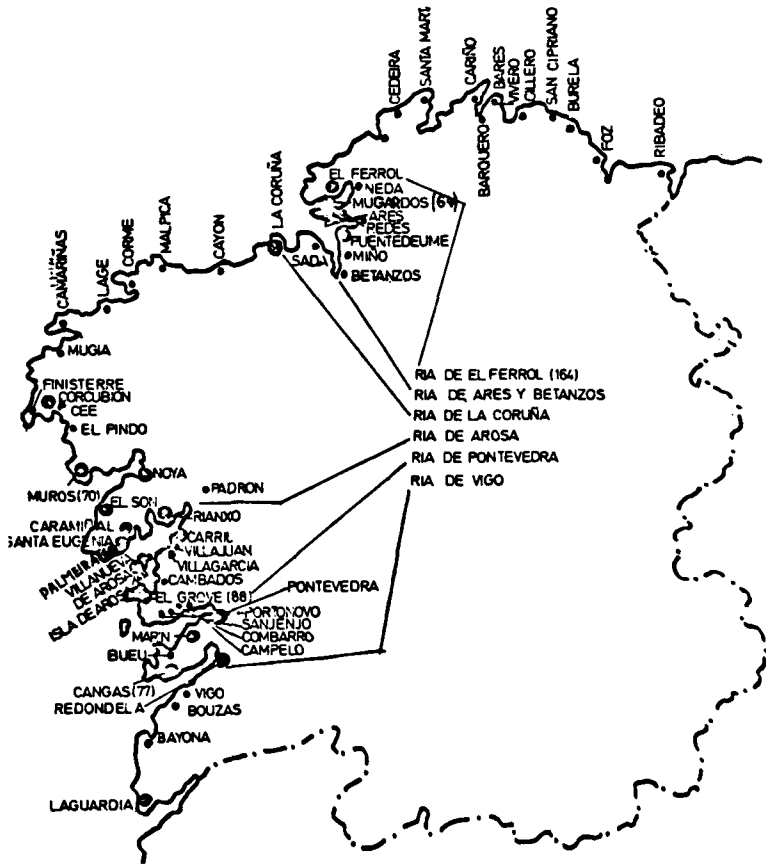


Mar Menor	7
Cartagena	86
Mazarrón	31
TOTAL	124

APENDICE (Continuación)

Galicia

(Flota pesquera, 1758-1759)



Ribadeo	6	El Ferrol	25
Rinlo	3	Neda	13
Foz	7	Perlio	5
Burela	3	Barallobre	13
San Ciprián	12	Maniños	12
Cillero	10	Seixo	8
Vivero	9	Mugardos	64
Bares	3	La Graña	24
Barquero	10	Ares	23
Cariño	5	Redes	13
Santa Marta	5	Puentedeume	28
Cedeira	3	Miño	9

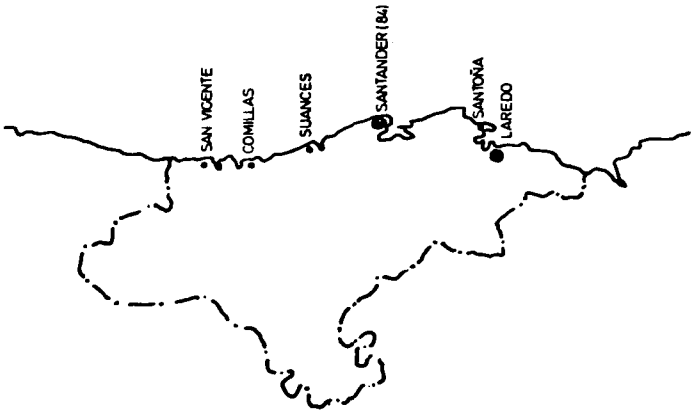
APENDICE (Continuación)

Galicia (Continuación)
(Flota pesquera, 1758-1759)

San Pantaleón	9	Villanueva de Arosa	12
Betanzos	11	Villamayor	6
Sada	5	Isla de Arosa	63
Fontán	1	Fefiñanes	5
Lourido	1	Cambados	8
Santa Cruz	7	Santo Tomé	8
Pasaje	15	El Grove	88
La Coruña	20	Portonovo	7
Cayón	7	Sanjenjo	2
Malpica	11	Samieira	1
Corme	13	Lourizán	27
Lage	5	Canto de la Arena	59
Camariñas	15	Combarro	19
Mugia	10	Campelo	17
Finisterre	12	Pontevedra	25
Corcubión	23	Marín	43
Cee	6	Piñeiro	3
El Pindo	4	Ardán	1
Freijo y Mosteiro	8	Cela	12
Puente Don Alonso	2	Bueu	17
Muros	70	Beluzo	4
Noya	20	Aldán	8
Barquiña	3	Hío	16
El Son	25	Darbo	2
Carreira	51	Cangas	77
Santa Eugenia	34	Tirán	4
Coto del Deán	14	Mohaña	3
Palmeira	66	Meira	2
Caramiñal	20	Domayo	2
Corrubedo	18	San Adrián	3
Coto Martín	38	Santa Cristina	16
Sobre y Omaño	17	San Payo	17
Santa Cruz de Lesón	2	Santiago	4
Santa Cruz de Leson	2	Sotojusto	5
Rianxo	23	Redondela	35
San Isidro	6	Revoreda	3
Cabo de la Cruz	18	San Fausto	2
Abanqueiro	4	Santiago de Vigo	4
Agueiros y Comba	13	Vigo	14
Bacariza y Sorna	3	Bouzas	8
Santa María de Leiro	4	Coruxo	20
Padrón	11	San Miguel de Hoya	4
Erbón	5	Priegue	4
Requeixo	46	Panjón	14
Carriil	20	Bayona	9
Villagarcía	9	Laguardia	33
Villajuán	3		
		TOTAL	1.798

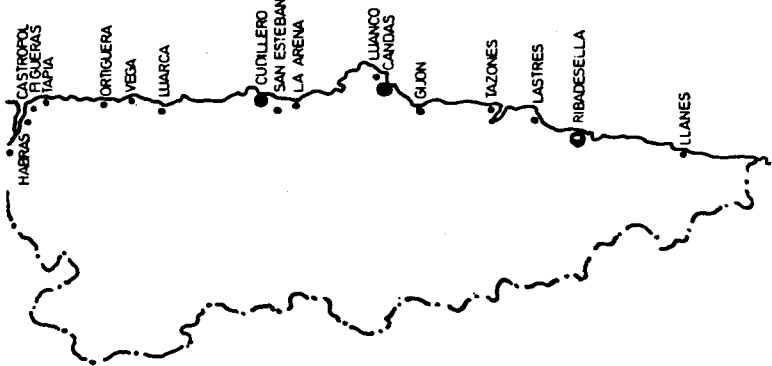
APENDICE (Continuación)

Santander
(Flota pesquera, 1758)



Laredo	41	Suances	3
Santoña	13	Comillas	12
Santander	84	San Vicente	8
Castillo	4		
		TOTAL	165

Asturias
(Flota pesquera, 1758)



Llanes	14	Tazones	7
Ribadesella	21	Gijón	18
Lastres	3	Candas	22

APENDICE (Continuación)

Asturias (Continuación)
(Flota pesquera, 1758)

Luanco	15	Ortiguera	2
Sabugo	3	Viavélez	3
La Arena	5	Tapia	11
San Esteban	5	Figueras	16
Cudillero	28	Castropol	4
Artedo	2	Habras	12
Luarca	11		
Vega	6	TOTAL	208

LA CUESTION DE LOS PRESTAMOS A LOS AGRICULTORES VIÑADORES EN LA REGION ESTE DE MALAGA EN EL SIGLO XVIII

M.^a AURORA GAMEZ AMIAN
Universidad de Málaga

1. INTRODUCCION

Se van a analizar las características y consecuencias de los préstamos a los agricultores (la mayoría viñadores) de la región sita al este de Málaga, donde el cultivo de la vid llegó a ser en muchas localidades casi dominante.

Las fuentes utilizadas han sido 659 contratos de obligación de una muestra de pueblos de la zona¹; dada la importancia económica de Málaga y Vélez-Málaga, principalmente los escribanos se concentraban en ellas y, por esto, es mayor el número de elementos muestrales pertenecientes a esos lugares. De entre los préstamos analizados hemos excluido aquellos en los que expresamente no consta que eran *para labores de sus viñas o tierras*, por considerar que no son para este fin; así, se han desechado los 43.035 reales que debía A. Canga, de Málaga, a F. Hoppe², o los 15.000 que prestó Andrea Benturo, de Málaga, a Miguel Criado, de la misma...³. Por último, señalar que con este trabajo no damos por concluido el tema, que pensamos seguir profundizando en base a las contabilidades privadas, si podemos disponer de ellas.

¹ Archivo Histórico de Málaga (AHM). Escribanos consultados: Algarrobo: P. Maldonado, L. Navas y Pérez de Gaona, leg. 4515. Cómpeta: A. Camacho y P. Maldonado, legajo 4515; J. Fernández de Mayo, leg. 4514. Málaga: N. Martínez de Valdivia, leg. 3588; D. López Cuartero, leg. 2773; A. Cea Bermúdez, leg. 2914; A. Fernández Palomo, legajo 2921; Agüero Martos, y Rojas, leg. 3979; Esteban Camacho, leg. 3979; J. Godínez, leg. 5042 y 5166. Nerja: R. Guevara, leg. 4725. Torrox: E. López, leg. 6643; G. Peñafiel, leg. 4651. Vélez-Málaga: F. Guerrero, leg. 5032; Alamo y Rando, leg. 5048; M. del Alamo, leg. 5036; P. Guirao, leg. 5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042 y 5171; V. Villalobos, legajo 4541; M. Saavedra, leg. 5022. Viñuela: F. Guerrero, leg. 5032.

² AHM. Escribanos: Lasso y Estrada, leg. 3588, fol. 873.

³ AHM. Escribano: Martínez de Valdivia, leg. 3588, fol. 617.

2. CAUSAS

En primer lugar, cabe hablar de la extremada división general de la propiedad⁴ y, la mayor parte de las veces, de microfundio más que de minifundio; también, normalmente, el *labrador* o *viñero* tenía diversidad de clases de terrenos en los que, con cierta frecuencia, existía asociado al cultivo algún olivo, almendro, higuera o moral, aparte de que, en bastantes localidades, era normal que un propietario tuviese también dominio en la finca o fincas ajenas sobre algún árbol y su tierra correspondiente, o sólo de su fruto. Así, pues, la propiedad estaba muy repartida y prácticamente todos los habitantes de los pueblos pequeños poseían *algo* de tierra⁵. En Málaga y Vélez-Málaga, las propiedades eran, por término medio, superiores a las de los otros pueblos.

Esta fragmentación de la propiedad obligaba a muchos campesinos a recurrir al crédito, bien periódicamente o bien sólo en momentos de crisis, ya por separado o a veces, las menos, en mancomunidad; fue la falta de instituciones crediticias adecuadas (hubo un proyecto de crear un Monte de Piedad Agrícola en 1747⁶, que no llegó a plasmarse en realidad), o la poca eficiencia de las mismas (caso del Montepío de Viñeros⁷), o los pocos recursos de las existentes (por ejemplo, el caso de los Pósitos⁸), las que obligaron al campesino a acudir a los particulares. Las peticiones para las labores de las viñas oscilaron entre los 300 y los 7.000 reales de vellón, de acuerdo con la muestra.

⁴ Conocemos a ésta a través de las RPCME. Para esta zona hemos encontrado las de Cómpeta, Málaga, Salares y Torrox.

⁵ La obrada es una unidad de medida variable cuya definición era *la cantidad de tierra que una yunta de bueyes ara de sol a sol*; ahora bien, dada la diversidad morfológica de la zona, éstas podían oscilar entre los 5.000 y los 1.250 metros cuadrados.

⁶ Archivo Ayuntamiento de Málaga (AAM), Actas Capitulares. Cabildo, 7 agosto 1747, lib. 138, p. 320.

⁷ AAM. Cabildo, 5 febrero 1776, lib. 166, pp. 68 y ss. El 11 de enero de 1776 se aprobó la constitución del Real Montepío para socorro de los cosecheros de vino, aguardiente, pasa, higos y aceite del Obispado de Málaga. En sus estatutos se aprobó que los préstamos se harían sin interés (art. 27), premio ni gratificación alguna para el Monte, con la obligación de devolverlo el agricultor en moneda corriente, luego que hubiera vendido sus frutos. La forma de acceder al mismo era a través de una matrícula, formada por los justicias, de todos aquellos que necesiten pedir dinero, con expresión de sus haciendas; estando la cantidad concedida en función del fondo existente y de lo que se pide, no excediendo de la mitad o, cuando más, de los dos tercios del valor de sus respectivos frutos. A pesar de estos buenos propósitos, la institución no cumplió con satisfacción su cometido y los agricultores siguieron acudiendo a los particulares.

⁸ G. ANES, «Los Pósitos en la Historia de España», en *Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII*, pp. 80 y ss.

3. CONDICIONES

Aunque existía el interés legal⁹, en ningún contrato no sólo no se hace mención a él, sino que nunca se dice cuál es el interés estipulado; la mayoría de los préstamos fueron hipotecarios y, en consecuencia, debían ser a un interés más bajo que aquellos que no lo son, y también influía el ser a corto plazo. Otras condiciones, aparte de la anterior, eran las referentes a la forma de pago, gastos en los que incurrían por día de retraso...

Estas condiciones hicieron que, al menos en algunas regiones de España¹⁰, tuviera cierta importancia la compra de objetos de oro y plata, pues la posesión de estos metales era un medio de defensa del agricultor ante el prestamista, ya que podían ser vendidos en caso de necesidad, evitándose el tener que acudir al préstamo usurario.

4. CARACTERISTICAS

a) *Naturaleza de la prestación*

Las prestaciones recibidas podían ser en metálico o en especie, y dentro de ésta, en trigo, cebada o mercaderías. Entre las analizadas son mayoritarias las recibidas en dinero, y en muy pocas ocasiones en trigo o cebada.

b) *Duración*

En la muestra se observa, en primer lugar, que todos son a corto plazo y que hay una concentración de peticiones en noviembre, diciembre, enero y febrero (el 70 por 100 del total se realiza en estos meses). En marzo y abril, su número ha descendido a la mitad, para continuar siendo aún menor en los meses sucesivos. Todos se devolvían, bien el 15 de agosto o bien el 8 de septiembre.

⁹ F. RUIZ MARTÍN, «La Banca en España hasta 1782», en *El Banco de España: una Historia Económica*, Madrid, 1970, pp. 139 y ss.

¹⁰ E. FERNÁNDEZ DE PINEDO, «Actitudes del campesino parcelario propietario ante la usura y el crédito rural (siglos XVI a XVIII)», comunicación presentada al *I Coloquio Internacional de Historia Económica*, Madrid, 1976, pp. 5-6.

c) *Formas de devolución*

Eran tres; quedan expresadas, al igual que sus porcentajes, en el siguiente esquema:

En dinero [22,23 %

En dinero o especie [18,03 %

{	Dinero o pasa: 15,50 %
	Dinero o almendra: 2,07 %
	Dinero o vino: 0,46 %

En especie [59,8 %

{	Pasa larga: 55,13 %
	Almendra: 2,11 %
	Almendra o pasa: 1,2 %
	Cebada o pasa: 0,92 %
	Vino: 0,46 %

Ahora bien, si agrupamos a los que debían pagar siempre en pasa larga de sol de la mejor calidad (59,88 por 100) y aquellos que optativamente podían hacerlo (17 por 100)¹¹, tenemos que los préstamos a devolver en ese producto ascendían al 76,88 por 100; es decir, más de las tres cuartas partes de los mismos eran, en realidad, adelantos sobre la producción. También se observa en los datos anteriores la poca importancia que tenía el vino, debido a que la mayor parte de la producción en esta zona era de pasa. Por último, señalar el papel secundario, pero importante, en la economía de la comarca de la almendra, también dedicada a la exportación; fruto que sabemos estaba muy extendido por otras regiones de Málaga.

d) *Garantía*

En cuanto al carácter o no de hipotecarios, la mayor parte de los préstamos escriturados lo eran (75,65 por 100); la hipoteca se realizaba siempre sobre los viñedos. Había prestamistas que normalmente usaban esta posibilidad, otros que nunca lo hacían (a los que se devolvía en dinero) y otros que prestaban de las dos formas.

Esta abrumadora proporción de los de carácter hipotecario tiene excepcional importancia desde el punto de vista económico, ya que siempre existía la posibilidad, ante varios años de crisis, de que perdiesen sus propiedades, pa-

¹¹ Según la voluntad del prestamista en el momento de la cancelación.

sando a manos del acreedor, que muchas veces, como veremos, era comerciante. El préstamo se haría frecuentemente con pacto de *retro*, o con una figura similar; era lo consuetudinario, y un modo operativo que eliminaba el uso del proceso ejecutivo en caso de impago.

Por último, señalar ¹² que los préstamos recibidos casi siempre estaban en relación directa con el tamaño del predio dado como aval, y cuando no sucede así, en el interés, que no se menciona, estaría la contrapartida.

5. LOS PRESTAMISTAS

Ejercían actividades muy diversas, desde presbíteros, e incluso la Inquisición, que sólo una vez hicieron un préstamo, hasta regidores, abogados, comerciantes o simples *vecinos* del lugar, los cuales no dicen su profesión, pero suponemos que serían acaudalados labradores que veían así incrementar su capital e incluso el hacerse con nuevas tierras. Cada prestamista actuaba en un radio de acción que abarcaba localidades próximas y sus clientes eran anualmente casi los mismos.

Por su número sobresalen claramente los comerciantes y los «vecinos». Dentro de los primeros, que de forma un tanto genérica podemos suponer que representan el 68 por 100 aproximadamente (es decir, los que recibían las devoluciones en especie o en dinero y/o especie), destacan los comerciantes de Vélez-Málaga y Málaga.

Según su país de origen, el mayor número eran nacionales, aunque los extranjeros tampoco estaban ausentes: Membielle, Dambahorquez, Hoppe, Ballant, Barbier, Lynch... Pero en la muestra sobresalen los españoles, aunque no por la cuantía del préstamo. Como observamos, algunos miembros del Alto Comercio o «Comercio Marítimo» de Málaga también se dedicaron a este tipo de operaciones; así, Hoppe, Dambahorquez..., aunque, lógicamente, como actividad subsidiaria ¹³.

Existían algunos que se dedicaban a este tipo de operaciones de forma sistemática. Tal es el caso en nuestra muestra de Catalina Lynch, del comercio de Vélez-Málaga, cuyos valores mínimos prestados ascendieron, en 1775, a 53.500 r. v.; en 1776, a 61.060; en 1777, a 75.610; en 1787, a 61.060; en 1788 —hasta el mes de mayo—, a 53.264; en 1793, a 81.137; en 1794, a 50.278. O el de Juan de Membielle, también del comercio de Vélez-Málaga, quien en 1776 prestó, al menos, 56.696 reales de vellón. O el de Diego Rul,

¹² Véase apéndice.

¹³ B. VILLAR GARCÍA, «Aproximación al estudio del capital extranjero en Málaga en la crisis del Antiguo Régimen», *Baetica*, núm. 2, 1979, p. 227.

vecino de Málaga, que en 1794 prestó 82.152 reales, y que aunque no se declarara comerciante debía serlo, puesto que sus préstamos le eran abonados en dinero o en especie (pasa, almendra...); es decir sería un traficante en *frutos del país*. Esto nos demuestra cómo para algunos ésta era una forma segura de obtener una ganancia del capital, aparte de la posible ampliación de sus propiedades inmuebles por incumplimiento del contrato, y tener asegurada la oferta de los frutos.

6. CONCLUSION

Del análisis precedente se deduce el grado de dependencia del pequeño agricultor al prestamista. Por otra parte, no debemos olvidar que al ya abundante número de obligaciones escrituradas oficialmente hay que añadir las que no estaban, en las que sólo existía o un compromiso verbal o un contrato privado, de acuerdo con la confianza del acreedor en el deudor. Las personas de la misma localidad desearían que no se conociesen sus apuros financieros, y esto, aparte de llevarlos a concertar créditos fuera de sus propios lugares, los induciría, a ser posible, a este tipo de operaciones.

Las ganancias de los prestamistas estaban casi totalmente aseguradas (hipotecas) en caso de mala cosecha o algún otro evento que impidiera cumplir lo estipulado; de ese modo se engrosaron las propiedades y, por ello, era para los *vecinos* especialmente atractivo este tipo de operación. En cuanto a los prestamistas-comerciantes, fueron, sin duda, los más beneficiados, ya que, aparte de todas las ventajas enumeradas, sabían con qué cantidades de frutos podían contar en el momento de la cosecha, por lo que cabía realizar ventas anticipadas sobre la pasa a recibir, *de la mejor calidad*. Además, si bien se estipulaba que el producto se tasaría al precio que corriese en esa fecha, hay testimonios no sólo de las tácticas empleadas por almacenistas y comerciantes para pagar al agricultor un precio más bajo que el oficial¹⁴, sino también de cómo *a causa de las deudas se sabe que se está vendiendo a los extranjeros a más bajo precio*¹⁵.

Finalmente, el pequeño agricultor se encontraba con que casi la única salida a sus apuros financieros era recurrir a este tipo usurario de préstamos, en cuyo círculo de peticiones y renovaciones muchas veces perdería su bien más querido y único: la tierra.

¹⁴ F. BEJARANO ROBLES, *Historia del Consulado de Málaga y su Provincia*, Madrid, 1947, p. 207.

¹⁵ AAM, Actas Capitulares. Cabildo, 5 mayo 1745, lib. 137, p. 526.

APENDICE

Algunos de los préstamos realizados por Catalina Lynch, del comercio de Vélez-Málaga, en 1775 y 1776
(En reales de vellón)

ALGARROBO				BENAMARGOSA				BENAMOCARRA				VELEZ-MÁLAGA				VIÑUELA			
Valor préstamo	Hipoteca		Has.	Valor		Hipoteca		Valor		Hipoteca		Valor		Hipoteca		Valor		Hipoteca	
	Ob.	Has.		préstamo	Ob.	Has.	Ob.	préstamo	Ob.	Has.	Ob.	préstamo	Ob.	Has.	Ob.	préstamo	Ob.	Has.	Ob.
3.000	20	4,6		2.000	10	3,01		1.000	9	2,7		2.000	34	10,6		6.850	25	7,8	
1.800	8	1,9		5.000	30	9,1		300	10	3,02		4.000	12	3,7		1.500	20	6,3	
								1.500	5	1,5		1.800	14	4,4		600	10	3,1	
								3.000	5	1,5		750	6	1,9		900	30	9,4	
								1.500	14	4,23		4.000	20	6,3		200	6	1,9	
								900	10	3,02		1.000	10	3,1		400	5	1,6	
								2.000	20	6,04		1.100	10	3,1		500	6	1,9	
												4.000	20	6,3					

ALGARROBO				BENAMARGOSA				BENAMOCARRA				VELEZ-MÁLAGA				VIÑUELA			
Valor préstamo	Hipoteca		Has.	Valor		Hipoteca		Valor		Hipoteca		Valor		Hipoteca		Valor		Hipoteca	
	Ob.	Has.		préstamo	Ob.	Has.	Ob.	préstamo	Ob.	Has.	Ob.	préstamo	Ob.	Has.	Ob.	préstamo	Ob.	Has.	Ob.
900	5	1,16		2.000	10	3,3		2.500	30	9,06		1.500	10	3,1		450	16	5	
				1.700	8	2,7		3.700	10	3,02		7.000	30	9,3		1.500	20	6,3	
				5.000	30	10		700	10	3,02		4.000	30	9,3		1.500	10	3,1	
								1.100	2	0,60		2.100	10	3,1		1.100	10	3,1	
								1.000	11	3,32		6.910	10	3,1		500	5	1,6	
								1.100	9	2,72		1.400	8	2,5		3.000	15	4,7	
								1.300	10	3,02		1.500	10	3,1		2.500	15	4,7	
								1.800	20	6,04		1.400	10	3,1		900	30	9,3	
												1.000	20	6,3					

APENDICE (Continuación)
Algunos de los préstamos realizados por Catalina Lynch, del comercio de Vélez-Málaga, en 1777
 (En reales de vellón)

ARENAS			ALGARROBO			BENAMARGOSA			BENAMOCARRA			VELEZ-MÁLAGA			VIÑUELA		
Hipoteca		Valor préstamo	Hipoteca		Valor préstamo	Hipoteca		Valor préstamo	Hipoteca		Valor préstamo	Hipoteca		Valor préstamo	Hipoteca		Valor préstamo
Ob.	Has.		Ob.	Has.		Ob.	Has.		Ob.	Has.		Ob.	Has.		Ob.	Has.	
5.000	8	2,5	3.000	30	6,95	1.700	5	1,7	3.000	20	6,04	1.100	6	1,9	2.500	20	6,3
6.000	20	6,3	750	9	2,08	2.000	6	2	1.000	8	2,4	2.500	20	6,3			
			600	10	2,32	600	4	1,3	300	6	1,8	2.000	22	6,9			
			1.500	4	0,93	1.500	20	6,7	2.400	20	6,04	1.300	10	3,1			
						750	4	1,3	1.000	5	1,51	400	12	3,7			
						6.600	20	6,7				750	20	6,3			
						3.300	15	5				1.800	30	9,4			
						500	15	5				1.100	5	1,6			
						550	2	0,7				750	16	5			
						500	3	1				3.200	10	3,1			
						3.300	15	5				300	5	1,6			
						500	2	0,7				4.000	40	12,5			
						500	4	1,3									
						500	—	—									
						200	—	—									
						300	4	1,3									
						600	6	1,7									
						5.600	20	6,7									
						700	4	1,3									

BENAMARGOSA				BENAMOCARRA				VELEZ-MÁLAGA						
Hipoteca		Valor préstamo	Hipoteca		Valor préstamo	Hipoteca		Valor préstamo	Hipoteca		Valor préstamo			
Ob.	Has.		Ob.	Has.		Ob.	Has.		Ob.	Has.				
2.500	20	6,7	1.100	20	6,04	600	11	3,31	600	4	1,2	1.500	20	6,3
400	6	2	350	2	0,6	500	6	1,82	650	10	3,1	2.000	20	6,3
									900	10	3,1	1.000	20	6,3

APENDICE (Continuación)

Algunos de los préstamos realizados por Catalina Lynch, del comercio de Vélez-Málaga, en 1787
(En reales de vellón)

ALGARROBO				BENAMOCARRA				BENAMARGOSA				IZNATE				VELEZ-MÁLAGA			
Valor préstamo	Hipoteca		Ob.	Valor		préstamo	Ob.	Hipoteca		Valor	préstamo	Ob.	Hipoteca		Valor	préstamo	Ob.	Hipoteca	
	Has.	Has.		Has.	Has.			Has.	Has.				Has.	Has.				Has.	Has.
500	8	1,85		10	3,02	1,500	10	3,3	6	1,750	6	1,9	8	2,5	1,000	4	1,2	8	2,5
800	4	0,93		6	1,81	2,110	4	1,3	8	1,620	8	2,5	25	7,8	750	8	2,5	25	7,8
550	4	0,93		12	3,63				10	1,500	10	3,1	30	9,4	1,500	5	1,6	30	9,4
				15	4,53				8	2,000	8	2,5	—	—	700	14	4,4	—	—
				12	3,63				12	2,000	12	3,7	—	—	800	10	3,1	—	—
				10	3,02					4,000	6	1,9	6	1,9	600	6	1,9	6	1,9
				6	1,81					2,000	19	5,9	19	5,9	1,550	6	1,9	19	5,9
										400	15	4,7	15	4,7	400	3	0,9	15	4,7
										3,000	12	3,7	12	3,7	1,500	10	3,1	12	3,7
										1,350	20	6,3	20	6,3	600	8	2,5	20	6,3
										500	8	2,5	8	2,5	2,180	12	3,7	8	2,5
										320	10	3,1	10	3,1	1,500	10	3,1	10	3,1
										1,000	30	9,4	30	9,4				30	9,4

APENDICE (Continuación)

Algunos de los préstamos realizados por Catalina Lynch, del comercio de Vélez-Málaga, en 1788
(En reales de vellón)

ALGARROBO			BENAMOCARRA			BENAMARGOSA			CANILLAS ACEITUNO			VÉLEZ-MÁLAGA		
Valor préstamo	Hipoteca		Valor préstamo	Hipoteca		Valor préstamo	Hipoteca		Valor préstamo	Hipoteca		Valor préstamo	Hipoteca	
	Ob.	Has.		Ob.	Has.		Ob.	Has.		Ob.	Has.		Ob.	Has.
500	12	2,79	500	4	1,21	600	4	1,3	400	10	3,1	1.100	8	2,5
400	8	1,85	300	2	0,61	2.000	20	6,7	1.000	—	—	500	4	1,2
500	30	6,94	1.500	8	2,42	800	8	2,7	1.500	30	9,4	400	4	1,2
200	4	0,93	750	6	1,81	900	10	3,3	600	6	1,9	800	6	1,9
			1.000	10	3,02	770	6	2	600	20	6,3	400	8	2,5
			2.000	10	3,02				1.000	10	3,1	750	8	2,5
			1.200	18	5,43				200	2	0,6	300	4	1,2
			1.000	6	1,82				1.500	10	3,1	1.500	20	6,3
									3.300	20	6,3	600	8	2,5
									800	10	3,1	390	6	1,9
									2.000	12	3,7	1.000	10	3,1
									800	10	3,1	500	6	1,9
									1.300	8	2,5	2.000	20	6,3
									1.300	6	1,9	520	6	1,9
									600	8	2,5	300	6	1,9
									1.400	4	1,2	650	6	1,9
									200	4	1,2	1.300	6	1,9
									1.650	10	3,1	1.200	20	6,3
									1.000	4	1,2	500	4	1,2
									1.200	8	2,5	400	2	0,6
									800	8	2,5	400	4	1,2
												544	4	1,2

APENDICE (Continuación)

Algunos de los préstamos realizados por Catalina Lynch, del comercio de Vélez-Málaga, en 1793
(En reales de vellón)

ALGARROBO				BENAMARGOSA				BENAMOCARRA				IZNATE				DAIMALOS				VELEZ-MÁLAGA			
Valor		Hipoteca		Valor		Hipoteca		Valor		Hipoteca		Valor		Hipoteca		Valor		Hipoteca		Valor		Hipoteca	
préstamo	Ob.	Has.	préstamo	Ob.	Has.	préstamo	Ob.	Has.	préstamo	Ob.	Has.	préstamo	Ob.	Has.	préstamo	Ob.	Has.	préstamo	Ob.	Has.	préstamo	Ob.	Has.
400	5	1,2	300	5	1,7	1,011	6	1,81	2,000	4	1,2	600	—	—	400	3	0,9	4,000	20	6,3	3,300	20	6,3
350	4	0,9	700	20	6,7	226	2	0,61	400	2	0,6	1,100	8	2,5	4,000	20	6,3	3,300	20	6,3	2,000	—	—
700	3	0,7	600	3	1	1,470	20	6,04	2,400	10	3,1	1,700	10	3,1	3,300	20	6,3	2,000	—	—	1,500	8	2,5
300	5	1,2	761	2	0,7	1,610	5	1,51	360	2	0,6	—	—	—	1,500	8	2,5	—	—	—	900	4	1,2
			930	11	3,7	280	—	—	2,000	12	3,7	—	—	—	300	4	1,2	—	—	—	300	4	1,2
			1,300	4	1,3	1,200	4	1,21	—	—	—	—	—	—	700	4	1,2	—	—	—	700	4	1,2
			800	8	2,7	500	10	3,02	—	—	—	—	—	—	440	2	0,6	—	—	—	440	2	0,6
			7,000	50	16,7	300	4	1,21	—	—	—	—	—	—	300	2	0,6	—	—	—	300	2	0,6
			3,000	40	13,3	900	4	1,21	—	—	—	—	—	—	800	14	4,4	—	—	—	3,100	20	6,3
			1,200	15	5	1,300	4	1,21	—	—	—	—	—	—	350	4	1,2	—	—	—	300	4	1,2
			800	4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	4	1,2	—	—	—	1,400	10	3,1
			500	8	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	4	1,2	—	—	—	1,700	20	6,3
			800	8	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250	2	0,6	—	—	—	700	20	6,3
			300	2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	2	0,6	—	—	—	500	2	0,6
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	8	2,5	—	—	—	3,000	8	2,5
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	13	4	—	—	—	3,000	13	4
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	800	14	4,4	—	—	—	300	10	3,1
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	10	3,1	—	—	—	2,000	4	1,2
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	10	3,1	—	—	—	3,000	10	3,1
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	950	4	1,2	—	—	—	1,500	12	3,7
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,000	40	12,52	—	—	—	2,000	40	12,52

UNA APORTACION AL ESTUDIO DE LAS «RESERVAS SEÑORIALES» EN CASTILLA: LA EXPLOTACION DEL MONTE DE LA ABADIA CISTERCIENSE DE LA SANTA ESPINA

JOSE MIGUEL LOPEZ GARCIA
Universidad Autónoma de Madrid

1. INTRODUCCION

Como es sabido, el agro castellano durante el Antiguo Régimen estuvo profundamente dominado por unas relaciones socioeconómicas de carácter feudal. Sin embargo, frente a otros modelos económicos imperantes en la Península Ibérica, en los cuales las *reservas señoriales* eran una «simple reliquia del pasado»¹, en las Coronas de León y Castilla, éstas jugaron un papel muy importante, especialmente en los dominios monásticos. Así, desde el siglo XIII, como ha puesto de manifiesto Reina Pastor, «el sistema de producción feudal se estructura sobre una permanente dialéctica entre la gran producción señorial directa y efectuada en la reserva... y la pequeña producción campesina. Esta última, sin duda, es la más relevante, hasta diríamos hegemónica en el sistema. En el seno de la pequeña producción campesina tiene lugar el proceso de reproducción del sistema: la producción de bienes para el autoabastecimiento campesino y el abastecimiento —total o parcial— de la clase señorial y la reproducción de la fuerza de trabajo»². De esta manera, podemos decir que el régimen señorial castellano posee destacadas concomitancias con otros modelos, como los presentados por Guy Bois para Normandía³ y por W. Kula para Polonia⁴. Sin embargo, nuestra historia rural posee características peculiares que la diferenciarían de la de otras naciones europeas, entre las que destacaría el papel desempeñado en ella por la Orden del Cister. En efecto, como sabemos, debido a las excepcionales circunstancias de la reconquista de los territorios islámicos, a los conflictos entre los monarcas de Castilla y León y, sobre

¹ Véase Antonio CISCAR PALLARÉS, *Tierra y señorío en el País Valenciano (1570-1620)*, Valencia, Del Cenit al Segura, 1977, p. 325.

² Véase Reyna PASTOR TOGNERI, «La aldea castellano-leonesa», *Historia* 16, núm. 37, mayo de 1979, pp. 31-39, p. 38.

³ Véase Guy BOIS, *Crise du féodalisme. Economie rurale et démographie en Normandie orientale du début du 14^e siècle au milieu du 16^e siècle*, París, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1976.

⁴ Véase Witold KULA, *Teoría económica del sistema feudal* (traducción de Estanislao J. Zembrzuski y revisión de Reyna Pastor Togneri), Buenos Aires, Siglo XXI, 1974.

todo, a la necesidad de repoblar nuevas tierras, aparecen en la submeseta norte nuevos e importantes enclaves cistercienses propiciados y potenciados por ambas Coronas⁵: Carracedo, Valparaíso, Moreruela, la Espina, Matallana, Valbuena, etc. Estos monasterios redondearon sus dominios a fines del siglo XIII e inmediatamente iniciaron un proceso de *roturaciones* que produjo, sin duda, unos cambios geográficos de excepcional importancia: muchas superficies yermas y semiboscosas quedaron de esta manera transformadas en zonas cultivadas, alternándose en ellas los cereales de secano, el viñedo, el cáñamo, etc. Tras varios siglos de historia, los monjes blancos potenciaron de nuevo las *roturaciones* en el siglo XVIII: en efecto, por ejemplo, ante la presión poblacional, que generó una creciente demanda alimentaria, la Santa Espina concedía en 1796 un contrato de roturación a 43 vecinos de los pueblos de San Cebrián de Mazote y Urueña para poner en cultivo los páramos —pertenecientes al coto redondo de la abadía— que lindaban con estas villas⁶.

Sin embargo, estas transformaciones del paisaje no fueron realizadas indiscriminadamente, sino que, por el contrario, gracias a los monjes blancos conservamos todavía en Castilla la Vieja varias superficies forestales de cierta entidad, entre las que destacaría, sin duda alguna, el monte de la Santa Espina.

2. EL MONTE DE LA SANTA ESPINA

La abadía de Nuestra Señora de la Santa Espina estaba situada al sureste de Villagarcía de Campos, en la provincia de Valladolid. Hasta 1835, fecha en que se produjo la desamortización de sus tierras, fue uno de los mayores productores de trigo de la Corona de Castilla, y, en la actualidad, los edificios del monasterio y parte de las tierras de su coto redondo sirven de sede a una escuela estatal de Capacitación Agraria. Sin embargo, antes de abordar el estudio del monte de la Espina, bueno será que hagamos algunas observaciones sobre el *dominio* de la misma y el papel que en aquél jugaba *la reserva señorial*.

2.1. El «dominio» de la abadía de la Espina

La Orden del Cister tuvo una singular importancia en la Península Ibérica. Aunque diversos estudios sobre Galicia han puesto de manifiesto el importan-

⁵ Véase Vicente Angel ALVAREZ PALENZUELA, *Monasterios cistercienses en Castilla (siglos XII-XIII)*, Valladolid, Universidad, 1978, pp. 164-165.

⁶ Madrid, AHN, Clero, *Libro 17982*, doc. 2, fols. 1-2.

te papel que allí jugaron los monjes blancos⁷, puede decirse que no ocurre así en lo referente a las Coronas de León y Castilla. Sin embargo, los monasterios cistercienses ocuparon un puesto destacado en la vida rural de los pueblos de la cuenca del Duero: la situación de la provincia de Valladolid en el Antiguo Régimen puede perfilarnos más acusadamente esta realidad. A la llegada de la desamortización eclesiástica, 168 monasterios poseían aún tierras en la provincia de Valladolid. De ellos, nueve pertenecían a los monjes bernardos: la Santa Espina, Matallana, Valbuena, monasterio de San Bernardo de Salamanca, Palazuelos, Morerueta, Sandoval, Benavides y la granja de Béjar. Sin embargo, los monasterios citados anteriormente poseían el 43,35 por 100 del total de las tierras de sembradura del clero masculino de la provincia y el 30,8 por 100 de las rentas metálicas de todo el clero regular: quiere ello decir que los cistercienses eran, junto a jerónimos y cartujos, de las órdenes más ricas a nivel provincial. Si del estudio por órdenes religiosas pasásemos al de los monasterios en particular, nos encontraríamos con que la Espina, Matallana y Valbuena estarían entre los cinco mayores propietarios de fincas rústicas del clero vallisoletano y entre los siete mayores perceptores de rentas del mismo⁸. Entre todos los enclaves cistercienses destacaba la Santa Espina. Esta gigantesca abadía, fundada hacia 1147 por monjes venidos de Claraval, llegó en el siglo XVIII a redondear un extenso *dominio* que abarcaba las antiguas provincias de León, Toro, Zamora, Salamanca y Valladolid, en las que poseía tierras en más de 45 términos (véase mapa adjunto), configurando un alargado *dominio* disperso cuyas líneas directrices seguían los valles del Duero y sus afluentes. En su conjunto, las propiedades de la Espina abarcaban cerca de 6.000 hectáreas, que convertían a esta gran abadía en el mayor propietario del clero vallisoletano⁹. Dicho patrimonio contaba, a mediados del siglo XVIII, con seis granjas en Pesqueruela, Monreal, San Juan (dentro del coto redondo de la abadía), Grajal de Campos, Tiedra y Aslua (en el término municipal de Tordesillas). De ellas, tres (Grajal, Aslua y Tiedra) configuraban prioratos que ayudaban a la casa central en la administración de este inmenso patrimonio.

⁷ Entre estos estudios destacan Ermelindo PORTELA SILVA, *La colonización cisterciense en Galicia (1142-1250)*, Madrid, Fundación Juan March, 1980; María del Carmen PALLARÉS MÉNDEZ, *El monasterio de Sobrado: un ejemplo del protagonismo monástico en la Galicia medieval*, La Coruña, Diputación Provincial, 1979; E. PORTELA SILVA y M. PALLARÉS MÉNDEZ, «Os mosteiros, protagonistas da colonización e do proceso de señorialización na Galicia medieval: o exemplo do mosteiro de Sobrado», *Estudis d'Historia Agraria*, núm. 2, 1979, pp. 51-71.

⁸ Véase José Miguel LÓPEZ GARCÍA, *Economía monástica y sociedad rural en la cuenca del Duero. Valladolid: la Real Cartuja de Nuestra Señora de Aniago*, tesis de licenciatura presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid (manuscrito), 1979, pp. 40-55.

⁹ Madrid, AHN, Hacienda, leg. 1935, Bernardos: la Santa Espina.

nio. Si atendemos al régimen de tenencia de la tierra, las rentas de la abadía procedían de tres explotaciones diferentes:

- a) *Las tierras arrendadas*, que representaban una buena parte del *dominio*, sobre todo a medida que nos alejamos de la abadía o de sus prioratos filiales.
- b) *Las tierras cedidas a censo enfiteútico o en foros por dos o tres vidas*, que ocupaban un papel de menor importancia que las anteriores, tanto por los ingresos que producían (muy reducidos) como por la extensión total cedida en estas condiciones (5 por 100 del *dominio*).
- c) *Las explotaciones directas*, que comprendían casi todo su gran término redondo y diversas parcelas en Aslúa y Villanueva de los Caballeros. El trabajo en las mismas era realizado por monjes granjeros, labradores y jornaleros. Debido a la excepcional importancia de estas explotaciones, pasaremos a estudiar más pormenorizadamente la *reserva señorial*.

2.2. El coto redondo de la abadía

El término redondo de la Espina procedía de tres donaciones diferentes:

- 1) En 1147, la infanta doña Sancha y su hermano el emperador Alfonso VII, fundadores del monasterio, concedieron a éste la heredad de San Pedro de la Espina y las villas de Santa María de Aborridos y San Juan de Casarejos.
- 2) En 1210, don Martín Romáñez y su mujer, doña Ximena Ruiz, donaban a la Espina, Villa Piluete y Villafalcón (también llamada Villa del Abad).
- 3) En 1319, don Pedro Sánchez de Llantada —señor de Casasola— donó al monasterio el valle de Sobrevivos y el lugar de Casasola, completándose así la configuración de este extenso coto ¹⁰.

En 1536, el abad Bartolomé Enríquez concluyó la despoblación del término, expulsando a los 17 vecinos que quedaban en Villafalcón ¹¹, y desde entonces la abadía dispuso de una gran extensión de tierras, reunidas en un solo término, de tales dimensiones que los monjes nunca realizaron un apeo de las mismas y sólo conservaron los amojonamientos de sus rayas o fronteras ¹². En aquél, «tiene este monasterio... Jurisdicción Civil y criminal, horca y cu-chillo, con mero mixto imperio: castigando los delitos dentro del cometidos, y exercitando los alcaldes maiores y sus tenientes (los cuales siempre han de

¹⁰ Véase *Tumbo* del monasterio de la Espina, vol. I, fols. (n) 116 v. y 117; Valladolid, AHPU, Secc. *Tumbo* de la Espina.

¹¹ Véase *Tumbo*, vol. I, fol. (n) 55 v.

¹² Según el *Tumbo*, entre 1223 y 1277 se realizaron diversos amojonamientos, delimitando todas las fronteras del término redondo de la abadía con Urueña, San Cebrián de Mazote, Torrelobatón, Castromonte, Villabrajima, Tordehumos y Villagarcía. N. A.

ser nombrados por los padres Abades con autoridad y ante escrivano) los autos judiciales». Es decir, el abad ejercitaba los poderes judiciales y fiscales, siendo éste el origen de uno de los ingresos del monte: las penas o «prendadas» que los alcaldes mayores del señorío imponían en su nombre a los cazadores furtivos, a la gente que cogía leña sin permiso de aquél o a los que introducían sus ganados en los pastos de la abadía¹³.

Como hemos dicho, era tal la magnitud del término del monasterio que incluso los propios monjes desconocían su extensión; sin embargo, en el siglo XVIII, con motivo de las encuestas de la *Unica Contribución*, sus tierras se midieron y, merced a este catastro de 1751, podemos precisar más adecuadamente la extensión y composición del mismo: el coto de Santa María de la Santa Espina medía 3.000,75 hectáreas, lo que le convertían en un descomunal latifundio enclavado en el corazón de una región minifundista por excelencia. Dentro de éste existían seis molinos harineros, de los que, al menos en el siglo XVIII, funcionaban cuatro. Aparte de estos importantes bienes, el monasterio poseía una granja llamada de San Juan, donde los monjes granjeros explotaban directamente 250 hectáreas de sembradura (8 por 100 sobre el total del término). A la vez, existían en el coto otras 543,14 hectáreas (18,0 por 100 sobre el total del mismo) dedicadas a los cereales, que eran arrendadas a colonos de los lugares próximos. Este patrimonio se completaba con 669,75 hectáreas (20,9 por 100) de tierras improductivas por naturaleza o páramos; 62,23 hectáreas de prados de guadaña; 6,25 hectáreas de huerta, y, finalmente, el 53,1 por 100 de la extensión del término estaba ocupada por el monte: es decir, 1.594,35 hectáreas¹⁴.

2.3. *El monte*

Como hemos dicho, los montes boscosos ocupaban más del 50 por 100 de la *reserva señorial*, cubriendo una extensión de 1.594,35 hectáreas. Sin embargo, hasta finales de la primera mitad del siglo XVI no fueron explotados intensivamente. En efecto, como nos cuenta fray Hernando de Aedo, primer autor del *Tumbo* de la abadía, entre 1607 y 1624, «solían ser montes altos de atalayas» que sólo se utilizaban en la recogida de leña para la Espina y, ocasionalmente, para las monterías que realizaban los abades y sus invitados. Sin embargo, «hace 60 años», es decir, hacia 1547, se comenzaron a talar para vender leña y madera: «y como los padres Abades hallaron tan grande interés

¹³ Véase *Tumbo*, vol. I, fol. (n) 117.

¹⁴ Todos estos datos han sido sacados del *Libro 17981* de la Secc. de Clero del AHN de Madrid. Este libro posee las *respuestas particulares* del catastro de Ensenada de la Espina. A la vez, ha sido consultado el *Libro 89* de la Secc. de Hacienda/Catastro del AHPU de Valladolid, para corregir posibles errores. N. A.

en ello, talaron el monte algunos, sin concierto, ni tasa y de este desorden, se siguió orden y concierto y tasa en las Cortas». Así, ante la amenaza que suponía para el bosque estas entresacas indiscriminadas, unidas a la presión que sobre el mismo realizaban los ganados, los monjes decidieron preservar el equilibrio ecológico del Monte, dividiéndolo en 30 cortas en 1593. Estas cortas se deslindaron en un apeo de 1607 y, a partir de entonces, los cistercienses se obligaron bajo juramento ante escribano a no realizar más que una corta al año, a no ser que debido a una circunstancia excepcional el general reformador de la orden les autorizase a hacer más. Desde ese año, el bosque quedó dividido en 22 cortas de encinas y ocho de robles, dando a cada una de ellas treinta años de plazo para poder recuperarse después de la tala. Al mismo tiempo, los monjes replantearon su política ganadera. En efecto, como nos explica el autor del *Tumbo*, antiguamente tenía la Espina «gran bacada, pues como el monte era alto y no había cortas, no había inconveniente alguno». Sin embargo, ahora «lo más es monte nuevo, ayle muy grande: porque hazen mucho daño [a] las cortas». Los monjes sabían perfectamente que en invierno los vaqueros se iban a pasar la noche a los molinos y majados, dejando el ganado suelto, «y las vacas se van a las cortas nuevas y les comen las guías y pinpollos», saliendo la leña «mal y tarde y hecha carrascos». Debido a que las cortas tenían un interés económico mayor que la venta de ganado vacuno, la abadía decidió cambiar este ganado por el caballar, pues «mientras las yeguas pueden entrar en el cercado, sin dañarlo, las vacas no, porque assuelan los pies de los álamos nuevos, que es de inportancia criarlos». A la vez, una adecuada trashumancia eliminará los problemas que podría causar en el monte el ganado cabrío, pues se hizo indispensable que «las cabras no entren en las cortas, porque son para ellas tan dañinas como las vacas»¹⁵.

Finalmente, para llevar a cabo una explotación más racional, la Espina debió solucionar otro importante problema que se le planteó a comienzos del siglo XVII. En 1600, estando la Corte de Felipe III en Valladolid, el rey visitó los montes de la Espina y Valbuena «y do quiera qe. avía caça y le contentara, le davan el título de bosque del Rey». A partir de este momento, el Monte de la Abadía se encontró con un problema de doble jurisdicción:

«para frenar y poner miedo a los caçadores de la comarca q. no entrassen en él, el Abad que era de esta casa pidió al Juez de bosques pusiese guardas de su mano. Hízolo, y el monasterio caçara, monteara y pastara como antes, y tenía sus guardías propios fuera de los del Rey: los quales estuvieron aquí cosa de dos años, y como el Juez de bosques no les pagava ni el mon.º tampoco, qui-

¹⁵ Véase *Tumbo*, vol. I, fols. (n) 118 v.-120.

siéronse aprovechar no guardándolo, ni mirando por el monte aprovecho de la caza, tornolos a echar de la Jurisdicción el monasterio de su autoridad, y se tornó a estar como antes con sus propios guardas».

Finalmente, en 1616, el rey concedía a la Espina una Cédula Real ordenando a sus «Jueces y guardas de bosques que no se entrometan en los montes del m.^o»¹⁶. Este hecho nos demuestra cuál era el poderío del abad en su jurisdicción y, a la vez, presenta claramente cuál será la política de la Corona frente a los señoríos a comienzos de la «reacción señorial», tendiendo a favorecerles en todos los pleitos, concediéndoles nuevos privilegios, etc. A partir de estos momentos, la abadía tendrá libertad absoluta para explotar los bosques de una manera más racional que antes, poseyendo sobre ellos una plena jurisdicción, que no dejará de ejercer hasta 1835.

3. LA ORGANIZACION ECONOMICA: EXPLOTACION DE LOS RECURSOS Y EVOLUCION DE LAS RENTAS (1600-1835)

Como ya hemos dicho, a comienzos del siglo XVII el bosque ya se había dividido en 30 cortas. Fray Hernando de Aedo nos describe la explotación del mismo por estas fechas. Las cortas de encina —nos dice— «tenían un gran provecho», más que las de robles, debido a la «casca» o corteza del árbol que todos los años se recogía en los encinares. Desde octubre de un año a marzo del siguiente «se pregona y ponen cédulas en la Mota, Urueña, y demás lugares, para arrendar la casca... En la obligación se ha de sacar condición de que se sacará de todo el mes de Junio, y comiencase a sacar por mayo»: es decir, era arrendada por dos meses, por los que la abadía ganaba «sin poner costa alguna la casa, quanto menos, dos mill reales», pudiéndose sacar hasta 3.000 según la corta. En el mes de octubre comenzaba la tala de una corta, de la que se solían sacar, por estas mismas fechas, 6.000 ó 7.000 reales. En cada corta era obligatorio dejar 100 pies de árboles en los límites de la misma, «que sirven para anparo de los ganados en invierno quando haze tempestad». Sólo en esta época se podría cortar leña: «demás de esto en ningún tiempo del año se ha de cortar leña por pie fuera de tiempo que se da la corta, por q. no buelve a salir, y ansi entre año se corta para servicio de la casa de las ramas de las atalayas, dexando en ellas horca y pendón». Es decir, que, a la vez, los 100 pies que se preservaban de la corta servían al monasterio de reserva anual para autoabastecimiento de leña. Acabada la época de la tala se rehacía la corta: «se

¹⁶ Véase *Tumbo*, vol. I, fol. (n) 119.

chapodan todos los pies cortados lo más a raíz que pueda ser». Esta tarea era muy importante, pues permitía que el bosque se recuperase adecuadamente, saliendo más espeso, y «de lo contrario no saldrá espeso, sino ralo»¹⁷.

Con el florecimiento de la explotación, a finales de la primera mitad del siglo XVII, los monjes comenzaron a producir carbón vegetal de encina y, con ello, los ingresos comenzaron a elevarse considerablemente, complicando de esta manera el circuito de producción y comercialización del monte, del que se hacía indispensable realizar un libro de cuentas anuales para controlar mejor este proceso. Por ello, los padres visitadores de la orden mandaron a la Espina hacer un *Libro de Ingresos y Gastos del Monte*: «para sacar un verbo el útil, al Libro de Caja». Dicho volumen comenzó a escribirse en 1657, registrando la contabilidad del 15 de abril de un año a la misma fecha del siguiente, según era costumbre en la congregación, aunque en la práctica, como nos anota el primer autor del libro, este *año contable* coincide mediante un pequeño ajuste con el *año natural*:

«Adviértase q. para curiosidad de sacar el útil de cada Corta, puede suceder lo que este año ha sucedido, que es la corta de un año no acabarse de dar, en fin de Abril del siguiente, que es quando se haze el finiquito de estos libros, y para sacar en limpio el aprovecham.¹⁰ de cada corta se puede aguardar a que se acabe, y ajustar entonzes la cuenta de todo el Re.º y Gasto de cada Corta por si, y ponerlo todo en las quantas de fin de Abril del año que toca a cada corta»¹⁸.

En su conjunto, el *Libro 17951* de la Sección de Clero del AHN de Madrid posee, amén de una rica serie que va de 1657 a 1835, gran cantidad de datos básicos para conocer la explotación de los recursos del Monte y la evolución económica de esta singular hacienda.

3.1. *Aprovechamiento de los recursos, origen de los ingresos y comercialización de los productos*

La dirección de la explotación del monte estaba encomendada al prior del monte, o padre montanero. Este hombre era designado cada tres años, a la vez que el abad, pudiéndose dar el caso de que un monje fuera designado en varias ocasiones seguidas para este importante puesto: así, por ejemplo, fray Cristóbal de Medina fue montanero de la Espina entre 1744 y 1753¹⁹, y otros

¹⁷ Véase *Tumbo*, vol. I, fols. (n) 119 y 119 v.

¹⁸ Véase *Libro 17951* de la Secc. de Clero del AHN de Madrid, fol. 1 v.

¹⁹ Véase *Libro 17951*, contabilidad de los años 1745-46 a 1752-53.

monjes se vieron en su misma situación hasta 1835. Al prior del monte correspondía la administración de este importante patrimonio, así como la elección de aquellas alternativas económicas que supusieran mejoras en la rentabilidad de la explotación. A la vez, dicha gestión era anotada en el currículum del monje, siendo tenida en cuenta a la hora de poder ser elegido abad en el trienio siguiente.

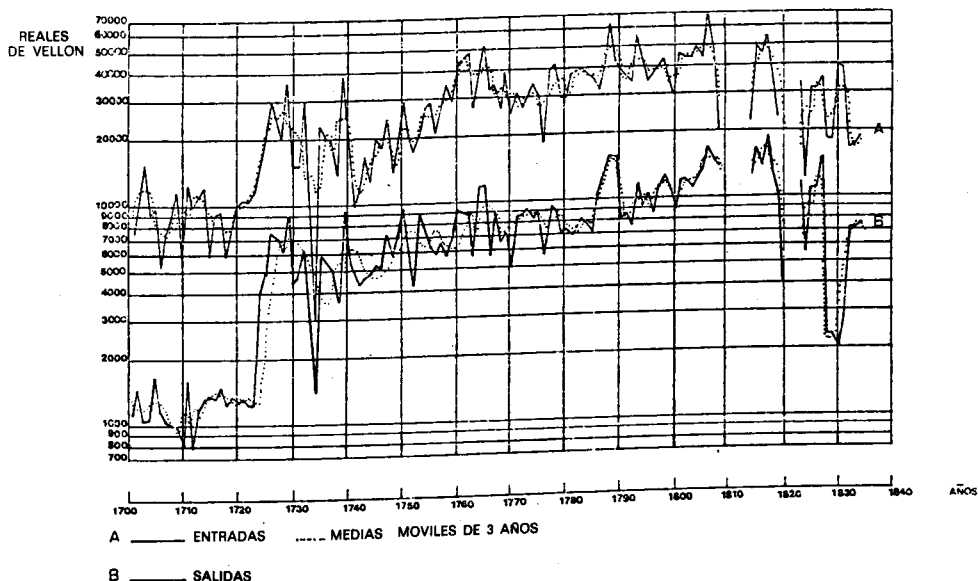
La explotación del monte no varió sensiblemente desde principios del siglo XVII, a excepción del aprovechamiento de la casca, que ahora se hará directamente por los monjes; por ello, pasaremos a continuación al análisis de las fuentes de riqueza a partir de la segunda mitad del siglo XVII.

Una vez concluido el año económico, el padre montanero plasmaba sus resultados en el *Libro de Recibo y Gasto del Monte*, merced al cual podemos conocer la composición de los ingresos procedentes del bosque:

a) *Leña y madera*: Como ya hemos dicho, fue ésta la principal fuente de riqueza de esta explotación hasta que los monjes optaron por la fabricación de carbón vegetal, a partir de la cual pasó a ser la segunda fuente en importancia de la hacienda: es decir, de suponer el 90 por 100 de los ingresos brutos pasará a representar de un 20 a un 30 por 100 de las entradas anuales.

b) *El carbón*: Este producto posee dos ciclos de producción bien diferenciados en la historia de la Espina. Uno primero iría de 1657 a 1671, en el que tuvo una importancia secundaria en los ingresos anuales, no sobrepasando el 20 por 100 de las entradas del bosque. Por ello, a partir de 1671, como consecuencia del incremento general de las rentas de la abadía, se dejó de producir. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, la producción carbonífera se nos presenta en una coyuntura muy diferente: a causa del incremento de los precios de transporte, el carbón, al contener un mayor poder calórico por unidad de volumen en relación a la leña, permitirá a los monjes blancos obtener un margen de beneficio mayor a la hora de su comercialización. Por ello, a partir de 1724, el carbón vegetal empieza a salir masivamente de la Espina y, como consecuencia de ello, los ingresos del monte llegarán a triplicarse en 1726 (véase gráfico A). Después de esta fecha será la primera fuente de ingresos de esta explotación, llegándose a obtener, solamente con este producto, del 60 al 70 por 100 de las entradas generales. Consecuentemente, la curva A seguirá, por regla general, las oscilaciones de la producción de carbón, que, normalmente, fluctuó entre 8.000 y 20.000 arrobas al año.

c) *Otros ingresos*: Por último, nos encontramos con un grupo de ingresos cuyo papel dentro de las entradas generales del monte siempre fue muy reducido, no sobrepasando, por regla general, el 5 por 100 de las mismas. Entre ellos estarían las *penas* o *prendadas*, es decir, las multas que los alcaldes mayores del señorío imponían a los campesinos por cazar furtivamente en el



FUENTE: Madrid, AHN, Clero, *Libro 17951*.

bosque, cortar leña en él o introducir ilícitamente sus ganados. En general, nunca sobrepasaron los 500 reales anuales. Otros ingresos de menor cuantía procedían de la venta de *estopa* o del arrendamiento de algunos pastos en invierno para «hervajes».

Sin embargo, los ingresos del monte no sólo dependían de la calidad de sus productos, sino que también era necesaria una adecuada comercialización. La leña era vendida por haces en el Coto Redondo, pero la mayor parte de la producción era transportada por carros a Medina de Rioseco y, en ocasiones, a Villalón. Para ello, los monjes contaban con una valiosa ayuda: como ya hemos dicho, la abadía arrendaba algunos pastos en invierno. Estos eran alquilados por ganaderos que procedían de las montañas de Soria y que traían anualmente a la Espina sus bueyes. A partir de las reformas del siglo XVII, el monasterio fue frenando esta trashumancia hasta convertirla en una migración que sólo podían realizar algunos privilegiados propietarios, pues el abad no admitía más de 50 cabezas por término medio al año, para proteger de esta manera los pastos del monte de un esquilmo excesivo. Hacia 1664, la Espina comenzó a alquilar a estos «sorianos» —como son llamados en el *Libro*— para transportar con sus bueyes carros de leña y carbón a Rioseco, etc., haciéndoles contratos especiales por los que se les admitía a «hervaje» a condición de utilizar sus ganados en el transporte de las materias producidas en el monte de

la abadía²⁰. A la vez, también era normal que algunos arrieros comprasen leña al monasterio y la transportasen a los lugares cercanos: así, en 1658 «vendieron en el monte ciento y cinq.^{ta} carros de casca a unos hombres de Urueña que la tomaron por su cuenta y dieron al monast.^o libre de todos gastos cuarenta R.^s por cada carro»²¹.

Al mismo tiempo, el carbón tenía un ciclo de comercialización muy parecido a la madera, vendiéndose al por menor en Medina de Rioseco, ciudad adonde la abadía enviaba anualmente un monje cobrador para realizar todas las transacciones. Por otra parte, merced a ciertos años en los que se realizó la contabilidad por trimestres, podemos conocer cuál era el ciclo estacional de ventas de estos productos. Veamos un ejemplo: en 1673-74, los ingresos generales procedentes del monte ascendían a 26.131 reales; pues bien, de mayo a finales de agosto se vendieron 2.605 reales de leña y carbón (9,96 por 100 de las entradas), de septiembre a diciembre los ingresos se elevaron a 12.762 (48,83 por 100) y de enero a abril de 1764 descendieron a 10.764 reales (41,19 por 100). De esta muestra se desprende un hecho lógico: son precisamente en los meses fríos del otoño y, sobre todo, del invierno cuando el padre montanero obtenía unos ingresos más saneados, y este hecho se repetirá constantemente a lo largo del período analizado²².

Sin embargo, para obtener estos cuantiosos ingresos, que en 1793 superaban los 55.000 reales, la Espina deberá realizar una serie de gastos considerables, en los que desempeñarán un papel preponderante los jornales.

3.2. *Los gastos generales y la retribución del trabajo asalariado*

Debido a las singulares características de esta explotación maderera, el padre montanero debía realizar una serie de gastos en los que jornales y salarios tenían una especial primacía. Podemos clasificar las salidas en cuatro grupos, tres de los cuales correspondían a la retribución del trabajo asalariado:

a) *Gastos en salarios no contabilizables*: A partir de 1670, con el fin de no complicar la contabilidad, los padres montaneros comenzaron a inscribir en el Libro de Caja *las entradas netas* de leña y carbón, de las que se habían descontado los gastos de la corta y los de comercialización (portes y descarga de dichos productos). Sin embargo, eran éstos los gastos más importantes que se realizaban en el bosque:

²⁰ Véase *Libro 17951*, contabilidad del año 1664-65.

²¹ Véase *Libro 17951*, contabilidad del año 1658-59.

²² Véase *Libro 17951*, año de 1673-74

1) *Los gastos de la corta*: Englobaban éstos los jornales y alimentación de los obreros-leñadores que anualmente trabajaban en la tala de las cortas. Por ejemplo, para la explotación de este gigantesco latifundio maderero en 1657 se contrataron 476 jornaleros de los lugares próximos, pagándoles 1.666 reales. Sin embargo, los mecanismos de contratación de mano de obra variaron sensiblemente a partir de la segunda mitad del siglo XVII: en efecto, para la corta el monasterio solía contratar a jornaleros de Castromonte y de los lugares vecinos en septiembre. Sin embargo, al coincidir esta época con el período de las vendimias, los monjes debían pagarles mayores jornales, y pronto vieron éstos que, «por más comodidad, al acabar las vendimias quando los gallegos se buelven a la tierra», debería contratárseles hasta la Navidad, «dándoles de comer en cassa q. como los días son cortos y no tener q. trabajar se conciertan baratos, y salen más acomodados...». Es decir, que a partir de entonces la Espina aprovechará el retorno de los segadores y vendimiadores gallegos, que solían bajar a trabajar a Castilla, para emplearlos en su explotación a un precio menor del que antes pagaban a los vecinos de los lugares próximos²³.

2) *Gastos de transportes*: Suponían éstos la partida más importante de los gastos generales. Así, en 1657, de 17.995,29 reales empleados en las salidas del año, 9.098,2 —es decir, el 50,55 por 100 de las mismas— correspondían a los salarios pagados a los arrieros y carreteros, que cobraban a razón de un cuartillo por carreta de leña o carbón transportada hasta Rioseco, y a la remuneración de los «ganapanes» que descargaban estos productos en aquella ciudad²⁴.

b) *Los gastos de la fábrica de carbón*: Pasaron éstos a ocupar la primacía en los gastos del monte al suprimirse los de la corta y transportes. En general, el gasto de la fábrica de carbón suponía entre el 60 y 78 por 100 de las salidas totales contables. Veamos un ejemplo: en 1733, dicho gasto fue de 2.150 reales, sobre unas salidas generales contabilizables de 3.516 reales. Dicha partida se descomponía de la siguiente forma: 850 reales de 56 fanegas de trigo empleadas en fabricar el pan que se daba a los peones; 120 reales en hachas, capachos y otros utensilios, y 1.060 en jornales pagados a «fabriqueros y peones», amén de 120 reales que se gastaron en el vino de las comidas de aquéllos. Por tanto, estos gastos contenían un fuerte porcentaje de salarios (49,3 por 100), correspondiendo el resto de los mismos a partidas destinadas a cubrir la alimentación de los trabajadores y a gastos de material ocasionados por dicha elaboración²⁵.

²³ Véase *Libro 17951*, fol. 1 v.

²⁴ Véase *Libro 17951*, contabilidad de 1657-58.

²⁵ Véase *Libro 17951*, contabilidad de 1733-34: gastos.

c) *Salarios y jornales contabilizables*: Se componían de dos partidas básicas:

1) *Jornales de los asalariados empleados en rehacer la corta*: En «enrramar» y «rehacer» la corta después de la tala solían emplearse unos 80 trabajadores, a los que se les pagaba una cantidad fija por día más la alimentación. En su conjunto, para el siglo XVIII, dichos gastos oscilaron entre el 14,5 y el 36,9 por 100 de las salidas contabilizables, según los diferentes años y cortas.

2) *Los salarios de los guardabosques*: Como ya hemos visto en el capítulo anterior, el padre montanero tenía a su servicio una serie de guardas de monte, dedicados a la vigilancia del mismo, etc. En todo el período estudiado, su número osciló entre tres y cuatro, que, junto a un «pillo» o muchacho al servicio del prior del monte, componían el personal fijo de esta explotación. Las salidas que suponía la paga anual de los mismos representaban uno de los gastos de menor cuantía dentro de los totales contabilizables: entre un 7,52 por 100, a principios del siglo XVIII, y un 12 por 100, a comienzos del XIX²⁶.

d) *Gastos generales*: Entre éstos destacarían los de *obras*, correspondientes a las reparaciones de la cabaña que la abadía poseía en el monte para residencia de los guardas; los gastos de *pólvora y municiones*, que anualmente se hacían para poder cazar en el bosque; los ocasionados por *pleitos*, etc. En general, dichas salidas se caracterizaban por su gran variabilidad, pues también incluían las compras de ganado caballar para los guardas, etc., y siempre oscilaron entre un 7 y un 21 por 100 de los gastos totales contabilizables.

En resumen, y como hemos visto, los gastos en jornales y salarios, bien fueran éstos en la fábrica de carbón, en la corta, etc., representaban la partida fundamental de las salidas de esta explotación maderera, con un peso específico notorio a la hora de analizar la evolución de los gastos, representando en su conjunto más del 70 por 100 de los mismos.

3.3. *La evolución de las rentas: el balance anual*

A finales de abril, el padre montanero presentaba sus cuentas a los padres contadores y al abad de la Santa Espina. Tras exponer los ingresos y los gastos, dicho monje entregaba el alcance o saldo, que nosotros denominaremos *balance anual contable*. Las gráficas A y B presentan la evolución de las entradas y salidas del monte de 1700 a 1835. La curva del saldo sería la resultante de la diferencia entre A y B. Del estudio de ambas gráficas podemos obtener las siguientes conclusiones:

²⁶ Véase *Libro 17951*, salarios de 1728-29 y de 1814-15.

— Un primer fenómeno remarcable estriba en el hecho de que, a lo largo de la historia contable del monte, la abadía no obtuvo jamás un saldo negativo; es decir, los ingresos y los gastos siempre guardaron un equilibrio, que nos demuestra la calidad de la explotación realizada por los monjes blancos.

— En segundo lugar, se puede observar la tendencia de los priores del monte a buscar la máxima rentabilidad de la explotación. Así, de 1700 a 1723, etapa en la que la Espina aún no había reemprendido la producción de carbón vegetal, los balances anuales son más moderados: los ingresos no sobrepasan nunca los 25.000 reales al año, y los gastos, por su parte, no rebasan los 7.000 reales. A partir de 1723-24, gracias a la producción de carbón, los ingresos van a duplicarse, en un primer período que concluiría en 1760, para triplicarse y cuadruplicarse posteriormente. Por el contrario, los gastos sufren un incremento mucho menor, aunque acusado, debido a los gastos de la fábrica de carbón, y sólo se duplicarán hacia 1790. Como consecuencia, los monjes obtendrán a lo largo del siglo XVIII y primera mitad del XIX unos beneficios crecientes que tienen su plasmación en los balances anuales: 33.352,5 reales en 1760-61, 40.020 reales en 1762-63, 47.709 reales en 1788-89, etc.²⁷.

— Finalmente, si sumásemos los *balances anuales contables* obtenidos entre 1657 y 1835 en la explotación de esta sorprendente hacienda, resultaría que los monjes blancos obtuvieron de aquella unos *beneficios brutos* de 3.189.581,09 reales de vellón. Pero ¿en qué invirtieron los cistercienses una cantidad tan fabulosa?

3.4. *Beneficios netos e inversión*

Como ya hemos dicho, los monjes sacaban todos los años de la explotación del monte un *balance anual contable*, que hemos denominado *beneficio bruto*. ¿Por qué? Como observó el padre Montanero fray Antonio Manrique, en 1796, «advértase que en ninguna de estas cuentas va puesto el Costo de manutención de los Gaurdas, el Cobrador y el Pillo que son cinco personas a 5 rs. cada una que importan al año 9.125 rs., ni la manutención de dos Caball.^{as} qe. son de Zevada a 80 r. diez y ocho cargas al año, y se importan 1.440 rs. q.^e con los anteriores hazen 10.565 los qe. se deben añadir a los demás»²⁸; es decir, el *beneficio neto* resultaría de la diferencia entre el *beneficio bruto* y el coste de manutención del personal fijo y del ganado de tiro. Por tanto, de cada *balance anual contable* habría que descontar un 30,4 por 100, que es lo que supondrían dichos gastos sobre los *beneficios brutos*: así, los *beneficios netos* totales de la explotación, para el período estudiado, son evaluables en

²⁷ Véase *Libro 17951*, alcances de los años 1760-61, 1762-63 y 1788-89.

²⁸ Véase *Libro 17951*, nota de la contabilidad de 1795-96.

2.232.706,7 reales de vellón. Sin embargo, como ya destacamos en el apartado 2.1, la Santa Espina poseía cerca de 6.000 hectáreas de tierras, por lo que sus necesidades de inversión rara vez se dirigirían al campo de la compra de bienes raíces: hacia 1749 la abadía había completado su *dominio*, al redondear, mediante compras, su hacienda de Villanueva de los Caballeros, que se destinaría, prioritariamente, a la explotación del viñedo²⁹. A partir de entonces, la inversión sólo podrá producirse en dos terrenos muy determinados: mejoras de cultivos y reparación de aceñas. A la vez, parte de este importante excedente también podía ser empleado en introducir mejoras en los edificios de la abadía, y éste es el caso de la Santa Espina. En efecto, si observamos las gráficas A y B puede apreciarse cómo hacia 1734-35 se produce una caída vertiginosa en los ingresos y en los gastos: mientras que los primeros no superaron los 3.040 reales, los últimos bajan a 1.400³⁰. Este fenómeno es una repercusión, dentro de esta explotación, de un hecho que se había producido en 1731: el incendio de la abadía, una de cuyas consecuencias fue precisamente el descenso de las rentas que experimentaron los monjes blancos en los años siguientes, al tener que dedicarse, prioritariamente, a la reconstrucción del edificio monástico y a recomponer su importante archivo. La noche del 21 de julio de 1731, un incendio fortuito redujo a cenizas la mayor parte de la abadía. Según la estimación hecha por los maestros de arquitectura, los daños ocasionados en el inmueble ascenderían, como mínimo, a 1.334.333 reales de vellón, a los que se debería añadir «el valor de los libros, papeles de Archivo, roja, alajas, menaje, ... lo que por ser tanto, y de tan excesivo [valor] no se puede sumar...»³¹. La reedificación comenzó ese mismo año y, hacia 1735, el conjunto de dependencias comenzó a ser habitable. Sin embargo, año tras año, los cistercienses dedicaron fuertes excedentes, como los obtenidos en el monte, a la construcción de una suntuosa abadía. Así, en 1789 el padre cillero fray Josef Otheo presentaba las cuentas de la «inversión de 47.709 rs. q.º dió de útil la Corta del Cercado». A petición de la abadía, el general reformador de la orden autorizó a la Espina para que completase su soberbio conjunto arquitectónico; para ello, el dinero procedente del monte fue invertido en construir una fachada nueva para la iglesia (20.447,5 reales), reformar las bóvedas de la misma (14.840 reales), reconstruir parte del coro (9.639 reales), etc.³². La nueva reedificación será diseñada y dirigida por un discípulo de Ventura Rodríguez.

Para finalizar, hemos de decir que los excedentes que los monjes blancos

²⁹ Véase *Tumbo*, vol. IV, fols. 375-383 v.

³⁰ Véase *Libro 17951*, contabilidad de 1734-35.

³¹ Véase *Tumbo*, vol. IV, fol. 423.

³² Véase «Quenta qe. da el P. Fr. Josef Otheo, Cill.º, de la inversión...», Madrid, AHN, Clero, *Libro 17951*, contabilidad de 1788-89.

sacaban del monte ocupaban el segundo lugar dentro de los que el monasterio obtenía cada año, siendo superados, sobre todo, por los cereales, que constituyeron siempre la base económica de este importante cenobio.

4. CONCLUSIONES

Como hemos visto, el monte de la abadía cisterciense de la Santa Espina tuvo una explotación singular. Los monjes se preocuparon, desde finales del siglo XVI, por preservar el equilibrio ecológico del bosque, buscando a la vez una mayor racionalidad en la explotación de cara a obtener mejores rendimientos. Sin embargo, desde principios del siglo XVII, la idea de conservar el bosque primó sobre la de obtener unos ingresos desmesurados, que acarrearían, paralelamente, la destrucción de esta fuente de riqueza maderera. A la vez, la organización económica de la explotación no permaneció estática, sino que fue variando hasta alcanzar un punto óptimo en el siglo XVIII, siglo en el que la producción de carbón vegetal pasará a ser la base principal de las entradas de esta singular hacienda. Por tanto, la hipótesis de Slicher van Bath sobre las *grangiae* cistercienses, según la cual éstas alcanzarían su máxima expansión y rentabilidad en el siglo XIII, para entrar en decadencia en el siglo siguiente³³, no puede ser aplicada en el caso castellano. En efecto, aunque las explotaciones y las granjas de los monjes blancos acusaron las fluctuaciones adversas de la coyuntura económica en los siglos XIV y XVII, éstas fueron perfeccionándose a lo largo del Antiguo Régimen, hasta alcanzar en el siglo XVIII una óptima explotación, como consecuencia de reorganizaciones económicas consecutivas. Los estudios que en la actualidad estamos realizando sobre tres granjas de la Santa Espina, etc., no harán sino confirmar este proceso, que replanteará seriamente la supuesta «quiebra de las economías monásticas» en el siglo de las Luces, así como el papel histórico que la orden del Cister desempeñó en Castilla hasta la llegada de la desamortización.

³³ Véase B. H. SLICHER VAN BATH, *Historia agraria de la Europa occidental (500-1850)*, 2.ª ed., Barcelona, Península, 1978, pp. 226 a 228.

DONATIVOS Y EMPRESTITOS SEVILLANOS A LA HACIENDA REAL (SIGLOS XVI-XVII)

JOSE IGNACIO MARTINEZ RUIZ
Fac. CC. EE. y EE. Univ. de Sevilla

1. INTRODUCCION

En el curso de la III Conferencia Internacional de Historia Económica, celebrada el año 1965 en Munich, Aldo de Maddalena, moderador de la sección dedicada al tema «Fiscalidad y Economía», expresaba en su *rapport général* algunas reflexiones que deseo retomar aquí como punto de partida de esta comunicación. Sólo voy a recordar una de ellas: la necesidad de encontrar vías comunes para los estudios de historia de la economía y de historia de las finanzas públicas, hasta ese momento casi totalmente disociados¹. Desde entonces, no cabe duda, se ha avanzado mucho. Las páginas que siguen, con las que queremos insistir en algunos aspectos de las interrelaciones entre finanzas públicas y desenvolvimiento del sector agrario en los siglos XVI y XVII, tienen también, entre otros, dicho propósito.

Gracias a trabajos como los de Ladero, Carande, Ulloa, Ruiz Martín, Domínguez Ortiz y Garzón Pareja, conocemos las líneas maestras de la Hacienda castellana en el período que estamos considerando y sus principales problemas; entre ellos, por una parte, toda la trama protagonizada por banqueros y asentistas extranjeros —alemanes, genoveses y portugueses, fundamentalmente— y, por otra, el progresivo volumen de la deuda y su repetida consolidación a través de «decretos» y «medios generales»². Sin embargo, otros capítulos de esa historia son bastante peor conocidos. Me refiero, por ejemplo, al papel jugado por instituciones como los municipios en la canalización «extraordinaria» de

¹ Aldo DE MADDALENA, *Fiscalité et économie: expériences et rapports dans l'histoire*, III Conferencia Internacional de Historia Económica (Munich, 1965), pp. 659-682, Mouton, 1968.

² M. A. LADERO QUESADA, *La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV*, La Laguna de Tenerife, 1973; Ramón CARANDE, *Carlos V y sus banqueros*, 3 tomos, Madrid, 1949-1967; Felipe RUIZ MARTÍN, «Las finanzas españolas durante el reinado de Felipe II», *Cuadernos de Historia*, núm. 2, 1968, pp. 109 a 173; Modesto ULLOA, *La Hacienda Real de Castilla en el reinado de Felipe II*, Madrid, 1977; Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, *Política y Hacienda de Felipe IV*, Madrid, 1960; Manuel GARZÓN PAREJA, *La Hacienda de Carlos II*, Madrid, 1981.

las disponibilidades monetarias por la Hacienda real³. Investigaciones sobre historia financiera francesa —emisiones del Hôtel de Ville, de París— e inglesa —Corporation of London— reflejan la importancia de dichas ciudades en la estructura hacendística de sus respectivos países⁴. Estudiando el caso de Sevilla (reino y ciudad claves para las finanzas castellanas a lo largo de prácticamente todo el Antiguo Régimen), lo que pretendemos es llevar a cabo un primer acercamiento a la función desempeñada por las haciendas locales en el contexto de los intentos llevados a cabo por los Austrias españoles para allegar recursos, aun recurriendo a todo tipo de expedientes. Se trata de un proceso cuya puesta en marcha exige tener en cuenta lo siguiente: por una parte, la existencia de una amplia base patrimonial municipal, que podía ser utilizada como garantía de donativos y préstamos a la Corona —perdiendo así los bienes de propios la función crediticia casi puramente local desempeñada hasta entonces—, y, por otra, la decisiva influencia que la Monarquía podía ejercer en los cabildos, por mediación de los corregidores y a través de tentadoras ofertas a los grupos allí presentes.

No cabe duda de que los distintos reyes encontraron en los municipios una amplia respuesta a sus demandas monetarias. La cuantía total de las partidas procedentes de los arbitrios y expedientes en que se vieron involucrados los ayuntamientos, así como su procedencia geográfica y su reparto cronológico, distan de conocerse con exactitud, aunque cifras parciales manejadas son muy elocuentes⁵. Si importante fue para la Hacienda real la obtención de estas sumas, no lo fue menos para las haciendas locales desprenderse de ellas, porque tal fenómeno vino a condicionar, en muchos casos de forma decisiva, su desenvolvimiento económico durante años. Ante todo, nos referimos a la deuda municipal así generada⁶. En última instancia, la imposibilidad de hacer frente durante varios años a los intereses de tal deuda, en ocasiones a causa del incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Corona para su pago, se salda recurriendo a la pública subasta del patrimonio municipal, fundamentalmente las tierras⁷. Dicho mecanismo, claro exponente de las interrela-

³ Con la palabra «extraordinaria» lo que pretendo es excluir los encabezamientos, repartimientos o arrendamientos asumidos por las ciudades.

⁴ Una visión de conjunto es la que ofrece Geoffrey PARKER, «El surgimiento de las finanzas modernas en Europa (1500-1730)», Carlo M. Cipolla Ed., *Historia Económica de Europa, siglos XVI y XVII*, pp. 410-464, Barcelona, 1979. Se puede ver también el artículo de Felipe RUIZ MARTÍN, *Crédito y banca, comercio y transportes en la etapa del capitalismo mercantil*, I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas, Santiago de Compostela.

⁵ Modesto ULLOA, *op. cit.*, pp. 647-685.

⁶ Felipe RUIZ MARTÍN señala otro importante mecanismo generador de deuda municipal en su artículo «Procedimientos crediticios para la recaudación de los tributos fiscales en las ciudades castellanas durante los siglos XVI y XVII: el caso de Valladolid», *Dinero y Crédito (siglos XVI al XIX)*, pp. 37-47, Madrid, 1978.

⁷ Algo distinto parece haber sucedido en Córdoba, a juzgar por lo que José Manuel

ciones a las que nos referíamos al principio de esta introducción, es una de las vías más importantes por las que tiene lugar la privatización de las tierras de propios⁸. Veamos a continuación lo sucedido en Sevilla⁹.

2. DONATIVOS Y EMPRESTITOS SEVILLANOS

En el amplio período que vamos a estudiar es posible distinguir dos etapas. La primera, que convencionalmente hacemos partir de 1565, se extiende hasta 1602. La segunda, que se inicia en 1621, abarca todo el resto del siglo XVII, siendo también este punto final una elección convencional. Entre ambas queda un espacio de veinte años en el que se empiezan a poner en práctica diversas medidas encaminadas a sanear el estado ruinoso —la auténtica quiebra— de la Hacienda sevillana y a capacitarla nuevamente, aunque sobre bases distintas, para seguir desempeñando una función eficaz en la canalización de numenario con destino a la Hacienda real.

A) ETAPA PRIMERA (1565-1602)

Tres son los temas que van a ocupar nuestra atención: la tipología y cuantía de los trasvases, la identidad de los prestamistas y las consecuencias del proceso.

a) *Tipología y cuantía de los trasvases*

En la mayor parte de los casos, el mecanismo es el que sigue: ante una petición real o para reafirmar sus privilegios seculares amenazados —en realidad, a veces, dicha amenaza sólo pesa sobre distintos intereses de los grupos privilegiados—, el Cabildo, en nombre de la ciudad o del conjunto del reino, hace un servicio en dinero al rey. Su papel se limita a lo siguiente: obtener a crédito la suma en cuestión y ponerla a disposición de la Corona en la fecha y lugar concertados. La Hacienda real, por su parte, y no siempre, como vere-

DE BERNARDO ARES concluye en su artículo «Presión fiscal y bienes de propios a principios del siglo XVII», *Axarquía. Revista de Estudios Cordobeses*, núm. 2, junio de 1981, pp. 131-124.

⁸ Este es uno de los problemas que, en un contexto más general, ha estudiado Antonio MIGUEL BERNAL en «Haciendas locales y tierras de propios: funcionalidad económica de los patrimonios municipales (siglos XVI-XIX)», *Hacienda Pública Española*, núm. 55, 1978, pp. 285-312.

⁹ Conviene señalar que la presente comunicación se centra exclusivamente, con las alusiones al reino que lleva su nombre que sean necesarias, en Sevilla-ciudad.

mos, se compromete a hacer frente a los intereses de la cantidad que se trate mediante la entrega de juros; sin embargo, la garantía última de los mismos son los propios de la ciudad. Este mecanismo amplía el horizonte crediticio de la Corona, en tanto que Sevilla ve disipados —al menos temporalmente, hasta la siguiente petición— sus temores. La robustez de la hacienda municipal y el mantenimiento de privilegios aparecen, así, unidos. Más adelante tendremos ocasión de ver cómo falla todo este montaje y cuáles son sus consecuencias.

Entre 1565 y 1566, la ciudad concierta, a través de los veinticuatro Garci Tello y Hernando de Almansa, diversos asientos con la Corona para anular la venta de las siguientes villas de su jurisdicción — pese a la existencia de privilegios concedidos en tal sentido por Alfonso X, Sancho IV y Carlos V—: Sanlúcar la Mayor, con su jurisdicción y alcabalas, a Pedro de Guzmán, conde de Olivares; Escacena, Campo de Tejada y unos cortijos y pesquerías sitos en Alcalá de Guadaira, a Francisco de Guzmán, marqués de la Algaba; Constantina, Villanueva del Camino y San Nicolás del Puerto, con su jurisdicción, alcabalas y todo lo demás perteneciente al señorío, a Fadrique Enríquez de Ribera, mayordomo y presidente del Real Consejo de las Ordenes. Salvo las alcabalas de Villanueva del Camino y San Nicolás del Puerto, que quedaron en manos de Fadrique Enríquez de Ribera ¹⁰, todo lo demás fue restituido a la ciudad, que hubo de pagar por ello 84.580.592 maravedís en concepto de devolución de lo que habían adelantado los compradores y de indemnización al rey por lo que dejaba (?) de percibir ¹¹. Para hacer frente a tal desembolso, Felipe II concedió a Sevilla facultad para usar arbitrios por valor de 172.400 ducados, distribuidos así: 120.000 de sisas sobre el vino, carne, pescado u otro cualquier producto, salvo el pan cocido, y los 52.400 restantes, del arrendamiento de pastos concejiles, dehesas y alcornocales. Con el fin de obtener rápidamente el dinero se autorizaba tomarlo a tributo, ofreciendo como garantía los propios y rentas de la ciudad y su tierra ¹².

Por asiento concertado en 1572 y confirmado en 1573, que tuvo como gestor al veinticuatro Hernando de Almansa, Sevilla pagó 83.000 ducados para seguir disfrutando del privilegio de proveer libremente tanto las escribanías de la ciudad como las de su tierra; 50.000 de ellos correrían con cargo a los propios de Sevilla, quedando los 33.000 restantes a cargo de los escribanos. Se concedió facultad, sin embargo, para tomar todo el dinero a tributo sobre

¹⁰ Salvador DE MOXO, «La venta de alcabalas en los reinados de Carlos I y Felipe II», *AHDE*, 1971, pp. 487-554.

¹¹ Un resumen general de los donativos y préstamos hechos por la ciudad antes de 1643 se encuentra en Archivo Municipal de Sevilla (AMS), Secc. 4.ª, t. 36, núm. 6.

¹² AMS, Secc. 1.ª, carpeta 6, núm. 107.

los propios, como mínimo a 14.000 el millar. Tanto en este caso como en el anterior, la iniciativa partió de Sevilla¹³.

En 1573, el veinticuatro Juan Núñez de Illescas gestionó en nombre de la ciudad asientos por valor de 800.000 ducados. Por ellos —es la primera vez que la Corona da una contrapartida con cargo a la Hacienda real— dio el monarca en empeño seis villas desmembradas de la Orden de Santiago: Montemolín, Monesterio, Fuente de Cantos, Calzadilla, Medina de las Torres y Almendralejo¹⁴, las seis con todas sus rentas, y otras cuatro de la propia jurisdicción sevillana: Utrera, Villamartín, Añícalçar y Cazalla de la Sierra. Se tasaron las rentas de las villas en 7.989.085 maravedíes, completándose esta cantidad para que Sevilla pudiese hacer frente a los intereses de 700.000 ducados —los 100.000 restantes fueron un donativo— con dos juros sobre alcabalas de 8.082.343 maravedíes cada uno y otro sobre el servicio ordinario y extraordinario de dos millones seiscientos setenta y ocho mil quinientos setenta y dos (2.678.572 maravedíes). Los 100.000 ducados de donativo antes mencionados se obtuvieron así: 60.000, de sobras del encabezamiento y del almojarifazgo, y 40.000, del arrendamiento de dehesas y baldíos de la ciudad. Los juros eran de 14.000 al millar. Este servicio permitió confirmar a Sevilla la provisión de los oficios de corredores «que se dizen de Lonxa, Aduana e Oreja, y que assi los ha proveídos libremente de tiempo inmemorial a esta parte»¹⁵.

Un nuevo servicio al rey, esta vez de 700.000 ducados, hizo la ciudad en 1579. Dicha cantidad se tomó a tributo de particulares a razón de 14.000 al millar, dando en empeño el monarca un juro de 50.000 ducados de renta sobre las alcabalas¹⁶.

De 1582 es un asiento de 50.000 ducados, propuesto en Cabildo por el marqués de Alcalá, para que no se vendiesen privilegios de hidalguía en el término y jurisdicción de Sevilla. La ciudad, por mediación del veinticuatro Juan Antonio del Alcázar, enviado a Lisboa con tal fin, fue autorizada a tomar dicha cantidad a tributo sobre sus propios¹⁷.

También en 1582 tomó Sevilla a tributo de particulares 300.000 ducados y sirvió con ellos al rey. Este, por su parte, asignó un juro de 8.035.714 maravedíes de renta, a 14.000 al millar, para satisfacer los intereses de dicha suma¹⁸.

De 746.666 ducados fue la contribución de 1583; como en anteriores oca-

¹³ AMS, Papeles del Conde de la Mejorada, t. 1, núm. 6.

¹⁴ Almendralejo pagó en 1575 por su exención. ULLOA, *op. cit.*, p. 675.

¹⁵ AMS, Secc. 1.ª, carpeta 7, núm. 118.

¹⁶ AMS, Secc. 1.ª, carpeta 17, núm. 30.

¹⁷ AMS, Actas Capitulares, Cabildo de 6 de marzo de 1582; AMS, Secc. 3.ª, t. 8, núm. 34.

¹⁸ Véase la nota 11.

siones, tomados a tributo de particulares, que cobrarían sus intereses a 14.000 el millar en seis juros sobre las alcabalas y almojarifazgos ¹⁹.

Un servicio de 560.000 ducados se realiza en 1588. Juros sobre las alcabalas y almojarifazgos permitirían pagar a la ciudad, a razón de 16.000 el millar, los intereses de dicha suma ²⁰.

Cincuenta mil ducados en 1590 y 90.517.784 maravedíes en 1591 son otras dos partidas que hay que añadir a la lista de servicios de Sevilla al rey ²¹.

Por fin, en 1592, la ciudad sirvió a Felipe II con la cantidad de 300.000 ducados. A cambio, el monarca se comprometía por un período de cincuenta años a que no hubiese caballeros de cuantía en Sevilla. El dinero se tomó a tributo a 14.000 al millar. Para hacer frente a sus intereses se autorizó la imposición de un cuarto de maravedí por ciento de todas las mercaderías que entrasen en la ciudad ²².

b) *Identidad de los prestamistas*

La existencia en el Archivo Municipal de Sevilla de un «Manual de los Tributos de la Ciudad», relativamente completo y bien conservado, para los años incluidos en esta primera etapa, permite reconstruir con cierta precisión una de las piezas más importantes del rompecabezas que intentamos poner en pie: quiénes prestaban al municipio sevillano las sumas con que éste —como se ve, casi un puro intermediario en muchas ocasiones— servía al rey ²³. La información que proporciona el citado Manual es la siguiente: fecha del tributo, nombre del beneficiario, razón a que había de cobrar sus intereses y monto anual de los mismos.

Si excluimos de las sumas señaladas en el apartado anterior los 84.580.592 maravedíes de los asientos de 1565 y 1566, los 50.000 ducados de 1590, los 90.517.784 maravedíes de 1591 y los 300.000 ducados de 1592 —unos no figuran en el Manual, otros de forma muy incompleta—, la suma total con que estamos trabajando, 4.056.046 ducados, se reduce a 3.239.666. El Manual de Tributos nos indica quién facilitó el 94 por 100 de esta segunda suma, poco más de tres millones de ducados, desglosando el total en 810 partidas ²⁴. Una primera lectura de las mismas pone de relieve la gran frecuencia con que los detentadores del poder local, viejos apellidos ilustres, por una parte,

¹⁹ AMS, Secc. 1.ª, carpeta 17, núms. 33 a 38.

²⁰ AMS, Secc. 4.ª, t. 3, núm. 6; AMS, Secc. 1.ª, carpeta 18, núms. 33 y 34.

²¹ AMS, Secc. 1.ª, carpeta 18, núm. 53.

²² AMS, Papeles Importantes del siglo XVI, t. 3, núm. 135.

²³ AMS, Secc. 15, Manual de los Tributos de la Ciudad.

²⁴ Para el caso concreto de los 83.000 ducados de las escribanías se ha recurrido a AMS, Papeles del Conde de la Mejorada, t. 1, núm. 6.

y familias que casi estrenaban nobleza, por otra, se introdujeron en los mecanismos del crédito público local en esta segunda mitad del siglo XVI²⁵. He aquí una fórmula más utilizada por los poderosos para beneficiarse económicamente de su administración de la hacienda municipal. Está claro, desde luego, que no son veinticuatro y jurados los únicos que prestan a la ciudad. Aparecen otros nombres no muy bien identificados aún, de los que sólo sabemos que eran vecinos de Sevilla. Encontramos también en esta larga lista de prestamistas a vecinos de Burgos, Toledo, Segovia y otras ciudades de Castilla. Figuran, asimismo, residentes en América²⁶ o Italia. Personalidades de distintas instituciones del reino, como el presidente de la Chancillería de Granada o el marqués de Auñón²⁷, del Consejo de Hacienda, también orientaban parte de sus capitales a estos negocios. Por fin, hemos de mencionar, siquiera brevemente, a la Iglesia: obispos, presbíteros, monasterios, iglesias, aparecen como beneficiarios de gran cantidad de tributos.

De lo expresado hasta aquí puede deducirse como dato importante la ausencia casi total de extranjeros —sólo aparecen en una ocasión, cuando, a propósito de un tributo de Juan Méndez de Castro por valor de 241.530 maravedíes, leemos: «se lo vendieron los Fucares»—. Se trata, pues, de un circuito monetario en el que los participantes no parecen estar relacionados con los asentistas, que trataban directamente con la Corona.

c) *Consecuencias del proceso*

Dada la riqueza de los propios de Sevilla, el hecho de haber tenido en arrendamiento durante muchos años alcabalas, tercias y almojarifazgos, y bajo su gestión el servicio ordinario y extraordinario, pocas ciudades llegaban a tener tanto crédito como ella. Por esta razón, en las ocasiones en que necesitaba con urgencia dinero, Felipe II recurría a Sevilla, donde esperaba obtenerlo con mayor rapidez y menores intereses. Ya antes hemos señalado la cuantía de estos servicios y las contrapartidas ofrecidas por la Corona: reafirmación de privilegios y juros sobre las alcabalas y los almojarifazgos. La suerte de estas rentas determinaba si se podrían o no cobrar los intereses de los juros allí situados y, automáticamente, si el Cabildo hispalense dispondría de dinero para satisfacer a sus acreedores²⁸. El repetido impago de algunos juros va a suponer

²⁵ En definitiva, se trata de los Guzmanes, Ponces de León, Enríquez, Medinas, Ortices, Riberas, Saavedras, etc., y de los Alcázar, Caballeros, Illescas, Dalvos, Herreras, etc. De unos y de otros habla Ruth PIKE en su libro *Aristócratas y Comerciantes. La sociedad sevillana en el siglo XVI*, Barcelona, 1978.

²⁶ Como Fernando de Zárate, que aportó en julio de 1588 la suma de 30 millones de maravedíes de una vez.

²⁷ En mayo de 1590 hizo un tributo de 15.750.000 maravedíes.

²⁸ Para esta cuestión de los juros se puede consultar el libro de Manuel TORRES LÓPEZ

el derrumbamiento de todo este montaje y la quiebra de la Hacienda municipal sevillana, última garante de las operaciones crediticias descritas. Se puede decir, pues, que la política fiscal practicada en el reinado de Felipe II fue la responsable del hundimiento de la Hacienda sevillana. Ahora bien, pecaríamos de simplistas si no matizásemos convenientemente esta afirmación. Me refiero, por ejemplo, a la deficiente administración de las rentas municipales, objeto de todo tipo de abusos y corruptelas, así como de frecuentes quiebras. Es ésta una realidad denunciada incluso por el rey Felipe III, en Real Cédula fechada en Denia, a 23 de agosto de 1599. Lo que en ella leemos casi permite prescindir de todo comentario:

«Tengo entendido que las dichas rentas están muy mal administradas, y que por consecuencia se disminuyen y defraudan de muchas maneras y por muchas vías: que en la cobranza, cuenta y razón de lo que de ellas procede, y que en el pago de los juros y libranzas que están consignados en ellas, no hay provisión conveniente ni se hace con la rectitud debida. Que a los ministros y oficiales del Cabildo y Regimiento de dicha ciudad, y a otras personas poderosas e influyentes, se les prestan cantidades de dineros, se les anticipan pagas de juros, y se usa de otros procederes ilícitos. Que los receptores de las rentas de la Ciudad de Sevilla convierten en su propio beneficio y aprovechamiento mucha parte de ellas...»²⁹.

La amonestación real es fácil de comprender teniendo en cuenta, entre otras cosas, que estaba en juego un sistema crediticio de primer orden para la Hacienda real; un sistema que se basaba en la buena salud económica de la más importante ciudad del reino de Castilla. Finalmente, hemos de tener presente también el peso de varios gastos extraordinarios realizados por Sevilla en los años finales del siglo XVI, a los que hizo frente tomando a tributo las cantidades necesarias. Destaquemos: 487.000 ducados para abastecer la alhóndiga de pan; 172.448 ducados utilizados en prevenciones bélicas tras el asalto a Cádiz por los ingleses en 1596, y 39.400 ducados consumidos en combatir la peste de 1599-1601 (a los que habría que sumar otros 100.000 gastados de los propios)³⁰.

Al dejarse de pagar los intereses de los tributos, muchos de sus titulares enviaron ejecutores con salario para tratar de hacer efectivas las cobranzas:

y J. M. PÉREZ PRENDES, *Los juros. Aportación documental para una historia de la deuda pública en España*, Madrid, 1967.

²⁹ Joaquín GUICHOT Y PARODI, *Historia del Ayuntamiento de Sevilla*, t. II, pp. 147-150, Sevilla.

³⁰ AMS, Secc. 1.ª, carpeta 182, núm. 175.

«y hubo tiempo en que tuvo —Sevilla, claro— 300 ducados de costas de salarios cada día, y a un acreedor vecino de Burgos se pagaron 3.000 ducados de costas y salarios, con lo cual llegó a estado de no tener con que empedrar sus calles ni acudir a los demás gastos forzosos».

Ante esta situación, en octubre de 1601, la ciudad pidió al rey el nombramiento de un juez privativo, con inhibición de Audiencias y Tribunales, que tratase de su desempeño³¹. A finales de 1602 llegaba a Sevilla con tal motivo Andrés de Alava, del Consejo de la Inquisición, primer juez de la que va a ser posteriormente conocida con el nombre de «Comisión del Desempeño»³². Esta Comisión es uno de los principales jalones de la historia hacendística sevillana. Las funciones de dicho juez y de sus sucesores en el cargo serían: tomar cuenta de los propios, pósito y sisas municipales; cobrar todos los maravedíes que se debieran a la ciudad e ir pagando con ellos sus deudas; acabar con la sangría que representaban los ejecutores con sus costas y salarios, compeliéndolos a que abandonaran la ciudad, y llevar bajo su control a la práctica una serie de arbitrios solicitados por Sevilla y concedidos por el rey.

Realmente, Andrés de Alava no hizo desempeño de tributo alguno en los dos años que estuvo en Sevilla. Su sucesor desde principios de 1605, Domingo de Zavala, del Consejo de Hacienda, va a basar su actuación en distinguir los «censos de cabimiento» —es decir, todos aquellos relacionados con los servicios hechos por la ciudad a Felipe II y para los cuales se disponía de las rentas de las villas desmembradas de la Orden de Santiago y de juro; de ahí su nombre— y los «censos de no cabimiento» —es decir, todos aquellos tomados de 1565 en adelante y no comprendidos en el grupo anterior—. Estos últimos, con un principal de 297.926.812 maravedíes y unos intereses de casi 20 millones de maravedíes —es decir, la misma cantidad que Sevilla obtenía del arrendamiento anual de sus propios a principios del siglo xvii—, van a ser objeto de una atención primordial por parte de los jueces del Desempeño. En redimir dicho principal pondrán su afán tanto el mismo Domingo de Zavala como sus continuadores, utilizando para ello el valor de lo procedido de los arbitrios concedidos por la Corona a la ciudad³³. Dichos arbitrios son 21, y se refieren a ventas de oficios, recargo en las entradas del Corral de Comedias, sisas sobre los mantenimientos y ventas y arrendamientos de

³¹ *Noticia de las causas que originaron los empeños de Sevilla y atraso de sus Propios y Rentas, formación de su concurso y nombramiento del señor Juez para conocer de su desempeño*. Este manuscrito se encuentra en el AMS, Papeles del Conde del Aguila, t. 21, núm. 1.

³² La cédula de nombramiento de Andrés de Alava se encuentra en AMS, Escribanías del Cabildo del siglo xvii, t. 20, núm. 61.

³³ AMS, Secc. 1.ª, carpeta 182, núm. 175.

tierras municipales. Gracias a su producto, a fines de 1614, el principal de los tributos de no cabimiento se había reducido a casi la tercera parte. De todos ellos nos interesan especialmente los relativos a la venta de tierras de propios ³⁴.

Es difícil determinar con precisión qué fincas constituían el patrimonio territorial del Cabildo sevillano. Ello obedece, en buena parte, a que los Libros de Propios sólo incluyen en sus relaciones las rentas arrendables, y no siempre todas. En el Libro de Propios de 1612 aparecen los nombres de las fincas siguientes: «Tierras del Pozo del Alamillo», «Ejidios de Sevilla», «Tierras del Arroyo de San Juan», «Las Navas de los Ballesteros», «Cortijo Rubio y Alloorín», «Cortijo de Algarve, Atamo y Gama», «Donadío de Juan Gómez», «Donadío del Bollo y Fuente de la Lapa», «Donadío de la Torre del Aguila», «Donadío de Alocaz», «Majada Alta con Ruchena», «La Reyerta del Gerivel», «Las Tierras de Viznagales», «Dehesa Hermosilla», «Tierras de Barrasa», «Dehesa del Armajal», «Dehesa Prado del Rey» y «Dehesa Fuente Higuera». En 1613, Juan de Gamboa, del Consejo de Hacienda y tercer juez del Desempeño, vendió con tal fin doce cortijos de pan llevar pertenecientes a los propios de Sevilla, aunque situados a varios kilómetros de la ciudad, en los términos de las cercanas localidades de Dos Hermanas y Utrera. Sus nombres son: «El Alamillo», «Arroyo de San Juan» ³⁵, «La Nava de los Ballesteros», «El Rubio», «El Alloorín», «Juan Gómez» ³⁶, «El Bollo», «Torre del Aguila», «Donadío de Alocaz», «La Triguera», «La Reyenta» y «La Reyentilla». Desgraciadamente, no conocemos aún la identidad de los compradores. ¿Se trata de los mismos que disfrutaban dichas fincas cuando todavía pertenecían a Sevilla, como, por ejemplo, Pedro de Guzmán, la única persona que en 1612 tenía arrendados simultáneamente dos cortijos de los propios de la ciudad? ¿Predominaron otros intereses? No lo sabemos, aunque cabe suponer que los hombres del poder trataron de beneficiarse de unas ventas auspiciadas por ellos mismos y en las que llevaban todas las de ganar, no sólo por sus mayores disponibilidades monetarias, sino también por haber participado en el nombramiento «de los diputados para la venta de los cortijos» ³⁷. En todo caso, espero encontrar pronto la respuesta en los estudios que sobre este particular llevo a cabo actualmente.

³⁴ AMS, Secc. 1.ª, carpeta 182, núm. 175.

³⁵ La venta del cortijo «Arroyo de San Juan» no está muy clara, porque vuelve a aparecer como renta arrendada de los propios de Sevilla desde 1617.

³⁶ Véase nota 31. Posiblemente, el «Donadío de Juan Gómez» se hallaba en el término de Los Palacios-Villafranca (Sevilla).

³⁷ AMS, Escribanías del Cabildo del siglo xvii, t. 20, núm. 63.

B) SEGUNDA ETAPA (DE 1621 EN ADELANTE)

En comparación con lo expresado para la primera etapa, la gran diferencia estriba en que ahora los servicios a la Corona —como siempre, tomando la cantidad en cuestión a tributo— no encuentran su contrapartida económica en la asignación de juros, sino en autorizar que la ciudad imponga sisas sobre los mantenimientos y cree o incremente diversos gravámenes comerciales. De esta forma, el aumento de la presión fiscal indirecta local es la verdadera fuente en la que se basan los beneficios netos obtenidos por la Corona merced a estos procedimientos. Sintomáticamente, el primer servicio que hizo la ciudad en esta segunda etapa —130.000 ducados en el año 1621— tenía como objetivo que Sevilla pudiera seguir disfrutando del derecho de un maravedí cada 400, que le había sido concedido en 1592 a raíz del asiento de los caballeros de cuantía³⁸.

Como para esta segunda etapa la información que poseemos es bastante menor, voy a limitarme a hacer una evaluación global de los servicios hechos por la ciudad a los tres últimos Austrias: reinado de Felipe III, 130.000 ducados; reinado de Felipe IV, 1.120.000 ducados, y reinado de Carlos II, algo más de 400.000 ducados.

Por lo que respecta a los prestamistas que adelantaron a tributo estas sumas, su identificación es difícil. No contamos para estos años con nada que se parezca, siquiera de lejos, a la ayuda representada por el Manual de Tributos para la etapa primera. Las escasas noticias que hemos podido encontrar tampoco se encuentran centralizadas, siendo, por tanto, necesario recurrir a notas que encontramos aquí y allá en distintos documentos. El resultado, mucho más pobre, se refiere exclusivamente al reinado de Carlos II. Nos limitaremos a citar los nombres más destacados: Pedro Palomino y Aguilar, Benito Antonio, Catalina de Zúñiga, Pedro de Villasís, Teresa de Castroverde, Manuel González de Aguilar, Lope de Olayzola, Manuel Delgado, Pedro de Ribera, Ignacio de Mungaburu, Rufina de Pineda, Juan Ochoa, Joseph de Arze, Juan Antonio de Zuloeta, Brígida de Mendoza, Pedro Malo y Juan Bruno Tello de Guzmán³⁹.

De todos los servicios incluidos en esta segunda etapa, el más importante es el que se realizó en 1630: 500.000 ducados⁴⁰. En sus cláusulas se capitulaba que volvieran a la jurisdicción de Sevilla los lugares de Gerena, Bormujos, El Garrobo y Burguillos, que habían sido vendidos. Una de las fuentes de donde se sacaría el dinero, concretamente unos 150.000 ducados, sería la venta de cuatro dehesas: «Malagonzillo» y «Cúbica», término de Cerro (Huel-

³⁸ AMS, Secc. 1.ª, carpeta 8, núm. 184; AMS, Varios Antiguos, núm. 1522.

³⁹ AMS, Secc. 1.ª, carpeta 181, núm. 156.

⁴⁰ AMS, Papeles del Conde del Aguila, t. 54, núm. 3.

va); «El Caño», término de Fregenal (Badajoz), y «El Juncal Perruno», término de Aznalcázar (Sevilla)⁴¹. A la hora de la verdad, parece ser que sólo se vendió la dehesa «El Juncal Perruno». Su comprador, en puja con Francisco de Ribera, fue Fernando de Medina y Guzmán, quien pagó por ella —tras partir de un ofrecimiento de 10.000 ducados— la suma de 21.000 ducados. Por lo que respecta a la dehesa «El Caño», con fecha de 12 de abril de 1630, sus arrendatarios, algunos presbíteros de Fregenal, en unión de Benito Fajardo, regidor perpetuo en dicha villa, ofrecieron 32.000 ducados. La venta no llegó a realizarse, pues estos personajes aparecen desde el Libro de Propios de 1634 como arrendadores de la finca⁴². Sirvan ambos ejemplos para comprobar que eran los grupos privilegiados los grandes beneficiarios de los intereses que se movían en torno a las haciendas municipales.

⁴¹ AMS, Secc. 1.ª, carpeta 10, núm. 118, y carpeta 170, núm. 42; AMS, Varios Antiguos, núms. 397 y 887.

⁴² AMS, Secc. 1.ª, carpeta 9, núm. 160.

DATOS PARA UN ESTUDIO URBANO —Y RIQUEZA— EN EL CORREGIMIENTO DE TARRAGONA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII

LUIS J. NAVARRO MIRALLES
Universidad de Barcelona

Fuente

Los registros de un total de doce catastros han servido de base documental para el estudio de los núcleos urbanos del Corregimiento de Tarragona en la primera mitad del siglo XVIII. Cronológicamente, corresponden al período en general de alza económica, entre 1724 y 1757¹.

El catastro, como es sabido, contenía una parte *personal*, impuesto que recaía sobre el rendimiento de las personas físicas; otra *ganancial*, sobre beneficios, y otra *real*. Este gravaba las tierras, rentas, casas y otras dependencias; tenía un carácter universal y preferente sobre cualquier otra imposición fiscal².

Los inmuebles —casas, fábricas, molinos, etc.—, según el Decreto de Patiño (1716), abonaban el 10 por 100 de las rentas, calculadas según los rendimientos de los alquileres *efectivos* o *consumidos*; los primeros eran las casas alquiladas, en un sentido neto, y los segundos, las habitadas por sus propietarios³.

Esta fuente aporta un conjunto de datos que se pueden considerar orientativos y próximos a la realidad. En este caso se analiza la parte urbana y riqueza de doce localidades tarraconenses, con el inconveniente que entraña relacionar el carácter estático de cada catastro con el dinamismo de un período de treinta y tres años. Por otra parte, las irregularidades propias de una documentación fiscal —errores y manipulaciones— quedan, en cierto modo, superadas en cuanto a los inmuebles, por las características de éstos, de más difícil ocultación, por su exterioridad y uso cotidiano, y, al mismo tiempo, en cuanto a la riqueza, porque se compensan las posibles ocultaciones con la proporcionalidad que da la utilización de un número representativo de pueblos.

¹ Se conservan en los Archivos: Archidiocesano, Histórico Provincial y Municipal de Tarragona; «Prim Rull», de Reus, y Municipales de Montblanc, Riudoms, Torredembarra, Valls y Vilaverd.

² Joan MERCADER, *L'Establiment del Reial Cadastre a Catalunya i la seva fonamentació econòmica i social*, Miscel·lània Fontseré, Barcelona, 1961, pp. 295-301.

³ Jordi NADAL/Emili GIRALT, *Barcelona en 1717-1718, un modelo de sociedad preindustrial* (Homenaje a Ramón Carande), Madrid, 1963, pp. 3-31.

El Corregimiento

El Corregimiento de Tarragona en el siglo XVIII comprendía las tierras de la amplia depresión que forma el *Camp de Tarragona*, la *Conca de Barberà* y parte del Priorato, además de una estrecha franja de tierra costera que se extendía hasta Vilanova en dirección a Barcelona.

En el *Camp de Tarragona*, entre la costa y el cinturón de montañas que la circunda, se encontraban tres grandes núcleos urbanos: Tarragona, capital corregimental; Reus y Valls. Pasada la primera cadena montañosa, en la *Conca de Barberà*, se situaba Montblanc, la villa más importante de la zona y, a su vez, residencia de uno de los tenientes del corregidor. Otras villas menores, de poblamiento antiguo, unidas a las influencias de los grandes núcleos citados, daban unas notables características urbanas al Corregimiento.

Los centros económicos

Reus.—Situado en el *Baix Camp*, era el centro comercial más importante. A mediados del siglo XVIII poseía 1.236 casas ⁴. El 41 por 100 (441 unidades) pagaban entre 20 y 10 sueldos, y una cuarta parte —260 casas— estaba por debajo. Entre 20 y 30 sueldos había el 16 por 100 (171 unidades). Por lo tanto, el 80 por 100 de las casas de Reus pagaban menos de 30 sueldos de cotización, cantidad equivalente a la de una casa de segunda categoría de Tarragona, según baremo de 1736.

En 1774 había 1.595 inmuebles, lo que supuso un aumento del 30 por 100 ⁵. El número de casas inferiores a 10 sueldos subió hasta alcanzar un tercio del total; sin duda, el crecimiento de la población, en parte inmigrante, influyó en este fenómeno. A pesar de este descenso cualitativo de los inmuebles, se mantuvo la misma estructura urbana en Reus, por la compensación de otros inmuebles de mayor calidad ⁶, ya que un cuarto de siglo después se mantenía el 80 por 100 de las casas en la cota de los 30 sueldos.

En cuanto a la riqueza, poseía, en 1774, 14 fábricas de aguardiente, 11 al-

⁴ De las 1.236 casas de Reus, no constaba el pago fiscal de 155; al desconocerse las calidades de estos inmuebles, los tantos por ciento se han hecho a partir del total de 1.081 casas de las que sí se sabe este dato. C. SOLÉ, *Reus a mediados del siglo XVIII, según el Real Catastro* (tesis de licenciatura en período de elaboración), Departamento de Historia Moderna en Tarragona.

⁵ X. XANXO J., *Reus en el último tercio del siglo XVIII, según el Real Catastro* (tesis de licenciatura en período de elaboración), Departamento de Historia Moderna en Tarragona.

⁶ En 1750 había siete casas por encima de los 100 sueldos de impuesto; en 1774, este número se duplicó, aunque proporcionalmente significó pasar del 0,64 al 0,94 por 100 del total inmobiliario.

macenes y seis prensas de vino ⁷. A su vez, la viña, entre 1716 y 1750, experimentó un crecimiento al pasar de un 46 al 63 por 100, cifra que repetirá en 1774. Este aumento lo hizo a costa de la sembradura, que descendió de un 27 (1716) a un 11 por 100 (1750-1774), y del yermo, que pasó del 17 (en 1716) al 4 por 100 (1750-1774). La demanda, junto con las inversiones en el campo, potenciaron el regadío: de inexistente en 1716, cubriría el 10 por 100 de la extensión del término en 1750-1774.

La agricultura de Reus, pues, con la del Corregimiento, se había transformado en estos años, al sustituir la sembradura por la vid. Esto, unido a una situación geográfica privilegiada, próxima a otros puntos productores de caldos, especialmente en su comarca y en la de Valls, y a su cercanía al puerto de Salou, el más importante del Corregimiento en el siglo XVIII, hacían de la villa de Reus el centro económico más activo de la Catalunya meridional.

Valls.—En 1748 tenía un total de 758 casas en su casco urbano, sin contar sus agregados de Fontscaldes y Picamoixons, que sumaban otros 40 inmuebles ⁸. La cualificación de aquéllas viene, según tabla del catastro, en tres categorías: la primera pagaba 40 sueldos por unidad, había en este grupo 67 casas; la segunda abonaba 30 sueldos, con un total de 152 viviendas, y la tercera, y más numerosa, con 539 casas, entregaba a la Hacienda real 20 sueldos por cada una de ellas.

En consecuencia, ofrecía una configuración urbana con un 70 por 100 de casas que estaban por debajo de los 20 sueldos; por lo tanto, el número de sus inmuebles de inferior calidad era un 10 por 100 menor al de Reus. Al grupo de baja cualificación de Valls habría que añadir las 40 casas de las agregaciones de Fontscaldes y Picamoixons, lo que equivaldría a sumarle un 5 por 100 más; si bien consideremos que este tanto por ciento que se añade comprendía dos núcleos urbanos que se encontraban a una hora de camino.

El tercio restante hasta completar el total de la villa se repartía: un 20 por 100 para las de segunda calidad, y un 10 por 100 para las de superior categoría.

La riqueza de Valls era eminentemente agrícola y artesanal, unida a los circuitos comerciales que controlaba Reus. En cuanto a la primera actividad, la viña cubría el 33 por 100 de sus tierras, con 2.220 jornales (el 63 por 100 de viña de Reus equivalía a 2.663 jornales de vides). La configuración, algo más quebrada, del Alt Camp impulsó, en general, unos cultivos más diversificados. Por un lado, una cuarta parte del término de Valls era yermo, del cual algo permanecía en barbecho, hasta pasar a engrosar el 15 por 100 de tierras

⁷ Siempre que se habla de riqueza industrial nos referimos a las «Industrias» contenidas en la parte *Real* del Catastro.

⁸ F. OLIVÉ OLLÉ, *La villa de Valls a través de la firma A. Baldrich i Janer, comerciante en aguardientes, 1770-1778*, Institut d'Estudis Vallencs, Valls, 1981.

destinadas a sembradura. Por otro, 670 jornales eran de regadío (10 por 100), el doble en extensión de los que tenía Reus.

En cuanto a su industria, el aguardiente constituía una de las mayores actividades productivas, junto con el cáñamo que crecía en el regadío. Había 14 fábricas de aguardiente, siete molinos de aceite y otros tantos de harina.

Montblanc.—Situada en la Conca de Barberà, próxima a la confluencia de dos ríos, estaba formada por un total de 284 casas. La mayoría —56 por 100— pagaba 6 sueldos, un tercio abonaba 12 sueldos por casa y un 10 por 100 pagaba de impuesto 24 sueldos. Es decir, la mitad de los inmuebles de Montblanc, en 1731, eran casas inferiores a las de cuarta categoría en Tarragona, según tabla de 1736⁹.

No obstante, la uniformidad urbana en Montblanc era mayor que en Tarragona, ya que en aquella villa la diferencia entre las calidades era menos sensible que en la capital. En cifras, suponía ir de un máximo de 50 sueldos a un mínimo de 10 en Tarragona, y de 24 a 6 en Montblanc.

La situación geográfica de Montblanc, alejada del mar y al otro lado del cinturón de montañas que configura el Camp de Tarragona, la mantuvo, en parte, alejada de los circuitos comerciales generados por el eje Valls-Reus-Salou.

Sus cultivos respondían a las características geográficas de mayor aislamiento y necesidad de autosuficiencia. Los ríos Francolí y Anguera, más los torrentes y acequias, favorecían la utilización de aguas y permitían que un 12 por 100 de sus tierras (445 jornales) tuvieran grandes posibilidades de ser regadas. En años de lluvias regulares, el regadío en Montblanc daría la mayor proporción conocida del Corregimiento. De igual modo, el bosque «montblanquí» ocupaba la mayor superficie corregimental.

La trilogía mediterránea: viña, olivos y cereales, estaba entre el 7 y el 10 por 100 de sus tierras, manteniendo un equilibrio que era infrecuente en el Camp de Tarragona. Sin embargo, casi la mitad de sus tierras (46 por 100) eran yermas, con la salvedad que el catastro «montblanquí» de 1731 especifica que un 7 por 100 era roquedal; por lo tanto, el yermo tendría una cierta cualificación.

Las actividades industriales, de igual modo, se equilibraban entre el número de fábricas de aguardiente (cinco) y los molinos de harina (seis); en el primer caso, eran más bien un servicio local —como sucedería con los dos molinos de aceite— que una actividad de mayor alcance económico.

Tarragona.—La capital del Corregimiento tenía 870 casas, de las que de 45

⁹ J. M. PORTA B., *La villa de Montblanc: agricultura, urbanismo i societat segons el cadastre de 1731* (tesis de licenciatura presentada en septiembre de 1981), Departamento de Historia Moderna en Tarragona.

no se especifican sus calidades ¹⁰. Las 825 restantes ofrecían valoraciones muy diversas, especialmente desde los 50 sueldos de impuesto tributario. A partir de aquí, el 22 por 100 asciende hasta alcanzar los 243 sueldos por unidad. Ahora bien, por encima de los 100 sueldos de carga fiscal había sólo siete casas, es decir, el 0,66 por 100. La de mayor cuantía —y la que más tributaba en el Corregimiento— era un inmueble que abonaba 343 sueldos anuales.

Con respecto a las casas de menor pago, el 16 por 100 del total (136 casas) cotizaba hasta 10 sueldos, y hasta 20 sueldos (315 inmuebles) representaba el 36 por 100. Por lo tanto, la mitad de las casas de Tarragona llegaban a los 20 sueldos (tercera categoría), una cuarta parte sobrepasaría escasamente la tasa de los 30 sueldos (segunda categoría) y el resto superaría la línea de los 50 sueldos de la primera categoría ¹¹.

La capitalidad del Corregimiento y su pasado histórico proporcionaban a Tarragona su fisonomía urbana. Muchas de sus casas, compuestas de sillares, habían sido construidas con el acarreo de las piedras extraídas de edificios y obras romanos.

Su agricultura era deficitaria y su industria más bien de servicio; poseía cinco fábricas de aguardiente, tres prensas de vino, dos molinos de harina y uno de papel ¹².

Poblaciones menores

Para el estudio de las localidades menores se han seleccionado un total de ocho pueblos: dos en la costa septentrional (Altafalla y Torredembarra), uno en el curso medio del Francolí (Vilallonga), otro en la Conca de Barberà (Vilaverd) y cuatro en el área de influencia de Reus (Riudoms, Duesaigües, Riudecols-Irlas y Porrera, éste ya en el Priorato).

En ninguna de las localidades estudiadas los inmuebles alcanzaron los 30 sueldos de cotización. En cuatro pueblos, la mayor parte de sus casas pagaban entre 3 y 6 sueldos, tal como sucedía en Montblanc con el 56 por 100 de sus inmuebles ¹³. Sin embargo, los otros cuatro pueblos tenían mejor cuali-

¹⁰ J. M. RECASENS I COMAS, «La propiedad urbana en Tarragona en 1736», *Revista Técnica de la Propiedad Urbana*, año V, núm. 9, 1964, pp. 53-60.

¹¹ J. M. RECASENS I COMAS, *El Corregimiento de Tarragona en el último cuarto del siglo XVIII*, Sociedad Arqueológica Tarraconense, Tarragona, 1963.

¹² A. MORENO PLAZA, *La ciudad de Tarragona en el primer tercio del siglo XVIII a través del catastro (1731)* (tesis de licenciatura en período de elaboración), Departamento de Historia Moderna en Tarragona.

¹³ En Altafulla suponía el 80 por 100 de sus inmuebles; en Porrera, el 82 por 100; en Riudecols-Irlas, el 75 por 100, y en Duesaigües, el 64 por 100.

ficación inmobiliaria, ya que más de la mitad de sus casas ingresaban los 6 sueldos de contribución catastral¹⁴.

La riqueza y la fisonomía urbana de estos pueblos menores dependían, en gran manera, de su ubicación. Un primer sector, junto a la desembocadura del Gaià, lo formaba Torredembarra (con 290 casas) y Altafulla (con 121). Las posibilidades de exportar a través de sus playas convirtió la zona litoral de cada localidad en una prolongación de la villa¹⁵.

Más al interior, Vilallonga, con 74 casas en 1726, poseía la mitad de sus tierras plantadas de viñas y sólo un tercio de sembradura¹⁶, y, próximo a Reus, Riudoms, por el número de casas (242) y la cualificación de éstas, se asemejaba a Montblanc. La viña (37 por 100) y la sembradura (17 por 100) eran sus cultivos primordiales¹⁷.

Dentro de esta misma primera zona de influencia de Reus, hacia el interior de la comarca del Baix Camp, se encontraban Duesaigües, con 39 casas, y Riudecols-Irlas, con 109. Se asentaban en un sector de unos 3.200 jornales, de los que un millar, es decir, el 30 por 100, eran vides. La sembradura alcanzaba el 10 por 100, y casi la mitad del total eran yermos, sobre todo en Duesaigües, donde pacían un par de cientos de carneros destinados, preferentemente, al mercado reusense.

Ya en el Priorato, en Porrera, con 117 casas, tan sólo el 18 por 100 de sus tierras estaban ocupadas, en 1753, por viñas, extensión que no presumía la futura expansión de los renombrados vinos de la zona. Por otro lado, un tercio eran pastos, dedicación infrecuente en los catastros del Corregimiento.

Vilaverd, en la Conca de Barberà, próxima a Montblanc, sumaba un total de 87 casas, repartidas en tres categorías. Casi una mitad de los inmuebles estaba en el límite de los 6 sueldos, y la otra en el de 12. Un 12 por 100 (11 casas) abonaba, por cada una, 9 sueldos. La distribución de los cultivos respondía a su localización en el sector montañoso entre la Conca y el Camp de Tarragona. La Garriga ocupaba un tercio de sus tierras, que alimentaba a más de un centenar de cabezas de ganado lanar, y otro tercio era de sembradura.

¹⁴ En Torredembarra, más del 70 por 100 de las casas estaban por encima de los citados 6 sueldos; en Vilallonga, el 60 por 100; en Vilaverd, el 56 por 100, y en Riudoms, el 54 por 100.

¹⁵ Equipo Departamento Historia Moderna en Tarragona, seminario «La reforma fiscal en el Decreto de Nueva Planta, el Real Catastro», publicado en *Estudis Altafullencs*, número 5, Centre d'Estudis d'Altafulla, 1981, pp. 27-57, con el título «Altafulla a través de su catastro de 1757».

¹⁶ L. NAVARRO MIRALLES, «Un «Llibre del Repartiment» del Real Catastro, Vilallonga, Corregimiento de Tarragona, 1726», *Quaderns d'Història Tarraconense*, II, Institut d'Estudis Tarraconenses Ramón Berenguer IV, Diputación Provincial de Tarragona, pp. 99-128.

¹⁷ J. M. SANTAMARÍA, *La Villa de Riudoms en el primer cuarto del siglo XVIII* (tesis de licenciatura en período de elaboración), Departamento de Historia Moderna en Tarragona.

Aproximación a la propiedad inmobiliaria

Los pagos fiscales inmobiliarios en el Corregimiento de Tarragona eran, normalmente, por alquileres *consumidos*, es decir, la mayoría de los inmuebles estaban habitados por sus propietarios. En el caso de la capital, sólo algo más de la mitad (55 por 100) respondían a esta circunstancia. En cambio, en Montblanc y en Torredembarra suponían el 80 por 100, y en Altafulla el 75, proporción que se repetía en Vilallonga. En Vilaverd, prácticamente el ciento por ciento de los vecinos eran dueños de sus casas.

En cuanto al número de casas por propietario, se podría adelantar que la riqueza inmobiliaria estaba muy distribuida y que las inversiones en fincas urbanas no eran muy rentables¹⁸, dedicándose los capitales a otras actividades económicas, en especial al campo. En Tarragona, por ejemplo, tan sólo 62 propietarios tenían dos casas, y, excepcionalmente, uno poseía seis inmuebles. En Torredembarra, 23 cotizaban a la Hacienda real por dos casas, y cinco propietarios lo hacían por más de dos.

En cuanto a la contribución fiscal, podemos afirmar que el pago tributario al catastro por concepto inmobiliario estaba entre algo más del 3 y el 5 por 100¹⁹.

A modo de conclusión

La villa de Reus, por el número de casas, destaca en el Corregimiento de Tarragona, cuadruplicando a Montblanc y superando en dos tercios a Tarragona y a Valls²⁰.

En cuanto a la cualificación, la capital poseía los inmuebles de mejor calidad. Partiendo de 22 sueldos, media total obtenida de las contribuciones por inmuebles de las cuatro grandes localidades del Corregimiento, observamos

¹⁸ A esta conclusión llega, con respecto a la capital, J. M. RECASENS («La propiedad urbana...»).

¹⁹ En el ejemplo de Altafulla, el pago catastral era de 25.010 sueldos, y el tanto por ciento inmobiliario era del 4,22 por 100. Vilallonga pagaba 25.510 sueldos, y por sus casas, el 3,24 por 100. En la Conca de Barberà, Montblanc, que pagaba en total a la Hacienda real 55.683 sueldos, abonando por su riqueza inmueble el 5 por 100, y Vilaverd, con un total de 18.235 sueldos, entregaba al fisco el 4,3 por 100 por sus casas.

²⁰ Los años cuarenta señalaron en el Baix Camp un segundo impulso agrícola, que va a durar hasta la década de los cincuenta, sólo turbado por la sequía de 1747 al 1752. Hacia 1750-60, la expansión agrícola del Baix Camp tiende a perder fuerza, al igual en población, cosa que no ocurrió en Reus, que, gracias al artesanado, conservará su crecimiento humano y, en consecuencia, el urbano. A. MORENO ALMARCEGUI, L. NAVARRO MIRALLES y equipo, «La recuperación demográfica en la primera mitad del siglo XVIII, en el Baix Camp, 1677-1767», *I Col·loqui del Camp de Tarragona, Conca de Barberà i Priorat*, Institut Ramon Berenguer IV, 1979, pp. 65-71.

que Tarragona estaba en más de 9 sueldos por encima de aquélla, mientras que Reus y Valls sólo superaban la media general en un sueldo cada una. Montblanc, por el contrario, se situaba en 12 sueldos por debajo.

Si consideramos ahora los extremos de las cotizaciones tributarias entre las casas que pagaban más y las que pagaban menos, independientemente de su número, apreciamos que en Tarragona los niveles entre ambos puntos iban desde -12 hasta +157, y en Reus desde -14 a +121.

En Valls, la regularidad de las cualificaciones de las casas estaban más próximas a la media general: iban de -2 hasta +18 sueldos. Montblanc, sin embargo, era la peor cualificada; sus valores estaban entre -16 y +2 sueldos.

De los ocho núcleos urbanos menores analizados, sólo uno, Torredembarra, supera levemente la media de 22 sueldos establecida por las cuatro localidades más importantes. Sin duda, su mayor cualificación viene de la actividad mercantil de la villa costera. Las demás están entre 1 y 20 sueldos en las cotizaciones fiscales.

La riqueza agrícola de los centros económicos más importantes —excluyendo la capital— era la vid (en Reus y Valls, mientras que en Montblanc destacaba el regadío). La sembradura, en retroceso en todo el Corregimiento, ante el empuje de la vid, constituía la otra dedicación mayoritaria del campo. La dinámica de los lugares menores seguían la pauta de sus capitales económicas y, en algunos casos, la complementaban.

La ganadería era eminentemente auxiliar: funciones agrícolas y de transporte. Es decir, preferentemente animales de tiro y carga. En un plano de menor importancia estaba el ganado productor de carnes.

En las actividades industriales controladas por el catastro, aparte los servicios a los pueblos —molinos de harina y aceite—, descollaban, sin lugar a dudas, las fábricas de aguardientes, que suponían la mitad de la industria censada en el Corregimiento. Los cuatro centros económicos aportaban el 86 por 100 del pago fiscal de la industria controlada hasta ahora, y dentro de esta cifra, el 20 por 100 del pago fiscal era por aguardiente ²¹.

En resumen, un Corregimiento con una tendencia a mantener numerosos e incluso importantes núcleos urbanos, potenciados por una población en aumento y por una agricultura que lleva a cabo la mutación de sus cultivos.

²¹ Reus tenía el 19 por 100 de las fábricas de aguardiente del total del Corregimiento encuestado y Valls el 20 por 100, mientras que Tarragona y Montblanc poseían el 7,35 por 100 cada una.

Cuantificación de los inmuebles: número de casas y pago catastral

TARRAGONA						MONTBLANC						REUS						VALLS					
N.º	%	Ss.	%	N.º	%	Ss.	%	N.º	%	Ss.	%	N.º	%	Ss.	%	N.º	%	Ss.	%	N.º	%	Ss.	%
-10 ...	136	16,48	1.360	5,58	160	56,34	960	33,75	260	24,08	2.085	8,28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10-20 ...	315	38,18	6.300	25,88	91	32,04	1.092	38,40	441	40,79	6.756	26,83	539	71,10	10.780	59,83	—	—	—	—	—	—	—
20-30 ...	—	—	—	—	33	11,62	792	27,85	171	15,81	4.758	18,89	152	20,05	4.560	25,30	—	—	—	—	—	—	—
30-40 ...	230	27,87	7.360	30,24	—	—	—	—	89	8,23	3.560	14,15	67	8,85	2.680	14,87	—	—	—	—	—	—	—
40-50 ...	65	7,87	3.250	13,35	—	—	—	—	48	4,44	2.380	9,45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50-100 ...	74	9	5.172	21,25	—	—	—	—	65	6,01	4.642	18,43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+ 100 ...	5	0,60	895	3,70	—	—	—	—	7	0,64	1.000	3,57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUMA ...	825	100	24.337	100	284	100	2.844	100	1.081	100	25.181	100	758	100	18.020	100	—	—	—	—	—	—	—
MEDIA ...	—	29,49	—	—	—	10,01	—	—	—	23,29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No ESPECI- FICA ...	45	?	—	—	—	—	—	—	155	—	2.426	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL ...	870	—	—	—	284	—	2.844	—	1.236	—	27.607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Agricultura: porcentajes sobre total (I)

	MONTEBLANC			REUS		
	Jorn.	%	Ss.	Jorn.	%	Ss.
Víña	332	2,32	4.954	2.663,54	18,62	61.361,95
Víña nueva	44,06	0,30	6	70,09	0,50	33,61
Olivar	250,5	1,75	1.466	212,67	1,49	1.917
Sembrado	272,43	1,9	3.990	443,01	3,10	5.950,98
Huerto	7,36	0,05	224	73,6	0,51	3.778,41
Regadío	445,6	3,12	13.510	395,05	2,76	16.360,32
Algarrobo	—	—	—	122,57	0,86	1.287,63
Almendros	—	—	—	14,55	0,1	168,02
Avellanos	—	—	—	33,36	0,23	940,5
Arboles frutales	—	—	—	—	—	—
Morenas	—	—	—	—	—	—
Noguerales	6	0,05	114	—	—	—
Bosque	261,37	1,83	174	6,23	0,04	12,49
Yermo	1.658,75	11,6	266	169,46	1,19	65,6
Rocas	269,12	1,88	22	—	—	—
TOTAL	3.547,19	24,8	24.756	4.204,13	29,40	91.876,51
						42,02

1 % = 145 jornales

1 % = 2.185 sueldos

Agricultura: porcentajes sobre total (II)

	VALLS			TOTAL		
	Jorn.	%	Ss.	Jorn.	%	Ss.
Viña	2.219,06	15,52	57.194,2	5.214,6	36,46	123.510,15
Viña nueva	133,15	0,93	22,04	247,3	1,73	61,85
Olivar	289,25	2,02	2.608,2	752,42	5,26	5.991,2
Sembrado	1.008,18	7,05	12.406,1	1.723,62	12,05	22.347,08
Huerto	19,37	0,14	988,02	100,33	0,7	4.990,43
Regadío	668,9	4,67	26.152,0	1.509,55	10,55	56.022,32
Algarrobo	21,31	0,15	190,42	143,88	1,0	1.478,05
Almendros	—	—	—	14,55	0,1	168,02
Avellanos	64,0	0,45	1.536	97,36	0,68	2.476,5
Arboles frutales	18	0,12	270	18	0,12	270
Morenas	0,37	—	—	0,37	—	—
Nogueras	—	—	—	6	0,05	144
Bosque	210,75	1,47	378,08	478,35	3,34	564,57
Yermo	1.558,28	10,9	258,4	3.386,49	23,69	590
Rocas	339,62	2,38	28,06	608,74	4,26	50,06
Total	6.550,24	45,80	102.031,5	14.301,56	100	218.664,03
						100

1 % = 145 jornales
1 % = 2.185 sueldos

Ganaderia

Años	Localidad	LANAR				TIRO Y CARGA								CERDA		BOVINO		TOTAL				
		Carneros		Ovejas		Burros		Bueyes		Machos		Mulos		Cerdos		Vacas		N.º	Ss.			
		N.º	Ss.	N.º	Ss.	N.º	Ss.	N.º	Ss.	N.º	Ss.	N.º	Ss.	N.º	Ss.	N.º	Ss.					
1731	Montblanc	345	232	693	693	80	160	45	135	33	198	87	522	1	1	16	48	1.300	1.989	21
1774	Reus	274	548	109	654	226	1.356	609	2.558	27
1748	Valls	559	2.236	425	850	44	132	283	1.702	1.311	4.920	51
TOTAL		345	232	1.252	2.929	779	1.558	89	267	142	852	596	3.580	1	1	16	48	3.220	9.467	10
TOTAL		%	...	10,71	2,45	38,9	30,93	24,19	16,45	2,76	2,82	4,41	8,99	18,50	7,81	0,03	0,01	0,5	0,5	100	...	100

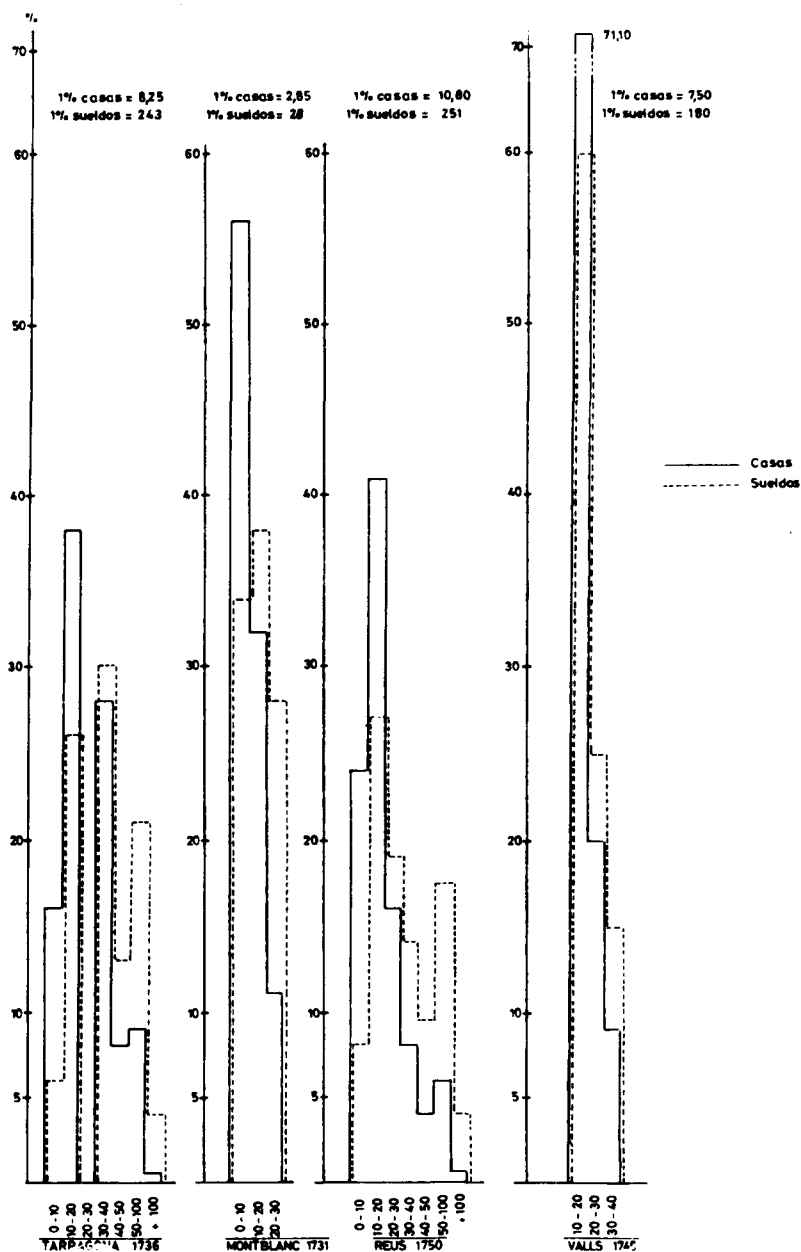
Industria

Años	Localidad	MOLINO DE ACEITE		MOLINO DE HARINA		MOLINO DE PAPEL		FABRICA DE AGUARDIENTE		PRENSA DE VINO		TOTAL					
		N.º	Ss.	N.º	Ss.	N.º	Ss.	N.º	Ss.	N.º	Ss.	N.º	Ss.				
		N.º	Ss.	N.º	Ss.	N.º	Ss.	N.º	Ss.	N.º	Ss.	N.º	Ss.				
1731	Montblanc	2	130	6	894	—	—	5	176	—	—	13	19,11	1.200	11,38
1750	Reus	3	100	—	—	—	—	13	460	—	—	16	23,53	560	5,31
1736	Tarragona	—	—	2	4.005	1	1.400	5	1.380	3	340	11	16,17	7.125	67,58
1748	Valls	7	140	7	1.150	—	—	14	368	—	—	28	41,17	1.658	15,72
TOTAL		12	370	15	6.049	1	1.400	37	2.384	3	340	68	100	10.543	100
TOTAL %		17,64	3,50	22,05	57,37	1,47	13,2	54,41	22,61	4,41	3,22	100			

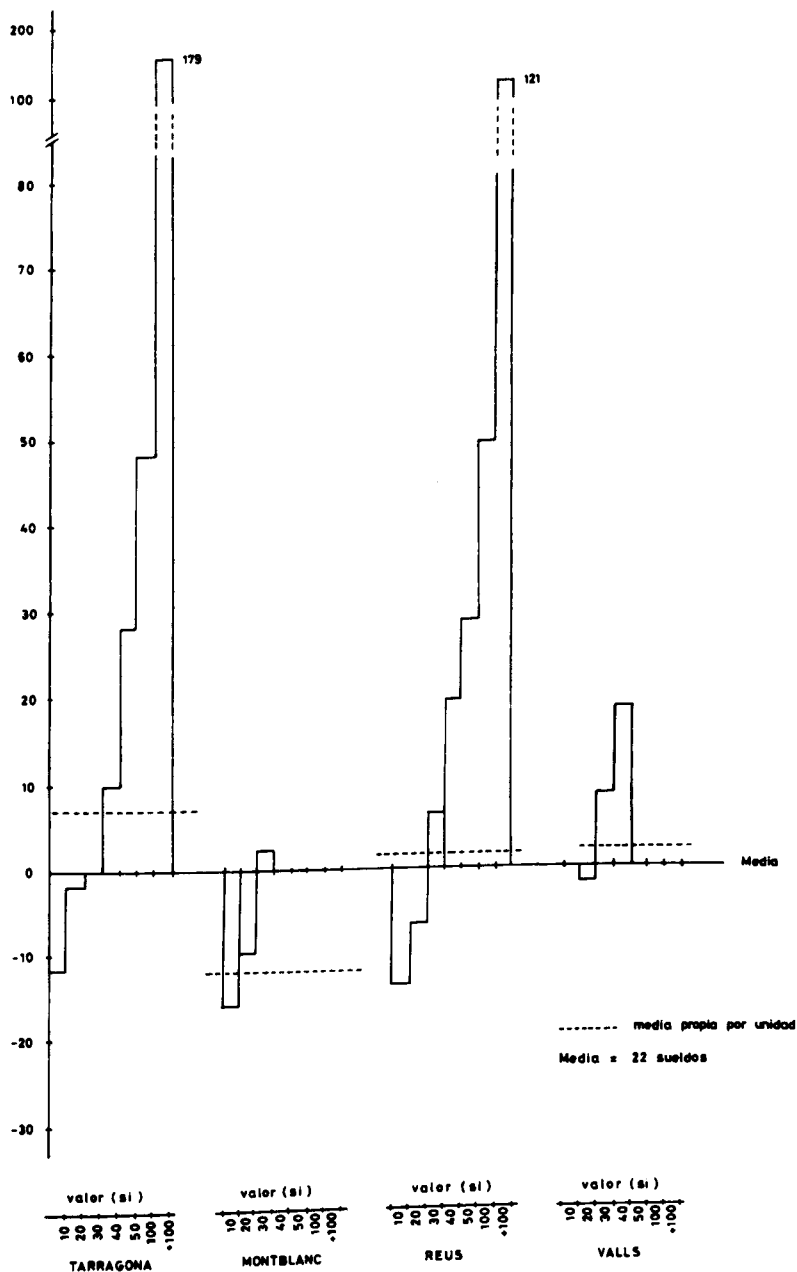
Industria

Años	Localidad	MOLINO DE ACEITE		MOLINO DE HARINA		MOLINO DE PAPEL		FABRICA DE AGUARDIENTE		PRENSA DE VINO		TOTAL	
		N.º	Ss.	N.º	Ss.	N.º	Ss.	N.º	Ss.	N.º	Ss.	%	%
1750	Alforja	3	90	3	2,83
1745	Cambrils	4	160	4	286	4	150	12	11,32
1788	Catlar, El	1	40	1	0,94
1748	Duesaigües	1	40	1	0,94
1731	Montblanc	2	130	6	894	5	176	13	12,26
1750	Reus	3	100	13	460	16	15,09
1724	Riudoms	4	284	4	3,77
1736	Tarragona	2	4.005	1	1.400	5	1.380	3	340	11	10,38
1757	Torredembarra	2	11	1	8	3	2,83
1748	Valls	7	140	7	1.150	14	368	28	26,42
1726	Vilallonga	1	160	4	140	5	4,72
1739	Vilaverd	4	48	2	143	3	24	9	8,49
TOTAL		21	738	26	6.802	1	1.400	54	2.839	4	348	106	100
TOTAL %		19,81	6,09	24,52	56,09	0,94	11,54	50,95	23,41	3,78	2,87	100	

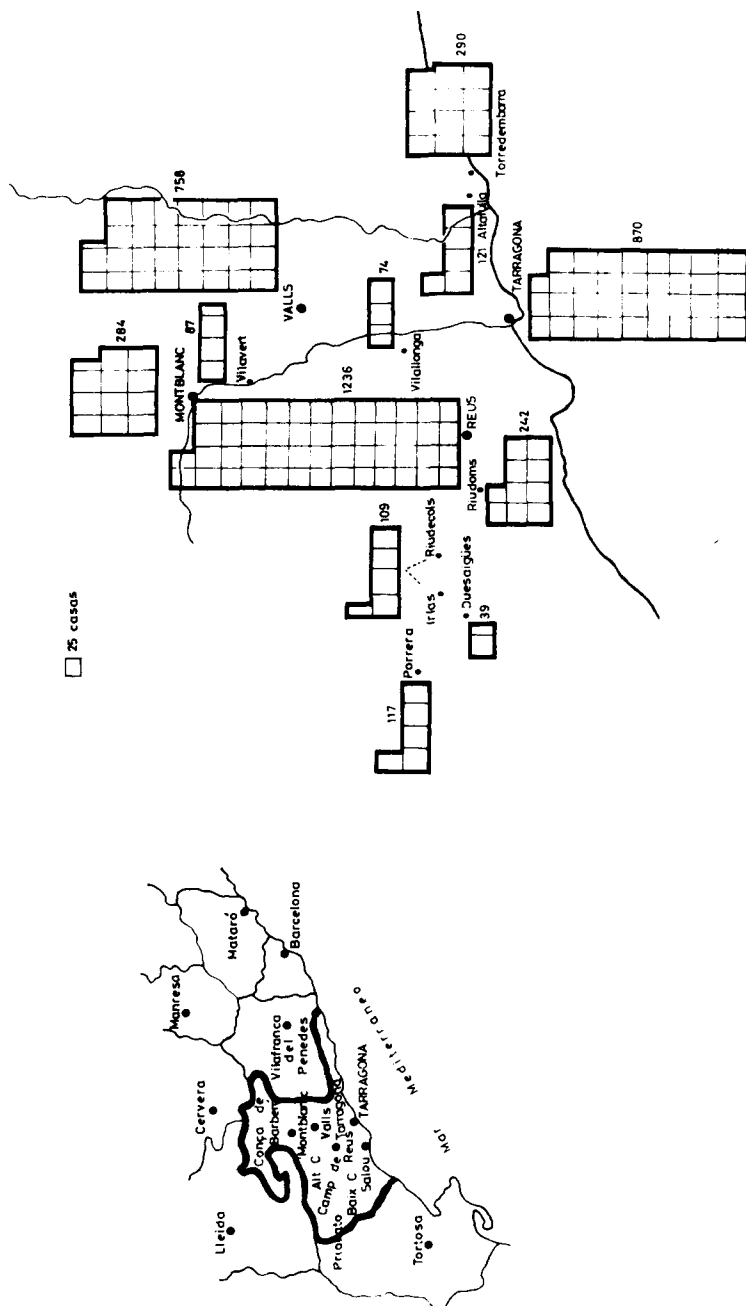
*Cuantificación de los inmuebles: número de casas y pago catastral
(centros económicos)*



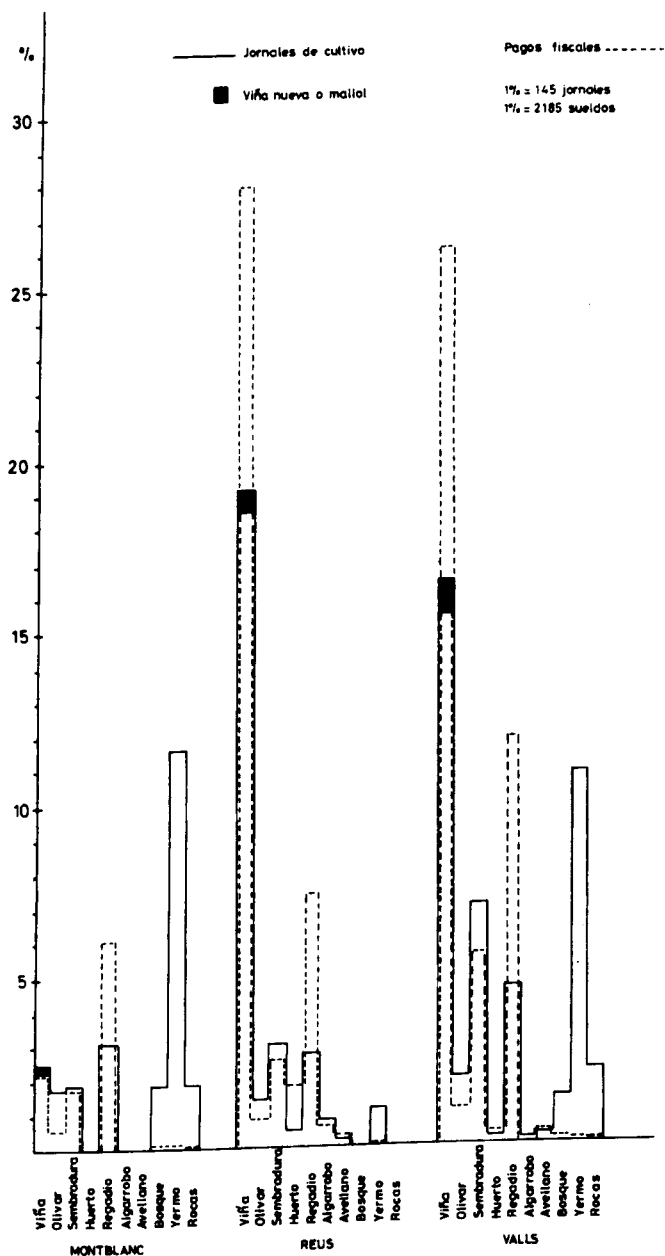
Cualificación de los inmuebles (media)



Corregimiento de Tarragona (siglo XVIII): inmuebles



Agricultura: Montblanc, Reus, Valls



EL CENSO DE FLORIDABLANCA EN ARAGON: UN ANALISIS GENERAL

GUILLERMO PEREZ SARRION

Colegio Universitario de Huesca
Universidad de Zaragoza

A nadie se le escapa ya, hoy en día, la importancia que el análisis demográfico tiene para poder establecer los mecanismos de funcionamiento de toda sociedad en el pasado. Esta, y no otra, es la justificación de las líneas que siguen¹, en las que se intenta examinar los rasgos generales del censo de Floridablanca (1787) en una región, hasta hace poco, muy olvidada en los estudios históricos globales de la sociedad española del Antiguo Régimen.

Varios censos generales se elaboraron en Aragón en el siglo XVIII; de algunos sólo se conservan noticias o un resumen de los mismos; de otros, además, los datos primarios locales, que son los que permiten un estudio exhaustivo. Hay, además, operaciones censales de ámbito local o comarcal. Los conjuntos censales documentados son, hoy por hoy, cuatro: uno de principios de siglo (1713, 1717 y 1718); el censo de Aranda (1768); un vecindario, probablemente militar, dado a conocer por Tomás de Lezaún (1776), y el censo de Floridablanca (1787).

De los cuatro, el más importante, por varios motivos, es el de Florida-
blanca: es tenido por el más fiable (lo que, de ser así, permite utilizarlo como punto de referencia para evaluar los restantes) y agrupa los datos por partidos, circunscripciones civiles que, al coincidir en conjunto con los límites administrativos de Aragón, permiten hacer comparaciones territoriales con facilidad. Hay, además, otras razones sobradamente conocidas: es el más completo (indica la composición profesional de la población) y, finalmente, se trata del primer censo civil hecho con finalidad puramente demográfica, no fiscal ni militar. La carta-circular remitida por Floridablanca el 25-VII-1786 a los in-

¹ La masa estadística proviene, sustancialmente, del procesado de los datos del censo en un ordenador CBM, modelo PET 2001. Debo mencionar expresamente mi sincero agradecimiento al profesor Antonio Moreno Almarcegui, de la Universidad de Barcelona, quien ha puesto a mi disposición no sólo el aparato, sino también un programa de análisis del censo que ha desarrollado personalmente para la elaboración de su tesis doctoral. No obstante, los errores que haya en estas páginas deben atribuirse exclusivamente al que suscribe. Los resultados se presentan forzosamente muy resumidos por razones de espacio.

tendientes y autoridades provinciales nos ilustra sobre las intenciones y circunstancias de la operación: poner al día el censo de Aranda, para comprobar el aumento de población (era instrumento de una política claramente desarrollista y populacionista), e iniciar con un claro sentido de modernidad una labor estadística que habría de repetirse con regularidad en adelante. La ocultación se intentó evitar prohibiendo se tomara el nombre de los censados, haciéndolo en tiempo de paz para evitar toda sospecha de que fuera con fines militares, y mandando que lo realizaran las justicias y cargos municipales locales acompañados del cura de la parroquia, para mayor autoridad². Todos estos extremos han sido ya señalados por trabajos como los de P. Vilar o J. Castelló Traver³.

El censo en Aragón

La documentación conservada comprende nueve legajos con doce de los trece partidos de Aragón⁴; falta todo el partido de Daroca, la hoja o estado de Albarracín-ciudad (pero están todas las demás y el resumen del partido) y el estado que resume los datos del partido de Jaca (pero están todas las hojas locales). En total, se enviaron 13 paquetes con los estados correspondientes a 1.625 pueblos, incluidos despoblados (que aparecen con la hoja en blanco), pardinas y cotos redondos⁵, y a 1.396 parroquias⁶. Tomás de Lezaún menciona en su repertorio más de 1.800 núcleos de población, incluidos casas, pardinas y santuarios⁷. La diferencia carece de significación demográfica; la

² El texto en el *Censo español executado de orden del Rey por el Excelentísimo Señor conde de Floridablanca, primer secretario de Estado y del Despacho, en el año de 1787* (Imprenta Real, Madrid, s. a.), *Advertencia* o introducción sin paginar. La intención propagandística al publicar los datos es evidente.

³ P. VILAR, *Catalunya dins l'Espanya moderna*, vol. III (Edicions 62, Barcelona, 1975), 36-46, y J. E. CASTELLÓ TRAVER, *El País Valenciano en el censo de Floridablanca. Análisis demográfico. Organización y presentación de los datos locales* (Institución «Alfonso el Magnánimo», Valencia, 1978), 11-25, con el mejor análisis regional del censo. La obra de F. JIMÉNEZ DE GREGORIO, *La población de la actual provincia de Madrid en el censo de Floridablanca* (1786) (Diputación Provincial de Madrid, Madrid, 1980), es simplemente una edición minuciosa de todas las hojas del censo referidas a localidades de la actual provincia de Madrid, incluida la capital, sin crítica ni análisis. Los escasos comentarios existentes (pp. 9-10, 141 y 221) confirman en general lo que aquí se dice del censo.

⁴ Biblioteca de la R(oyal) A(cademia de la) H(istoria), legs. 9/6180 (Albarracín, Alcañiz), 9/6181 (Barbastro), 9/6182 (Benabarre, Borja), 9/6183 (Calatayud), 9/6184 (Cinco Villas), 9/6185 (Huesca), 9/6186 (Jaca), 9/6187 (Tarazona, Teruel) y 9/6188 (Zaragoza).

⁵ «... no se ha hecho con todos porque en algunos no tienen sus parroquias distritos determinados...», en cuyo caso se hizo un solo estado de todo el núcleo de población. Carta del 17-IV-1787, BRAH, leg. 9/6188.

⁶ Según el resumen total del reino, en BRAH, leg. 9/6188.

⁷ Tomás de LEZAÚN, *Estado eclesiástico y secular de las poblaciones y antiguos y actuales vecindarios del reino de Aragón*, Zaragoza, 7-IV-1788, ms. en BRAH, sig. 9/4762, según se indica en la introducción al mismo, fol. 3.

población dispersa, de haberla, era censada en el núcleo de población cercano.

La cronología de la elaboración del censo en Aragón puede resumirse de la forma siguiente: la orden e instrucciones para su elaboración fueron remitidas por Floridablanca el 25-VII-1786; las operaciones censales se realizaron entre octubre de 1786 y febrero de 1787; el 16 de mayo de ese año, el intendente de Aragón, Antonio Ximénez Navarro, firmó la documentación ya tabulada y, al día siguiente, la envió a Floridablanca ⁸. El censo con los resúmenes provinciales de toda España no fue editado hasta 1789, o quizá después. Las autoridades que firman el censo en las hojas examinadas son el alcalde (casi siempre; pocas veces sabe escribir y firma por él el secretario) y el cura o sustituto, en las zonas rurales. En los núcleos urbanos grandes lo hacen de uno a cuatro regidores comisionados por el ayuntamiento, el cura o sustituto y, en ocasiones, diputados del común y/o síndicos personeros, dando fe con frecuencia el secretario o el escribano del ayuntamiento. Tanto la cronología como las garantías de la operación son idénticas a las descritas por J. Castelló para el País Valenciano ⁹.

Verificación de las cifras

Descartada en principio la posibilidad de errores de copia significativos, ya que los detectados en las operaciones matemáticas examinadas ¹⁰ son insignificantes, he procedido a comprobar la validez demográfica del censo mediante dos pruebas: el cálculo de tasas demográficas en base al mismo y la concordancia de densidades de población ¹¹. La primera sólo se ha podido realizar a nivel local, por no disponer de más registros parroquiales. El cuadro 1 muestra las tasas de natalidad, mortalidad y nupcialidad resultantes de once poblaciones aragonesas situadas, por este orden, en el somontano prepirenaico (cuatro), el secano árido de Monegros (dos) y la ribera regada del río Ebro (cinco). Se trata de una muestra al azar pequeña, pero que da cifras bastante verosímiles: considerando como normales para esta época y zona una natalidad y mortalidad del 35-45 por 1.000 y una nupcialidad del 7,8 por 1.000, las tasas de natalidad son totalmente normales, y las de mortalidad también; el

⁸ Con una carta; BRAH, leg. 9/6188.

⁹ J. CASTELLÓ, *El País...* (o. c.), 13-22.

¹⁰ Todas las de los doce partidos conservados, sus capitales y las de las parroquias de Jaca, Huesca, Zaragoza y Calatayud.

¹¹ A. EIRAS ROEL, «Test de concordancia aplicado a la crítica de vecindarios fiscales de la época preestadística», en *Las fuentes y los métodos. Quince trabajos de historia cuantitativa serial de Galicia* (Departamento de Historia Moderna, Universidad de Santiago, Santiago, 1977), 114.

CUADRO 1

Población y tasas de natalidad, mortalidad y nupcialidad de once poblaciones de Aragón en 1787

(En tanto por mil a partir de la cifra media del decenio 1782-1791)

	<i>Habs. 1787</i>	<i>Natalidad</i>	<i>Mortalidad</i>	<i>Nupcialidad</i>
Bespén	294	33,0	22,1	8,2
La Perdiguera (1)	327	31,5	13,5	5,8
Bolea	1.431	44,6	41,6	12,6
Puibolea	126	41,3	31,8	13,5
Castejón de Monegros	792	54,8	77,8	17,4
Sariñena	1.640	47,8	20,7	11,8
Tauste	3.016	39,1	32,3	11,1
Remolinos	485	46,8	67,6	11,8
Gallur	916	38,0	46,5	10,0
Pedrola	1.632	38,2	40,7	8,4
Sobradriel y Las Casetas (2)	321	48,6	67,6	16,2

(1) Hoy Laperdiguera.

(2) Núcleos de población y registros separados, pero una sola parroquia.

FUENTES: Archivo Diocesano de Huesca (*quinque libri* de Bespén, La Perdiguera, Bolea, Puibolea, Castejón de Monegros y Sariñena); Archivos Parroquiales de Tauste, Remolinos, Gallur, Pedrola y Sobradriel, y BRAH, legs. 9/6180 a 9/6188 (censo de Floridablanca).

que en Castejón de Monegros, Sariñena o Remolinos se desvíen algo puede deberse a circunstancias locales o coyunturales¹². Las tasas de nupcialidad son algo elevadas, pero creíbles también por la misma razón.

La prueba de densidades de población ha sido hecha en tres partidos: Zaragoza (sin la capital), Jaca y Albarracín, comparando las densidades de 1787 con las resultantes del censo de 1960¹³. En ninguno de ellos se produjo hasta esa fecha nada que alterase la densidad tradicional, vinculada a los recursos naturales, salvo la industrialización zaragozana, por lo que la comparación es perfectamente posible:

¹² Casi todos los pueblos reseñados sufrieron una crisis demográfica en los años 1784-1786.

¹³ La relación de términos municipales, superficie de cada uno y cifra de habitantes del censo de 1960 en J. M. CASAS TORES (director), *España. Atlas e índices de sus términos municipales* (CECA, Madrid, 1969, 2 vols.).

	Km ²	Habs. 1787	Habs/Km ²	Habs. 1960	Habs/Km ²
Jaca	2.749	26.008	9,96	31.215	11,35
Zaragoza ¹⁴	6.005	68.567	11,42	103.650	17,26
Albarracín	1.516	14.972	9,9	10.558	7,0

Las zonas montañosas de los partidos de Jaca y Albarracín, con tierras pobres, predominio ganadero y nula industrialización, soportan densidades muy débiles y prácticamente idénticas. Las cifras del partido de Zaragoza son parecidas, pero sus mayores posibilidades agrícolas, puestas en marcha poco a poco, explican el crecimiento que se observa ¹⁵.

El censo parece mostrar, pues, una solidez global innegable.

Efectivos totales

Aragón tenía, según el censo, 614.070 habitantes. Es importante determinar si en esta cifra estaba incluida o no la llamada población institucional o residente en comunidades: conventos, monasterios, casas de religiosos, colegios, hospitales, hospicios, cuarteles y casas de reclusión, expósitos y misericordia. En el País Valenciano no estaba incluida ¹⁶; sin embargo, en Aragón se comprueba que al menos una parte de la misma sí estaba englobada en las cantidades totales. Este hecho es importante porque, como veremos, modifica las tasas de masculinidad. Las pruebas encontradas son las siguientes:

a) La población castrense de Jaca y Zaragoza (115 y 3.627 personas, respectivamente) está sumada en los totales de estas poblaciones.

b) Los estados de población de una buena parte de las parroquias de la ciudad de Zaragoza hacen constar expresamente que en ellos están sumados «los conventos» ¹⁷; son 2.209 personas de un total de 3.931 ciudadanos habitantes en comunidades, sin contar los cuarteles ya mencionados.

¹⁴ Excluido el término municipal de Zaragoza (1.040,6 Km²) y sus habitantes (42.600 en 1787; 393.425 en 1960).

¹⁵ Este equilibrio secular se ha roto en los últimos veinte años a consecuencia de la emigración. Compárese, por ejemplo, estas cifras con los grandes aumentos de población que hay en todas las comarcas catalanas entre 1718 y 1787; las cifras en P. VILAR, *Catalunya...* (o. c.), III, 181.

¹⁶ J. CASTELLÓ, *El País...* (o. c.), 32.

¹⁷ Santa Engracia, San Miguel, Nuestra Señora de Altabás, El Pilar, San Nicolás y San Gil, que suman 20 comunidades. Las demás, con 22 comunidades, no dicen nada; pueden haberlas sumado o no. Los «conventos» son también otras instituciones: dos hospitales, cinco colegios, la Casa de Recogidas y la Real Casa de Misericordia.

c) La población de las 17 comunidades de Calatayud-ciudad, 544 personas, está sumada en estado aparte e incluida en el total de la misma.

En total suman 6.497 personas, que están ya incluidas con seguridad: 3.742 con fuero militar, 2.753 sin él. Es importante saber la proporción de hombres y mujeres:

	<i>Varones</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Total</i>
Población castrense	3.446	296	3.742
Comunidades de Zaragoza incluidas con seguridad	1.553	658	2.211
Comunidades de Calatayud	346	148	544
TOTAL	5.345	1.102	6.497

El estado original manuscrito que suma la población total del reino sólo recoge en relación adjunta los conventos y casas de religiosos; en cambio, el resumen regional del censo impreso incluye, además, las demás instituciones. Ninguno menciona la población castrense.

Hechas estas consideraciones, hay que concluir que la cifra de 614.070 habitantes puede darse por buena ya que incluye con seguridad al menos casi la mitad de la población institucional; una cifra más exacta sólo podrá obtenerse el día en que sean analizadas y sumadas todas las hojas del censo. Ahora bien, en el caso de que se piense que falta población institucional habría que añadir a esta cantidad la diferencia de restar a la población de comunidades que trae el censo impreso (9.248 personas) las expresadas de Zaragoza y Calatayud ya incluidas (2.755 personas), o sea, 6.493 personas; lo que da una cifra máxima de 620.563 habitantes.

Veamos a continuación la distribución por partidos que aparece en el cuadro 2; la extensión y situación de éstos se puede ver en el mapa adjunto. Como la documentación del partido de Daroca está, hoy por hoy, perdida, la única forma de reconstruir su población es restar la de todos los partidos al total de la población aragonesa. La cifra que se obtiene, 60.166 habitantes, es muy probablemente correcta; según he podido comprobar es muy parecida a la del censo de 1776¹⁸, y la relación capital-resto del partido que se obtiene con ella (véase cuadro 2) es similar también, por ejemplo, a la del repartimiento de 1713¹⁹, que es 5,27 por 100.

¹⁸ T. DE LEZAÚN, *Estado...* (o. c.), fols. 21-23, BRAH, sig. 9/4762.

¹⁹ Biblioteca Nacional, Sección, Secc. Manuscritos, sig. 2274.

CUADRO 2

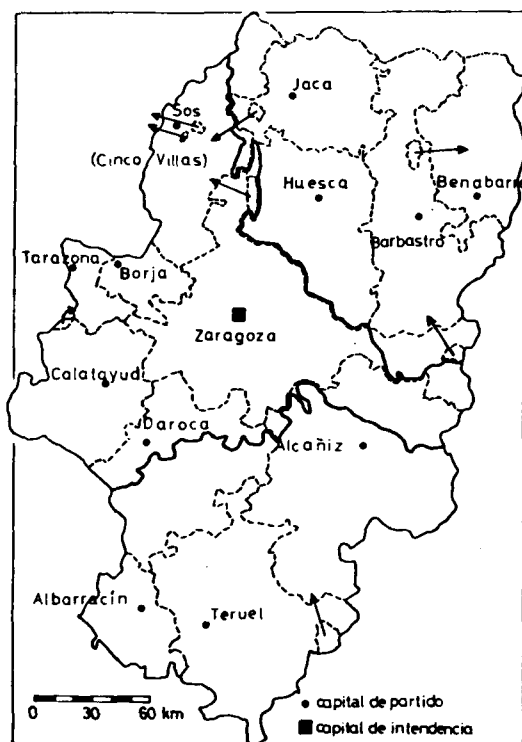
Población de Aragón en 1787 por partidos

<i>Partido</i>	<i>Habitantes del partido</i>	<i>En %</i>	<i>Habitantes de la ciudad cabeza de partido</i>	<i>En %</i>
Jaca	26.008 (1)		3.198	12,3
Huesca	35.467		6.885	19,4
Barbastro	55.517		5.318	9,6
Benabarre	28.394		1.973	7,0
TOTAL A	145.386	23,7		
Cinco Villas	32.669		2.448 (3)	7,5
Borja	17.469		3.588	20,5
Zaragoza	111.167		42.600 (4)	38,3
Alcañiz	101.739		5.542	5,5
TOTAL B	263.044	42,8		
Tarazona	16.953		6.964 (5)	41,1
Calatayud	57.179		8.544 (6)	14,9
Daroca	60.166 (2)		2.778 (7)	4,6
Albarracín	14.972		2.011 (8)	13,4
Teruel	56.370		6.270	11,1
TOTAL C	205.640	33,5		
TOTAL	614.070	100	98.119	16,0

- (1) Se obtiene de sumar todos los núcleos de población del mismo, ya que el estado general del partido no aparece.
- (2) El legajo de Daroca no está. La cifra se deduce de restar a la cifra del estado general del reino, 614.070, la que se obtiene de sumar todos los demás partidos, 553.904.
- (3) Sos.
- (4) Incluye las parroquias extramuros de Mozarrifar, Movera y Montañana, pero no las de los lugares de Peñafior (609 habitantes) y Villamayor (864 habitantes), pertenecientes a Zaragoza, ni tampoco Las Casetas (aldea) y Juslibol (lugar), muy cercanas a la capital.
- (5) Hubo un error al cuadrar; la suma total del cuadro del estado general de la ciudad es de 6.954.
- (6) Cifra del manuscrito; personalmente, he sumado 8.556.
- (7) Según el ms. de D. TRAGGIA, *Descripción geográfica de la capital y todos los Pueblos del Partido y Comunidad de Daroca, uno de los del Reino de Aragón* (Cervera del Río Alhama, 1790), fol. 240, BRAH, 9/6260.
- (8) Falta el estado de la ciudad. La cifra se deduce de restar a los 14.972 habitantes del partido, según el estado general del mismo, la suma de todas las demás poblaciones, 12.961 habitantes.

FUENTE: BRAH, legs. 9/6180 a 9/6188. Salvo los casos que se expresan, las cifras son las de los estados generales originales conservados en los legajos respectivos.

Partidos e intendencia del reino de Aragón en 1776



FUENTE: Según el mapa de J. F. FORNIÉS en *Gran Enciclopedia Aragonesa* (t. X, UNALI, Zaragoza, 1982), s. v. «Propiedad de la tierra»; basado, a su vez, en los datos de T. DE LEZAÚN, *Estado eclesiástico...* (o. c.), ms. de 1776, en BRAH, sig. 9/4762.

Hecha esta precisión y considerando las tres grandes unidades naturales del territorio aragonés: Pirineos, depresión central y Sistema Ibérico, el cuadro 2 muestra al menos dos hechos relevantes: una distribución poblacional bastante uniforme (el 57,2 por 100 habitaba las montañas y somontanos) y un escaso peso demográfico de Zaragoza en el conjunto regional (6,9 por 100).

Distribución por edad, sexo y estado civil

El cuadro 3 permite contemplar la estructura por edades de la población aragonesa en relación con la media española. Se pueden ver tres hechos destacables: un grupo joven (7-25 años) más nutrido, menos efectivos de adultos (25-40 años) y una cifra de ancianos apenas superior a la media. Los dos primeros indican, sin duda, un crecimiento demográfico superior a la media nacional en el período 1760-1780, precedido de una cierta ralentización a mediados de la centuria. Las diferencias con Cataluña son muy claras: el principado tenía más niños y más ancianos, testimonios, respectivamente, del descenso de la mortalidad infantil en la región en esos años y de un período, 1714-1738, de máximo crecimiento de la población del principado tras la guerra de Sucesión. La distribución de las edades en el País Valenciano presenta características similares. Castelló y Vilar apuntan para explicar la gran población infantil la hipótesis de una mortalidad menor, debido a mejores condiciones sanitarias, y/o un alza de la natalidad²⁰, y Castelló sugiere para explicar la nutrida población de ancianos en el País Valenciano la posibilidad de una corriente inmigratoria en las primeras décadas del siglo²¹. Todo es posible. De todas formas, debe destacarse un hecho: la población de mayor edad es superior a la media española en las tres regiones. La recuperación primisecular posterior a la guerra debió ser coincidente.

CUADRO 3

Distribución por edades
(En tanto por mil sobre el total de cada zona)

<i>Edad</i>	<i>España</i>	<i>Aragón</i>	<i>Cataluña</i>	<i>P. Valenciano</i>
0-7	182	181	201	184
7-16	177	179	175	179
16-25	159	164	145	157
25-40	218	210	197	213
40-50	119	120	132	113
Más de 50	145	146	150	153

FUENTES: España y Cataluña, P. VILAR, *Catalunya...* (o. c.), III, 119; País Valenciano, J. CASTELLÓ, *El País...* (o. c.), 35 (reproduce también las de España y Cataluña); Aragón, elaboración propia.

²⁰ P. VILAR, *Catalunya...* (o. c.), III, 124-125.

²¹ J. CASTELLO, *El País...* (o. c.), 37, y P. VILAR, *Catalunya...* (o. c.), III, 120.

El análisis de la distribución por sexo presenta más problemas. En el cuadro de Livi Bacci con las tasas de masculinidad de las distintas regiones españolas ²², la cifra de Aragón es, después de la del País Valenciano, la más elevada de todas. Como es sabido un número elevado de varones es generalmente indicador de inmigración; ¿hubo un movimiento inmigratorio en Aragón?

La respuesta no es fácil y exige cierta argumentación. Lo primero que hay que observar es que el País Valenciano ya no encabeza la lista. Castelló ha comprobado, en efecto, que las tasas regionales calculadas por Livi Bacci son inferiores a la realidad porque no incluyen la población de comunidades que al ser de predominio masculino elevarían las cifras; a excepción de la del País Valenciano en donde, según ha comprobado, el autor italiano sí sumó la población institucional. En total, 11.203 personas sobre 771.881 habitantes según el censo. Así la tasa de masculinidad, que según Livi Bacci debe ser 108, es en realidad, según Castelló, 102,71 ²³.

Algo parecido pasa en Aragón. Ya se ha indicado que el censo había sumado al menos los militares, la población comunitaria de Calatayud y por lo menos la mitad de la población comunitaria de Zaragoza. Restando estas cifras del censo tenemos:

	<i>Varones</i>	<i>Mujeres</i>	<i>TM resultante</i>
Población del censo	315.737	298.333	105,83
Militares y población comunitaria de Calatayud, Jaca y Zaragoza	5.341	1.102	
TOTAL	310.342	297.231	104,41

con lo que la tasa de masculinidad (TM) que hay que comparar con las demás se rebaja bastante. Sumando a las cifras de población institucional del censo impreso ²⁴ (6.080 varones, 2.956 mujeres) las mencionadas de militares (3.446 varones, 296 mujeres) resultan 12.778 personas, de las cuales el censo ha sumado al menos 6.496; restarlas ha producido un descenso de un punto y medio en la tasa de masculinidad media regional. En el supuesto de que el censo haya sumado ya más población institucional, la tasa puede bajar casi otro tanto, acercándose a niveles más normales.

²² Copiado en J. NADAL, *La población española (siglos XVI a XX)* (Ariel, Barcelona, 1973), 100.

²³ J. CASTELLÓ, *El País...* (o. c.), 42-46.

²⁴ *Censo español...* (o. c.), hoja núm. II.

Hecha esta consideración, veamos el cuadro 4 y el gráfico adjunto. Lo primero que se observa son dos fenómenos de tipo general: uno, que ninguna de las tres curvas regionales consideradas se aleja demasiado de la curva tipo, lo que confirma la fiabilidad global del censo²⁵; dos, que la tasa del grupo de 7-16 años es anormalmente elevada en todos los casos. La de Aragón lo es más aún, pero se ve que se trata de un fenómeno general. ¿Una confusión censal en los sexos? No se habría producido sólo en el censo de 1787, puesto que las curvas nacionales de los censos de Aranda (1768) y Godoy (1797) muestran lo mismo²⁶.

CUADRO 4

Tasas de masculinidad por edades según el censo de 1787

(Las tasas de España sí incluyen la población comunitaria; las de Aragón, sólo en parte —véase texto—; las del País Valenciano, no)

<i>Edad</i>	<i>Curva tipo (1)</i>	<i>Edad</i>	<i>España</i>	<i>Aragón</i>	<i>País Valenciano</i>
Al nacer	105,0	0-7	104,3	103	106,4
0-4	102,4				
5-9	102,5	7-16	105,2	112	107,7
10-14	102,8				
15-19	103,3	16-25	98,3	107	98,6
20-24	104,0				
25-29	104,7	25-40	99	104	101,7
30-34	105,6				
35-39	106,1	40-50	98,3	102	99,8
40-44	105,8				
45-49	104,0				
50-54	101,0				
55-59	97,1				
60-64	92,0				
65-69	88,5	más de 50	93,3	104	100,5
70-74	83,8				
75-79	79,0				
80-84	74,2				
Todas las edades			99,9	105,8 (2)	102,7

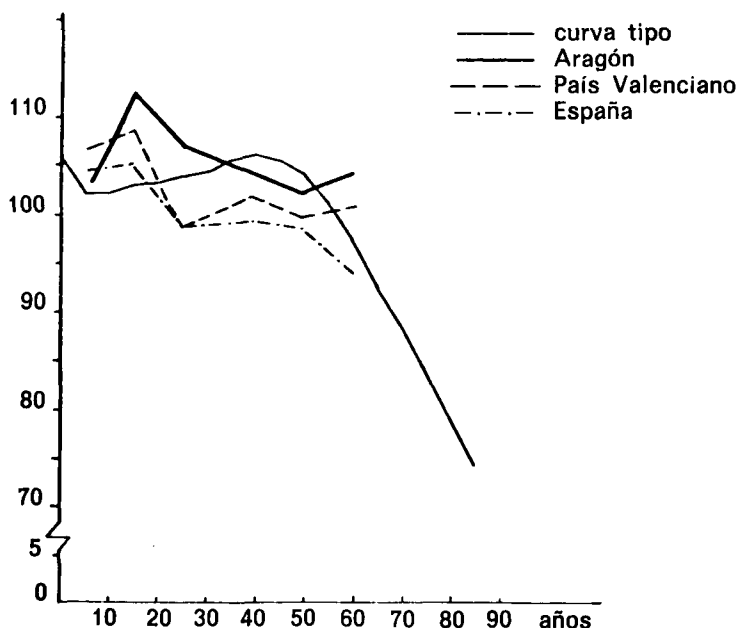
(1) Correspondiente a una población estable con mortalidad constante y esperanza de vida al nacer de treinta años.

(2) Según se indica en el texto, la tasa a comparar es 104,41, como máximo.

FUENTES: Curva tipo, L. HENRY, *Manuel de démographie historique* (Droz, París, 1970), 39; España, F. BUSTELO, *La población...* (o. c.), 75; Aragón, elaboración propia; País Valenciano, J. CASTELLÓ, *El País...* (o. c.), 44.

²⁵ Hecho ya señalado, en general, por F. BUSTELO, «La población española en la segunda mitad del siglo XVIII», en *Moneda y Crédito* (Madrid), 123 (1972), 53-103.

²⁶ Las curvas en F. BUSTELO, *La población...* (o. c.), 86.

Tasas de masculinidad por grupos de edad en 1787

FUENTE: Cuadro 4.

Pero volvamos a los problemas regionales. Las tasas de Aragón muestran aún dos hechos relevantes: una masculinidad elevada en las edades adultas y otra mayor aún en la población anciana. La explicación de la sobremasculinidad en adultos puede estar en la inclusión en el censo de los habitantes de comunidades, que al estar compuestas mayoritariamente por adultos elevan la cifra. Más interesante aún es la elevación de la tasa en el grupo de más de cincuenta años, tanto más cuanto coincide con lo que se observa también en el País Valenciano, y que vuelve a sugerir la posibilidad de una inmigración en las dos décadas posteriores a la guerra de Sucesión, lo que habría provocado una sobremasculinidad que, en 1787, aún se reflejaba en este grupo de edades²⁷. Como ya se ha dicho, Castelló admite expresamente tal posibilidad²⁸.

²⁷ Como es sabido, a partir de los cincuenta años la mortalidad masculina es superior a la femenina, por causas naturales, como puede comprobarse en la curva tipo y en la del conjunto nacional.

²⁸ J. CASTELLÓ, *El País...* (o. c.), 38.

También puede deberse a una omisión censal de las mujeres en las edades superiores.

Vayamos ahora con la distinción por estados a partir de los totales regional y nacional del cuadro 5. Lo primero que se distingue es una diferencia entre los varones casados en edades fértiles (grupos de 16-25 y 25-40 años) y las mujeres en la misma situación en favor de éstas, diferencia que se observa en el conjunto español y que es más acentuada en el caso de Aragón: había más mujeres casadas en la región. Este dato es importante porque refuerza las elevadas tasas de masculinidad antes apuntadas; Nadal ha mostrado la relación existente entre el mayor número de varones y una mayor nupcialidad femenina, que en el caso de Aragón era la tercera más alta de España, tras Extremadura y el País Valenciano: 64,3 por 100²⁹. Hay que preguntarse también si la elevada nupcialidad femenina era inductora de una natalidad igualmente alta. En cambio, en la vejez (grupos de 40-50 y más de 50 años) la relación de casados se invierte, tanto en el conjunto nacional como en Ara-

CUADRO 5

Reparto según sexo, edad y estado civil de la población en 1787
(En porcentaje sobre el total de cada grupo de edad)

Edad	Varones			Mujeres		
	Solteros	Casados	Viudos	Solteras	Casadas	Viudas
ESPAÑA						
0-6	1.000	—	—	1.000	—	—
7-16	997	3	—	995	5	—
16-25	805	189	6	724	265	11
25-40	228	742	30	184	759	57
40-50	120	805	75	114	730	156
Más de 50	100	686	214	102	523	375
ARAGON						
0-6	1.000	—	—	1.000	—	—
7-16	997	1	—	996	3	—
16-25	823	171	4	724	266	8
25-40	203	769	27	97	845	57
40-50	99	828	72	49	797	153
Más de 50	93	677	229	41	581	376

FUENTES: España, elaboración propia a partir del censo de 1787, según el cuadro de F. BUSTELO, *La población...* (o. c.), 74; Aragón, elaboración propia.

²⁹ J. NADAL, *La población...* (o. c.), 100-102, quien incluye un cuadro con los totales regionales tomado de Livi Bacci.

gón, mientras que aumenta el número de viudas en relación al de viudos, lo que puede responder quizá al hecho de que los hombres tenían mayor posibilidad que las mujeres de contraer nuevas nupcias.

Quedan aún dos indicadores interesantes: nupcialidad precoz y celibato definitivo. El cuadro 6 muestra en Aragón, por lo que se refiere a la nupcialidad precoz (grupos de 7-16 y 16-25 años), cierto retraso en la edad de contraer matrimonio en relación al conjunto nacional, retraso que es mayor en los hombres, y contrasta con una mayor precocidad de hombres y mujeres en el País Valenciano, hecho que Castelló atribuye a un mayor desarrollo agrícola y manufacturero³⁰. Por lo que se refiere al celibato definitivo, se observa un número pequeño de solteros varones y sobre todo mujeres, producto sin duda de la elevada nupcialidad femenina, ya indicada en edades anteriores.

CUADRO 6

Nupcialidad precoz y celibato definitivo (En porcentaje sobre el total de cada zona)

NUPCIALIDAD PRECOZ (CASADOS MENORES DE 25 AÑOS)						
<i>Edad</i>	<i>España</i>		<i>Aragón</i>		<i>País Valenciano</i>	
	V.	M.	V.	M.	V.	M.
7-16	0,37	0,53	0,18	0,33	0,26	0,43
16-25	19,52	27,56	17,18	26,64	18,97	31,93
CELIBATO DEFINITIVO (SOLTEROS MAYORES DE 40 AÑOS)						
<i>Edad</i>	<i>España</i>		<i>Aragón</i>		<i>País Valenciano</i>	
	V.	M.	V.	M.	V.	M.
40-50	11,98	11,39	9,92	4,91	9,93	8,03
Más de 50	9,97	10,19	9,37	4,16	8,52	6,89

FUENTES: España y el País Valenciano, J. CASTELLÓ, *El País...* (o. c.), 47-48; Aragón, elaboración propia.

En conjunto, y sintetizando lo dicho hasta ahora, no resulta aventurado formular como muy probables las afirmaciones siguientes sobre la población aragonesa:

— Existía una distribución poblacional estructural bastante equilibrada entre las dos zonas montañosas y la depresión (lo que no excluye la existencia

³⁰ J. CASTELLÓ, *El País...* (o. c.), 47-48.

de movimientos migratorios coyunturales o no). En un mundo muy ruralizado, el peso demográfico de Zaragoza era aún muy escaso, aunque su peso económico y político fuera mayor.

— Debió haber una recuperación demográfica en las dos décadas posteriores a la guerra de Sucesión, que parece coincidir con la que se produjo también en los otros dos países de la antigua Corona de Aragón. En ella quizá pudo haber una corriente inmigratoria. En las décadas de 1760-1780 se observa un nuevo crecimiento demográfico, que en este caso es anterior al del País Valenciano y Cataluña.

— La tasa de masculinidad de la población anciana apoya la idea de una inmigración a principios de siglo.

— En la década de los ochenta había una elevada nupcialidad adulta, sobre todo femenina. Sin embargo, la edad de contraer matrimonio era por esos años algo más tardía que en el resto de España, por lo menos en los varones. Esta elevada nupcialidad persiste en la población de más de cuarenta años, lo que indica que no es un fenómeno episódico, sino que se remonta por lo menos hasta el primer tercio de la centuria.

La investigación del censo abarca también las características demográficas de cada partido y, con el fin de distinguir mundo rural de mundo urbano, las capitales respectivas³¹.

El análisis por partidos no revela, visto en conjunto, grandes contrastes, pero sí matices y rasgos aislados destacables. Así, la distribución por edades muestra una presencia nutrida de población muy joven en Tarazona y menos en otras (Calatayud, Borja, Cinco Villas), que evidencia una coyuntura de aumento de la natalidad comarcal en los tres lustros anteriores; en Benabarre hay una carencia de adultos de ambos sexos, especialmente varones, vinculada a una fase demográfica de crisis (mortalidad o emigración) que tuvo lugar en las dos décadas subsiguientes a 1750.

Por lo que se refiere a las tasas de masculinidad, resulta aventurado considerar las de adultos sin saber si incluyen la población comunitaria. En las edades superiores (más de 40 años), las cifras de varones ancianos inferiores a la tasa media de Aragón y más semejantes, por tanto, a la media nacional son las de Borja, Zaragoza, Tarazona y Calatayud. La elevada media aragonesa debe atribuirse, por exclusión, a los demás. En el grupo de más de 50 años, las tasas mayores se dan en partidos montañosos como Benabarre (110), Albarracín (108) y Teruel (111).

³¹ No se consideran los partidos de Jaca y Daroca y las ciudades de Jaca, Daroca y Albarracín. En el comentario que sigue sobre los partidos no se tiene en cuenta la población de la capital cuando ésta supone más del 20 por 100 de la total del partido; caso de Huesca, Zaragoza, Tarazona y Calatayud.

Finalmente, merece destacarse el contraste entre la mayor proporción de casados en las zonas de la depresión más llanas, con un hábitat más agrupado y mayores posibilidades de comunicación: Alcañiz, Cinco Villas, Zaragoza, Tarazona, Calatayud, y los porcentajes menores observables en partidos más montañosos y de hábitat más disperso: Benabarre y, también, Barbastro, Huesca y Albarracín, en los cuales la nupcialidad era, sin duda, menor. Estos rasgos se mantienen en los grupos de edad inferiores, lo que quiere decir que no se compensaba con un adelanto de la edad del matrimonio. Esto con toda probabilidad debía originar una menor tasa de natalidad.

Examinemos ahora las principales características del conjunto de núcleos urbanos analizados, que permiten precisar por exclusión si las características demográficas atribuidas hasta ahora al conjunto de la población aragonesa y a su distribución zonal lo eran sólo del mundo rural; y también, al considerar la distribución por estados y profesiones, descubrir el desarrollo de las nuevas formas productivas que acompañaban al crecimiento de las ciudades.

En efecto, la estructura por edades de los núcleos urbanos muestra mucha menos población infantil (debido probablemente a una mayor mortalidad) y mucha más población adulta entre 25 y 50 años sobre todo masculina, lo que parece indicar no sólo más población comunitaria, sino también una corriente inmigratoria. Este es un hecho a tener en cuenta de la mayor importancia. La nupcialidad; esto es, el número de casados, es menor, sobre todo en hombres. El caso de Zaragoza es el más claro: a partir de los 25 años, la población de hombres célibes es mayor que en cualquier otro sitio, lo que se relaciona con la existencia de más población eclesiástica, de criados y miembros del servicio doméstico y de estudiantes y soldados solteros; caso este último no aplicable a las demás ciudades aragonesas, salvo Huesca, que tenía una abundante población estudiantil universitaria, y Jaca, guarnición militar.

En consonancia con lo dicho, las tasas de masculinidad son superiores en todos los grupos a las generales hasta los 50 años, probablemente a consecuencia de la mayor mortalidad de las mujeres en esas edades; a partir de ahí se equilibran. Si se distingue por estados, se observa que las tasas de masculinidad aumentan mucho más aún en la población célibe adulta.

La distribución por estados y profesiones

La cuestión de la distribución profesional de la población «activa» del censo presenta no pocas cuestiones por resolver, muchas de ellas analizadas por Castelló³², y que podemos resumir así:

³² J. CASTELLÓ, *El País...* (o. c.), 48-67.

— La hoja impresa tiene una división profesional insuficiente. Por ejemplo, no aparecen los distintos oficios en las actividades artesanales. Sí aparecen, en cambio, los «fabricantes», epígrafe destinado a censar los empresarios de las nuevas industrias³³; pero, en cambio, no hay un apartado para los obreros industriales, ocultos quizá en las cifras de jornaleros y criados³⁴.

— El clero y la nobleza, estamentos privilegiados, están reflejados en el censo; pero muchos «hidalgos» eran simples campesinos sin significación económica y social.

— Los epígrafes «labradores» y «jornaleros» no incluyen la totalidad de la población campesina. El concepto «labradores» no distingue entre propietarios y arrendatarios. Los campesinos aparceros no aparecen tampoco especificados. Los ganaderos, tampoco.

— La denominación «criados» incluía tanto a miembros del servicio doméstico como a jornaleros fijos de casas nobles, conventos y otras instituciones.

— Como la división del trabajo en una sociedad preindustrial como la aragonesa es menor, muchos individuos tenían al menos dos actividades; sin embargo, en el censo sólo aparecen en una. Así, por ejemplo, muchos jornaleros agrícolas podían trabajar además en la artesanía, las manufacturas o el servicio doméstico, y viceversa; el *putting-out* o trabajo a domicilio es sobradamente conocido en esta época. De la misma forma podían considerarse comerciantes tanto los artesanos de las zonas rurales, que cobraban frecuentemente en granos el producto de sus ventas a los labradores, como los grandes arrendadores de diezmos y tierras señoriales, que luego comercializaban grandes excedentes de granos³⁵. La especialización en esta actividad era pequeña.

Para verificar todos estos puntos en el censo de Floridablanca en Aragón podemos comparar, al igual que hace Castelló³⁶, los efectivos totales de algunas profesiones en el censo que estudiamos con las del censo de Godoy de 1797: las variaciones que pudieron producirse en un lapso de diez años no podían ser importantes. El cuadro 7 muestra los resultados de la operación. Las cifras de nobles son coincidentes; lo mismo puede decirse de las de labradores, jornaleros y población castrense. A partir de aquí surgen las diferencias; las cifras de criados de 1787 engloban, posiblemente, sirvientes domés-

³³ P. VILAR, *Catalunya...* (o. c.), III, 45.

³⁴ En Aragón, estas categorías prácticamente no tienen importancia a nivel general, porque apenas había industrialización.

³⁵ G. PÉREZ SARRIÓN, «Comercio y comercialización de granos en Aragón en el siglo XVIII: una panorámica general», en *Estado actual de los estudios sobre Aragón. Actas de las III Jornadas, celebradas en Tarazona del 2 al 4 de octubre de 1980* (s. e. [Instituto de Ciencias de la Educación], Zaragoza, 1981), vol. II, 1013-1021, y concretamente 1016-1018. Véanse también las consideraciones de P. VILAR, *Catalunya...* (o. c.), III, 44-46.

³⁶ J. CASTELLÓ, *El País...* (o. c.), 56-60.

CUADRO 7

Efectivos de algunas profesiones en Aragón según los censos de 1787 y 1797

1787		1797	
Hidalgos	9.144	Nobles	7.058
Labradores	58.765	Labradores propietarios	49.165
		Arrendatarios	9.577
		Ganaderos	998
		TOTAL	58.841
Jornaleros	40.796	Jornaleros	43.256
Criados	22.009	Pastores	10.750
		Marineros	43
TOTAL	62.805	Cazadores	150
		Pescadores	44
		TOTAL	54.243
Fabricantes	3.632	Fabricantes	17.352
Artesanos	20.348	Artesanos y menestrales	12.499
Comerciantes	1.688	Comerciantes	276
		Conductores	273
		TOTAL	549
Con fuero militar	4.120	Militares	6.053
Estudiantes	4.275	Estudiantes	1.630
		Alumnos/as de escuelas de primeras letras	31.582

FUENTES: Respectivamente, BRAH, leg. 9/6188, y *Censo de la población de España de el año de 1797. Executado de orden del Rey en el de 1801* (s. e., s. l., s. a.), hoja III.

ticos y jornaleros agrícolas en número indeterminado, pastores (que en su mayor parte habían de ser jornaleros de los grandes propietarios ganaderos) y una parte de los obreros de las manufacturas que en el censo de 1797 aparecen en el epígrafe «fabricantes». A su vez, las cifras por este último concepto son muy divergentes, lo que demuestra confusión del mismo por parte de los ejecutores de ambos censos. Lo mismo puede decirse de los apartados dedicados a estudiantes y comerciantes. Las cifras de comerciantes confirman lo que arriba se ha dicho sobre ellos: el término era entendido de formas diversas, al menos en Aragón.

Señalemos también, aunque sea de pasada, que el censo de 1797 completa el de 1787 en dos puntos muy importantes: muestra el escaso número de labradores renteros frente al de labradores propietarios de tierra³⁷ y permite

³⁷ En el mapa de E. FERNÁNDEZ DE PINEDO, A. GIL NOVALES y A. DÉROZIER, *Centralismo, ilustración y agonía del Antiguo Régimen (1715-1833)* (t. VIII de la *Historia de*

descubrir que en el sector ganadero, de gran importancia económica en Aragón ³⁸, había un grado considerable de concentración de la propiedad. La comparación con las cifras del País Valenciano, según el censo oficial, resulta evidente ³⁹:

	<i>País Valenciano</i>	<i>Aragón</i>
Habitantes 1797	825.059	657.376
Ganaderos solos	632	998
Pastores	4.314	10.750
Pastores por cada ganadero	6,8	10,8

Hechas estas consideraciones, vamos a analizar la distribución porcentual de las profesiones por partidos según aparecen en el cuadro 8, con los porcentajes respectivos de diez ciudades capitales de partido reflejadas en el cuadro 9.

Destaca, en primer lugar, la presencia de clero y personal religioso, que suponía el 2-5 por 100 de la población «activa». Ahora bien, ni esta cifra ni las de los núcleos urbanos son indicativas porque, a la hora de hacer los cálculos, no se ha incluido la población de comunidades, mayoritariamente eclesiástica ⁴⁰. El peso demográfico del clero en las ciudades era en realidad mayor. No obstante, sí puede decirse que la presencia del clero incluido en el cuadro, mayoritariamente secular, era mayor en las zonas marginales y montañosas: Huesca, Barbastro, Benabarre, Albarracín y Teruel. Y tampoco está de más señalar, aunque en el cuadro no se refleja, que, según el censo, el número de presbíteros con cura de almas (curas y tenientes de cura) era ínfimo en relación al de beneficiados sin misión pastoral directa y el resto del personal eclesiástico. Las diferencias sociales dentro de la Iglesia eran muy grandes, tanto al menos como en la nobleza.

Las cifras de hidalgos muestran en efecto que éstos, bastante numerosos

España, dirigida por M. Tuñón de Lara, Labor, Barcelona, 1981), 57, se comparan estas cifras con las del resto de España. Importa recalcar que estas categorías tienen significación social distinta según las zonas.

³⁸ Según cálculos propios a partir del censo de la riqueza territorial de 1799, la ganadería suponía ella sola el 29,7 por 100 de la renta total de Aragón.

³⁹ *Censo de la población de España de el año de 1797 executado de orden del Rey en el de 1801* (s. e., s. l., s. a.), hojas III y XXXIII. ¿Se refiere sólo a la ganadería trashumante?

⁴⁰ Ya que el censo da los efectivos comunitarios en cada núcleo urbano, pero no los suma por partidos; por tanto, para poder comparar cifras homogéneas hay que excluir la población comunitaria de los núcleos urbanos. Su inclusión en éstos daría cifras relativas prácticamente iguales menos en la población eclesiástica, claro está.

CUADRO 8

Distribución por estados y profesiones en 1787. Por partidos
(En porcentaje sobre el total de población «activa» de cada partido)
(No se incluye Jaca. Falta Daroca)

	Huesca	Barbas- tro	Bena- barre	Sos (Cinco Villas)	Borja	Zara- goza	Al- cañiz	Tara- zona	Calatayud	Alba- rracín	Teruel	Media Aragón
Curas, beneficiados, tenientes de cura, sa- crificantes, acólitos, ordenados a título de patrimonio, ordenados de menores.	3,5	4,2	4,7	3,4	2,2	2,6	2,2	3,7	3,5	5,0	4,5	3,3
Hidalgos	8,2	6,8	9,6	10,6	9,1	6,5	1,0	2,2	2,1	0,5	0,9	5,2
Labradores	33,7	33,5	43,3	36,8	22,9	22,2	47,6	26,8	26,4	33,6	39,5	33,9
Jornaleros	17,6	26,4	13,1	21,1	37,8	23,1	18,8	41,0	39,3	27,8	16,5	23,5
TOTAL	51,3	59,9	56,4	57,9	60,7	45,3	66,4	67,8	65,7	61,4	56,0	57,4
Criados	16,9	15,5	16,1	14,4	14,8	15,8	9,4	10,0	10,2	10,7	10,0	12,7
Fabricantes	0,7	0,5	0,4	1,6	1,1	1,7	2,6	6,0	1,2	0,8	6,7	2,0
Artesanos	13,4	7,9	8,1	7,4	8,3	10,3	13,4	5,7	12,2	17,2	17,0	11,7
Comerciantes	0,6	2,0	0,9	0,4	0,5	1,4	0,9	0,5	0,8	0,2	0,9	0,9
Con fuero militar	0,1	0,2	0,1	0,4	0,2	10,5	0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	2,3
Estudiantes	4,1	0,6	0,2	1,6	1,5	3,5	2,2	1,8	2,3	2,5	2,7	2,4
Abogados, escribanos, empleados con suel- do del Rey, dependientes de Inquisi- ción, síndicos de órdenes religiosas, de- pendientes de Cruzada, demandantes.	0,5	1,6	0,8	1,3	0,9	1,5	0,9	0,7	0,9	0,8	0,3	1,0
Población «activa» sobre el total de po- blación	30,4	23,8	24,8	30,2	28,4	32,7	28,1	23,7	27,6	24,6	26,3	28,2

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO 9

Distribución por estados y profesiones en 1787. Capitales de partido
(En porcentaje sobre el total de población «activa» de cada ciudad)
(No se incluye Jaca. Faltan Daroca y Albarracín)

	Huesca	Barbas- tro	Bena- barre	Sos (Cinco Villas)	Borja	Zara- goza	Al- cañiz	Tara- zona	Calatayud	Teruel	Media de las 10 ciu- dades
Curas, beneficiados, tenientes de cura, sa- cristanes, acólitos, ordenados a título de patrimonio, ordenados de menores.											
Hidalgos	5,1	2,9	2,5	3,7	1,3	3,2	2,7	4,5	1,7	8,8	3,6
Labradores	2,3	1,1	2,2	8,7	6,4	4,5	1,8	2,8	1,8	3,0	3,7
Jornaleros	9,5	4,1	30,6	19,5	10,7	5,7	22,7	10,7	17,6	23,1	10,1
	29,0	63,2	11,4	28,9	42,8	17,3	24,2	49,6	30,4	14,6	24,7
TOTAL	38,5	67,3	42,0	48,4	53,5	23,0	46,9	60,3	47,0	37,7	34,8
Criados	17,8	7,6	18,3	14,3	18,3	19,6	16,3	9,2	15,2	5,5	16,8
Fabricantes	0,8	0,7	—	2,1	2,0	1,2	0,9	8,3	1,4	1,9	1,6
Artesanos	16,4	13,3	23,1	13,9	12,0	13,6	20,8	6,0	22,1	27,0	15,3
Comerciantes	1,7	2,0	1,2	1,2	0,7	1,7	3,1	1,2	2,8	2,2	1,8
Con fuero militar	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	22,9	0,3	0,4	0,1	0,3	12,6
Estudiantes	14,4	1,3	7,2	5,2	3,2	6,6	4,0	3,3	2,7	10,6	6,4
Abogados, escribanos, empleados con suel- do del Rey, dependientes de Inquisi- ción, síndicos de órdenes religiosas, de- pendientes de Cruzada, demandantes.	1,9	2,7	2,9	2,0	1,4	2,8	2,4	2,0	2,7	2,1	2,4
Población «activa» sobre el total de po- blación	33,4	28,6	33,7	30,5	36,2	38,8	29,9	24,1	24,6	28,3	33,6

FUENTE: Elaboración propia.

en los partidos montañosos de los Pirineos ⁴¹, eran allí en muchos casos dueños de patrimonios muy pequeños y que sólo el privilegio de la hidalguía los distinguía del pueblo llano. El contraste partido-capital en la montaña (Huesca, Barbastro, Benabarre) muestra bien a las claras su ubicación preferentemente rural. En cambio, en las grandes extensiones de la depresión central, con una grande y mediana propiedad señorial muy extendida ⁴², eran pocos y tendían a concentrarse en ciudades como Tarazona y Alcañiz. En el Sur había muy pocos, por la razón histórica de la existencia de las comunidades de Calatayud, Albarracín, Daroca y Teruel, si bien la capital de esta última albergaba un estamento noble relativamente bien nutrido.

Los efectivos de labradores y jornaleros, que en conjunto suponían el 50-70 por 100 del total de la población activa ⁴³, parecen sugerir, en primer lugar, un escaso desarrollo del trabajo asalariado en la montaña pirenaica y el altiplano y sierras meridionales y, por contra, un mayor predominio de las explotaciones en régimen de cultivo directo o mediante arriendo o aparcería; téngase en cuenta que, en el Norte, la mayor parte de los consignados como hidalgos eran también labradores y ganaderos, con lo que las cifras de éstos son en realidad más altas. El caso extremo de Benabarre, una zona con suelos pobres, es muy ilustrativo al respecto. En cambio, el porcentaje de jornaleros aumenta claramente en partidos como Borja y Tarazona y, también, en el de Zaragoza, si excluimos la capital ⁴⁴, y vuelve a disminuir en Teruel. Parece haber así una correlación clara entre el jornalerismo y la gran propiedad de la depresión, ya que la mayor parte de los núcleos de población de estos partidos eran de señorío. Las cifras de Alcañiz se explican, probablemente, porque más de la mitad de su territorio estaba enclavado en los somontanos y valles del Sistema Ibérico turolense y, aunque el señorío (órdenes militares) seguía siendo predominante, el régimen de explotación de la tierra debía ser distinto.

El contingente de jornaleros aumenta también notablemente en todos los núcleos urbanos examinados, lo que confirma, una vez más, la relación entre el desarrollo urbano y el trabajo asalariado agrícola.

Las cifras de criados no aclaran en cambio nada.

El epígrafe «fabricantes» se entendió mal; por eso sus efectivos son poco fiables y, en mi opinión, superiores a la realidad, a veces en mucho: véase, si no, los elevados porcentajes de los partidos de Tarazona y Teruel, en donde

⁴¹ Pero mucho menos que en zonas del norte de España; véase G. ANES, *El Antiguo Régimen. Los Borbones* (t. IV de la *Historia de España Alfaguara*, dirigida por M. Artola, Alianza, Madrid, 1975), 49.

⁴² Véase A. ÜBIETO, «La tierra en Aragón a principios del siglo XVII», en *Estudis* (Valencia), 4 (1975), 13-24.

⁴³ En el partido de Zaragoza, la cifra se deforma por la presencia de la capital.

⁴⁴ En donde el porcentaje es menor porque queda oculto por otros grupos. Manejamos cifras relativas.

parece claro que se incluyó en este epígrafe a una amplia parte de la población artesanal. Y valga la referencia para destacar merecidamente a este sector, que suponía el 7-13 por 100 de la población activa total; se localizaba, sobre todo, en los partidos de Huesca, Calatayud, Teruel y Albaracín (ferrerías), y aumentaba netamente en todos los núcleos urbanos, como corresponde a la índole de sus actividades. La cifra media, sumados fabricantes y artesanos, es 13,7 por 100, cantidad muy superior a la media nacional similar resultante (9,43 por 100) e incluso a la del País Valenciano (13,13 por 100). No se observa un aumento sensible de la población artesanal en Zaragoza, lo que no indica nada, ya que sus cifras porcentuales quedaban, como las de los jornaleros, ocultas por el peso relativo de otros grupos sociales propios.

Finalmente, la lectura de ambos cuadros lleva a destacar dos hechos. Uno, que los estudiantes censados correspondían mayoritariamente a las dos universidades del reino, Zaragoza y Huesca; ésta y no otra es la razón por la que el porcentaje de población estudiantil se eleva en ambas ciudades. Otro, la desigual distribución de la población castrense, concentrada casi toda en Zaragoza. De un total de 4.120 militares censados (soldados, oficiales y familiares) en Aragón, 3.787 vivían en la capital aragonesa, casi una décima parte (8,9 por 100) del total de su población y la cuarta parte (22,9 por 100) de la población activa de la ciudad. El valor estratégico de la plaza queda bien claro.

En conjunto, y según muestra el cuadro 10, la sociedad aragonesa presentaba a fines de la centuria unas características generales en su composición profesional muy similares a las de la media nacional: peso abrumador de las

CUADRO 10

Distribución de los principales estados y profesiones en 1787

	<i>España</i>	<i>Aragón</i>	<i>P. Valenciano</i>
Clero	3,8	3,3	4,2
Hidalgos	14,6	5,2	0,5
Labradores	27,6	33,9	34,5
Jornaleros	29,3	23,5	33,3
Criados	8,5	12,7	8,4
Fabricantes	1,2	2,0	3,4
Artesanos	8,2	11,7	9,7
Comerciantes	1,0	0,9	1,1

FUENTES: España y País Valenciano, J. CASTELLÓ, *El País...* (o. c.), 67; Aragón, elaboración propia.

actividades agrarias y ausencia casi total de comerciantes dedicados a tal función con exclusividad. Destaca, en cambio, la presencia de un sector artesanal relativamente bien nutrido, hecho novedoso y que merece la mayor atención por cuanto pudiera señalar la existencia de unas ciertas condiciones favorables al inicio de un proceso industrializador, al estilo de lo que señala Castelló para el País Valenciano ⁴⁵, si bien la tesis de éste se apoya también en la presencia de un sector fabril que, en el caso de Aragón, probablemente está sobreestimado y era más débil.

⁴⁵ J. CASTELLÓ, *El País...* (o. c.), 68-72.

RENTISTAS URBANOS Y CAPITAL USURARIO. LA APARCERIA DE GANADO EN GALICIA EN EL SIGLO XVIII

MARIA XOSE RODRIGUEZ GALDO
y XOSE CORDERO TORRON
Universidad de Santiago

La importancia de la aparcería de ganado en la Galicia del siglo XVIII es señalada con insistencia en los escritos de los contemporáneos y corroborada por la investigación actual. El significativo peso de este contrato, especialmente en lo que se refiere al ganado vacuno, es consecuencia de la confluencia de dos circunstancias: por una parte, la tenencia de ganado es esencial para la propia supervivencia de la explotación campesina; por otra, la entrega de ganado a *ganancias* es una forma de inversión más cómoda, rentable y segura para la sociedad de la época (o, al menos, así lo cree el *postor* o aparcerista) que otras formas posibles de valorización del capital acumulado.

Y es que las numerosas referencias a la *infeliz constitución* y las continuas desventuras de los labradores gallegos no son sólo enfáticas expresiones de ilustrados emotivos. La precariedad de la familia campesina se nos muestra como un hecho claro si pensamos, precisamente, en los esfuerzos que debía realizar para mantener una dotación de ganado que cubriese mínimamente sus necesidades. No poseer ninguna cabeza de ganado mayor no sólo significaba prescindir de una importante fuente de alimentación, sino también multiplicar considerablemente el esfuerzo humano en las prácticas agrícolas, enfrentarse a durísimos problemas para la obtención del abonado y no disfrutar de otros beneficios que la múltiple funcionalidad del ganado proporcionaba al labrador. Y, sin embargo, un porcentaje importante de familias campesinas no tenían la posibilidad de acceso a la propiedad de la especie más importante para la reproducción de la explotación familiar, el ganado vacuno.

La estructura agraria, basada en pequeñas explotaciones fuertemente parcelizadas y sometidas al pago de rentas forales y de otros tipos de gravámenes feudales, no sólo condenaba a una buena parte de la población a debatirse en los mismos límites de su capacidad de supervivencia física; condicionaba también las formas de utilización del producto social y limitaba las posibilidades de desarrollo industrial y de crecimiento urbano. La inversión industrial se veía frenada por la escasez de la demanda interna y la desarticulación de los mercados locales y, también, por razones ideológicas y por los obstáculos in-

terpuestos por la propia clase dominante. La pequeña dimensión de las ciudades y villas (habitadas por comerciantes, rentistas y artesanos cuya suerte estaba, normalmente, ligada a la coyuntura agraria) mostraba palpablemente las debilidades de la organización económica y de la estructura social.

Por eso, los grupos sociales interesados en rentabilizar la riqueza acumulada acuden con frecuencia a formas de colocación de ésta que gira en torno a las dificultades de reproducción de las pequeñas explotaciones campesinas. Y, de este modo, *señores medianeros* y campesinos acomodados, pero también comerciantes de las villas y ciudades, aparecen como acreedores de obligaciones-préstamo, compras anticipadas, censos consignativos... y como *postores* de ganado.

El término de *capital usurario* debe ser despojado de los matices peyorativos que una primera impresión puede sugerir. Se trata de una forma específica de valorización del capital que alcanza su máxima extensión en sociedades no capitalistas, pero con un cierto desarrollo de la circulación mercantil y dineraria, y que, en la práctica, sus modos de concreción pueden resultar más o menos onerosos. En particular, la aparcería de ganado, aun representando una forma de apropiación del plustrabajo innegablemente penosa para una familia que soporta difíciles condiciones materiales, presentaba en Galicia modalidades más benignas que en otras partes y contenía elementos de garantía para el aparcero. Así queda reflejado en las respuestas al *Interrogatorio* de Pontedeume, del Catastro de Ensenada:

«Los contratos de aparcería lícitos recaen por lo regular sobre Bueies, vacas, ovejas, cabras, yeguas, machos, hembras, mulas y machos. Potros y potrancas pequeños porque no hay aparcería de las mulas y machos grandes. La aparcería de los bueies consiste en que compra uno, un par o más y lo da a otro para que use, labre y trabaje con ellos, utilizándose de su servicio de suerte que el Comprador retiene siempre la propiedad de dominio, y el aparcero disfruta todo el trabajo y labor que con ellos hace, con el gravamen y obligación de buena fe sin abusar del trabajo según estilo de labradores, y debe mantenerlos y curarlos en qualquiera enfermedad. La grangería consiste en partir el útil que queda de las ventas, sacando el dueño comprador el principal en que al principio se tasó y a precio convencionalmente entre los dos, tenía el par de Bueies, advirtiéndose que no puede venderlos el dueño en tiempo de sementera o labor, sino es que de a el aparcero otro par de Bueies iguales. Pero el aparcero puede venderlos sin que haia utilidad dando cuenta primero a el dueño: si se venden en lo mismo del precio no hai que partir utilidad, y tira el dueño

su valor: y si se venden en menos lo pierde el dueño, y no deve el apaercero suplir la falta; en las Vacas, Ovejas y Cabras, siempre las cabezas mayores quedan en el dominio del que las compra, el que las recibe como aparcerero debe pastorearlas y mantenerlas, dando cuenta de vivas o muertas a cuenta de pastores de buena fé. Consiste la grangería por mitad las crías, y lana de las ovejas aprovechándose el aparcerero sólo de la leche y queso, pero en algunas partes, y por lo general en las Montañas las crías de las Cabras es por mitad, y de las ovejas tira el aparcerero una tercia parte, dejando las otras dos al dueño, y la lana siempre se parte por mitad. En las Vacas hay la diferencia que el aparcerero utilizándose de la leche, manteca y queso por entero, por lo que mira a las crías llevan en unas partes el tercio, y en otras el cuarto, y si la cría (sea macho o hembra) se mantiene en poder del aparcerero un año se aprecia de conformidad y si siguen la aparcería hasta tres o cuatro años se vuelve a justipreciar, y partiendo por tercias o quartas el primer aprecio se reparte de por mitad el superante o demás valor del segundo aprecio...»¹.

El hecho de contener el contrato elementos de garantía para el aparcerero lo elevaba, en palabras de fray Martín Sarmiento, a la categoría de «arbitrio admirable», y lo diferenciaba de otras modalidades de aparcería:

«... en otras partes fuera de Galicia quiere Pedro que el Labrador le asegure el capital de las dos vacas siempre inalterable. Esta usura desaforada, e iniqua, aun no ha entrado en Galicia. Si allí mueren las dos vacas, o las come el lobo, todas las pierde Pedro; y compra otras, o deja aquella grangería. El dar así las Vacas a medias, a los pobres labradores que no las pueden comprar, le juzgo por un arvitrio admirable para ayudar a los labradores, y para que todos puedan trabajar para sí y para otros. El cura que diere media docena de vacas a medias, a tres feligreses suios, Padres de Familia y pobres labradores, que tienen algunas tierras, pero ningún ganado vacuno, percivirá además del útil dicho el Diezmo de todos los frutos...»².

¹ Archivo Histórico del Reino de Galicia (AHRG), A Coruña, Catastro del Marqués de la Ensenada, Interrogatorio, núm. 2287.

² Biblioteca de la Real Academia de la Historia, *De la Obra de los 660 pliegos de el Reverendisimo Padre Maestro Fray Martín Sarmiento, Benedictino. Que trata de la Historia Natural y de todo genero de Erudicción con motivo de un Papel, que parece se había publicado por los abogados de la Coruña, contra los Foros, y tierras que poseen en Galicia los Benedictinos. Y la escribió en Madrid por los años de 1762 y siguientes*, 5 vols. (véase en vol. 2, fols. 11 y 11 v.).

El carácter relativamente poco lesivo del acuerdo establecido entre las partes (es decir, el *postor* y el *aparcerero*) llevará, incluso, a Sarmiento a impetrar el favor de obispos y del mismo rey para facilitar su difusión³. También defendía la bondad y adecuación del contrato a las peculiares condiciones socioeconómicas de Galicia el canónigo lucense y eminente jurisconsulto Juan Francisco de Castro, en sus *Discursos Críticos sobre las leyes y sus intérpretes*⁴, y también en este sentido emitiera su parecer, con anterioridad, la Junta del Reino de Galicia⁵.

Hemos realizado unas calas en el estudio de la aparcería de ganado vacuno en Galicia a través de los libros Reales de Legos del Catastro de Ensenada. Analizamos un total de 29 parroquias, con especial peso de las situadas en la actual provincia de A Coruña, y estudiamos pormenorizadamente los libros Reales de Legos y de Eclesiásticos de los núcleos urbanos de Betanzos y Pontedeume⁶.

La primera observación que sugiere el análisis parroquial de la propiedad y posesión del ganado es la gran variedad en el peso cuantitativo de la aparcería de unas zonas y otras, e incluso entre parroquias próximas. Este comportamiento diferencial no viene condicionado, al menos en lo que hemos observado hasta el momento, por el nivel de intensificación en el aprovechamiento de la tierra⁷. En el litoral occidental, que había adoptado sistemas de rotación de cultivos más intensivos, la tensión entre los recursos disponibles y el incremento demográfico no se manifestó en un mayor porcentaje de reses

³ *Ibidem*, fols. 11 v. y 12.

⁴ Juan Francisco DE CASTRO, *Discursos Críticos sobre las leyes y sus intérpretes, en que se demuestra la incertidumbre de éstos, y la necesidad de un nuevo y metódico cuerpo de derecho, para la recta administración de la justicia*, Madrid, 1765, 3 tomos (2.ª ed., Madrid, 1829); véase en t. I, ed. de 1829, p. 139.

⁵ Como se recoge en diversos Interrogatorios del Catastro de Ensenada; véase, por ejemplo, el correspondiente a Santiago de Coxela (Ribadeo), en Archivo de la Delegación de Hacienda de Lugo, Coxela, Interrogatorio, núm. 965.

⁶ La documentación del Catastro de Ensenada utilizada ha sido la siguiente: Archivo Histórico del Reino de Galicia: Andrade, Real de Legos, núm. 113; Boebre, RL, núm. 425; Centroña, RL, núm. 758; Hombre, RL, núm. 1357; Nogueirosa, RL, núm. 1996; Villar, RL, núm. 2985; Folgoso, RL, núm. 1224; Vilela, RL, núm. 2921; Veigue, RL, núm. 2834; Rodieiros, RL, núm. 2449; Figueroa, RL, núm. 1201; Leira, RL, núm. 1533; Pontellas, RL, núm. 2234; Traba, RL, núm. 2763; Lubre, RL, núm. 1638; Montoxo, RL, núm. 1885; Brión, RL, núm. 1308; Pontedeume, RL, núm. 2288; Pontedeume, R. Eclesiásticos, número 2289; Betanzos, RL, núm. 419; Betanzos, R. Eclesiásticos, núm. 420. Archivo de la Delegación de Hacienda de Lugo: Obe, RL, núm. 1168; Piñeira, RL, núm. 1171; Coxela, RL, núm. 964. Archivo Histórico Provincial de Ourense: Larouco, RL, núm. 400; Seadur, RL, núm. 401; Freixido, RL, núm. 402. Archivo Histórico Provincial de Pontevedra: Meira, RL, núm. 486; Domaio, RL, núm. 487; Tirán, RL, núm. 488; Moaña, RL, núm. 489.

⁷ Tiene, por ejemplo, altos valores la aparcería, superior al 50 por 100 de la cabaña vacuna, en Pontellas, zona de cultivo intensivo, y en Folgoso, zona de cultivo extensivo. Tiene valores bajos, inferiores al 30 por 100, en Lubre, cultivo intensivo, y en Montoxo, más extensiva.

en aparcería, sino en la no posesión de ganado mayor por parte de un sector importante de los vecinos⁸, obligados, en consecuencia, a recurrir al alquiler de reses para las labores agrícolas, a formas de propiedad compartida o, simplemente, a prescindir de estos animales⁹.

De nuestro estudio se deduce también que las explotaciones que con mayor frecuencia acuden a la aparcería son las intermedias, es decir, aquellas que poseen un número de reses que giran en torno a los valores centrales, valores que, como es natural, son mayores en las zonas extensivas que en las intensivas¹⁰, y que suelen situarse entre las dos y las seis cabezas. El cuadro adjunto, que recoge la distribución del ganado en aparcería en seis parroquias del actual

Distribución del ganado en aparcería según el número total de reses por explotación

(Municipio de Pontedeume: parroquias de Andrade, Boebre, Centroña, Hombre, Noguerosa y Villar)

N.º reses por explotación	N.º explotaciones	N.º explotaciones con aparcería	% sobre explotaciones con reses en aparcería	Total reses	Reses en aparcería	% sobre ganado en aparcería
1	19	8	4,7	19	8	2,0
2	56	30	17,4	112	49	12,0
3	122	58	33,7	336	139	34,2
4	92	46	26,7	368	122	30,0
5	41	21	12,2	205	58	14,2
6	18	7	4,1	108	20	4,9
7	4	1	0,6	28	6	1,5
8	1	0	0,0	8	0	0,0
9	1	1	0,6	9	5	1,2
TOTALES ...	354	172	100	1.193	407	100

⁸ El número de vecinos que carecen de vacuno supera el 40 por 100 en Meira, Domaio y Tirán, y supera el 30 por 100 en Moaña. Carecen de vacuno la tercera parte de los vecinos de A Lanzada (véase en J. M. PÉREZ GARCÍA, *Un modelo de Sociedad rural de Antiguo Régimen en la Galicia costera*, Santiago, 1979). No disponen de vacuno el 20 por 100 de los vecinos de las parroquias que componen el actual municipio de Pontedeume (véase en María X. RODRÍGUEZ GALDO y X. CORDERO TORRÓN, «Ganadería e explotacións agrarias na Galicia do século XVIII. Análise da distribución espacial e da tenencia de gando na provincia de Betanzos», *Revista Galega de Estudos Agrarios*, núm. 5, 1981).

⁹ En Piñeira y Obe, parroquias pertenecientes al actual municipio de Ribadeo, se registran numerosos casos de alquiler de bueyes a cambio de una renta.

¹⁰ X. CORDERO TORRÓN, F. DOPICO G. DEL ARROYO y María X. RODRÍGUEZ GALDO, «La distribución espacial del ganado en Galicia según el Catastro de Ensenada», *Congreso de Historia Rural (siglos XV al XIX)*, Madrid, octubre de 1981.

Ayuntamiento de Pontedeume con respecto al total de reses disponibles por explotación, es una muestra de ello.

Analizado el tipo de explotaciones que recurren más frecuentemente a la aparcería, estudiemos los grupos sociales beneficiarios, como aparceristas o *postores*, de este contrato. De nuevo, un área restringida, el territorio abarcado por el actual municipio de Pontedeume, puede servirnos de ejemplo para estudiar la procedencia rural o urbana de estos hombres.

En el ámbito de este municipio, del total de reses dadas en aparcería, el 52 por 100 pertenecía a *postores* que radicaban en el núcleo urbano de Pontedeume. El 43 por 100 correspondía a aparceristas rurales (denominados así en función de su lugar de residencia), que tenían sus reses cedidas en su propia parroquia o en parroquias próximas pertenecientes al Ayuntamiento de Pontedeume o a ayuntamientos limítrofes. El 5 por 100 restante corresponde a aparceristas de fuera del anterior marco geográfico; entre ellos hay aparceristas rurales y aparceristas urbanos de las ciudades de Betanzos y A Coruña.

El conjunto de aparceristas rurales está compuesto de clérigos, pequeños rentistas, labradores con profesiones complementarias (como las de sastre, herrero o tonelero) y labradores acomodados. Entre estos *postores* destaca uno, labrador y sastre, que tiene cedidas 30 reses; tras él están dos, un clérigo y un labrador acomodado, con 10 cabezas cada uno.

Los aparceristas que radican en la villa de Pontedeume, y ello nos interesa muy particularmente, tienen en las parroquias del Ayuntamiento 302 reses vacunas, y son en su mayor parte rentistas (foristas o subforistas). Tienen «puestas» en el Ayuntamiento el 45 por 100 del total de reses de que disponen; las restantes las tienen situadas en un marco geográfico muy amplio, que va desde Cedeira y Ortigueira, en el norte de la actual provincia coruñesa, a Xermade y Viveiro, en la de Lugo, y a Cesuras y Mesía, de nuevo en la provincia de A Coruña. A pesar de la amplitud de esta área geográfica, la mayor parte de las reses las tienen en el Ayuntamiento de Pontedeume y ayuntamientos limítrofes.

Entre estos aparceristas urbanos, que ya hemos tipificado como rentistas, existen individuos que controlan un número considerable de reses. Tres superan las 40 cabezas de vacuno, llegando uno de éstos a disponer de 90 reses.

Para verificar la importancia de los aparceristas urbanos, contrastamos los datos de Pontedeume con los proporcionados por el Libro Real de Legos de la ciudad de Betanzos. Los aparceristas de esta ciudad tienen un total de 1.186 cabezas de vacuno cedidas, que, como las de Pontedeume, estaban distribuidas en un área geográfica muy extensa, y, al igual que en Pontedeume, tienen la mayor parte de éstas en su propio Ayuntamiento y en los limítrofes; con la excepción, en este caso, de 105 reses cedidas en Santiago (Orense).

Como en Pontedeume, existen propietarios de cabañas muy importantes. Ocho individuos disponen de más de 40 cabezas, y de ellos uno tiene 115.

Hemos visto que, tanto en Pontedeume como en Betanzos, la mayor parte de las cesiones de reses por los aparceristas urbanos se concentran en un área geográfica próxima a la urbe. Para completar nuestro análisis es preciso ver lo que ocurre en núcleos rurales alejados de centros urbanos. Para ello estudiamos a continuación una serie de parroquias.

En Leira, Ayuntamiento de Ordenes, los aparceristas, que radican en A Coruña y Santiago, tienen 67 reses de un total de 152 en aparcería. Entre ellos, uno sólo dispone de 50 cabezas.

En Folgoso, Ayuntamiento de Sobrado, tienen los *postores* urbanos 42 reses de un total de 143 en aparcería. Y son múltiples las parroquias en las que los aparceristas urbanos tienen cabañas importantes. Aunque, frente a éstas, se podían mencionar otras, como Figueroa, en el Ayuntamiento de Arzúa, en las que los aparceristas rurales disponen de todas o casi todas las reses «puestas». En esta misma parroquia, un forista, José Taboada, tiene cedidas 62 cabezas y controla el 61 por 100 de las reses dadas en aparcería. De lo que se deduce que también existen aparceristas rurales propietarios de importantes cabañas.

Sean urbanos o rurales, los grandes aparceristas son también importantes foristas o subforistas, siendo éste el estrato social más beneficiado por este contrato. Tras ellos se sitúa el clero y los labradores acomodados. El clero tiene en algunas zonas una importancia relativa; así, en Montoxo, Ayuntamiento de Cedeira, las cofradías religiosas tienen cedidas más de 30 cabezas, y en Brión (Ayuntamiento de O Ferrol) tiene el párroco más de 20 reses. Si las cifras del clero secular son en general modestas, mucho más lo son las del regular, que, si bien cede algunas reses, lo hace en escasa medida.

El volumen de reses por explotación venía fuertemente condicionado por la disponibilidad de tierras. Dada la peculiar estructura de la posesión de la tierra en Galicia, no existían explotaciones ganaderas *puras* ni explotaciones con grandes dotaciones pecuarias. Ello provocaba una cierta homogeneidad en la distribución de la cabaña bovina: el índice de concentración de Gini no suele alcanzar valores elevados, aun teniendo en cuenta los vecinos que carecían de este ganado¹¹. Una buena parte de la relativa debilidad de esta concentración se debía a la aparcería¹². El campesino acomodado que podía dis-

¹¹ Por ejemplo, el índice de concentración de Gini toma el valor 0,36 para la distribución del ganado vacuno disponible por explotación en el conjunto de las parroquias consideradas del municipio de Pontedeume.

¹² Si realizamos el cálculo anterior teniendo ahora en cuenta la propiedad del ganado, el índice de concentración de Gini se eleva a 0,55; es decir, la consiguiente curva de Lorenz se «aleja» de la diagonal de una forma significativamente mayor que la correspondiente a la tenencia de ganado.

poner de un número elevado de cabezas prefería reservar las necesarias para su usufructo directo y ceder las restantes mediante el citado contrato. Una amplia red de ferias locales, donde las transacciones de animales jugaban un papel primordial, facilitaban la realización de las utilidades, a través de venta de las crías o del animal adulto. Pero los más importantes *postores* de ganado eran frecuentemente rentistas urbanos, que encontraban en la aparcería una forma de inversión de sus capitales relativamente rentable y segura, coherente, además, con su condición social y su conformación mental.

El contrato de aparcería subsistió en Galicia hasta bien entrado el presente siglo. Las únicas alteraciones que sufrió se debieron al mayor protagonismo que, como aparceristas, adquirieron la burguesía comercial y las profesiones liberales, como muestra el *Repartimiento para la Contribución Extraordinaria de Guerra*, realizado por el Ayuntamiento de Pontedeume en 1839¹³. En este Repartimiento sobre la riqueza de comercio e industria de la villa eumesa son los *postores* de ganado los que declaran las utilidades individuales más altas. El conjunto de los *postores* paga por las utilidades de la aparcería el 35 por 100 de todo lo pagado en la villa por la riqueza comercial e industrial. Cantidad a todas luces muy elevada, pues los aparceristas de ganado no representan más que el 10 por 100 de todos los contribuyentes.

¹³ Archivo Municipal de Pontedeume, «Repartimiento por Contribución Extraordinaria de Guerra sobre su riqueza de Comercio e Industria».

CENTROS COMERCIALES E INDUSTRIA RURAL EN TIERRA DE CAMPOS: TRANSFORMACIONES DEMOGRAFICAS, PROPIEDAD AGRICOLA E INGRESOS FAMILIARES EN EL SIGLO XVIII

BARTOLOME YUN CASALILLA
Universidad de Valladolid

«Más vale onza de trato que arroba
de trabajo.»
(Refrán recogido en Frechilla de Campos.)

El presente trabajo no pretende ser un estudio de la dinámica campo-ciudad en su conjunto, sino un análisis de sus efectos y del grado de dicha vinculación en lo que se refiere al desarrollo de las actividades secundarias en un marco cronológico y geográfico muy concreto: la Tierra de Campos en el siglo XVIII. Igualmente se pretende incidir en el hecho, reconocido por las explicaciones actuales del arranque industrial dentro de una economía de Antiguo Régimen, de la importancia de las estructuras agrarias y, sobre todo, de la necesidad de una especialización regional del trabajo para el desarrollo económico¹. Y, por último, se trata de apuntar una serie de posibles vías, métodos y fuentes para el conocimiento de la composición y distribución del ingreso campesino, ya que éste es, según muestran los estudios referentes a otras zonas de Europa, un factor importante de la dedicación a actividades textiles de la población rural; ello debido a que el empobrecimiento y la necesidad de aumentar los ingresos en metálico debió ser uno de los móviles para dedicar las épocas ociosas del trabajo agrícola a la industria doméstica, hecho éste que debió incidir en la formación de una oferta adicional de mano de obra barata y en la consecuente inversión de capital por parte de la burguesía urbana en dicho sector².

¹ Entre otros muchos, se puede tener presente el trabajo de E. L. JONES, «Los orígenes agrícolas de la industria», en *Agricultura y Capitalismo*, Madrid, 1974, pp. 303-341.

² El hecho ha sido puesto de relieve por diferentes investigadores para los distintos países de Europa; pero quizá uno de los estudios más típicos, junto con otros de la historiografía inglesa, sea el de F. F. MENDELS, «Agriculture and Peasant Industry in Eighteenth-Century Flanders», en *European Peasants and Their Markets. Essays in Agrarian Economic History*, Princeton, 1975, pp. 179-203.

1. *La industria rural en la Tierra de Campos: localización y relaciones con la ciudad*

Durante el siglo XVIII se ha iniciado en la Tierra de Campos una última oleada de especialización en la producción de cereal, que es el cultivo básico de la región. Al mismo tiempo, aunque ni la pujanza artesanal ni la comercial son tan grandes como en el XVI, multitud de referencias coetáneas (*Diccionario Geográfico*, de Tomás López; *Memorias políticas y económicas*, de Eugenio Larruga; *Respuestas Generales del Catastro de Ensenada*, por aludir sólo a las más accesibles) llaman la atención sobre la existencia en la zona sureste de dicha comarca, en los límites de las provincias de Palencia y Valladolid, penetrando hacia la primera, de una serie de núcleos de industria rural dispersa (Frechilla, Castromocho, Autillo, Fuentes de Don Bermudo, Villabaruz, Ampudia y algún otro) que, a veces, coexisten con un comercio interregional pujante y con actividades de transformación no sólo textiles, sino también de cueros y pellejos, como en el caso de Villarramiel.

Lo importante para nosotros es que todos ellos, y otros muchos más cercanos a Palencia, tienen una vinculación con ciudades de mayor tamaño y de estructura socioeconómica y división del trabajo más desarrollados, principalmente Palencia, Valladolid y Medina de Rioseco³. El grado y la forma de dicha vinculación es lo que pretendemos detectar, así como los cambios que ella supone en la creación de posibilidades de desarrollo económico; para ello nos centraremos, sobre todo, en el caso de Medina de Rioseco.

Desde esta ciudad, y gracias a la actividad de un nutrido grupo de mercaderes, se lleva a cabo la función de comprar la producción del entorno circundante —principalmente estameñas— para comercializarla en otros puntos de la Península. Estos, actuando normalmente por intermedio de algunos artesanos de los centros de fabricación⁴, adquieren el producto de los campesinos y lo dirigen directamente o bien a realizar la fase del teñido en la ciudad, o bien a sus centros de consumo. No obstante, si los testimonios en este sentido son muy claros, lo que no es tan claro es la dependencia financiera de los tejedores campesinos con respecto a los mercaderes ni el grado de penetración del capital urbano en la industria rural, así como tampoco el de control sobre el proceso productivo. Sabemos que algunos comerciantes de Medina de Rioseco se dedican también a llevar «ropa a tejer» a aquellos «maestros que no tenían

³ E. LARRUGA, *Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España...*, Madrid, 1973, t. XXVI, p. 4.

⁴ Véase, por ejemplo, la respuesta de Autillo de Campos a la pregunta 32 del cuestionario del Catastro de Ensenada, Dirección General de Rentas, 1.ª remesa, lib. 475, Archivo General de Simancas.

caudal para trabajar por su cuenta», como los de Castromocho ⁵, y que las dificultades de financiación de algunos artesanos locales ⁶ podría propiciar el desarrollo del *verlagssystem*, y la dependencia total, ya que algunos maestros de pequeños enclaves solían contar con «dinero de diferentes mercaderes» ⁷ para comprar estameñas en sus lugares de origen en nombre de aquéllos. Pero no conocemos hasta qué punto tomaron arraigo estas formas de producción y, sobre todo, cuáles fueron sus consecuencias.

En este aspecto, se trata de valorar si dicha dinámica crea cambios en los comportamientos económicos y demográficos ⁸ y detectar, al mismo tiempo, la influencia de la estructura agraria, ya que es ésta la que explica no sólo la frustración del paso a una segunda fase del desarrollo industrial —el de la maquinización—, sino, más específicamente, el estado embrionario en que permanecen las relaciones entre Medina de Rioseco y el campo circundante, donde —al menos según los datos que tenemos en este momento— no llegó a cuajar definitivamente el *verlagssystem* ⁹.

Las consideraciones que siguen enlazan con la visión de algunos investigadores del desarrollo industrial que han cristalizado en la teoría de la protoindustrialización. La hipótesis que nos planteamos es, pues, hasta qué punto se crean en las zonas rurales de la región, y en su vinculación a la ciudad, incentivos para una mayor inversión de capitales procedentes de ésta en la actividad artesanal circundante; hasta qué punto la estructura agraria favorecía o no la implantación del *verlagssystem* como forma de organización del proceso productivo que refuerza la relación campo-ciudad; o, de otro modo, hasta qué punto el que la evolución agrícola fuera en un sentido o de un determinado grado impidió una mayor comercialización del producto campesino y una mayor vinculación de éste a los circuitos de intercambio, con las consecuentes transformaciones en la integración y amplitud del mercado, en el presupuesto familiar y en el plano de la evolución demográfica ¹⁰.

⁵ E. LARRUGA, *op. cit.*, t. XXVI, p. 20.

⁶ *Ibidem*.

⁷ Dirección General de Rentas, 1.ª remesa, lib. 475, Autillo de Campos, pregunta 32.

⁸ Para una sistematización de los posibles cambios producidos por la expansión de la industria rural y sus consecuencias en una estructura económica, véanse las notas preparatorias a la Sección de Protoindustrialización del VIII Congreso Internacional de Historia Económica, de Budapest (1982), por Franklin MENDELS. También, de este mismo autor, y más centrado en el caso de Flandes: «Proto-industrialization: The First Phase of the Industrialization Proces», en *Journal of Economic History*, vol. XXXII (1972), pp. 241-261.

⁹ Para este tema, aunque con un planteamiento más general que el que aquí nos ocupa, A. GONZÁLEZ ENCISO, «La industria lanera dispersa en Castilla en el siglo XVIII», en *Cuadernos de Investigación Histórica* (1978), núm. 2, pp. 269-289.

¹⁰ Interesante como resumen y crítica de diversos trabajos que tienen en cuenta todo este proceso en conjunto es el artículo de P. JEANNIN, «La protoindustrialization: development ou impasse?», en *Annales ESC* (enero-febrero 1980), pp. 52-65.

Hemos de apuntar, no obstante, que no se pretende aplicar aquí la teoría de la protoindustria ni tampoco enjuiciar la validez de su utilización para la región que aquí consideramos —para ello ya hay aportaciones más autorizadas en este mismo Congreso—, sino simplemente, sirviéndonos de una idea que creemos válida (la influencia del grado de especialización de cultivos y la composición de los ingresos campesinos en el avance de la industria rural dispersa), aportar una serie de datos económicos y demográficos que nos ayuden a comprender una de las posibles causas —en absoluto la única— del retraso y la frustración del desarrollo industrial en Castilla, y en concreto en la región que nos ocupa; reconociendo el hecho evidente de que estas transformaciones han de abarcar a espacios geográficos más amplios, puesto que un alto grado de dedicación a las actividades textiles de una región se ha de acompañar de un proceso coherente de especialización regional del trabajo a escala nacional o, al menos, suprarregional.

2. *Grado de desarrollo y limitaciones de la industria rural a domicilio: la composición del ingreso campesino*

Se ha subrayado por diferentes autores que la dedicación de la población rural a la industria textil puede chocar con el inconveniente de la posesión por la familia campesina de ingresos procedentes de actividades como el viñedo, que reportan numerario gracias a su venta y, al mismo tiempo, ocupan las épocas del año agrícola que deja ociosas la dedicación al cereal¹¹.

En cuanto a esta parte de Castilla, la persistencia de la vid y la no total especialización en el cereal es fácilmente constatable. Toda la región tiene una dedicación triguera básica, pero el viñedo, a pesar de las dificultades climáticas, no ha sido desplazado por la fuente de ingresos alternativos que es la actividad textil. En efecto, la dispersión casi total del viñedo en el siglo XVIII en esta parte de Tierra de Campos es un hecho ya conocido, demostrado hace algún tiempo por Alain Huetz de Lemp¹² y fácilmente constatable a través de las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada. Incluso en una mayor aproximación podemos constatar que, en casi todos los pueblos de importan-

¹¹ Véase en este punto lo escrito por F. MENDELS en «Aux origines de la proto-industrialization», en *Bulletin du Centre d'Histoire Economique et Sociale de la Region Lyonnaise*, núm. 2 (1978), pp. 19 y ss., donde, aparte de recoger las teorías de Roger Dion al respecto, trae oportunamente a colación las constataciones de Pierre Goubert, Charles Tilly y J. Dupâquier y J. Jacquart. Igualmente, este hecho ya fue insinuado, para la Castilla del siglo XVI, por J. GENTIL DE SILVA, *Desarrollo económico, subsistencia y decadencia en España*, Madrid, 1967, pp. 32 y 33.

¹² *Vignobles et vins du nord-ouest de L'Espagne*, t. I, Burdeos, 1967, mapa de p. 377.

te dedicación textil, el viñedo ocupaba una extensión no mayoritaria pero sí relativamente importante de terreno; por ejemplo, Castromocho (290 obradas), Villarramiel (70 obradas), Frechilla (432 obradas), Autillo (183 obradas)¹³. Si bien se ha tratado con frecuencia de un producto de consumo familiar, la venta de vino no ha estado totalmente ajena a la economía campesina como medio de obtener recursos suplementarios¹⁴ y, más específicamente, numerario para pagar cargas fiscales, censos consignativos que gravaban sus tierras y exacciones en contraprestación de servicios religiosos, fundamentalmente memorias de misas. En Frechilla de Campos, por ejemplo, de 397.884,2 reales que suman los ingresos totales de los vecinos seglares (labradores y artesanos incluidos), los procedentes de la vid llegan a un 8,9 por 100, mientras que los derivados de la fabricación de paños son sólo de 2,3 por 100 (véase apéndice 1)¹⁵. Otro tipo de cálculos, no establecidos en dicho apéndice, puede ser también significativo. Un buen síntoma de que esta fuente alternativa de ingresos no ha conseguido desplazar a la vid es el hecho de que el porcentaje total de los ingresos familiares que ocupa aquélla en las 115 familias campesinas que la ejercen es sólo de una media del 8,3 por 100, mientras que el número de familias que se dedica al viñedo no sólo es mayor —184 en total—, sino que sus ingresos por este concepto suponen un 14,5 por 100. Es más, incluso entre los tejedores de estameñas, se les clasifique o no como tales en el catastro, los ingresos por la venta de paño suman un 13,5 por 100 y los procedentes del cultivo de la vid son de un 9,2 por 100, lo cual no significa una diferencia importante a favor de aquéllos. Conclusión semejante sacamos si consideramos que de las 81 familias campesinas que tienen al mismo tiempo ingresos prove-

¹³ Dirección General de Rentas, 1.ª remesa, libs. 652, 482, 477 y 475, Archivo General de Simancas.

¹⁴ Las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada hacen, frecuentemente, referencia a la carencia de taberna pública en estos pueblos porque los vecinos venden en sus casas el vino de su cosecha. Véase, por ejemplo, el caso de Frechilla, *ibidem*, lib. 477.

¹⁵ Para la elaboración del apéndice 1 hemos partido de los libros de Hacienda correspondientes a las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada de Frechilla: Libros de Haciendas de Seglares, núm. 14693-6, Archivo Histórico Provincial de Palencia. Hemos de precisar que todas las cifras han sido tomadas tal y como son ofrecidas en dicha fuente, sin descontar, para el caso de los ingresos procedentes de la tierra, ningún gasto de amortización de costes de producción. Sólo en el caso de los procedentes de tierras de cereal hemos descontado, según las calidades y tipos de cultivo, el valor de la semilla, guiándonos para ello de los rendimientos recogidos en las Respuestas Generales. De esta forma se intenta una mayor aproximación a los ingresos netos —que es el criterio con que se dan las utilidades de otro tipo de fuentes de riqueza, como el trabajo industrial, ganado, etc.—, aunque es claro que es sólo una aproximación porque habría que descontar también otros costes de producción en el caso del cereal y, evidentemente, en el del viñedo, que, por no gastar semilla, se presenta de forma bruta, aunque de todos es sabido los gastos de mantenimiento que dicho cultivo supone. Esto último es importante porque las cifras que a continuación se dan como ingresos procedentes de la vid se han de leer correctamente, teniendo en cuenta que están por encima de las reales.

nientes de ambas actividades, la fabricación de estameñas supone un 6,5 por 100 de sus ingresos y el vino un 10,9 por 100.

Si bien para todos estos cálculos se debiera restar a la cifra de ingresos procedentes de la actividad vinícola los costes de producción, es claro que la importancia de éstas en el presupuesto familiar sigue siendo suficiente como para demostrar, por lo menos, la igualdad de este tipo de actividad con respecto a la textil. Y, aun matizando que gran parte de la producción procedente del viñedo sigue dirigiéndose al autoconsumo más que a la venta, una importante cantidad de la entrada de numerario de las familias procede de esta actividad, o, en el caso peor —puesto que no se puede conocer el volumen relativo de venta—, hay que decir que los lazos que unían al campesino al mercado no eran exclusivamente los artesanales, sino que la vid, como actividad sucedánea, sigue haciendo la competencia a la actividad industrial y ocupando un tiempo de las épocas vacías de las labores del producto fundamental: el cereal.

Un análisis por niveles de renta de los porcentajes del ingreso familiar procedentes de una u otra ocupación es también esclarecedor, ya que en todos los grupos (apéndice 1) es mayor la proporción de ingreso debido a la vid; igualmente, hay que remarcar que si bien existe una relativa dependencia del presupuesto familiar con respecto a la industria, el hecho de que un mayor número de población por debajo de los 1.500 reales de ingresos se dedique a la viticultura y el que el porcentaje de ingresos por ese concepto siga siendo mayor, en los niveles más bajos (entre 250 y 1.000 reales, principalmente), son límite a la especialización en la industria de la región. De acuerdo con estos razonamientos habría que preguntarse hasta qué punto esta persistencia de la actividad vitícola —consecuencia, en cierto modo, de la escasa integración del mercado interregional— no es un freno a la penetración del capital mercantil en las actividades textiles rurales y, por ende, en el desarrollo de la vinculación y la dependencia campo-ciudad en el proceso productivo.

Por último, se ha insistido en ciertas ocasiones en que la actividad industrial de las economías campesinas es un fenómeno ligado al proceso de empobrecimiento de ciertos sectores de labradores y jornaleros, que ven en esta dedicación una forma de mantener sus ingresos y que favorecen, al constituir una mano de obra barata, la difusión del *verlagssystem* y la dependencia financiera de los grandes comerciantes. Un análisis detallado del apéndice 1 nos sirve para contrastar dicha hipótesis. A través de él vemos que el bloque más importante de campesinos productores de estameñas se encuentra —tanto por el volumen de producto como por el número de personas dedicadas a él— entre los sectores cuyos ingresos totales se sitúan entre los 500 y 1.500 reales, es decir, se da entre un grupo intermedio de individuos de ingresos por deba-

jo de la «renta per cápita» (1.202,6 reales) o en torno a ella, que, además (véase apéndice 1), es también el grupo cuya renta procedente de la tierra es escasa. Se trata, por tanto, de una actividad que sirve para ayudar a familias de situación económica no excesivamente holgada. Pero hay que destacar, por otra parte, dos hechos llamativos y significativos: *a*) no se trata de individuos extremadamente pobres, ya que de las 106 familias (el 32 por 100 del total) que están en el grupo XIII sólo 13 se dedican a ello; *b*) por encima de los 1.500 reales desciende el número de personas dedicadas a este menester y el de las rentas por este concepto, pero hay que destacar, no obstante, que el producto por familia en estos niveles es muy superior al de otros más bajos y que llegan a acaparar el 34 por 100 de los ingresos totales de todos los vecinos.

Todo ello nos lleva a concluir que, si bien es cierto que esta actividad es prioritariamente una función de familias de ingresos escasos y pocas tierras de cereal, existe una serie de individuos a los que su posibilidad de adquirir mayor cantidad de materia prima, por tener ingresos fuertes en otras partidas, les da también la de producir más. Ello debía estar facilitado igualmente por la proximidad de los centros de abastecimiento de lana —el más importante debía ser Villarramiel, a 12 kilómetros de Frechilla— y por el uso de la lana de la propia comarca o inmediatas. La consecuencia debía ser también, por este lado, la reducción del papel del comerciante y mercader de la ciudad como proveedor de materia prima y, por tanto, la de sus posibilidades de control, primero, e inversión, después, en las zonas rurales.

3. *Desarrollo de la industria rural y variables demográficas*

De hecho, tampoco en el plano demográfico se producen los cambios que, según ciertos autores, son concomitantes con dicho proceso, o, en todo caso, hay que hacer ciertas matizaciones por lo que a ellos respecta. Fundamentalmente, nos referimos a las variables densidad poblacional, adelanto de la edad de matrimonio, tamaño de la familia y crecimiento demográfico ¹⁶.

¹⁶ Se ha hablado, sobre todo, de la tendencia en el seno de las comunidades ocupadas en la industria rural a adelantar la edad de matrimonio, así como de una propensión a aumentar la natalidad y el número de miembros de la familia, como vehículo de crecimiento de la célula básica de producción que es la propia familia. Véase a este respecto la crítica de JEANNIN (*op. cit.*, pp. 56 y ss.) a este tipo de teorías. Igualmente, esto pudo ser, según MENDELS («Proto-industrialization...», *op. cit.*, pp. 249-253), la causa de un crecimiento poblacional gracias a la obtención de ingresos suplementarios, así como una amortiguación de las crisis de subsistencia y de sus repercusiones en la población, produciéndose así una menor dependencia del crecimiento del número de individuos con respecto a la producción agrícola.

Quizá en el aspecto en que más repercusiones diferenciales tiene la actividad artesanal sea en el de la densidad demográfica. Para su estudio hemos elaborado, con los datos procedentes del censo de Floridablanca, el mapa de densidades adjunto en el apéndice 3; en él hemos separado, con un criterio aproximado, tres zonas, para cada una de las cuales hemos realizado un muestreo de densidades de un total de 71 núcleos poblacionales distribuidos en ella (26 en la zona I, 22 en la II y 23 en la III), y que suponen más del 80 por 100 de los enclaves que abarcan. A través de él queda claro que es allí donde se encuentran los pueblos de industria rural —es decir, la zona II— donde la presión demográfica es mayor, a pesar incluso de haber incluido en la zona I centros poblaciones tan importantes como Medina de Rioseco o Villalón. No obstante, creemos que hay que mostrarse muy cautos a la hora de interpretar el fenómeno. Evidentemente, no es segura la existencia de una relación causa-efecto entre las actividades secundarias y la mayor presión demográfica; en buena lógica, ello puede ser consecuencia de la mayor capacidad de albergar un número de habitantes más elevado de aquellas zonas en que, junto a la puramente agrícola, también existe una actividad artesanal. Pero ir más allá, argumentando que se debe a cambios en las pautas de comportamiento demográfico, exige previamente analizar algunas de éstas, básicamente las antes citadas de la edad de contraer matrimonio, la composición y tamaño de la unidad familiar y el ritmo de crecimiento poblacional; todo ello de forma comparada entre los núcleos con actividad artesanal y los que carecen de ella.

En el apéndice 2 hemos intentado aproximarnos a las edades de matrimonio mediante una serie de cuadros, elaborados con datos procedentes de los *Libros de cabezas de casa* del Catastro de Ensenada, para los casos de Villarramiel, Guaza y Frechilla, y de los libros de matrículas de la parroquia de Santa Cruz para Medina de Rioseco (año 1787); para ello agrupamos por niveles de edad comprendidos entre los veintinueve y once años el porcentaje de casados y viudos, por un lado (es decir, quienes han contraído primeras nupcias), y, por otro, el de solteros. El resultado es que parece darse una baja edad de contraer dicho enlace, ya que en todos los casos podemos asegurar —con mayor o menor posibilidad de error— que más del 50 por 100 de la población de edad de veintitrés años ha pasado ya por dicha ceremonia. Pero lo más importante para el contraste de las hipótesis que manejamos es que no parece existir ninguna correlación entre las actividades de cada núcleo y dicha edad. En efecto, tanto en Medina de Rioseco como en Guaza de Campos, villa esta última donde no se da la actividad textil, la edad de casamiento se mantiene a niveles muy parecidos a los de Frechilla y Villarramiel, localidades elegidas en función de su floreciente dedicación al tejido y su comercialización.

En cuanto al tamaño medio de la familia y la unidad familiar, hemos intentado aproximarnos por dos vías distintas y complementarias.

Por un lado, mediante el análisis de los padrones citados, comprobamos que el número de habitantes por vecino ¹⁷ en Frechilla (3,6 habitantes/vecino) y Villarramiel (3,98) es similar —y, en el caso del primero, incluso ligeramente inferior— al de Guaza (3,92 habitantes/vecino). Sólo en Medina de Rioseco el tamaño medio de la unidad familiar sobrepasa los cuatro miembros (4,2 habitantes/vecino), debido en parte a la importancia de criados, dependientes sobre todo de algunas de las familias más acaudaladas de la ciudad, y al más elevado nivel de vida de algunos de sus moradores —mercaderes y labradores acomodados—, que les permite mantener una familia más numerosa.

Si de las comparaciones de la unidad familiar en sentido amplio pasamos a las del número de hijos de cada familia, eliminando de nuestros cálculos aquellas familias cuyas cabezas son viudas o solteras y cuyo número de hijos sería siempre menor, obtenemos resultados parecidos:

CUADRO 1 ¹⁸*Número de hijos por matrimonio completo*

	<i>Frechilla</i>	<i>Guaza</i>	<i>Medina de Rioseco</i>
Labradores	1,5	1,79	1,7
Jornaleros			1,5
Artesanos	1,6	—	1,6

¹⁷ Para que las cifras sean, al tiempo que un contraste de nuestras hipótesis, coherentes con los cálculos que se suelen hacer al referirse al problema del coeficiente, hemos partido de los mismos presupuestos observados en la época; es decir, contando a las viudas y solteras como medio vecino.

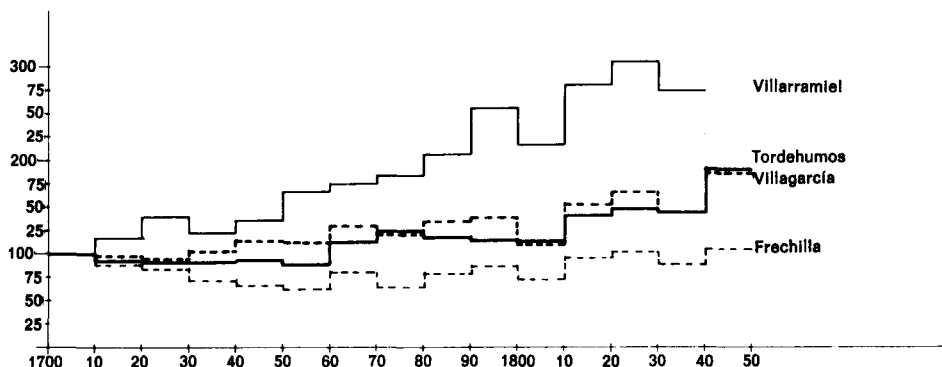
¹⁸ Hemos hecho la diferencia labradores-jornaleros para Medina de Rioseco, y no para Frechilla, debido a que si bien para dicha ciudad los jornaleros rara vez poseen alguna parcela de tierra, no ocurre así en la segunda; en ésta, la distinción suele radicar más en la posesión o no de animales de labor (un par de mulas o bueyes), por lo que se da el caso de que, con cierta frecuencia, se encuentran empadronados como jornaleros individuos con unos ingresos superiores a otros que lo están como labradores, con lo cual el matiz introducido en la distinción de cifras en el cuadro no sería el mismo que para Medina de Rioseco, pues a *grosso modo* hace referencia a una diferencia económica importante y de repercusiones lógicas en la composición familiar. Hay que precisar también que para el cálculo de las cifras de hijos de artesanos referentes a Medina de Rioseco se ha realizado un sondeo entre los individuos encuadrados en el sector secundario y pertenecientes a los oficios de albañiles, caldereros, canteros, carpinteros, cuchilleros, estamañeros, freneros, latoneros, pasamaneros de lana hilaza, pasamaneros de seda, puertaventanistas, tallistas, tejedores y zapateros de obra prima, que suman una muestra de 227 cabezas de familia.

En efecto, el número de hijos por familia no es tampoco muy diferente entre ambos tipos de poblaciones. Incluso cabe decir que, aunque insignificante, la relación de hijos por matrimonio es mayor en Guaza, donde las actividades textiles son inexistentes, que en Frechilla. En todo caso, tanto por lo que se refiere a artesanos como a campesinos, el número de hijos por familia y por grupos no parece guardar grandes diferencias según se trate de un núcleo de gran tamaño o de pequeño.

¿Se debe suponer también —ya desde una óptica evolutiva— que el crecimiento demográfico fue mayor en los centros de industria a domicilio? Para responder a esta pregunta hemos renunciado al método normal de comparación de las cifras del siglo XVIII con las del siglo XIX, a causa de la gran disparidad de criterios que presentan los recuentos demográficos en lo referente a la conversión de habitantes en vecinos y a causa, también, de que algunas pruebas de verificación a que hemos sometido dichos recuentos (Catastro del marqués de la Ensenada para 1752, Censo de Floridablanca para 1787 y Diccionario de Madoz para 1845) nos hacen dudar de una representatividad total, a no ser que se sometan a manipulaciones y correcciones que harían demasiado larga y fatigosa la exposición. Por ello hemos recurrido a un método más minucioso, pero menos ambicioso en cuanto a sus resultados, ya que los datos pierden en representatividad de una evolución de conjunto lo que ganan en solidez local: en el gráfico 1 expresamos la evolución de los bautismos —como indicador de la evolución general de la población— de cuatro núcleos rurales, dos de ellos de escasa importancia desde la óptica del desarrollo industrial

GRAFICO 1

Evolución demográfica de algunos núcleos de la Tierra de Campos
(Base 100 para 1700-1710)



(Tordehumos y Villabrágima —véase mapa—) y los otros dos representativos de los enclaves de dedicación artesanal y comercial (Villarramiel y Frechilla). Los cuatro han sido elegidos, también, por su relativa identidad en cuanto al tamaño en las fechas en que tenemos cifras de su población: en 1787, tres de ellos sobrepasaban los 1.000 habitantes (Frechilla, 1.194 habitantes; Tordehumos, 1.052, y Villabrágima, 1.375); es decir, se trata de villas de tamaño medio en relación al contexto comercial, aunque de entre ellas destaque, en cierto modo, Villarramiel (2.003 habitantes).

La comparación, realizada estableciendo el índice 100 para todos los núcleos en la década 1700-1710, nos muestra una evolución, dispar pero significativa, de la que se pueden extraer consecuencias interesantes: *a)* En primer lugar, es claro que las dos villas relacionadas, como representativas de los lugares de industria dispersa, no tienen una evolución similar; mientras Villarramiel crece durante los ciento cincuenta años, Frechilla conoce un descenso hasta 1760¹⁹ y una posterior recuperación, que, en cualquier caso, no es tan espectacular como la de Villarramiel, cuyo crecimiento debió basarse, fundamentalmente, en la emigración de individuos de los pueblos circunvecinos, entre ellos, posiblemente, de la misma Frechilla²⁰. *b)* Es más, si, por un lado, parece evidente que no se puedan resumir pautas de evolución demográfica comunes a dichos núcleos, es claro que tampoco, en líneas generales y comparándolas con la evolución de otra de estructura puramente agraria, asisten a un crecimiento de mayor envergadura que el resto, ya que si bien el caso de Villarramiel es especial y explicable por su especialización comercial —más incluso que la artesanal—, el tenue aumento demográfico de Frechilla es insignificante si lo comparamos con el de los otros dos enclaves de tamaño similar pertenecientes al otro grupo.

En resumen, si bien la actividad secundaria se hace notar en algunos aspectos de la demografía rural, como puede ser una mayor densidad o el crecimiento más acelerado de alguna villa, lo cierto es que no sólo no son diferencias marcadas y, a veces, muy localizadas en el espacio, sino que no parece darse ningún cambio en los comportamientos demográficos de estas comunidades, al menos en el sentido de apuntar, siquiera, un cambio en el régimen demográfico. En todo caso, el crecimiento de ciertas villas se mueve dentro de los moldes típicos de la demografía de Antiguo Régimen y de toda la región, y su auge debía estar más relacionado con movimientos migratorios que con un crecimiento vegetativo con raíces en transformaciones económicas o en los ingresos campesinos.

¹⁹ He de expresar aquí mi agradecimiento a don Francisco Herreros, párroco de Frechilla de Campos, que tuvo la amabilidad de cederme la serie de bautismos de dicha villa.

²⁰ Tomás LÓPEZ, *Diccionario Geográfico de España*, ms. 7350, fol. 369, BN.

4. *Conclusión*

A la vista de lo apuntado y a la espera de pruebas más concluyentes —a las que sólo se llegará por una ampliación estadística de los núcleos estudiados y un estudio comparativo de base regional más amplia—, parece clara la influencia de la estructura del sector agrario, sobre todo la insuficiente especialización regional de los cultivos, en la existencia de límites al desarrollo de la industria rural dispersa y a la inversión en ella de capital urbano. Ello no supone, y en el caso de la Tierra de Campos tenemos algunas pruebas que podrían corroborarlo, que no existan otros factores no considerados específicamente en este trabajo y que pudieron tener importancia, como el alza de los precios agrícolas y de la renta de la tierra desde la segunda mitad del siglo XVIII, que pudo atraer las inversiones, o como la existencia de alternativas de inversión (arrendamientos de impuestos reales, comercio interregional con productos textiles de otras comarcas...) más rentables económica o socialmente.

Las rigideces económicas a que nos hemos referido, cuya raíz está en la cristalización de una estructura agraria arcaica y en una mínima especialización regional de la producción, implican la persistencia de pautas demográficas típicas de una economía de subsistencia y la ausencia de un crecimiento industrial. Es más, hay que pensar, al menos como hipótesis, que estas barreras al desarrollo de la dependencia campo-ciudad en el proceso productivo pudieron ser también la causa de la decadencia o escaso crecimiento de Medina de Rioseco hasta mediados del siglo XIX. En efecto, las cifras de población que tenemos para la ciudad apuntan en este sentido²¹ y parecen ser corroboradas, por el momento, por los datos, aún incompletos, de los libros de bautismos. Esta evolución, que es más llamativa por coincidir con el crecimiento general de la región, posiblemente haya que relacionarla con su pérdida relativa de importancia frente a otros centros más especializados exclusivamente en el comercio interregional, como Villalón o el propio Villarramiel. Tras de ella posiblemente se encuentre una crisis del sector secundario, a la que con cierta frecuencia hacen alusión los coetáneos²², que es debida al peso de los gravámenes fiscales sobre la industria gremial. En todo caso, este descenso nos debe hacer reflexionar sobre la rigidez no sólo de la ordenación gremial en sí, sino,

²¹ La población de Medina de Rioseco debió evolucionar de una forma, si no exacta, sí próxima a la que expresan las siguientes cifras: año 1752, 5.880 habitantes (Catastro de Ensenada); año 1787, 5.283 habitantes (Censo de Floridablanca); año 1845, 4.500 habitantes (Diccionario Madoz).

²² En un memorial sobre la industria de la ciudad recogido por LARRUGA (*Memorias...*, op. cit., p. 12), las fuerzas vivas de ella hacen alusión a «tantas familias de fabricantes que por sus costes medios se han visto en precisión de abandonar sus telares, dedicándose a peones de albañil».

desde nuestro planteamiento, de todo el sistema de relación de la ciudad con su entorno rural en el proceso de producción industrial en su conjunto y su capacidad de renovación y perfeccionamiento. La falta de un auténtico ensamblaje entre ambos mundos pudo ser, junto con otros factores más generales en los que aquí no entramos, una causa importante de la tendencia progresiva a la desindustrialización —evidentemente, no se partía de una sociedad ni medianamente industrializada— que ha conocido la región desde el siglo XIX. En cualquier caso, se trata de hipótesis que esperamos criticar más profundamente en trabajos sucesivos.

APENDICE 1

Ingresos familiares en Frechilla de Campos (1752)

CAMPESINOS

Niveles de renta	Ingresos totales	N.º de ind.	\bar{x}	Ingresos tierras cereal	N.º de ind.	\bar{x}	Ingresos trabajo textil	N.º de ind.	\bar{x}	% ingreso total	Ingresos viñas	N.º de ind.	\bar{x}	% ingreso total
I. Más de 8.001 rs.	29.925,9	3	9.975,3	19.299,1	3	6.433	152	2	76	0,8	2.024,2	3	674,7	4,1
II. 7.001 a 8.000 rs.	36.622,9	5	7.324,5	14.479,1	4	3.618,7	47,9	2	23,7	0,3	3.107	5	621,4	8,5
III. 6.001 a 7.000 rs.	6.918,4	1	6.918,4	3.411,2	1	3.411,2	114	1	114	1,6	972	1	972	14,2
IV. 5.001 a 6.000 rs.	3.377,3	6	5.546,2	16.493,7	6	2.748,9	19	1	19	0,3	2.590,7	6	431,7	7,7
V. 4.001 a 5.000 rs.	21.754,25	5	4.350,8	7.330,6	4	1.832,6	401,1	3	133,7	2,8	1.581,4	4	395,3	8,7
VI. 3.001 a 4.000 rs.	28.103,7	8	3.512,9	11.144,6	7	1.592	831,1	4	207,7	6,1	5.638,85	8	704,8	20,7
VII. 2.001 a 3.000 rs.	58.990,2	24	2.457,9	26.255,6	22	1.193,4	551	10	55,1	3,7	6.101,1	21	290,5	12,2
VIII. 1.501 a 2.000 rs.	32.574,8	18	1.809,7	8.940	14	638,5	337	6	56,2	3,4	2.922,3	14	208,7	9,6
IX. 1.001 a 1.500 rs.	27.145,2	22	1.233,9	7.797,19	22	354,4	848,6	11	77,1	7,6	2.327,9	19	122,4	9,7
X. 751 a 1.000 rs.	26.835,12	31	865,6	3.419,7	18	189,5	1.668,2	18	92,6	10	2.604	23	113,2	10,3
XI. 501 a 750 rs.	48.443,7	82	598	2.929,8	28	104,6	1.732,5	44	39,37	6,5	2.775,6	47	59	11,6
XII. 251 a 500 rs.	24.453	55	44,6	1.643,7	8	205,4	294,4	8	24,5	10,7	607,8	9	67,5	14
XIII. 1 a 250 rs.	3.792,6	46	82,4	536,9	12	44,7	248	5	49,65	45	1.157,4	24	48,2	38,8
XIV.	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES ...	378.837	315	1.202,6	123.681,2	149	830	7.130,8	115	62	1,8	34.410	184	187	9

ARTESANOS

Niveles de renta	Ingresos totales	N.º de ind.	Ingresos de tierras cereal	N.º de ind.	\bar{x}	Ingresos de trabajo textil	N.º de ind.	\bar{x}	% ingreso total	Ingresos de viñas	N.º de ind.	\bar{x}	% ingreso total
I. Más de 8.001 rs.
VI. 3.001 a 4.000 rs.
VII. 2.001 a 3.000 rs.	2.507,6	1	2.507,6	445,3	1	445,3	1.524	1	1.524	60,7	150	1	150
VIII. 1.501 a 2.000 rs.
IX. 1.001 a 1.500 rs.	4.659,9	4	1.164,9	699,2	3	233	416	4	104	7,8	419,3	4	104,8
X. 751 a 1.000 rs.	2.606,1	3	868,7	494,9	2	247,4	168,2	3	56	6,4	93	2	46,5
XI. 501 a 750 rs.	4.464,3	7	637,7	284,9	3	94,9	148,9	5	29,7	4,38	301,7	5	60,3
XII. 251 a 500 rs.	4.809,3	12	400,7	16	1	16	123	8	15,4	3,7	77	1	77
XIII. 1 a 250 rs.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALES ...	19.047,2	27	705,4	1.036,6	10	103,6	2.380,1	21	113,3	12,4	1.041	13	80
TOTALES (camp. y art.) ...	397.884,2	342	1.163,4	124.717,8	159	784,3	9.510,9	136	69,9	2,3	35.451	197	179
													8,9

NOTAS: a) \bar{x} = media por familia de cada grupo.

b) El porcentaje con respecto al ingreso total de cada grupo se ha obtenido a partir de las cifras originales, familia por familia, y no con las medias ya elaboradas, que se presentan en el cuadro en las columnas que le preceden.

c) En los ingresos totales se han computado también otras partidas, como las rentas de casas, utilidades de ganado, utilidad del trabajo personal, comercio, etc.; de ahí que la suma de las partidas del cuadro no sea igual al total. El valor de estas cifras es sólo orientativo, y sólo se pretende tener un marco de referencia de las partidas de ingresos que estudiamos. El cálculo más riguroso exigiría operaciones que aquí no se pueden realizar.

APENDICE 2 (I)

Edades de matrimonio en Tierra de Campos

MEDINA DE RIOSECO (parroquia de Santa Cruz)

Edades	VARONES				HEMBRAS				VARONES Y HEMBRAS						
	Casa- dos	% del total	Solte- ros	% del total	Total	Casa- dos	% del total	Solte- ras	% del total	Total	Casa- dos	% del total	Solte- ros	% del total	Total
29	3	100	—	—	3	10	100	—	—	10	13	100	—	—	13
28	7	70	3	30	10	6	40	9	60	15	13	52	12	48	25
27	3	100	—	—	3	5	83,3	1	16,7	6	8	89	1	11	9
26	5	71	2	29	7	11	100	—	—	11	16	89	2	11	8
25	3	50	3	50	6	4	44,4	5	55,6	9	7	46,6	8	53,4	15
24	7	77,7	2	22,3	9	5	100	5	—	10	12	63,1	7	37	19
23	7	87,5	1	12,5	8	4	57,1	3	43	7	11	73	4	27	15
22	3	60	2	40	5	7	37	12	63	19	10	41,6	14	58,4	24
21	5	45,4	6	54,6	11	7	41,1	10	58,9	17	12	43	16	57	28
20	4	33,3	8	66,6	12	4	40	6	60	10	8	36	14	64	22
19	1	14,3	6	85,7	7	1	7,7	12	92,3	13	2	10	18	90	20
18	—	—	14	100	14	1	9	10	91	11	1	4	24	96	25
17	—	—	16	100	16	—	—	15	100	15	—	—	31	100	31
16	—	—	18	100	18	—	—	16	100	16	—	—	34	100	34
15	—	—	9	100	9	—	—	13	100	13	—	—	22	100	22

Edades de matrimonio en Tierra de Campos

Edades	VARONES				HEMBRAS				VARONES Y HEMBRAS			
	Casa- dos	% del total	Solte- ros	% del total	Casa- dos	% del total	Solte- ras	% del total	Casa- dos	% del total	Solte- ros	% del total
29	2	66,6	1	33,4	2	100	—	—	4	80	1	20
28	4	80	1	20	9	100	—	—	13	93	1	7
27	5	100	—	—	3	100	—	—	8	100	—	—
26	6	85,7	1	14,3	4	80	1	20	10	83,3	2	16,7
25	7	70	3	30	4	100	—	—	5	78,5	3	21,5
24	4	50	4	50	9	100	—	—	11	76,4	4	23,6
23	3	75	1	25	4	75	1	25	13	75	2	25
22	3	37,5	5	62,5	3	66,6	1	33,3	6	45,5	6	55,5
21	1	20	4	80	2	33,3	2	66,6	5	25	6	75
20	3	33,3	6	66,6	1	66,6	3	33,3	2	50	9	50
19	—	—	5	100	6	—	7	100	9	—	12	—
18	—	—	4	100	—	—	6	100	7	—	10	—
17	—	—	3	100	—	—	6	100	—	—	9	—
16	—	—	11	100	—	—	4	100	—	—	15	—
15	—	—	4	100	—	—	2	100	—	—	6	—

APENDICE 2 (III)

Edades de matrimonio en Tierra de Campos

VILLARRAMIEL

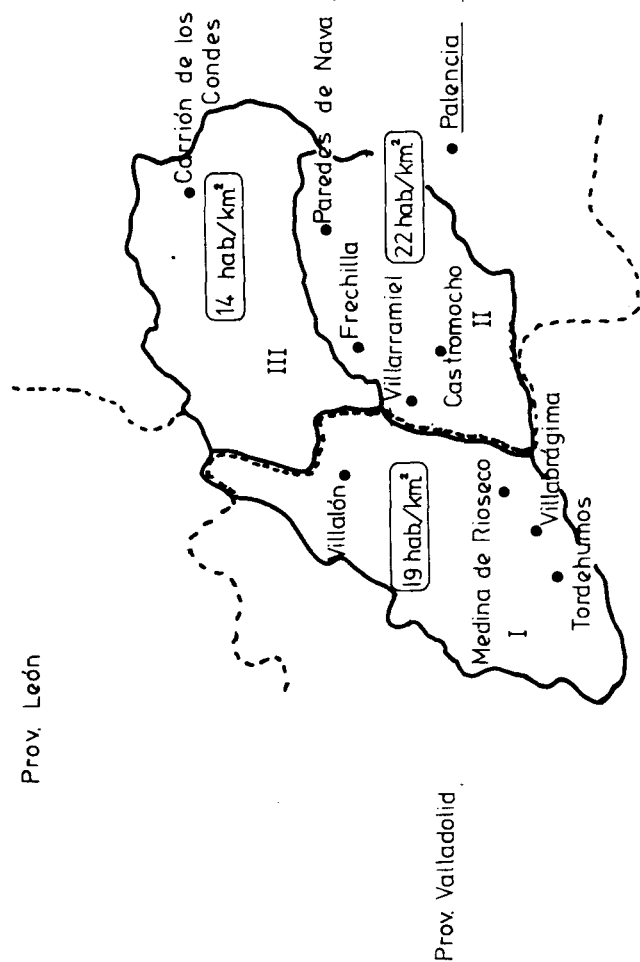
Edades	VARONES				HEMBRAS				VARONES Y HEMBRAS						
	Casa- dos	% del total	Solte- ros	% del total	Total	Casa- das	% del total	Solte- ras	% del total	Total	Casa- dos	% del total	Solte- ros	% del total	Total
29	1	100	—	—	1	5	83,3	1	16,7	6	6	85	1	5	7
28	7	87,5	1	12,5	8	13	92,8	1	7,8	14	20	91	2	9	22
27	7	100	—	—	7	9	100	—	—	9	16	100	—	—	16
26	10	83,3	2	16,7	12	4	66,6	2	33,3	6	14	77,7	4	22,2	18
25	10	90,9	1	9,1	11	7	58,3	5	41,7	12	17	74	6	26	23
24	11	84,6	2	15,6	13	15	79	4	21	19	26	81	6	19	32
23	6	100	—	—	6	9	64,2	5	35,8	14	15	75	5	25	20
22	9	60	6	40	15	11	58	8	62	19	20	58,9	14	41,1	34
21	5	38,4	8	61,6	13	3	37,5	5	62,5	8	8	38	13	62	21
20	4	19	17	81	21	6	31,5	13	68,5	19	10	25	30	75	40
19	2	16,6	10	83,4	12	—	—	5	100	5	2	13,3	15	86,6	17
18	—	—	17	100	17	1	7,7	12	92,3	13	1	3,3	29	76,6	30
17	1	11,1	8	88,9	9	—	—	18	100	18	1	3,7	26	96,6	27
16	—	—	18	100	8	—	—	20	100	20	—	—	16	100	38
15	—	—	11	100	11	—	—	8	—	8	—	—	23	100	16

APENDICE 2 (IV)
Edades de matrimonio en Tierra de Campos
 FRECHILLA

Edades	VARONES				HEMBRAS				VARONES Y HEMBRAS						
	Casa- dos	% del total	Solte- ros	% del total	Total	Casa- dos	% del total	Solte- ras	% del total	Total	Casa- dos	% del total	Solte- ros	% del total	Total
29	7	87,5	1	12,5	8	3	60	2	40	5	10	77	3	23	13
28	12	85,7	2	12,3	14	6	66,6	3	33,3	9	18	78	5	22	23
27	6	100	—	—	6	2	50	2	50	4	8	80	2	20	10
26	4	66,6	2	33,3	6	4	80	1	30	5	8	73	3	27	11
25	5	62,5	3	37,5	8	5	45,4	6	54,6	11	10	52,6	9	47,8	19
24	4	66,6	2	33,3	6	7	77,7	2	22,3	9	11	73,3	4	26,7	15
23	4	100	—	—	4	3	50	3	50	6	7	70	3	30	10
22	10	66,6	5	33,3	15	9	56,25	7	43,7	16	19	61,3	12	38,7	31
21	2	40	3	60	5	3	33,3	6	66,6	9	5	35,7	9	64,3	14
20	2	16,6	10	83,4	12	3	18,7	13	81,3	16	5	18	23	82	28
19	2	12,5	14	87,5	16	1	6,25	16	93,7	17	3	9	30	81	33
18	1	5,8	16	94,2	17	1	5	19	95	20	2	6	34	94	36
17	—	—	10	100	10	1	4,5	11	95,5	22	1	4,5	21	95,5	22
16	—	—	13	100	13	—	—	13	100	13	—	—	26	100	26
15	—	—	8	100	8	—	—	11	100	11	—	—	19	100	19

APENDICE 3

Mapa de densidades de población



Notaciones:

— Áreas delimitadas para el análisis de densidades

- - - Límites prov. actuales.

COLOQUIO

Gonzalo ANES. Mi intervención se refiere a la ponencia presentada por María José Rodríguez Galdo y José Cordero Torrón y son unas observaciones sin importancia que no impiden la valoración correcta y debida de su trabajo. En primer lugar, discrepo del título de acuerdo con el contenido: «Rentistas urbanos y capital usurario. La aparcería de ganado en Galicia en el siglo XVIII». No me parece que sea el mejor vocablo para designar esta realidad de las aparcerías, que es tan común en la España cantábrica, las comuñas asturianas y las amaterias vascas, lo de capital usurario. Yo no sé lo que quiere decir capital usurario exactamente. Usura sí se sabe muy bien lo que es y, desde luego, no se ve usura en la conducta de las personas que cedían ganado a otros, de acuerdo con un contrato, muchas veces verbal, establecido sobre las ganancias que pudieran derivarse de esta cesión. Si se lee la contestación tomada del Catastro de Ensenada en el interrogatorio correspondiente a Puente deume, se ve claramente que no hay usura por ningún lado. Cuando se decen bueyes, el dueño de los bueyes cede la yunta a un aparcerero que alimenta los bueyes, los utiliza para las labores y luego, en el momento de la venta, si el precio de la yunta es superior al estimado en el momento de la cesión, la diferencia se parte por mitad; si es igual todo corresponde al dueño, y si hay pérdida es el dueño quien lo pierde. Esto es, es un contrato que si se establece de esta forma es justamente porque significa la posibilidad de que gente sin yuntas puedan convertirse en colonos útiles y no es mediante la aparcería, pienso yo, cómo tiene lugar el aprovechamiento o el beneficio que puede obtener el dueño de tierras y ganado respecto de la cesión de tierras y ganado. Si se mueren las vacas o las come el lobo es el dueño el que las pierde. Por lo tanto, el título de capital usurario me parece que sobra aquí, se puede calificar de otra forma, pero no con este vocablo, porque éste sí que tiene su significado preciso y me parece que no corresponde a la realidad que se estudia. También hay una serie de observaciones que dan lugar a sacar una conclusión, pero yo creo que se generaliza excesivamente, y, así, en la página seis se dice: «sean urbanas o rurales, los

grandes aparceristas son también importantes foristas o subforistas, siendo éste el estrato social más beneficiado por este contrato. Tras ellos se sitúa el clero, una cierta burguesía y los labradores acomodados». Aparte de la imprecisión de lo que es esto de «una cierta burguesía», se dice que «el clero tiene en algunas zonas una importancia relativa» —lo de relativa tampoco se sabe muy bien lo que quiere decir—; «así, en Montoxo, Ayuntamiento de Cedeira, las cofradías religiosas tienen cedidas más de treinta cabezas, y en Brión (Ayuntamiento de O Ferrol), tiene el párroco más de veinte reses. Si las cifras del clero secular son, en general, modestas, mucho más lo son las del regular, que, si bien cede algunas reses, lo hace en escasa medida». Todo es impreciso, pero yo creo que con este párrafo se quiere indicar lo que debía ocurrir en toda Galicia, cuando de hecho se tiene solamente datos de unas cuantas parroquias. Y luego, al final, me parece que los datos sobre Fuentedeume hay que tomarlos con reservas, porque el hecho de que en el repartimiento de la riqueza del comercio e industria de esta villa sean los pastores de ganado los que declaran las utilidades individuales más altas puede no deberse a que sea el ingreso más alto el procedente de aquí, sino que, quizá, era el ingreso más difícil de ocultar. Así que esto hay que ponderarlo. Y luego una cuestión que puede parecer risible y que creo que es algo que tenemos que ponernos de acuerdo para que no vaya a ocurrir que, aparte del trabajo común que tengamos, nuestra cabeza sufra con aprendizajes que creo innecesarios. La ponencia está escrita en castellano, y al estar escrita en castellano los nombres de lugar deben escribirse en castellano, y así no se puede decir Viveiro, ni Pontedeume, ni A Coruña (que puede discutirse si, incluso en gallego, se debe decir A Coruña o Acruña), ni O Ferrol, ni Ourense, aunque lo diga la televisión. El otro día se dijo aquí la persona a la que yo le aludía la influencia de la televisión que no veía la televisión. Puede que le pasara lo que a aquellos americanos tan exquisitos que les comentaban algo de la televisión y contestaron: «nosotros no vemos la televisión ni conocemos a nadie que la vea». Pues aunque no se vea la televisión nos influye lo mismo, porque impregna el lenguaje de las gentes y somos nosotros esclavos de esa impregnación. Hay que decir Vivero, Puente deume, La Coruña, hay que decir El Ferrol y hay que decir Orense, en castellano. Los letrados indicadores de las carreteras es muy lícito y conveniente que expresen los nombres como allí se pronuncian. Pero escribiendo en castellano hay que escribir los nombres como se dicen en castellano. Nada más.

José MORILLA CRITZ. Quisiera solamente hacer algunas preguntas y algunas consideraciones en torno a la comunicación de la profesora Aurora Gámez. En cuanto a la pregunta, ¿cómo has realizado la cala para el estudio

de estos préstamos? Esto es, si ha sido un muestreo sistemático, o si ha sido un muestreo aleatorio, o siguiendo la pista a prestamistas. En segundo lugar, una consideración que quizá no te haya pasado inadvertida, si has visto muchos de estos préstamos, y es que muchas veces el que estén expresados en dinero no quiere decir que tengan que liquidarse en dinero. Como en estos contratos se recoge toda la relación comercial de los comerciantes urbanos con los viñadores, ya que, por lo general, los comerciantes abastecían a los campesinos durante todo el año. Esto lo iban anotando y después muchos de estos viñadores lo que hacían era entregar toda la cosecha de vino y pasas, el comerciante la vendía, liquidaban cuentas y de esta manera se saldaba el préstamo. Es decir, que en ese préstamo, lo que aparece sólo como un préstamo, en realidad encierra toda la relación comercial de los comerciantes con los agricultores, y como había llegado a ser tan corriente el notario escribe simplemente: «préstamo a viñadores», para simplificar, añadiendo sólo que a tal fecha se comprometían a pagar la cantidad indicada. Así, el que el préstamo esté expresado en dinero sólo es una manera de expresar la cantidad que se había adelantado, pero no quiere decir que tendría que ser pagado en metálico necesariamente. Con respecto a lo de las contabilidades, solamente quiero hacer la apreciación de que el propio Archivo de Protocolos puede servir para encontrarlas. Yo he encontrado algunas al indagar sobre arrendamientos, con ocasión de pleitos. En algunos casos he encontrado, incluso, series de contabilidad de siete y hasta diez años. Pleitos de particiones o de dote. Concretamente en una dote que no se ha hecho efectiva del todo. El comerciante lleva una detallada contabilidad con las inversiones, gastos y productos de la venta. Así es posible conocer los costes de producción de determinadas viñas, costes salariales incluidos, aunque, a veces, es también posible que el precio de venta de los productos esté falseado. He de señalar que este tipo de contabilidades abunda en el Archivo de Protocolos de Málaga. Y, finalmente, quiero preguntar si has indagado sobre el tipo de interés de los préstamos. Ya sé que esto, generalmente, no se expresa en los contratos, aunque está implícito en los mismos, pero en algunos sí se expresa, sobre todo si ha habido un impago y debe negociarse la deuda. ¿Existe posibilidad de rastrear el tema de los tipos de interés?

Juan GUIADO LÓPEZ. La ponencia de Aurora Gámez me ha parecido excelente y me ha suscitado algunas interrogantes, ya que he trabajado sobre el tema en la misma región de Málaga, concretamente en la Asarquía. En primer lugar, quisiera hacer referencia a una cuestión que ya ha mencionado Morilla y que es el problema de las fuentes. Los contratos para esta región arrojan aspectos muy interesantes, pero no hay que olvidar que en ciertos aspectos son ficticios. Esto me lo confirma, por ejemplo, dos contrastacio-

nes que he podido hacer de las Actas Notariales que son, en primer lugar, una contabilidad privada de un campesino viticultor. Resulta que en las Actas Notariales los tipos de interés estaban por la baja, mientras que en sus libros de cuentas aparecen mucho más altos. En segundo lugar, también se puede contrastar esa fuente con fuentes de carácter fiscal. En una investigación realizada por Hacienda, de carácter reservado, se calcula que el doble del valor de las exportaciones de los comerciantes las obtenían de la usura. Así, pues, por suerte disponemos de diversas fuentes que nos permiten contrastar y precisar el tema. Por otra parte, no debemos ser excesivamente ambiciosos y coger las Actas Notariales sin más y sin delimitar zonas geográficas y sin conocer la producción, ni el valor del capital que se mueve. Mis preguntas son: ¿Dónde estaban localizados geográficamente los prestamistas? ¿Eran vecinos de Málaga o de Velez-Málaga, o vivían también en el agro, es decir, si existía la figura del labrador acomodado que presta a sus vecinos? El tema de los intereses que cobraban ya lo ha tratado Morilla. Ahora bien, esos préstamos hipotecarios que se pueden constatar, pregunto si conoces casos de comerciantes o religiosos que se hayan incautado de tierras al no procederse el pago. Otro problema es si puede hablarse de un monopolio en el sector, es decir, de unos pocos grandes acaudalados, y de si el crédito era caro porque existían recursos escasos o pocas personas a las que recurrir. Después has hecho referencia a la zona de Cómputa y me interesaría saber si las zonas que aparecen en las Actas Notariales son zonas de viñedo, o si también aparecen zonas de cereal y de regadío, o si sólo se centran en los municipios alrededor de Velez-Málaga. Finalmente, quiero saber si puedes hacer alguna observación de para qué se recurría al préstamo, si era para pagar salarios o era para otras cuestiones.

José Francisco DE LA PEÑA. Quisiera, en primer lugar, decirle al señor Santiago Tinoco que, efectivamente, la época de los siglos XVI-XVII en los alrededores de Sevilla se presenta como un período de concentración de la propiedad, porque concretamente me ha parecido ver que en los alrededores de Sevilla predomina no el minifundio, pero sí la pequeña propiedad. Esta tendencia a la concentración territorial se observa en elementos muy distintos, tanto eclesiásticos como nobles, como banqueros o como grandes comerciantes, lo que querría saber es si en el caso concreto de la propiedad de los Espinosa cada parte de la finca se adquiere de una sola vez o si, por el contrario, se presenta también este proceso de acumulación territorial a lo largo del período. Por otro lado, también me gustaría saber algo más sobre la operatividad del Banco en el período de funcionamiento.

M. X. RODRÍGUEZ GALDO. Yo quiero agradecer al profesor Anes que con su intervención provoque un tema, sobre el que nosotros ya hemos debatido. En la presentación de la ponencia yo he tratado de suscitar esta polémica, ya que he insistido que las instituciones religiosas y los pensadores ilustrados insistían en el carácter benigno de las aparcerías gallegas. Sarmiento señala que es un arbitrio admirable y propone que los obispos también la adopten. Con todo, nosotros nos hemos inclinado por el término capital usurario. La razón de su empleo es que con el término queríamos significar que era una forma de valorización del capital dinero y con el capital usurario se pretendía obtener una utilidad adelantando dinero a cambio de un interés, que debemos poner entre comillas, puesto que en las sociedades precapitalistas no existe un mercado de capitales y, por tanto, el interés no se forma en el mercado de capitales. El interés en la sociedad precapitalista o de feudalismo desarrollado, como la sociedad gallega del siglo XVIII, adoptó la forma de censos consignativos, de compras anticipadas de granos y de aparcería de ganados. No nos hemos referido al término usura como un problema de tasa de interés excesiva, lo cual es un problema subjetivo. Nosotros hemos destacado los elementos de garantía que tiene la aparcería en el caso gallego, que, además, según hemos podido constatar con colegas asturianos, parece que la comuña se asimilaría bastante, mientras que, según he leído en Fernández de Pinedo, las aparcerías vascas tendrían un carácter más gravoso. Además, el tema del capital usurario no lo hemos inventado nosotros y es un término que se ha utilizado en tratados de historia del derecho de autores italianos y españoles. Quizá todos hayan bebido en el libro III de *El capital* de Marx, que es donde más ampliamente se aborda todo esto. Para nosotros es un término problemático y lo que yo expongo aquí son los problemas que hemos tenido al utilizarlo. Nos pareció, en cualquier caso, el más preciso y por eso lo hemos utilizado.

Por lo que se refiere a las otras cuestiones, quizá menores, en la exposición ya hemos cuidado el decir comerciantes en lugar de «cierta burguesía». Lo de la importancia relativa del clero, sí; evidentemente, nosotros, aquí, hemos seleccionado 29 parroquias que son las que hemos cuantificado, aunque, en conjunto, hemos investigado 200, aunque no las hayamos cuantificado. Contemplar 200 parroquias, un número exiguo, sin duda, no deja de ser una muestra representativa, y en ellas el clero aparece menos representado, no tengo datos, claro, que otros sectores. Basados en datos cualitativos, sí puede afirmarse que instituciones eclesiásticas como el Monasterio Cisterciense de Santa María de Meira están propugnando esta forma de cesión de ganados en aparcería. Así, por diversos documentos se muestra que el clero está interesado en este tipo de cesión de ganados. Y con relación a la toponimia es mejor que no nos metamos, y sólo

quiero señalar por encima que, por ejemplo, en muchos casos ha ocurrido que términos gallegos se han traducido salvajemente al castellano, y en castellano no significan nada, cuando en gallego tienen una significación precisa. Así, por ejemplo, el término Viveiro se empleaba en textos castellanos en la Edad Media. Nosotros, gallegos, en esto de la toponimia nos lo tomamos de manera bastante flexible. El término Iglesia que en el siglo XIX se refiere a núcleos de población nuevos originados con la desamortización, la Comisión de Toponimia propugna que se siga utilizando el término Iglesia, puesto que ya se había utilizado en el siglo XIX. En cualquier caso, éste es un tema de gran interés pero que no podemos entrar aquí puesto que es salirse del tema.

Aurora GÁMEZ AMIÁN. Voy a contestar primero al profesor Morilla. Como he dicho al presentar mi comunicación, este trabajo no lo considero acabado, ya que solamente he mirado esta fuente y lo que estoy deseando es consultar otras fuentes como las contabilidades privadas o las dotes y reparticiones de herencias. En cuanto a cómo he realizado la cata, la he hecho aleatoria, en función de la importancia del término. Así, de Málaga a Velez-Málaga, que disponen de un mayor número de escribanos, he consultado un mayor número de escribanías. De los otros pueblos en los que había escribanos también he realizado un estudio. Después, claro, me encontré con el caso típico de Catalina Linch y le seguí la pista por un especial atractivo y traté de buscar su testamento. Así, pues, ha sido un muestreo aleatorio en función de la importancia de los términos en cuestión. En cuanto a que si casi siempre se expresan en dinero, tú dices que a veces los préstamos encubren unas prestaciones en especie. Yo en esto estoy en parte de acuerdo contigo, quizá la mayoría de estos préstamos encubra anticipos o adelantos en comestibles, género, etc., aunque no lo puedo precisar puesto que no lo he comprobado. En cuanto al interés de este tipo de préstamos, yo no he encontrado en los contratos que he analizado ni una sola referencia que señale el tipo de interés, y he mirado, en particular, los que ponían el fin del préstamo, con lo que aprovecho para contestar una de las preguntas de Juan Guisado; los préstamos eran para financiar las labores de sus viñas y mantención de su familia. Contestando a las demás preguntas de Juan Guisado, que ha observado esa contrastación entre los tipos de interés a la baja y la contabilidad privada, yo estoy de acuerdo que se hacía así. Esto, después de todo, era una forma más de dominación. Y en cuanto adónde estaban localizados los prestamistas te diré que la mayoría eran comerciantes de Velez y de Málaga, aunque también he encontrado comerciantes de otros lugares. Y en cuanto a si eran campesinos o labradores acomodados, también

he comprobado que eran no sólo de estos lugares, sino también de pueblos más pequeños. Y con esto creo haber contestado a vuestras preguntas.

Santiago TINOCO. Respecto a la primera cuestión que plantea el profesor De la Peña, quiero aprovechar para referirme a un aspecto de la comunicación a la que antes, por falta de tiempo, no pude hacer referencia, es la de la documentación. Está muy relacionada con este proceso de acumulación de tierras, o sobre compra de una sola vez. Nuestro estudio sobre los bienes y sobre la operatividad del Banco se basa en la documentación de carácter judicial que comenzó a producirse tras la declaración de quiebra de 1601. Entonces, a través de la fe de escribanos, certificaciones, escrituras, etc., hemos podido ir reconstruyendo tanto la composición de los bienes, como las principales operaciones realizadas por este Banco que operó en Sevilla. De ahí que para reconstruir los bienes hayamos aprovechado estas escrituras presentadas por la mayoría, es decir, por las 24 escribanías de Sevilla; estos banqueros trabajaban prácticamente con todos los escribanos, si bien se detecta una acumulación en tres o cuatro. En cualquier caso, hubo una gran presentación de documentos. Hemos obtenido una especie de *flash* de cómo estaban constituidos los bienes al producirse el momento de la quiebra. El proceso acumulativo, hasta ahora, no nos ha sido posible seguirlo, aunque teniendo en cuenta la distribución de la propiedad, que se trata de cinco heredamientos y de un total de 57 suertes o pedazos, en una zona de minifundio, como se ha señalado, de tal forma que cuando se dice que el conjunto formaba un latifundio, efectivamente, se trata de 354-355 Ha., repartidas en 57 suertes. En base a escrituras anteriores sí podemos apuntar que se trataba de un proceso acumulativo, bien por compra sucesiva, bien por dotes, bien por herencia, hasta, finalmente, llegar a constituir esta gran propiedad. Hay, sin embargo, que diferenciar, porque de los tres banqueros que hemos estudiado, Juan Castellado de Espinosa, Pedro de Mallería y el genovés Agustín de Vivaldo, la que destaca es la de Castellano de Espinosa, un heredamiento en su casa central, que conserva todavía sus naves renacentistas, sus lagares, sus molinos, etc. Aquí hay una cuestión interesante ya que la documentación muestra la preocupación por el mantenimiento y la mejora de la tierra, y esto se detecta en las escrituras que expresan esta preocupación. Así, se detecta un proceso acumulativo que termina en la formación de una gran propiedad y un proceso de reinversión de los beneficios para la mejora de la tierra. De cara a la segunda cuestión, la operatividad del Banco cabe señalar que se trata de un Banco de los descritos por Tomás de Mercado a mitad del siglo XVI. Estos mercaderes forman parte de la tercera categoría: son cambiadores, mercaderes, depositantes y tesoreros. Forman la cúspide de los mercaderes y de las finanzas locales, y los negocios de los

Bancos están imbricados en la operatividad y en los negocios de sus socios. Es un Banco fundamentalmente de depósito y giro al servicio del crédito mercantil, y, hasta ahora, no he encontrado referencia a su actuación en el campo de la agricultura. Lo que prima en la actuación del Banco es el crédito mercantil y el crédito municipal. Esto último interesa resaltarlo. Como sabemos, el carácter público de los Bancos se basa en que los Bancos para funcionar necesitan la autorización del Cabildo y ya, últimamente, de la Corona. Pero también, de cara a lo que el profesor Rubio Sacristán planteó sobre la posible influencia que tuvo este último Banco en la fundación del Banco de Amsterdam en 1609, cabe la posibilidad de que tuvieran en cuenta esta relación del Banco con las finanzas municipales y no solamente a través de las compras de tributos a la que antes nos hemos referido, sino que también los banqueros invirtieron en la compra de títulos de deuda municipal y abriendo cuenta de crédito en el Banco al Cabildo de Sevilla, para que éste atendiese a las urgencias normales de la Hacienda de Sevilla. En cuanto a los depósitos están compuestos, esencialmente, por los depósitos de los mercaderes, aunque también hay que distinguir tres grandes ingresos o depósitos: la Tesorería de alcabalas del Cabildo de Sevilla, que la compró Castellano de Espinosa en 1598, de forma que los ingresos procedentes de las alcabalas las depositaban en el Banco. Un segundo cargo se constituye a partir de la compra del título de Depositario de los bienes de difuntos de la Casa de Contratación; significaba esto controlar a corto y medio plazo los caudales procedentes de indianos que dejaban la herencia a su muerte para repartir en España a sus herederos. Un tercer capítulo de ingresos era la Tesorería de la Santa Cruzada, que lo tenía arrendado Giacome Mortero, el representante de los grandes intereses genoveses en Sevilla. En conclusión, estos tres eran grandes ingresos para el Banco de Castellano de Espinosa.

Agustín GONZÁLEZ ENCISO. Tengo dos preguntas para Pérez Sarrión. Una en cuanto al aumento de la población en el siglo XVIII. En la intervención se ha referido a que tras la guerra de Secesión se produce un aumento que termina en 1780. ¿Después qué ocurre? ¿Hay un descenso de la población o hay una disminución en el ritmo del crecimiento en esas décadas o en los primeros años del siglo XIX? Y la segunda pregunta se refiere a esas «ciertas condiciones favorables» para la industrialización que se han citado en la exposición. A mí me gustaría saber si se puede concretar un poco esas «ciertas condiciones favorables».

G. PÉREZ SARRIÓN. Yo agradezco la sugerencia del profesor González Enciso, pero no puedo contestarle con exactitud, pues, como dije al plantear la ponencia, mi objetivo era suscitar, más que resolver, problemas. Por lo

que se refiere al aumento de la población aragonesa a lo largo del siglo XVIII y que termina después de 1780, yo puedo decir que por las pocas curvas parroquiales que he podido observar parece contemplarse un proceso de estancamiento. En 1780 se alcanza un máximo poblacional. No sé si puede decirse para todo Aragón, pero para las zonas más ricas sí que se produce. Y por lo que se refiere a las «ciertas condiciones favorables» para que se inicie un proceso de industrialización, la única y la primera evidencia es esa evidencia cuantitativa: que hay una presencia de un número mayor de población artesanal en determinados partidos. Es todo cuanto puedo decir, ya que es una cuestión para la cual creo que no hay todavía una respuesta definitiva.

Gonzalo ANES. Mi intervención se refiere a la ponencia presentada por José Miguel López García, que lleva el título «Una aportación al estudio de las reservas señoriales en Castilla: La explotación de la Abadía Cisterciense de la Santa Espina». Voy a referirme a tres cuestiones de esta ponencia. La primera es que se trata del estudio de la explotación agraria de los Cistercienses de la Santa Espina, y del título parece desprenderse que el estudio de esta explotación puede servir de ejemplo para el estudio de las reservas señoriales en Castilla, y queda claro, después de leída la ponencia, que se trata de un caso particular por las peculiaridades de esta explotación y, por lo tanto, no se puede generalizar. Luego, entonces, sobra, a mi modo de ver, la primera parte del título. Segundo, no se trata de una reserva señorial, es una explotación agraria cisterciense, se pagan salarios, y salarios altos; en 1657 se pagan 476 jornales que importan 1.666 reales, es un salario de tres reales y medio de vellón que resulta altísimo si se juzga que salarios análogos no solían llegar a dos reales a mediados del siglo XVIII. Además, esta explotación agraria se gestiona con criterio de rentabilidad o, si se prefiere fraseología más llamativa, con criterios capitalistas. Las reservas señoriales, ateniéndose a como las definen los medievalistas, y en concreto el más ilustre de ellos, Marc Bloch, son las tierras trabajadas con mano de obra servil en las que todo el producto, toda la cosecha, entra en el granero o troje del señor; esto no es, por tanto, una reserva señorial, es una explotación agraria de monjes cistercienses. Tercera observación: se habla del descomunal latifundio; latifundio indica ya que se trata de gran propiedad y, por tanto, sobra descomunal latifundio. Este extenso dominio, se dice en la página tres, abarca las antiguas provincias de León, Toro, Zamora, Salamanca y Valladolid. No abarca estas provincias, ni mucho menos. Esto tiene su importancia porque en los manuales se recogen, y ya he insistido en esto una vez, frases en las que se dice que determinado señor podía ir desde La Rioja hasta Portugal pisando terreno propio. Estos son disparates a los que frases

como ésta pueden dar lugar. El mapa publica los lugares en los que cistercienses de este Monasterio tenían propiedad dispersa y, sumada la dispersa a la del coto, estima, no se nos dice cómo, que eran 6.000 Ha. Bien, por lo tanto, se trata de una propiedad que tenía su importancia, pero no se puede calificar en este caso de un inmenso latifundio. Es propiedad dispersa y únicamente la del coto, que son unas 3.000 Ha., exactamente 3.000 Ha. y 75 ca., de las que 125 Ha. son de granja; 688 Ha. son de cereales, que están arrendadas; 670 Ha., el 22 por 100 del coto, son improductivas, y lo más importante del coto son las 1.575 Ha. que son de monte y que gestionan los monjes con criterios de rentabilidad. Por lo tanto, yo pienso que se debe modificar la frase anterior, puesto que, por mucho que ofusquen los puntos del mapa, son sólo 6.000 Ha., y cualquiera sabe el porcentaje que representan 6.000 Ha. respecto a la superficie total de cualquiera de estas provincias. Finalmente, una cuestión de detalle. En la página tres se dice que los Monasterios de la Espina, Matallana y Valbuena, estaban entre los cinco mayores propietarios de finca del clero de Valladolid y entre los siete mayores perceptores de rentas provinciales. Imagino que serán de ingresos en la provincia, ya que las rentas provinciales son otra cosa, como muy bien saben. En la página cuatro se dice que el Abad ejercía poderes judiciales y fiscales. Yo pienso que esos a los que llama poderes fiscales es que simplemente cobraba las penas de Cámara y las colonias, como titular de la jurisdicción. Así que no se trata de que tuviera poderes fiscales de ningún tipo. En la página seis se emplea el vocablo jurisdicción cuando se habla de que recupera la jurisdicción, cuando en realidad lo que se quiere decir es que recupera o consolida el dominio, no la jurisdicción. Y luego, en la página nueve, una cosa me choca. Se habla de venta de estopa, ¿no serán escobas?, y por escobas me refiero a las ramas de la retama. Porque, ¿qué podrían ser las estopas? No sé si habrá un problema de lectura del documento. Y en cuanto al gráfico yo hubiera agradecido que se nos hubiesen proporcionado las cifras para ver en qué períodos la rentabilidad era mayor. Nada más.

Agustín GONZÁLEZ ENCISO. Yo quiero formular algunas preguntas, más bien a título extensivo, de lo que pueda desprenderse del trabajo de López García. A ver si, desde el punto de vista de lo que él ha trabajado, puede explicar con más detalle, primero, por qué se produce el cambio al carbón vegetal a partir de 1657 y cómo se puede concretar la evolución de la explotación durante el siglo XVIII; segundo, qué importancia podían tener los gastos de transporte de leña en la explotación del Monasterio y en qué términos se contrataban estos servicios y a qué época se refieren los datos. Y, finalmente, qué importancia podían tener en la explotación de la Abadía las aceñas y los molinos que se citan en la comunicación.

José Miguel LÓPEZ GARCÍA. Voy a responder primero al profesor Anes. En cuanto al título de la comunicación, como bien se indica, es una aportación al estudio de las reservas señoriales. No se pretende generalizar, sino que yo he observado que existen pocos estudios de las reservas señoriales en Castilla, sobre todo en la Edad Moderna. Así, pues, no pretendo que sea una generalización, sino una aportación a estudios de este tipo. Usted dice que no se trata de una reserva señorial. Esto es una cuestión muy discutible. A mi juicio, a través de una serie de donaciones que se especifican en la comunicación, llega en el siglo xiv a adquirir los términos municipales de cinco villas y un lugar; sin embargo, estos términos después son despoblados por el Monasterio. En este término que tiene el Monasterio de 3.000 Ha., en el siglo xvi, no se puede hablar de una explotación agraria a secas. El Abad no posee sólo poderes económicos, sino también posee la jurisdicción civil y criminal. Creo que, en este sentido, esta explotación se diferencia un poco de las explotaciones agrarias que conocemos posteriores a la revolución liberal-burguesa. Desde este punto de vista, yo creo que se puede hablar de reserva señorial. En sentido estricto quizá no sea una reserva señorial, pero, considerando su evolución y teniendo en cuenta que cuando las tierras estaban pobladas era un verdadero señorío, hay que decir que los monjes, después de echar a la población, seguían disponiendo de un absoluto poderío sobre las tierras. Creo, por tanto, que en este sentido es una reserva señorial. En cuanto al descomunal latifundio nos referimos al coto de la Abadía y no al dominio de la Abadía. Se podía quitar descomunal, pero, según la noción de latifundio que yo conozco, se denomina así a aquella propiedad que tiene más de 250 Ha. Entonces, si esta propiedad tiene 3.000 Ha., creo que es un latifundio grande, o como se le quiera llamar. El cómputo de las propiedades del dominio se hace a partir de los apeos que el Monasterio posee y transformando las unidades de superficie antiguas a hectáreas. En cuanto a que se extendía el dominio por cinco provincias estoy de acuerdo que ello puede llevar a error. Simplemente quería decir que las propiedades de este Monasterio se extendían por estas cinco provincias. En cuanto a los Monasterios Cistercienses y su importancia en la economía vallisoletana a finales del Antiguo Régimen, los datos que se presentan recogen datos presentados en otra comunicación de forma más detallada, y cuando nos referimos a que Valbuena, Matallana y la Espina estaban entre los 10 mayores propietarios de fincas del clero regular, y los siete mayores de rentas provinciales monásticas, acepto que en este caso se debe cambiar por el término ingresos provinciales. En cuanto a lo de estopas, le diré que los monjes lo utilizan en el libro de caja, aunque es muy posible que usted tenga razón y sean escobas. No he presentado las cifras en tablas porque pensé que con el gráfico era suficiente y porque la extensión de la ponencia no me lo per-

mitía. Contestando al profesor González Enciso sobre la reorientación del Monasterio hacia la producción de carbón vegetal, creo que el tema está ligado a la disminución de los ingresos de los señoríos monásticos en esta época y que les lleva a reorientar su política económica. Entonces la alternativa de carbón vegetal de encina para el Monasterio era muy provechosa, como demuestran las cifras que se recogen en la ponencia, sobre todo para el siglo XVIII. Creo que ésta sería la explicación, aunque esto, naturalmente, no lo dicen los monjes en los libros. En cuanto a los gastos de transportes se analizan en la sesión titulada gastos no contabilidades, es decir, que se suprimieron de la contabilidad. Estos gastos son muy importantes, hasta llegar al 60 ó 70 por 100 del total de gastos que realizaba la comunidad. El empleo de los arrieros o transportistas sorianos es un caso curioso que cito. Los ganaderos sorianos traen sus bueyes a pastar a la Espina. Hasta mediados del siglo XVII los traen en cantidades masivas, pero llega un momento que el Abad decide proteger estos pastos y sólo permite la entrada a 50 cabezas de ganado al año y les pone como condición en los contratos de pasto que los bueyes sirvan para tirar de las carretas hasta Medina de Rioseco, a Villalón y, en algunos casos, hasta Valladolid. Así, pues, los gastos de transporte de carreteros y arrieros tuvieron una gran importancia, junto a los gastos por jornales. En tercer lugar, tenemos el problema de las aceñas, aunque no podemos considerarle aislado. Las aceñas del Monasterio eran seis en el siglo XVI, y en el Catastro de la Ensenada se dice que sólo funcionaban cuatro. Estas cuatro aceñas proporcionaban unos ingresos medios anuales de unas 400 a 500 fanegas de trigo. Sin embargo, el Monasterio poseía en Tordesillas, en un Priorato, otras seis paradas de ruedas aceñeras, y es aquí donde mejor se puede juzgar la importancia de las aceñas, pues se conoce la contabilidad y se comprueba que los ingresos procedentes de las aceñas eran superiores a los procedentes de la renta de la tierra, explotación directa e incluso de explotación del viñedo. Y nada más.

Agustín GONZÁLEZ ENCISO. Mi intervención se refiere a la comunicación de Bartolomé Yun, y tengo tres preguntas que espero no exijan una larga extensión a la hora de la respuesta. Mi pregunta se refiere a la demanda textil rural en Tierra de Campos. ¿Qué demanda podían tener los géneros que allí se fabrican? Esa industria rural, ¿podría alcanzar una importancia tal cuya previsión hiciera atractiva la entrada del capital urbano? ¿Qué capital urbano podría ser? ¿Quiénes podrían ser esos inversores?

Bartolomé YUN. Con respecto a la primera cuestión, la demanda de esos tejidos fabricados en esta zona, yo creo que es una demanda esencialmente local; sin embargo, no descarto una comercialización hacia otras regiones.

Por ejemplo, la comercialización hasta Galicia está constatada en la documentación que he podido ver en estudios como el del profesor Hera sobre protocolos de comerciantes gallegos. Lo difícil, en cualquier caso, no es conocer la demanda, sino la producción que comercializan, pues estos comerciantes también tratan con productos fabricados en otras zonas de Soria. Medina de Rioseco es un centro de redistribución para llevar productos a Galicia. Lo difícil es saber qué productos son locales y qué productos son de otras zonas. ¿Qué capital urbano? Pues precisamente el capital urbano procedente de estos sectores de compañías comerciales formadas en estas ciudades, y viene, sobre todo, del comercio interregional, que es en parte especulativo, y esto da lugar, lógicamente, a capital urbano. Capital que no está desarrollado tanto como el de Segovia o Sevilla, ciudades que tienen un desarrollo comercial e industrial mayor. La segunda pregunta es razones por las que no hubo incentivos a invertir en la zona. No sé si he entendido bien la pregunta. Yo, en la comunicación, ya he señalado una de ellas, la existencia de una actividad que ocupa los meses ociosos dedicados al cereal, como puede ser la viña, que proporciona, además, un ingreso metálico importante para las economías campesinas, sobre todo teniendo en cuenta que he comprobado que la extensión del censo consignativo es mayor que en los núcleos industriales. Ahora bien, al final de mi exposición he intentado insistir en el hecho de que no creo que ése sea el factor único y tampoco el fundamental.

Felipe RUIZ MARTÍN. Muy bien. Muchas gracias a todos los que han intervenido. Se levanta la sesión.

